

922.283
S 586c
1991
Vol. 2
e. 3

Tomo II

Memorias

Cardenal Raúl Silva Henríquez

Ascanio Cavallo

037433



Ediciones Copygraph

Diseño de portada: Nemesio Antúnez

Diseño de páginas: Patricio Andrade

Primera edición en forma de libro

Inscripción N° 78.832 / 1991

Con las debidas licencias

© Cardenal Raúl Silva Henríquez

© Ediciones Copygraph

Rafael Cañas 270, Providencia

Santiago, Chile



Composición: Computext Ltda.

San Antonio 486, of. 134

Impresor: Salesianos

Bulnes 19, Santiago de Chile

Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 1991

Año de prueba

En medio de los trabajos de la segunda sesión del Concilio, en noviembre de 1963, pedí una audiencia con el Santo Padre, destinada exclusivamente a conversar sobre los problemas que afrontaba la Iglesia chilena en una época de viva polémica nacional y fuertes cambios culturales.

Yo había sido objeto de críticas y ataques hasta entonces un tanto velados; pero el despertar de las pasiones políticas, las elecciones que se aproximaban y el clima general de confrontación, habían conseguido que los embates contra el arzobispo de Santiago se hicieran más abiertos, violentos y, en no pocos casos, maledicentes. Así lo acababa de probar, ese mismo año, la Gran Misión, sometida a agrias acusaciones de "intervención política", por parte de los dueños de los grandes fundos; así lo demostraban también las imputaciones hechas ante el Santo Oficio para acusar al arzobispo de actuaciones indebidas. Por si fuera poco, mis relaciones con la Nunciatura se habían deteriorado gravemente debido a los procedimientos que se estaban empleando para el nombramiento de nuevos obispos, y a la actitud sesgada que mostraba el nuncio hacia algunos de los pastores chilenos.

Conversé de estos temas con Pablo VI. Le describí lo más ajustadamente posible el cuadro de la situación chilena y cómo percibíamos nosotros la pérdida de influencia que había sufrido en años pasados la Iglesia. Las causas de esto eran, para los obispos chilenos, visibles: falta de sacerdotes, inadecuación de la pastoral a los nuevos tiempos, alejamiento de la Iglesia de su medio social, ausencia de coordinación.

Le dije que a nuestro modo de ver, los encargados de los asuntos de América Latina en Roma no parecían comprender la gravedad del momento que vivía nuestro continente; debido a esto, la política

de la Santa Sede se mostraba inestable. Agravaba este hecho la actuación omnímota de algunos nuncios, que no consideraban el parecer de los obispos locales. En el caso de Chile, le expliqué cómo el nuncio Sebastiano Baggio había seguido una línea bien clara en los nombramientos episcopales, escogiendo a sacerdotes celosos, jóvenes, exponentes del mejor clero chileno; después de su salida, las cosas habían cambiado.



En el Primer Congreso Sudamericano de Caritas, en febrero de 1964, aparecen, de izquierda a derecha, el cardenal Silva Henríquez, los obispos Manuel Larraín y Juan Francisco Fresno y los sacerdotes Baldo Santi y Fernando Jara.

En el caso de Santiago, estas actitudes no contribuían a solucionar los problemas, sino que los agravaban. La Iglesia local había emprendido grandes tareas de modernización y evangelización, en las cuales se habían desplegado todos los recursos humanos; pese a esta evidencia, el nombramiento de obispos auxiliares, que yo consideraba urgente, estaba detenido. El Seminario Mayor vivía un florecimiento de vocaciones y por primera vez en mucho tiempo podía mostrar una cifra cercana a 200, mientras que en el Seminario Menor la experiencia de acercar las familias cristianas estaba dando muy buenos resultados; sin embargo, la Curia romana lo criticaba duramente y hasta había promovido la presentación de visitantes apos-

tólicos para inspeccionar las tareas. La Universidad Católica, que la Arquidiócesis creó y mantuvo por casi 70 años, estaba convertida en una especie de “diócesis paralela” debido a que se había quitado la tutela al arzobispo; ahora afrontaba problemas de dirección y un déficit financiero insostenible, de más de un millón de dólares.



El cardenal Silva Henríquez bendice las nuevas instalaciones de la central de grabaciones de la radio Chilena, en 1964.

Pablo VI se interesó vivamente por la situación política que atravesaba el país, a menos de un año de las elecciones presidenciales. El reagrupamiento de los partidos había producido un cuadro nuevo, en el que la posibilidad de éxito de las candidaturas hostiles a la Iglesia era mucho mayor. Escribí en el memorando que preparé para la cita: “La situación... es grave y la suerte de la Iglesia en el futuro y su independencia y libertad están seriamente amenazadas”.

Como resultado inmediato de la reunión, recibí poco después una carta del secretario de Estado, el cardenal Amleto Cicognani, en la que expresaba el contundente respaldo del Papa a las iniciativas en las cuales se amparaban los ataques en contra nuestra: “Sepa vuestra Eminencia que él (Pablo VI) sigue con vivo interés y muy de cerca toda su obra pastoral. Por lo demás, el feliz éxito de la Gran Misión

que se realiza en su Arquidiócesis, como además los buenos frutos obtenidos por usted en el campo de las vocaciones eclesíásticas y en la reforma agraria, demuestran elocuentemente que Vuestra Eminencia no ha sembrado en vano en un terreno tan lleno de dificultades, sino que, al contrario, ha abierto nuevos caminos al apostolado, que ya se revelan fecundos en el bien”.

Este apoyo era más que oportuno, no sólo porque otras iniciativas de la Iglesia habían comenzado a plasmarse en esos momentos, sino también porque el clima político se estaba caldeando a gran velocidad. Algunos obispos se mostraban sumamente preocupados y se preguntaban qué podía hacer la Iglesia.

Yo respondía invariablemente lo mismo: “Confiar en el Señor y encargarnos de que los chilenos conozcan la doctrina social de la Iglesia”. Para esto habíamos ampliado recientemente los equipos de la radio *Chilena*, que fueron inaugurados con una especial bendición del Papa; un grupo de laicos, a cuya cabeza estaban Camilo Pérez de Arce y Sergio Wilson, había organizado la Primera Semana Social, siguiendo el modelo de las semanas sociales francesas; por intermedio de la FIDE, habíamos pedido que en todos los colegios católicos se organizaran cursos especiales sobre la doctrina social; y habíamos comenzado a enfrentar con decisión el avance del laicismo, en todas sus formas.

Esto último nos acarreó sinsabores no sólo con los marxistas, sino también con la derecha, cuyo candidato, Julio Durán, era laico y masón. Como la alianza que lo apoyaba, llamada Frente Democrático, incluía a un importante sector católico (los de los partidos Conservador Unido y Liberal), Durán creía que nuestro llamado a defender los valores de la Iglesia atentaba contra su base electoral. Nos acusaba de apoyar veladamente al Partido Demócrata Cristiano, y acusaba a éste de aprovecharse abiertamente de la Iglesia. El mismo no quería que su condición de laico militante estuviese en primer plano (incluso, en Roma se dijo que pensaba pedir una audiencia con el Papa) ni que ello le restara los votos católicos. Pero era algo que no se podía ocultar; y menos que nadie podía ocultarlo la Iglesia, empeñada en cautelar a su grey de los peligros que insinuaba el horizonte político.

Los partidos de derecha tendían a creer, quizás por una costumbre ancestral, que sus intereses electorales debían ser compartidos por la Iglesia, del mismo modo que sus opiniones en materias sociales, económicas o técnicas. Por ejemplo, el embajador ante la Santa Sede, Fernando Aldunate, que tan bien me había atendido

antes, estimó de pronto que la pastoral *El deber social y político de los católicos en la hora presente* era contraria al pensamiento de la Iglesia. No encontró nada mejor que enviar un ejemplar a dos teólogos romanos, pidiéndoles un informe sobre su contenido. Cuando tuvo una respuesta descalificatoria para la pastoral, me la envió, en mi calidad de presidente de la Conferencia Episcopal. Le respondí en términos muy enérgicos, advirtiéndole que los obispos chilenos se guiaban por la doctrina del Papa y la Iglesia, y no por la opinión de cualquier teólogo. Quedé muy molesto con su gestión —había intentando “acusarnos”—, pero tiempo después tuvo la hombría de pedirme disculpas.

Ese año, también, la directiva del Partido Conservador Unido me visitó cierto día para pedirme que el Arzobispado se hiciera cargo del órgano periodístico que los representaba, *El Diario Ilustrado*. Querían, en concreto, que les ayudara a solventar los inmensos gastos que el periódico tenía; pero yo sabía que los diarios cuestan un desatino, y tal vez fui un poco rudo al decírseles: si la Iglesia quisiera gastar tales cantidades de dinero, lo haría en un diario propio, jamás en uno ajeno.

Los conservadores me criticaron después por el rechazo de esta “oferta”, haciendo notar que el Arzobispado mantenía a un periódico, *La Voz*, que representaba las tendencias católicas opuestas y que polemizaba a menudo con *El Diario Ilustrado*. En verdad, *La Voz* era del Arzobispado: había sido creado por el cardenal Caro, originalmente con un alcance parroquial. Tras su muerte, Emilio Tagle nombró como director al sacerdote Oscar Domínguez Correa, que amplió su alcance a los temas de actualidad y se rodeó de un destacado grupo de periodistas jóvenes: Alejandro Magnet, Guillermo Blanco, Lidia Baltra, Sergio Livingstone, Javier Rojas, Leonardo Cáceres, Hernán Poblete, Darío Rojas, Abraham Santibáñez, Vicente Pérez, Francisco Castillo... El padre Domínguez convirtió a *La Voz* en un centro noticioso, y de esa fórmula se hizo cargo luego Gastón Cruzat, quien colaboró conmigo en su mantención. Lo que los conservadores no sabían, era que yo estaba convencido, en 1964, de que *La Voz* no podría continuar mucho más, debido a sus pérdidas, que eran una verdadera sangría.

El papel que jugó *La Voz* nunca ha sido debidamente estu-

diado. En los años 60, tuvo una repercusión que desbordó su real circulación: fue ciertamente "voz de los sin voz", al plantear los problemas de los pobladores y del mundo campesino; mostró, sin prejuicios, la realidad de los países del Este; presentó por primera vez la problemática juvenil en una perspectiva católica y durante el Concilio cumplió fielmente la misión de divulgar lo que ocurría en Roma y su impacto, especialmente en América Latina.

Gastón Cruzat dedicó su tiempo y también una parte importante de su patrimonio a mantener el periódico que difícilmente podía autofinanciarse, pero que sirvió eficazmente para entregar una visión cristiana y moderna de la actualidad a todos los católicos chilenos.

Después de la elección presidencial de 1964 se precipitó la crisis final: varios colaboradores y periodistas asumieron puestos en el nuevo gobierno, incluyendo al propio Gastón Cruzat, quien sirvió brevemente como asesor de la Cancillería; y a comienzos de 1965 debimos cerrar *La Voz*.

Aparte de esto, nosotros estábamos convencidos de que la alianza del Partido Radical con conservadores y liberales podía ser efímera, y que si los radicales encontraban mayor identidad con la izquierda (también laicista, y a menudo anti-eclesiástica) no dudarían en aliarse con ella, como efectivamente terminó por suceder unos años después.

Pero el 15 de marzo de 1964 vino a ocurrir un hecho totalmente inesperado, que cambió el escenario. Ese día hubo en Curicó una elección complementaria, para sustituir al diputado socialista Oscar Naranjo Jara, fallecido poco antes. El Frente Democrático planteó los comicios como un plebiscito, que daría una visión de cómo votarían los chilenos en septiembre; e hizo esto porque en Curicó tenía una votación tradicional cercana al 45%, mientras la izquierda alcanzaba al 25% y el PDC, al 18%; y porque esperaba que aquí se confirmara que la candidatura del PDC no tenía chance alguna.

Todos los partidos aceptaron, aunque fuera de mala gana, el desafío lanzado por la derecha. Y vino la sorpresa: el candidato de la alianza socialista-comunista (Frente de Acción Popular, FRAP), Oscar Naranjo Arias, hijo del diputado difunto, sacó el 39%, mientras que el Frente Democrático caía al 32% y el PDC subía al 27%.

El contundente resultado motivó que Julio Durán retirara su candidatura al día siguiente, el 16 de marzo, y se disolviera en el acto el Frente Democrático. También se retiró una cuarta candidatura, independiente de derecha, con apoyo de sectores nacionalistas, representada por Jorge Prat. La elección de Curicó, donde la derecha estimaba que no podía perder, encendió todas las señales de alerta sobre el crecimiento de la izquierda socialista-comunista; si era necesario detener al FRAP, la derecha tendría que votar, aunque no le gustase, por el candidato demócratacristiano, Eduardo Frei. Para muchos era un trago doblemente amargo, porque, fuera de sus diferencias ideológicas, este partido había nacido de los jóvenes católicos que se rebelaron contra la jerarquía conservadora; los miraban como "traidores". De hecho, algunos conservadores prefirieron evitarse la amargura y dieron su apoyo... al FRAP.



El Presidente Jorge Alessandri hace un alto en su último mensaje ante el Congreso Nacional, en mayo de 1964. A su lado, el presidente del Senado, Hugo Zepeda.

El "naranjazo" derrotó de hecho a Durán, aunque su partido, el Radical, decidió mantener su candidatura como mero "saludo a la bandera", para no dividir a los militantes. Pero en la práctica la contienda se redujo a dos. Y como se creía que los resultados podrían ser estrechos, todos los actores políticos entraron en una intensa etapa de polarización.

No sería justo negar que los temores sobre el triunfo de la izquierda calaron también profundamente en la Iglesia. Todos los días recibíamos noticias alarmantes sobre el avance socialista-comunista y en muchos prelados había comenzado a crecer la convicción de que la Iglesia se jugaba el todo o nada en las elecciones. Leo un informe confidencial de aquellos días: "La situación se presenta muy difícil. El candidato socialista (Salvador Allende) es en realidad un candidato comunista y su triunfo es un triunfo del comunismo, con todas sus consecuencias. La Iglesia, si ellos triunfan, entraría a corto plazo a la condición de la 'Iglesia del silencio'. Además consideran los comunistas que el triunfo en Chile les asegura el triunfo del comunismo en toda América Latina, dada la influencia que tiene Chile en en el continente".

Con esta percepción, en abril de 1964 estudié la posibilidad de entregar una circular con normas de conducta al clero, para prevenir las confusiones. El FRAP había constituido un "comando católico" que, aunque minoritario, podía suscitar equívocos. A pesar de esto, deseché un borrador en el que, junto con dar normas para los sacerdotes, se proponía una condenación abierta del FRAP, recordando que del comunismo la Iglesia "no puede esperar sino lágrimas, persecuciones y martirio". Me pareció que este enfoque podía ser tremendamente peligroso. Así que redacté otro texto, en el que se subrayaba la prohibición estricta para el clero de intervenir en la política activa, y en la necesidad de poner por encima de cualquier consideración la independencia de la Iglesia.

En cambio, pedí que se difundiera en todos los ámbitos la doctrina social de la Iglesia y, en particular, la pastoral *El deber social y político...*, emitida casi dos años antes.

En medio de todas estas tensiones, la Iglesia debía sin embargo continuar con su trabajo. La pastoral, que había recibido un fuerte impulso con el Concilio y con las iniciativas de los obispos chilenos, no podía detenerse. El riesgo era incluso más alto ahora que antes, porque muchos católicos que habían respondido al llamado de los pastores podían sentirse defraudados si el empuje se frenaba o languidecía.

Ese año, 1964, comenzaban a ponerse en práctica las reformas aprobadas por la nueva Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Conforme a las instrucciones emanadas del Papa, los obispos procedían

todavía con cautela, a la espera de lo que la Santa Sede determinara. Debido a la *vacatio legis* decretada hasta febrero, durante ese verano muchos prelados del continente, y especialmente los de Uruguay, nos escribieron pidiéndonos conocer los criterios con que la Iglesia chilena actuaría en este campo. Con humor, el obispo de Canelones, Orestes Nuti, se disculpaba por estas consultas afirmando que “la culpa la tiene Vuestra Excelencia, al haberse puesto a la cabeza del movimiento prudentemente reformista que llevamos adelante los obispos de América Latina”.

Nosotros pedimos a la Santa Sede que la totalidad de la liturgia fuese permitida en lengua vulgar. Hasta entonces sólo se había abierto el uso en las lecturas del Evangelio y las Epístolas, pero bien sabíamos que si queríamos obtener nuevas concesiones, debíamos pedir las todas. Por lo demás, ése era el espíritu con que había trabajado el Concilio.

En abril me incorporé a las sesiones del Consejo para la Aplicación de la Liturgia, en Roma, que también siguió la misma línea. Finalmente, en junio, los obispos chilenos pudimos introducir oficialmente los cambios autorizados: el uso de la lengua vulgar en oraciones, lecturas y diálogos; la creación de dos ambientes litúrgicos, el de la Palabra y el del Sacrificio; y la modalidad de que el altar, y por tanto el sacerdote, se ubicaran de frente a los feligreses, y no de espaldas, como era hasta entonces.

También puse en marcha el nuevo Plan de Gobierno de la Arquidiócesis, que permitía, por un lado, centralizar y coordinar el desarrollo pastoral, y, por otro, flexibilizar y ampliar las decisiones de las parroquias y comunidades católicas. Hasta entonces, la Arquidiócesis se estructuraba a través de las parroquias y los decanatos que las agrupaban, pero esto era insuficiente para canalizar las necesidades; era un diseño que servía para un mando muy vertical, pero no para dinamizar la actividad de la Iglesia desde sus bases, ni menos en una gran ciudad, cuyo crecimiento era continuo.

El nuevo Plan mantenía la división básica de parroquias y decanatos, pero introducía una instancia de más alto nivel, que funcionaría en estrecha colaboración con el arzobispado: eran las Zonas Pastorales. La Arquidiócesis fue dividida en seis de estas zonas (Norte, Este, Oeste, Sur, Centro y Rural-Costa), en cada una de las

cuales se instaló un Consejo Pastoral, encabezado por un vicario general, un delegado episcopal y un responsable de Educación, además de todos los decanos, prodecanos y asesores de Acción Católica correspondientes al lugar.

Nombré a los encargados episcopales (que con el tiempo llegarían a ser vicarios, tal como las Zonas se convertirían propiamente en Vicarías territoriales) y el nuevo sistema comenzó a trabajar a mediados de año, con resultados ampliamente positivos.

Esta Iglesia en movimiento, renovada en la fe y en el servicio a Dios, no sería sorprendida por los nuevos tiempos ni doblada por los vientos del cambio. Afrontábamos sin duda un año de prueba, pero había en nosotros la vitalidad para resistirlo.

Mientras tanto, la lucha política se fue agudizando a medida que transcurría el año 64. Las tensiones atenazaban al país y difundían una incertidumbre que en vez de disminuir, parecía aumentar.

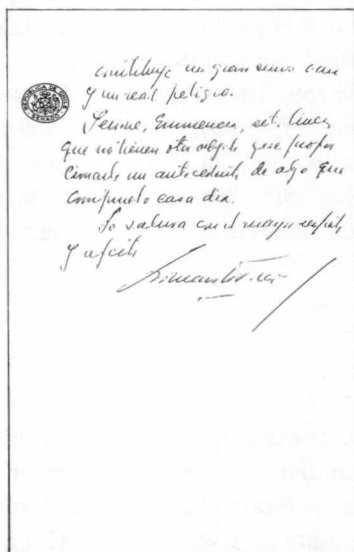
Para entonces, las tentaciones de ciertos sectores de la Iglesia por intervenir en el proceso habían aumentado, alentadas por el temor al comunismo y la existencia de una sola alternativa electoral. Las tristes noticias que nos llegaban de Cuba no hacían más que excitar ese ambiente: aquel año, yo mismo pedí públicamente al gobierno cubano que cesara las persecuciones y las amenazas de fusilamientos, después de un dramático cable que recibí de la Agrupación de Católicos Universitarios de La Habana, en el que narraban el estado de terror al que eran sometidos.

Pero algunos de los obispos estábamos convencidos de que la Iglesia no debía tener injerencia en la política activa, ni mucho menos en las elecciones. El 21 de mayo, Eduardo Frei me escribió una carta que refrendó esa opinión, con distintos argumentos.

“He observado en todo el país”, decía Frei, “un estado de ánimo que yo calificaría de extrema susceptibilidad y desconfianza en todo lo que pudiera llamarse Iglesia y política (...). El país entero pregunta, y se lo digo porque lo encuentro a cada paso, ¿es cierto que el clero va a manejar su gobierno? (...) He recorrido varias provincias y en todas ellas se me hace un *memorandum* de cuáles son los problemas más agudos a tratar. Invariablemente en cada comuna surge el primero: referirme a la libertad religiosa, que no mandará la Iglesia Católica en el gobierno”.

Frei estaba preocupado por la eventual venida a Chile del padre Patrick Peyton, un activo sacerdote norteamericano que había iniciado la Cruzada del Rosario en Familia con un inmenso éxito en América Latina (su lema "La familia que reza unida, permanece unida" llegó a ser célebre), y que no se cuidaba de ocultar sus simpatías por el reformismo de centro. Creía el líder demócratacristiano que el activismo del padre Peyton serviría a los enemigos de la Iglesia para acusarla de injerencia electoral.

En junio, los argumentos discrepantes sobre la actitud de la Iglesia ante las elecciones se confrontaron en la Asamblea Plenaria del Episcopado. Después de una extensa discusión, se impuso la opinión de que lo prudente era guardar silencio. Se acuñó una frase que definiría esta conducta: "Toca a los laicos actuar".



Ultima página de la carta del senador y candidato Eduardo Frei al cardenal Silva Henríquez, con fecha 21 de mayo de 1964.

Pero al mismo tiempo, para ratificar la presencia del catolicismo a través de su doctrina social en un momento grave de la historia nacional, se acordó dar un nuevo impulso a la pastoral *El deber social*

y *político*..., que podía estar un tanto olvidada. Se decidió hacer una reedición de 20 mil ejemplares de la pastoral completa, además de una síntesis de 20 mil ejemplares más. Para difundirlos, se darían instrucciones al clero y a unos dos mil activistas laicos. Finalmente, se dictarían unos cien cursos para dirigentes católicos sobre doctrina social y comunismo.

La reedición de la pastoral produjo un fuerte efecto político. Por lo menos la izquierda —que en verdad era la única que podía hacerlo— reaccionó con irritación, aunque su estrategia de entonces estaba apuntada a no producir roces con la Iglesia, para no sensibilizar a la mayoría católica; peso a ello, los dirigentes del FRAP no pudieron impedir que el senador comunista Jaime Barros, famoso por su oratoria fogosa y siempre pintoresca, cargada de metáforas barrocas y términos del español antiguo, lanzara un discurso tremendo contra la Iglesia en el Parlamento. ¡Hasta de simonía nos acusó! Como gran parte de sus ataques fueron directamente contra mi persona, el senador Barros consiguió exactamente lo contrario de lo que se proponía: la Arquidiócesis se movió en una rápida y contundente manifestación de apoyo al pastor. Decenas de organizaciones enviaron cartas a los diarios, a los sacerdotes y a los políticos, buscando desagrar al arzobispo. Tanto, que los jefes del FRAP debieron conseguir que el senador se retractara y se acusara a sí mismo de “arcaísmo”. Esta calificación era muy importante si se la miraba en lo más profundo: ¡un líder izquierdista admitía que ya no era la Iglesia lo anacrónico, sino que lo eran justamente los ataques contra ella!

Pero estas luchas hicieron renacer la inquietud entre algunos obispos. En el mismo junio, Emilio Tagle emitió una circular llamando a que nos pronunciáramos en forma tajante frente al comunismo, sin importar que se nos acusara de favorecer al PDC. La Iglesia, según él, tenía la obligación de hablar, porque estaba en peligro su existencia. Don Alfredo Cifuentes realizó una intensa campaña de persuasión para que publicáramos un *monitum* del Santo Oficio condenando a los católicos que tuviesen relación con cualquier forma de socialismo.

En la tesis contraria, don Manuel Larraín insistía en que no debían precipitarse juicios. “Cualquiera identificación de la Iglesia con un partido político o con un gobierno le cierra automáticamente

el campo político contrario. Harto le ha costado a la Iglesia chilena zafarse de su identificación con el Partido Conservador, que le cerró un inmenso sector, sea en la burguesía, sea en el pueblo". Al hacer esta referencia, don Manuel apuntaba a lo medular: era visible que gran parte del clero joven sentía simpatía por Frei, pero todos tenían una mala imagen de lo que había sido la Iglesia ligada a un partido; opinaban que esto era odiosamente clericalista.

El obispo de Talca agregaba, recordando un debate que había tenido Bernardino Piñera con don Alfredo Silva Santiago en la Asamblea Plenaria, en concordancia con el primero: "El mundo, los fieles, quieren ver una Iglesia más evangélica y menos política, de la cual es como símbolo el Papa Juan". Don Manuel tenía experiencia; por mucho menos que ahora, en 1958 la derecha también había atacado duramente a la Iglesia, y especialmente al cardenal Caro (Hernán Díaz Arrieta, *Alone*, lo acusó de ocultar documentos del Vaticano), al nuncio Baggio y al propio don Manuel.

Estos debates llegaron hasta la Santa Sede. En agosto, a menos de un mes de las elecciones, el nuevo nuncio, Egano Righi-Lambertini, un hombre de ascendencia noble que había sido enviado a Chile tras una carrera diplomática en países de Oriente, nos llamó para pedirnos un informe urgente sobre qué estábamos haciendo para impedir el avance del comunismo. Le contestamos explicándole nuestras iniciativas, en tono tranquilizador.

Pero yo mismo perdí la paciencia uno de esos días, cuando recibí un informe sobre las campañas electorales en provincias. Se decía en él que los candidatos Durán y Allende, ambos masones, habían participado en ceremonias públicas de bautizo, apadrinando a niños pobres. Confieso que esta información me sacó de quicio. Sentía que se estaba traicionando a mi pueblo, que se lo estaba engañando con fines viles; preparé una declaración para desautorizar estos gestos. Iba a ser, sin duda, una verdadera bomba en la campaña; pero a mí no me preocupaba esto, sino el engaño.

El padre Gustavo Ferraris intervino justo a tiempo, para hacerme notar que el efecto podría ser contraproducente, que se acusaría a la Iglesia de flagrante intervención. Discutimos, y finalmente me propuso consultar él mismo a Patricio Aylwin, un católico fiel y juicioso. Cuando regresó, me contó que Aylwin creía totalmente inoportuna una declaración de ese tenor. Lo mismo su esposa Leonor, de cuyo catolicismo y apego a la Iglesia nadie podía dudar. "Bien", recuerdo que le dije a Ferraris, "no lo haré sólo porque me lo pide él. Pero tendré un gran remordimiento, porque tal vez no esté cum-

pliendo con mi tarea de pastor". Todavía me enoja pensar en el episodio. Pero probablemente todos tenían razón, menos yo.

De modo que nos costó muchos dolores de cabeza llegar a las elecciones con una imagen de prescindencia.

A última hora, poco antes de realizarse los comicios, el doctor Eduardo Cruz-Coke, líder del sector más avanzado del Partido Conservador, que había tenido el apoyo falangista en su candidatura presidencial de 1946, me pidió que le concediera una audiencia a Allende, que era su colega y amigo.



Nuncio Egano Righi-Lambertini.

Era un paso delicado, pero el doctor Cruz-Coke aseguró que no se trataba de un maniobra publicitaria. Con esa garantía, recibí a Allende en mi casa el 3 de septiembre, un día antes de la elección.

—Señor Cardenal —me dijo, cuando llegó—, vengo a saludarlo, porque mañana voy a ser el Presidente de Chile.

Conversamos poco más de una hora. Me agradeció expresamente la actitud de prescindencia que había mantenido la Iglesia. Dijo que no quería que dificultades aisladas surgidas en la campaña empañaran este reconocimiento. (Sin embargo, tras perder la elección, en octubre, hablando ante sus partidarios en el Teatro Esmeralda, Allende hizo un fiero discurso en el que acusó a la Iglesia de “intervención” política. Parece que era un enojo “para la galería”,

porque unos días después me envió nuevos saludos y agradecimientos con el padre Ferraris).

Yo le hice ver la inquietud de la Iglesia ante la agresividad de algunos de sus partidarios, y la preocupación porque se garantizara la libertad religiosa y de conciencia. Aseguró que así sería si triunfaba. Al despedirse, prometió:

—Las puertas de La Moneda estarán siempre abiertas para usted.



Ultima concentración del candidato demócratacristiano Eduardo Frei antes de las elecciones, en la Alameda de Santiago.

El 4 de septiembre Eduardo Frei obtuvo una arrolladora victoria en las urnas, en la que sobrepasó por más de 430 mil votos a Allende. El candidato del PDC llegó al 56,1%, la más alta cifra conseguida por Presidente alguno en el Chile de este siglo en elecciones libres; en Santiago se empinó incluso por sobre el 60%. Seis días después, reunido en convención, el FRAP adoptó “la decisión irrevocable de realizar una política de oposición al gobierno del señor Frei, convencido de que éste, por su composición social y sus vínculos con el capitalismo extranjero y la oligarquía financiera, servirá en lo esencial los intereses de la clase dominante y no los del pueblo chileno”.

Una nueva etapa comenzaba en Chile. La “revolución en libertad” que el PDC prometía hacer en la nación había capturado los sueños y la imaginación de una gran mayoría de los chilenos. Comenzaba un enorme desafío, toda una prueba.

Crisis en el Concilio

Nadie podía prever, antes de reiniciarse los trabajos del Concilio, que la tercera sesión, la de 1964, iba a tener ribetes tan tensos como los que adquirió. Mientras que los primeros efectos conciliares se dejaban sentir en todo el mundo a través de las nuevas formas de la misa, generando un movimiento de esperanza y renovación cristiana, entre noviembre de 1963 (clausura de la segunda sesión) y septiembre de 1964 (apertura de la tercera) el plan de trabajo se había simplificado notablemente. De los 70 esquemas previstos en 1962 (reducidos a 20 en 1963), se llegaba a 1964 con un plan de sólo seis esquemas y otras siete "proposiciones", que serían textos breves y puntuales.

La tercera sesión se inauguró el 14 de septiembre de 1964, con un símbolo extraordinario promovido por el Papa Pablo VI: la Misa solemne de iniciación fue concelebrada por el Santo Padre con todos los obispos. La concelebración, una de las grandes innovaciones de la reforma litúrgica conciliar, y uno de los actos más significativos en materia de la unidad de la Iglesia, pasaba así a ser refrendada por el Jefe de la Iglesia Universal. El discurso del Papa, además, ahondó en la necesidad de las reformas: instó a los padres conciliares a debatir y precisar las relaciones del Episcopado, de los obispos, con su cabeza primacial, el Santo Padre. Este había sido un punto de áspero desencuentro en la sesión anterior, así que Pablo VI sabía que con este llamado demostraba también el coraje de la Iglesia, su decisión firme de no eludir las discrepancias, sino encararlas en la fraternidad.

Muy pronto se vio que el Concilio avanzaría rápido esta vez, quizás más rápido que nunca. El propio Pontífice estaba interesado en que, de ser posible, los trabajos concluyeran en esta misma sesión; para ello, las comisiones habían trabajado arduamente en la

intersesión, y se reconocía en sus esquemas un cuidado especial por la calidad, destinado a reducir al mínimo los debates. El sector mayoritario del Concilio estaba dividido respecto de la necesidad de apurar el tranco: unos pensaban que ello era conveniente para presentar cuanto antes la renovación de la Iglesia ante el mundo, pero



Pablo VI inaugura en la Basílica de San Pedro la tercera sesión conciliar.

otros creían que por este camino se podría dañar la profundidad y la reflexión acerca de temas trascendentes. El sector conservador y la Curia concordaban con la prisa. Muchos de ellos creían inconveniente que esta inmensa cantidad de padres continuara yendo a Roma y provocando tanta conmoción. Otros tenían razones más prácticas; a un obispo español se le atribuye una frase de indudable humor, según la cual los conservadores “debemos apurarnos: en cada nueva sesión se muere más gente que vota por nosotros, y van llegando padres nuevos, con ideas contrarias”.

El primer esquema que entró en debate fue el de la Iglesia, que tenía dos capítulos nuevos, uno sobre el carácter escatológico de la vocación eclesiástica, y el otro sobre la Virgen María, que se había incorporado tras la polémica votación de octubre del 63. Los trabajos comenzaron con una lectura general del esquema y la discusión en detalle de estos dos capítulos, de los cuales el primero tomó sólo unas pocas horas.

Intervención de Su Eminencia el Cardenal Raúl Silva Henríquez, Conferencia General del día 16 de Septiembre de 1964, respecto del CAPÍTULO SOBRE LA SANTA VIRGEN MARÍA

Venerables Padres: Voy a hablar no sólo en mi nombre, sino también en nombre del Eminentísimo Cardenal Humberto Quintero, Arzobispo de Caracas, Venezuela, y en el de otros 43 Padres de América Latina.

Hemos permitido agradecer a todos los miembros de la Comisión Consultiva para la Doctrina de Fe y Costumbres, tanto a los Padres como a los teólogos, que con incansable trabajo adaptaron este Capítulo sobre la Santa Virgen María para su inserción en la Constitución sobre la Iglesia.

Como sabemos, la materia de este Capítulo implica no pocas dificultades, y que por ello resulta casi imposible que deje conformes a todos y en todas sus partes. Consideramos, sin embargo, que, mirando las cosas con tranquilidad, el texto presentado a los Padres guarda un sano equilibrio y nos parece, por lo mismo, digno de aceptación, teniendo en cuenta los siguientes motivos: «

1.º: La especialidad doctrinal de este Capítulo pretende sabiamente proponer elementos claramente tradicionales, precisando de nuevas definiciones, sin que aquellos elementos que indudablemente pertenecen a la doctrina católica resulten de manera alguna ocurridos o apocados. Mucho nos agrada lo que se dice sobre el valor de las asunciones teológicas hasta ahora propuestas, las cuales se mantienen en su derecho, sin que el Concilio pretenda dudar de la doctrina católica sobre la Santísima Virgen. En tanto diversas en las Iglesias Orientales y en la Iglesia Latina - dejando siempre en claro la identidad esencial - parece del todo necesario proponer la doctrina sobre la Santa Virgen con expresiones aceptables por todos como propias a nuestro modesto entender, el texto presentado satisface, en general, esta necesidad.

2.º: La maternidad divina de la Santa Virgen se presenta suficientemente como fundamento doctrinal de todo el Capítulo. Ya desde tiempos muy antiguos los Padres saludaron a la Santa Virgen con el título de Madre de Dios; aplicación que, como todos sabemos, se ha usado en el Oriente ya desde el siglo IV. Nos agrada, en general, la manera en que se presenta, en este Capítulo, la teología sobre la Santa Virgen, puesto que los altísimos dones concedidos por Dios a María aparecen otorgados en vista de su santísima divinidad.

3.º: Este Capítulo es más sencillo que el primer esquema en cuanto al uso de la Sagrada Escritura. Como observamos, con todo, que frecuentemente el texto sagrado se cita no a la letra, sino según el sentido - y es así que se hace alusión en la partícula "confiteri" (copiara). Esto no significa que se ponga en duda el sentido literal de todas las citas. Sin embargo, sin embargo, es que no parece constar suficientemente el sentido literal (por ejemplo página 200, líneas 40; 21 y 204; 7); al menos en el contexto en que se aplica. Para suprimir esta ambigüedad y al mismo tiempo enriquecer el texto conciliar, sería de desear que los lugares citados en que el sentido literal se citaron a la letra, omitiendo la partícula "confiteri", la cual podría reservarse para aquellos textos en que el sentido está en tanto limitado, o cuando según una interpretación adicional de la Sagrada Escritura. Desearíamos, además, que todo el Capítulo fuese entregado a una Subcomisión de peritos bíblicos, para su perfeccionamiento en cuanto al uso de la Sagrada Escritura.

4.º: Nos agrada particularmente la afirmación abierta de la única mediación de Cristo, a la cual no puede añadirse ninguna otra en su orden propio. Nos parece, en efecto, que tal declaración es necesaria, ya que, si bien pertenece a la Fe y consta claramente en la Escritura, esta única mediación aparece a veces oscurecida en la tradición de algunos fieles. A esto se agrega que no posee

(sigue a la vuelta) ...

Copia de la intervención del cardenal del 16 de septiembre de 1964, sobre la inclusión de la Virgen en el esquema de la Iglesia.

En cambio, el de la Virgen volvió a resultar difícil. El 16 de septiembre pedí la palabra para hablar sobre esto, a nombre del cardenal venezolano Humberto Quintero y otros 43 padres de América Latina. Analicé punto por punto los temas sensitivos del capítulo, subrayando que en general nos parecía muy sabia su formulación y muy precisos sus términos. Pedí una revisión más acuciosa del uso escriturístico y, en el punto 4º, afirmé textualmente:

“Nos agrada particularmente la afirmación abierta de la única mediación de Cristo, a la cual no puede añadirse ninguna otra en su orden propio. Nos parece, en efecto, que tal declaración es necesaria; ya que, si bien pertenece a la fe y consta clarísimamente en la Escritura, esta única mediación aparece a veces oscurecida en la devoción de algunos fieles. A esto se agrega que no pocos predicadores, extendiéndose en la mediación de María, no ponen suficientemente de relieve la mediación de Cristo. Se origina así una deformación en los fieles, además de escándalo para algunos hermanos separados de nosotros, todo lo cual se debe ciertamente evitar, por amor a la verdad y por deber de caridad”.

No sé exactamente cómo se difundió mi intervención. Sí sé que la agencia *Associated Press* tuvo una versión.

El Mercurio tituló al día siguiente: “Cardenal Raúl Silva Henríquez afirmó en el Concilio que es excesiva la devoción mariana”. Se puede imaginar perfectamente la conmoción que esto produjo en Chile. Aunque mi intervención fue apoyada por algunos de los más connotados miembros de la mayoría conciliar (por ejemplo, los cardenales Paul Emile Léger, Agostino Bea y León Josef Suenens), esta tergiversación hacía recaer sobre mí la responsabilidad de los “enemigos” de la Virgen, como nos querían presentar nuestros contradictores.

Las discusiones prosiguieron en Roma alrededor de lo adecuado que podría ser el llamar a María como “Madre de la Iglesia”. Por el sector maximalista tomó el liderazgo el arzobispo de Granada, Rafael García y García, afirmando que debía retornarse a la doctrina de los Papas que conservaron el título de “Madre de la Iglesia”; por el grupo contrario se destacó el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, quien llegó a plantear que las maternidades de María y de la Iglesia sobre la humanidad no serían compatibles.

Pero en Santiago de Chile poco o nada de esto importaba ya. La polémica había estallado en torno a mi intervención del 16; los diarios consultaban a teólogos y expertos y en sus tribunas opinaban abiertamente contra el arzobispo que se había excedido. Por supuesto, las aclaraciones del Arzobispado, y las mías propias, no consiguieron mitigar el incidente.

Sin embargo, ¿podía alguien ignorar que, en nuestro propio

Aunque nunca me dejaron verla, la acusación tenía tres partes. En la primera se decía que “existe una división inmensa de los católicos en la nación entera, y especialmente en el clero”, debida a mi manera de proceder, y a la de algunos obispos; la segunda denunciaba “un gran espíritu de independencia y de indisciplina en el clero joven; se hace lo que se quiere en materia litúrgica, en el uso del clergyman, y se afirman cosas que dañan a la Iglesia; por ejemplo, que Chile no es una nación católica, sino una nación en estado de misión”. La tercera contenía la clave: decía que estas acusaciones eran suscitadas por “las declaraciones del cardenal en el aula conciliar sobre el esquema de la Virgen, que han producido un gravísimo escándalo y son muy nocivas para la Iglesia”.

Elaboré una larga respuesta a cada uno de estos puntos. Algunos conservan su vigencia histórica. Por ejemplo, sobre la división: “Efectivamente, existe; es muy anterior a la llegada del arzobispo de Santiago...; existe en toda América Latina y todo el mundo; y esta división se ha manifestado en las últimas elecciones presidenciales del país... El cardenal, procurando siempre ser caritativo, y buscando no dar motivos a las disputas y las críticas, dirige la pastoral de la Iglesia de acuerdo con la mayoría de los obispos, según el dictamen de la prudencia, y teniendo en cuenta la situación social del país, con la mira de obtener la victoria sobre el comunismo ateo, principal enemigo de la Iglesia en la hora presente en Chile. Los hechos de todos conocidos podrán decir si se ha procedido con la prudencia, la sabiduría y la caridad que el momento ha requerido”.

Sobre lo segundo: “El arzobispo de Santiago ha dicho que cree que esta situación (disciplinaria) es general en la Iglesia de hoy, y que esta mentalidad juvenil se exagera cuando de la otra parte se ve también una desobediencia a las normas precisas que el Episcopado ha dado sobre la reforma litúrgica, y que esta desobediencia a las órdenes de la autoridad eclesiástica se da precisamente entre quienes, por su edad y responsabilidad, deben dar el ejemplo, como es el Capítulo Catedralicio”. “En cuanto a la afirmación de que Chile no

es un país católico, se debe tener en cuenta la realidad. Si bien la mayoría del país (89%) se profesa católica, sólo una pequeña minoría (10%) cumple sus deberes católicos. Por esto, de hecho y sobre todo como supuesto de una acción pastoral, muchos obispos creemos que es mejor considerar el país como tierra de misión y poner a la Iglesia en estado de misión, cosa que no hace mal a nadie y menos a la Iglesia”.

Esta acusación era, a mi modo de ver, muy mal intencionada. Era cierto que en la Arquidiócesis algunos sacerdotes, y especialmente los más jóvenes, se habían adelantado un poco poniendo en práctica ciertos aspectos de la reforma litúrgica, ya aprobados pero no refrendados por la Santa Sede. Yo mismo amonesté a algunos de ellos y les pedí a mis vicarios generales que tuvieran especial cuidado con esto. Pero todos sabíamos que esta impetuosidad juvenil era una fuerza positiva, un deseo de servir más y mejor a la Iglesia, y no, como querían sugerir los acusadores, una fuerza destructiva o anarquizante.

Lo tercero —las imputaciones sobre la Virgen—, se desvirtuaba por sí mismo. Demostrada la tergiversación de las agencias noticiosas, el Arzobispado había hecho ya todas las aclaraciones posibles.

Agregué: “Asombra un tanto que en la Iglesia de Dios no haya en estos delicadísimos asuntos una sola línea y una sola política para seguir, y una sola autoridad a la cual se debe consultar y obedecer. Parecía obvio que llegando una acusación de este tipo, y antes de comunicarla al inculpado, se hubiese consultado a la Secretaría de Estado, para saber cómo estaban las cosas en verdad en el lejano Chile. El hecho mismo de que los enemigos del cardenal se dirijan con una acusación al Supremo Tribunal de la Iglesia, por cosas que atañen al gobierno normal de la diócesis, y que dependen ciertamente del criterio del obispo, viene a manifestar que estos señores se creen protegidos por el Supremo Tribunal y que creen que este Tribunal tiene una influencia determinante en el gobierno de la Iglesia, que se ejerce a favor de las ideas conservadoras... Y otra cosa asombra: que el Tribunal Supremo encargado de la fe y de las costumbres pueda aparecer, a los ojos de muchos, como atribuyéndose el encargo de dirigir toda la vida de la Iglesia; si esto fuese verdad, lo que parece inconcebible, sería muy dañino para el bien común... La necesidad de diálogo con la Santa Sede, que los obispos sentimos urgentísima, exige una autoridad comprensiva, que tenga conocimiento de los problemas locales y que no se encuentre en la condición de ser un juez ni de instaurar un proceso... Por todo esto pen-

samos que es urgentísima la reorganización de la Curia Romana, por el bien de la Iglesia y la salud de las almas; y esto urge hacerlo, para que no disminuya la estima y el amor que se debe tener por la Santa Sede, y que todos debemos custodiar celosamente”.

El Santo Oficio no me respondió nunca directamente. Por lo demás, no debo haber sido el único problema que la poderosa Congregación afrontaba. En el aula petrina, el Concilio seguía su marcha, a toda vela.

Después del debate sobre la Virgen, se pasó al capítulo III del esquema Sobre la Iglesia, que hablaba del sensitivo tema de la relación entre los obispos y el Papa. Como se había visto en la otra sesión, el Concilio dividía su opinión entre una gran mayoría partidaria de considerar el Episcopado como un Colegio, de derecho divino, al que se ingresa por un sacramento; y una minoría que insistía en que la colegialidad no tenía base escriturística y que se contraponía con la primacía papal.

Esta discusión se reprodujo en 1964 con caracteres más duros. Curiosamente, el esquema, en conformidad con el pensamiento de la mayoría, fue defendido por monseñor Pietro Parente, que era miembro de la Comisión Teológica y asesor del Santo Oficio; y fue atacado por el obispo yugoslavo Franjo Franic... también asesor del Santo Oficio. Parente fundamentó sólidamente la tesis de que la pertenencia al Colegio de Obispos tiene una dimensión jurídica (en el cumplimiento de una función), y una dimensión sacramental (de finalización ontológica, divina); lo cual quiere decir que el obispo comparte una autoridad, pero también una responsabilidad por toda la Iglesia Universal.

Para nosotros esto era muy importante: la conciencia de responsabilidad sobre todo el mundo, la íntima solidaridad de la Iglesia a través de la tierra, haría desvanecerse pronto la imagen del obispo que no veía más allá de su diócesis y que rehusaba enfrentar los problemas pastorales de una nación o una región como conjunto. La “solicitud de todas las Iglesias” que pedía el apóstol San Pablo tendría un reflejo más vivo en los obispos del siglo XX. Por lo demás, en el plano de la fe ya era un hecho aceptado que la enseñanza doctrinaria definitiva del Episcopado, en comunión con el sucesor de San Pedro, no podría equivocarse.

En cuanto a la autoridad, el Colegio Episcopal, en el que se incluye necesariamente su cabeza, la tiene sobre toda la Iglesia; y esto no disminuye en nada la autoridad del Papa, ni se contrapone a ella, porque el Colegio no es tal sino con el Papa, y porque el Papa conserva la suprema autoridad aun al margen de la expresión colegial.



Los padres conciliares salen de una de las congregaciones de la tercera sesión, alrededor del mediodía.

Pese a la excelente lógica del esquema, el grupo conservador, que en esta materia era muy pequeño, pero muy poderoso en la Curia, continuó resistiendo. Para hacerse eficaz, se organizó en un llamado *Coetus Internationalis Patrum*, bajo el liderazgo de algunos obispos españoles e italianos.

Entre estos últimos destacaban Dino Staffa, que tenía una posición clave como prefecto de la Congregación para los Seminarios, y el cardenal Ernesto Ruffini, figura muy notoria dentro del Episcopado italiano. El *Coetus* ensayó una ofensiva frontal contra la colegiali-

dad, descalificando la noción de la autoridad colectiva y anunciando que si se aceptaba sobrevendría un proceso encadenado de indisciplina entre laicos, sacerdotes y obispos. La carta del *Coetus* fue firmada por el arzobispo Geraldo de Proenca Sigaud, uno de los pocos brasileños que no votaba con nosotros y que en Chile era conocido por sus relaciones con la revista *Fiducia*.

La discusión fue lenta en toda esta parte (se revisó párrafo por párrafo), pero mostró en qué dirección se movía la mayoría.

Luego se recibió el esquema Sobre la Revelación, que, rehecho después del rechazo total al primer borrador en la primera sesión, llegó al aula en tal nivel de perfección, que ocupó solamente cuatro debates para conseguir un respaldo mayoritario.

Después comenzó la discusión sobre la libertad religiosa, que se convertiría en una declaración, la forma más simple de los documentos oficiales. Cabe recordar que este tema había sido propuesto por sus dos grandes promotores, el cardenal León Josef Suenens y el obispo Emile de Smedt, como parte del esquema Sobre Ecumenismo; después pasó al esquema Sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy, y finalmente salió de allí para quedar como declaración. Este peregrinar del texto sugería que podía enfrentar dificultades. Sin embargo, en la discusión éstas no fueron tan notorias. De hecho, el consenso era tan amplio, que en la intervención que realicé, muy al comienzo del debate, hablé en nombre de 58 padres.

Nos agradaba la idea misma de la declaración. Decíamos que “la libertad religiosa se sitúa muy bien en la vocación y en la conciencia de la persona... aunque por ella el hombre, *no se hace independiente respecto a Dios*”. La estimábamos importante, porque “contribuirá poderosamente a disipar ciertas acusaciones que se hacen a los católicos de ‘oportunismo’, como si ellos tuvieran un doble principio de libertad religiosa, acomodado a su eventual condición de mayoría o minoría en la sociedad civil”.

La declaración “nos urgirá a una acción apostólica más pura, según la autenticidad del testimonio de la Resurrección de Cristo, distinguiendo mejor entre lo que es verdadera acción pastoral y lo que no es sino proselitismo”. Este último, decíamos, “más que la conversión de la persona a Cristo, pretende el incremento de una institución religiosa, sin excluir la sugestión, el soborno, la intimidación, la

presión física o moral, la utilidad material, etcétera”, todo lo cual no es sino una corrupción de la evangelización.

La libertad religiosa era un tema candente en América Latina, al menos para iniciar un verdadero trabajo ecuménico, para poder hablar cristianamente de la renovación de las estructuras civiles. Pero era un tema crítico en otros lugares, como Asia, Africa y Estados Unidos. Esto motivó que la minoría conciliar conservadora se dividiera.



La mesa de los moderadores: los cardenales Gregorio Pietro Agagianian, Giacomo Lercaro, Julius Döpfner y Léon Josef Suenens.

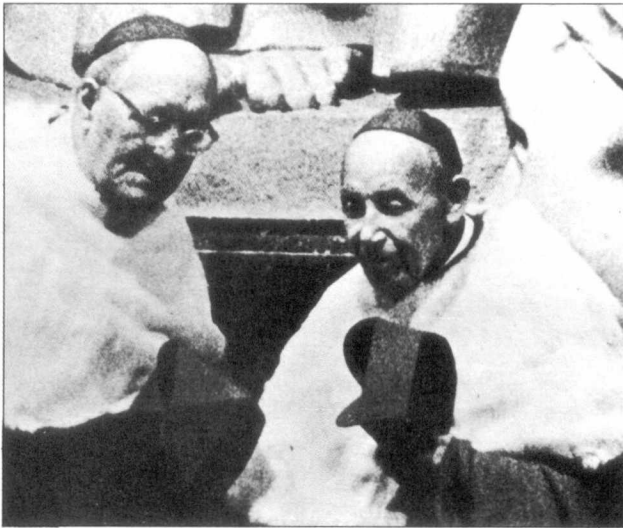
Algunos padres de este grupo se sentían muy interpretados por la declaración, porque tocaba aspectos esenciales de su tarea pastoral. En particular, los norteamericanos, que se habían mostrado conservadores en muchos aspectos, sentían que aquí se jugaban algo sustantivo, debido a su posición en el cuadro de iglesias de EE.UU. y a que en la sociedad misma de Norteamérica el principio de la libertad era inalienable.

Otros padres, con inspiración más teológica, la consideraban peligrosa porque podía inducir al abandono del catolicismo y porque no dejaba espacio a la condena del error. Los españoles, por ejemplo, temían que la declaración, que auspiciaba la separación del Estado,

les significara una ruptura traumática con la institucionalidad bajo la cual habían vivido siempre, y que se decía confesional.

Pero la gran mayoría iba en el otro sentido, así que la discusión prometía durar poco.

Hasta que el 9 de octubre, el secretario, monseñor Pericle Felici, envió al cardenal Agostino Bea, encargado del asunto como presidente del Secretariado Para la Unidad de los Cristianos, una carta en la que le comunicaba que el debate de la declaración sobre libertad religiosa se suspendería. Según el mensaje, el Papa aspiraba a que el texto se refundiera, ahora con una comisión mixta, en la cual participarían desde ya cuatro padres: el cardenal Michael Browne, el superior dominico Alfonso Fernández, el superior del Espíritu Santo Marcel Lefebvre y el obispo Carlo Colombo, ninguno de los cuales se había mostrado partidario de la declaración.



Los cardenales Michael Browne y Agostino Bea.

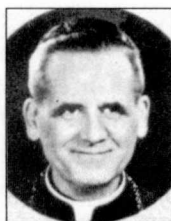
El hecho produjo agitación entre los padres. El cardenal Joseph Frings decidió tomar la iniciativa e invitó a varios cardenales a que nos reuniéramos en la casa donde se hospedaba en Roma, para decidir qué hacer frente a esto. Tuvimos largos debates sobre el significado de este abrupto cambio de orientación y llegamos a la conclusión de que en la Curia se intentaba revertir el curso de la declaración.

Decidimos entonces escribir una carta al Papa, en la que ex-

presábamos nuestra “extrema preocupación y suma inquietud” por el procedimiento empleado para replantear la declaración sobre libertad religiosa. Hacíamos notar que una lesión al reglamento del Concilio “traería consigo un daño inmenso para toda la Iglesia en la opinión pública mundial” y le pedíamos que restituyera la vigencia de tales normas, según las cuales sólo ciertas autoridades tenían la facultad de suspender debates. 16 cardenales pusieron su firma: Joseph Frings y Julius Döpfner, de Alemania; Bernard Alfrink, de Holanda; Franz Koenig, de Austria; Albert Gregory Meyer y Joseph Elmer Ritter, de Estados Unidos; Paul Emile Léger, de Canadá; Joseph Lefebvre, Achille Liénart y Paul Richaud, de Francia; Léon Josef Suenens, de Bélgica; Giacomo Lercaro, de Italia; Laureano Rugambwa, de Tangañica; Raúl Silva Henríquez, de Chile; Juan Landázuri Ricketts, de Perú; y Humberto Quintero, de Venezuela.



Cardenal Ernesto Ruffini.



Cardenal Paul Emile Léger.



Cardenal Albert Gregory Meyer.



Cardenal Joseph Frings.

El cardenal Frings llevó personalmente la carta al Papa. Y Pablo VI le dio a él y al cardenal Bea la seguridad de que se respetarían los reglamentos. Así, la declaración volvió a manos del Secretariado Para la Unidad y los debates continuaron con otros esquemas.

Aunque el incidente terminó allí para nosotros, tuvo otros efectos en Chile. La carta de los cardenales fue conocida por Gastón

Cruzat, director de *La Voz*, que ahora cubría el Concilio para el Centro de Información del Celam. Este Centro se había creado para paliar la falta de noticias en América Latina, y fue entusiastamente impulsado por don Manuel Larraín, que en 1963 fue elegido presidente del Celam. Pues bien: Cruzat narró en una crónica la realización de la reunión de cardenales, y el Celam se sintió obligado a desautorizarlo. Cruzat, seguro de lo que había hecho, tuvo un duro altercado con los encargados de prensa del Concilio, que pretendieron desmentirlo; y cuando don Manuel Larraín le pidió que renunciara, dijo que no: debían echarlo. Y así ocurrió.

El Concilio prosiguió con el esquema Sobre el Apostolado de los Laicos, que motivó una viva discusión sobre el papel de los seglares visto por la Iglesia. Aquí hubo una intervención brillante de nuestro amigo el obispo de Panamá, Marcos McGrath, quien instó a los padres a no poner énfasis en el laicado organizado religiosamente (que era una minoría), sino en el sentido apostólico que hay en el trabajo propio de los laicos, en el orden temporal. En el mismo sentido se pronunciaron después algunos laicos, que participaban como observadores, y a los que se permitió por primera vez hablar en el aula.

Esto se relacionaba estrechamente con el reconocimiento amplio del laicado que se había dado en el esquema Sobre la Iglesia, y en lo que se esperaba del esquema Sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy, el famoso "esquema 17", que ya se había convertido en "esquema 13".

Cuando éste finalmente apareció, el debate inicial fue muy confuso. Pero pronto se perfiló como uno de los documentos centrales del Concilio. Aunque había sido resistido por las mentalidades más tradicionales, para muchos de nosotros era imperiosa la necesidad de que la Iglesia se volviera plenamente hacia los hombres y el mundo, "porque en ellos se encuentra toda la razón de su existencia y de su amor".

En mi intervención sobre el tema, subrayé que la hora histórica nos urgía a mostrar en su profundidad la eficacia de la doctrina cristiana, sobre todo en un mundo dispuesto a acusarla siempre de "alienación". Frente al humanismo ateo del siglo XX, la Iglesia debía responder con un Hombre Nuevo, un hombre que integrara su voca-

ción trascendente y su dimensión terrena, en la línea de la antropología cristiana de que había hablado Teilhard de Chardin. En el mismo sentido hubo una intervención memorable del cardenal Meyer, que demostró con fundamentos bíblicos que, contra la opinión de cierta teología, el mundo no es sólo un medio para que el hombre se salve, sino que él mismo es objeto de salvación. El obispo Denis Hurley, de Sudáfrica, propuso abiertamente inscribir el texto en el pensamiento de Teilhard de Chardin: toda una paradoja, si se considera que un par de años antes el Santo Oficio seguía advirtiendo sobre las ideas “peligrosas” de este gran pensador.

El “esquema 13” abordó también los temas de mayor urgencia social, ahora como objeto de acción. En una segunda intervención que realicé sobre el punto, hablando esta vez a nombre de Caritas Internacional, propuse que el Concilio distinguiera oficialmente entre la pobreza evangélica, fruto de la gracia, y la pobreza infrahumana, consecuencia del pecado, del mal social. Para afianzar la primera y combatir la segunda, pedí que se instaurara una colecta mundial, de carácter ecuménico, destinada a la promoción social: aquello, pensaba, nos ayudaría a comprendernos mejor con los hermanos separados. De hecho, la idea había sido planteada hacía años por Oscar Cullmann, el gran teólogo protestante francés. Cullmann, amigo de Pablo VI, estaba presente como observador, y después agradeció mis palabras con una hermosa carta.

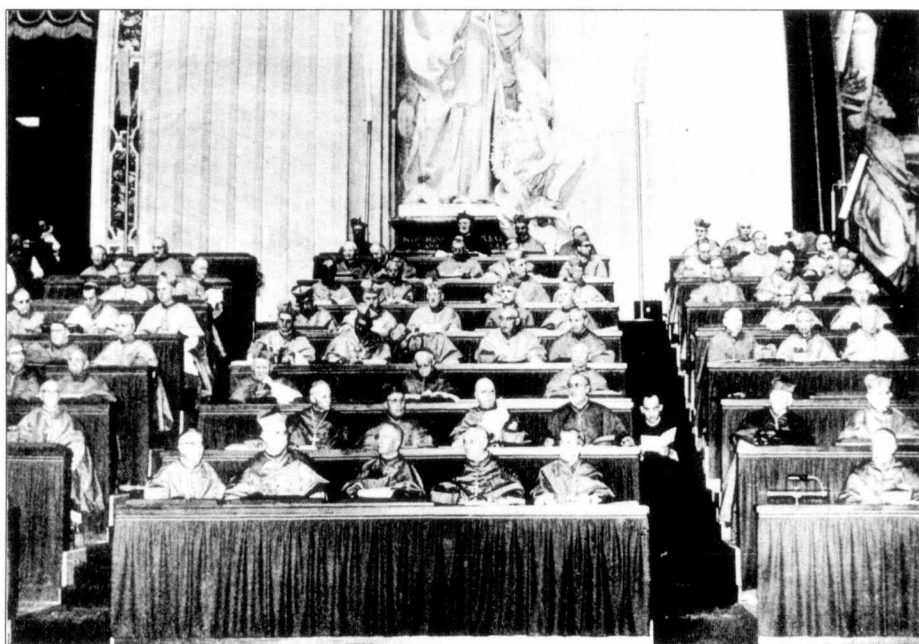
El resultado fue que el texto del “esquema 13” salió duramente criticado, pero se lo aceptó con una amplísima mayoría como base de discusión para la siguiente sesión. El entusiasmo que despertó esto en el Tercer Mundo llevó al obispo Helder Cámara a lanzar una frase que se haría famosa: “Este esquema será un documento tan leído como la *Pacem in Terris* y tan útil como el Telstar”.

Después se analizó un esquema sobre las Misiones, que fue rechazado a pesar de que Pablo VI tenía gran interés en que se aprobara pronto. Este fue el momento más exultante de aquella sesión del 64, por dos razones: fue la primera vez que el Santo Padre asistió a un debate, y la Misa inicial se abrió con tambores y danzas de un grupo de seminaristas etíopes.

Otro esquema, Sobre la Vida y el Trabajo Sacerdotal, fue rechazado por su pobreza conceptual (nos importaba mucho que la

imagen del sacerdote saliera fortalecida del Concilio). En cambio, uno Sobre la Formación de Sacerdotes, fue aceptado como base.

A mediados de noviembre llegó el momento de las votaciones. Se iniciaron con extraordinaria eficiencia, hasta que el día 18 surgió una mala señal: el secretario, Felici, anunció que “muchos padres” pedían más tiempo para reflexionar sobre la declaración de Libertad Religiosa, en vista de lo cual se haría una pre-votación para saber si convenía hacer la votación definitiva. Los padres de la minoría habían tratado de reunir firmas para conseguir esta dilación, pero se sabía que no tenían más de 120.



La tribuna de los cardenales en la sala conciliar.

El día 19, las señales de alarma aumentaron. Primero, en el esquema Sobre la Iglesia se anunció que el Papa introduciría una “nota explicatoria” sobre el concepto de colegialidad de los obispos, nota que no sería sometida a votación; no era nada distinto de la doctrina afirmada en el texto, pero parecía una concesión a los sectores de la minoría curial.

Luego, se informó que el mismo Pablo VI había introducido 19

correcciones al texto ya debatido Sobre Ecumenismo (después se supo que en verdad envió 40, de las cuales sólo quedaron 19), lo que parecía otra cosa extraña.

Enseguida se anunció que en la sesión de clausura el Papa proclamaría a la Virgen como “madre de la Iglesia”, el concepto que la mayoría había recomendado evitar. (Sin embargo, cuando lo hizo, Pablo VI fijó con mucho cuidado este título, siguiendo la línea de pertenencia a la Iglesia que había establecido el debate).

Finalmente, el presidente del día, el cardenal Eugene Tisserant, anunció que en definitiva la declaración sobre la Libertad Religiosa no sería votada en esta sesión, sino en la de 1965.

Esta gota rebasó el vaso. En lo que fue la escena más impresionante del Concilio, centenares de padres se pararon al unísono de sus asientos cuando Tisserant terminó de hablar, y comenzaron a retirarse. Varios cardenales partieron hacia la mesa de los moderadores para hacer presente su acalorada protesta por el procedimiento. Los llamados al silencio y al orden se perdieron en la gigantesca conmoción. En el centro del aula se formó espontáneamente una larga fila y los padres comenzaron a firmar una hoja redactada a toda prisa por un obispo norteamericano. En media hora se reunieron más de mil firmas. Fue la primera vez que una protesta colectiva, visible y bulliciosa, tuvo lugar en el aula conciliar.

Como nadie sabía qué hacer, monseñor De Smedt, que era el relator del texto, tomó el micrófono y, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a leer la declaración... ¡que no se votaría! Al terminar, un estruendoso y prolongado aplauso, como no se oyó otro en el Concilio, saludó al obispo De Smedt.

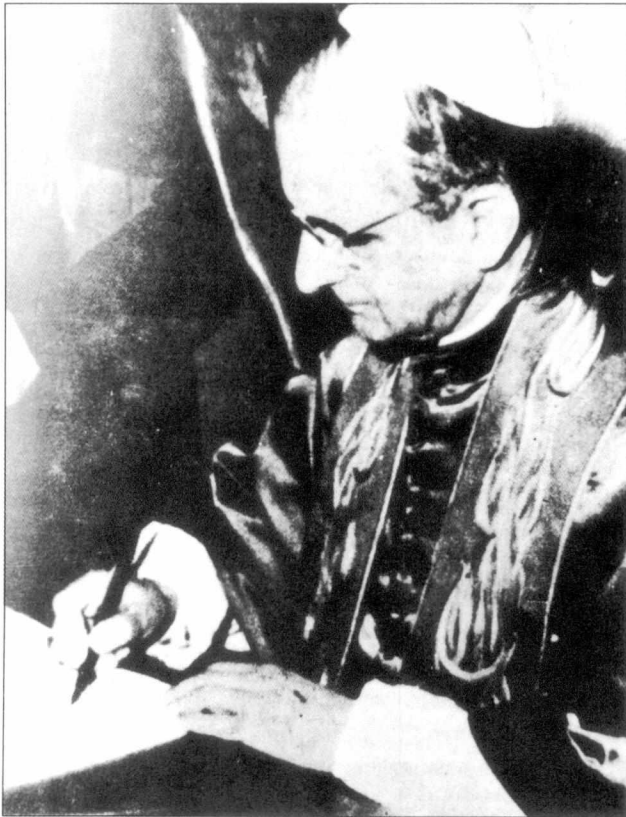
La carta con 1.600 firmas fue enviada al Papa al poco rato. “Os suplicamos”, decía, “con reverencia, pero con urgencia, con mucha urgencia y con la mayor urgencia, que concedáis que tenga lugar, antes de finalizar la sesión, una votación sobre la libertad religiosa, con el fin de no decepcionar la esperanza del mundo cristiano y no cristiano”.

Esa misma noche, el Papa nos reunió a todos los cardenales en un consistorio secreto. No me está permitido hablar de ello, pero puedo decir que esa conversación aquietó las agitadas aguas del Concilio. Como era lógico, el Papa no desautorizó al cardenal Tis-

serant y pidió a los padres que aceptaran, en nombre de una mejor elaboración del texto, que la votación se realizara en primer lugar en la sesión del año siguiente.

No hubo reacción alguna cuando este anuncio se hizo en el aula repleta. La tormenta había pasado tan rápido como antes había estallado.

Dos días más tarde, el 21 de noviembre de 1964, se clausuró solemnemente la tercera sesión. El Papa promulgó con todos los padres conciliares —subrayando el sentido de colegio— los esquemas Sobre la Iglesia, el Ecumenismo y las Iglesias Orientales. Y todos comenzamos a regresar hacia nuestras tierras, renovados en la fe.



El Papa Pablo VI firma la primera encíclica de su Pontificado, "Ecclesiam suam", el 6 de agosto de 1964.

Los días del optimismo

A pesar de lo difícil que fueron los días de la tercera sesión del Concilio, el balance era verdaderamente alentador. No todos concordaban con esta opinión, por supuesto: los padres más jóvenes, naturalmente impacientes, hubiesen querido que al terminar 1964 la Iglesia tuviera concluido su proceso de *aggiornamento*.

Pero esto hubiese sido precipitado. En verdad, la aprobación del esquema Sobre la Iglesia justificaba por sí misma toda la tercera sesión, porque se trataba de la piedra angular para muchos otros esquemas: sobre ella se levantaría el gran edificio de la fe católica para el futuro.

¿Qué decía, en lo fundamental, la Constitución, a la que bellamente se titularía *Ecclesia Christi, Lumen Gentium* (Iglesia de Cristo, Luz de los Pueblos)? En primerísimo lugar, planteaba como definición doctrinaria del catolicismo la idea del Pueblo de Dios, una entidad que prefigura y promete la paz, y a la que son admitidos todos los hombres, sin excepción. Como consecuencia necesaria de lo mismo, la Iglesia declaraba sentirse unida a todos los cristianos y se comprometía a trabajar para que tal bien fuese posible. El acento salía de la jerarquía, que ahora pasaba a ser una parte de la Iglesia, no *la* parte. El Pueblo de Dios tenía un mensaje colectivo, y esto era mucho más importante que las normas, los reglamentos o las prescripciones de la autoridad.

En cuanto a la estructura jerárquica, reconocía la sucesión de los apóstoles en los obispos, y la colegialidad episcopal como un fundamento en la vida de la Iglesia; esto implicaba, en lo práctico: una revisión a fondo del trabajo y el concepto del obispado; el fortalecimiento de las conferencias episcopales; la participación de las iglesias particulares en la Iglesia Universal; el acercamiento con iglesias de otros cultos, y el desarrollo de un Senado Episcopal para colaborar con el Santo Padre.

La Constitución reconocía a los laicos la plenitud de su vocación en el orden temporal, de modo que “igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo hagan patente a Cristo frente a los demás hombres”. Instaba, además, a los laicos a reconocer sus deberes en la hora histórica, y a los pastores a discernir y promover esta responsabilidad en la Iglesia.

De modo que esta Constitución Dogmática era la prueba viva de que el Concilio fue hecho para preparar la unión de la Iglesia, una idea que el Santo Papa Juan XXIII había llevado hasta su lecho de muerte, hasta sus últimas palabras: “*Ut sint unum*”, para que sean uno.

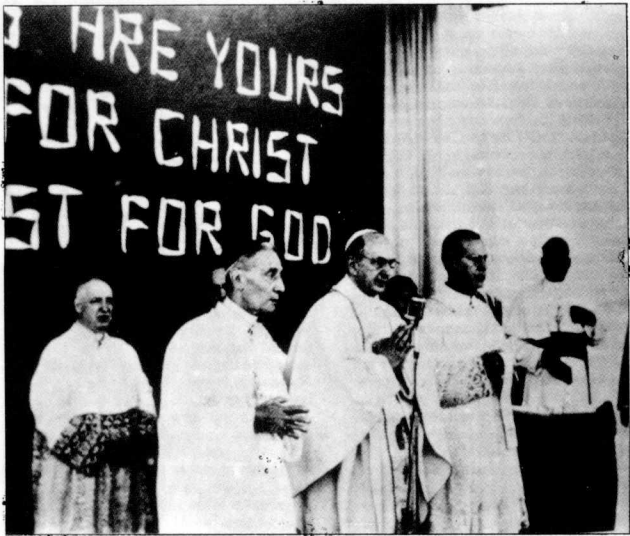
Los otros dos decretos aprobados —Ecumenismo e Iglesias Orientales— partían de la misma base, aunque se proponían impulsar el acercamiento con otros hermanos cristianos: los primeros, separados de Roma; los segundos, deseosos de conservar sus tradiciones.

Pero a mi modo de ver hubo en aquella sesión algo más profundo, y tal vez más decisivo para el resultado final del Concilio: fue la aceptación de las discrepancias bajo el supuesto de la fraternidad. En tres años el Concilio había marcado claramente dos tendencias, cuyas situaciones eran paradójicas: los miembros de la mayoría vivían dispersos por el mundo y no tenían poder propio en la Santa Sede; los de la minoría estaban más unidos y ejercían una gran influencia en el gobierno de Roma. En las tres sesiones estos grupos se habían enfrentado, a veces con dureza, y no era exagerado decir que se recelaban. A un obispo de línea conservadora se le atribuía una frase de cáustico humor acerca del Concilio: “Lo que quisiera es morir siendo todavía católico”.

Pues bien, lo que la tercera sesión consiguió, pese a sus dramáticas apariencias, fue que uno y otro sector se reconocieran como hermanos en el cariño por la Iglesia. Aquel año los hombres de la Curia parecieron convencerse de que los obispos de fuera no éramos sólo gente imprudente y destructiva; los de la mayoría entendimos que la minoría curial tenía una fidelidad a la Iglesia semejante a la nuestra, y no era sólo conservadora y poderosa. De aquí en adelante, todos los debates se harían con admirable respeto, y en ciertos casos los que quedaron en minoría hicieron suyos lealmente los puntos de vista de la mayoría. Incluso el Santo Oficio, que había mostrado

posiciones rígidas e imperativas, adoptó esta actitud constructiva hacia el final de la sesión.

Otro resultado central fue el hecho de que se multiplicaron por todo el mundo los gestos con voluntad ecuménica. Las iglesias ortodoxas orientales se sintieron por primera vez impulsadas a recoger el llamado de unidad lanzado desde Roma. También las iglesias cristianas no católicas de Occidente estudiaron a conciencia los esquemas aprobados en el Vaticano, valorando el “espíritu nuevo” que notaban en ellos.



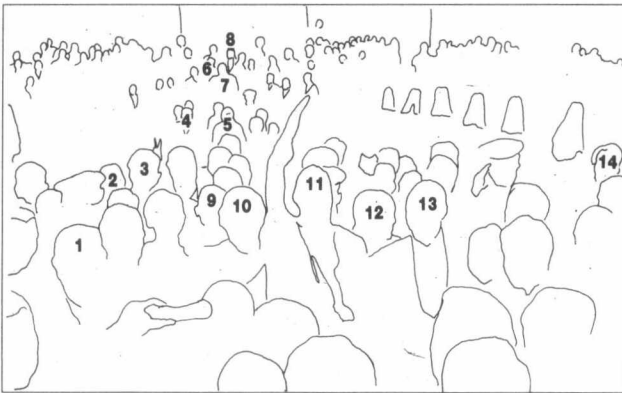
El Papa Pablo VI inaugura el 38º Congreso Eucarístico, en Bombay.

Eran pasos de una trascendencia enorme si se los mira a la luz de la historia.

No hay que olvidar que la división de los cristianos se produjo a través de tres grandes rupturas, muy antiguas: la del siglo V, que separó a nestorianos y monofisitas de la Iglesia de Roma y Constantinopla, entonces llamada bizantina; la del siglo XI, que implicó la división entre Roma y Constantinopla, y que dio origen a



Eduardo Frei Montalva saluda al público mientras sale del Congreso Nacional, que acababa de ratificarlo como Presidente de la República.



En la fotografía aparecen entre otros: 1) Senador Enrique Curti; 2) Diputado Eugenio Ballesteros; 3) Diputado Fernando Cancino; 4) Luis Felipe Letelier; 5) Cardenal Raúl Silva Henríquez; 6) Padre Jorge Gómez Ugarte; 7) Nuncio Egano Righi-Lambertini; 8) Ministro del Interior, Bernardo Leighton; 9) Senador Carlos Vial Espantoso; 10) Senador Hugo Zepeda Barrios; 11) Presidente Eduardo Frei; 12) Diputado Carlos Sivori; 13) Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Morales Adriasola; 14) Diputado Jorge Lavandero.

católicos romanos y ortodoxos; y la del siglo XVI, marcada por el gran cisma europeo que separó a los protestantes. En el momento del Concilio, unos 340 millones de cristianos continuaban separados de Roma, y en 1962, al iniciarse la primera sesión, nadie hubiese apostado por el clima fraternal que se viviría a fines del 64.

Para reforzar esta voluntad de la Iglesia, así como su vocación misionera, apenas terminó la sesión el Papa Pablo VI inició su segundo viaje fuera de Italia, ahora con el lema que la prensa le asignó en el peregrinaje a Tierra Santa: "Mensajero de la Paz". La ocasión la dio el 38º Congreso Eucarístico Internacional, en Bombay; y durante tres días el Santo Padre conmovió al planeta recorriendo una de las naciones más grandes, pobres y heterogéneas. Miles de desheredados se arrodillaron a su paso reconociendo en él al *sant purush* (hombre santo) que abría una nueva era de la cristiandad.

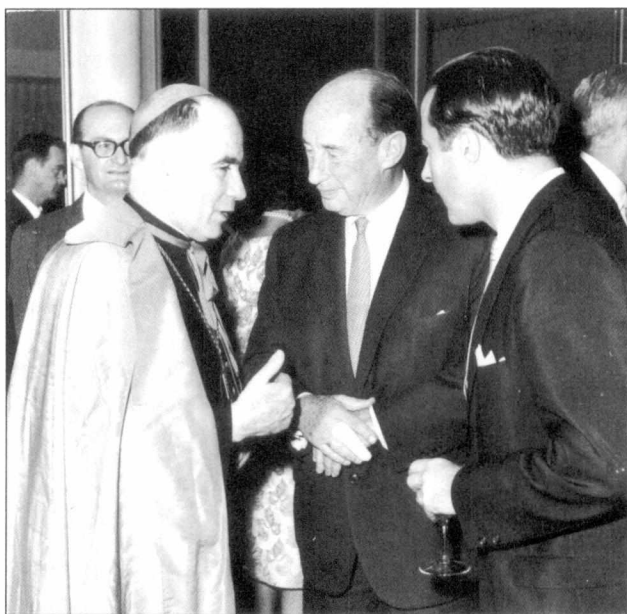
A su regreso al Vaticano Pablo VI dio una nueva sorpresa, al promover a 27 nuevos cardenales, elevando la cifra total al récord histórico de 103, y ahora más internacional que nunca: 71 no italianos. Cosa más extraordinaria, entre éstos figuraban tres patriarcas orientales (Máximos IV Saigh, Esteban I Sidarous, Pedro Pablo Meouchi), dos obispos de la Europa oriental (Yosyf Slipyi, de Ucrania, y Josef Beran, de Praga) y tres padres que no eran obispos: el padre oratoriano Giulio Bevilacqua, que encarnaba al sacerdote humilde y sacrificado; el teólogo suizo Charles Journet, imagen del estudio y el retorno a las Escrituras como alimento intelectual; y el padre Joseph Cardijn, fundador de la JOC, ligado al más arduo trabajo social de la Iglesia.

Entretanto, en Chile, los aires del cambio habían comenzado ya a soplar.

En medio de la tercera sesión del Concilio, a fines de octubre de 1964, regresé por unos días a Santiago para la celebración del Te Deum con que culminarían los actos de asunción del mando del electo Presidente Eduardo Frei.

Eran días de un optimismo palpitante, que se hacía sentir en todos los ámbitos. El Papa envió un legado especial, hubo representaciones diplomáticas de alto nivel y las fiestas tuvieron un colorido pocas veces visto. Se esperaban grandes cosas de esta nueva etapa en la vida nacional. Incluso en la Iglesia —en especial, en la de

Santiago— había un entusiasmo desusado, porque se creía que el nuevo gobierno sería por fin capaz de alcanzar la soñada meta de la *libertad de los pobres*, la liberación de las opresivas cargas sociales y económicas que sojuzgaban a parte de nuestro pueblo. Tal vez por esto hubo quienes levantaron la acusación de que en la Iglesia de Santiago había un “predominio demócratacristiano”. Esta imputación era del todo injusta en cuanto pretendía vincular a obispos y sacerdotes en una acción política, partidista o de gobierno; pero no lo era tanto si con ello se quería reflejar la apasionada defensa de la doctrina social de la Iglesia, puesto que es innegable que muchos sacerdotes creían verla encarnada en el programa del PDC.



El cardenal Silva Henríquez conversa con el secretario de Estado norteamericano, Adlai Stevenson, el 3 de noviembre de 1964, durante las fiestas de asunción del mando.

Por lo demás, al gobierno llegaban con Frei muchos hombres que habían trabajado codo a codo con la Iglesia, en las más disímiles tareas; varios ministros, subsecretarios y numerosos funcionarios de la nueva administración habían hecho parte de su aprendizaje social con la Iglesia Católica.

Quizás alguna gente haya pensado que queríamos aprovecharnos de estas circunstancias excepcionales; pero la verdad es que

ninguno de nosotros aspiraba a revivir bajo ninguna forma el clericalismo de antaño: simplemente, nos estimulaba saber que el magisterio renovado de la Iglesia tendría una oportunidad de probarse en estos hombres.

El propio Presidente Frei era extremadamente cauteloso en su trato de las materias religiosas. Como él había sufrido en carne viva la acusación de ser "manejado" por la Iglesia, tenía una particular preocupación por no crear esta imagen. En nuestras conversaciones solía decir que procuraría que sus convicciones cristianas y su condición de hijo de la Iglesia estuviesen siempre presentes en sus actos, pero que no quería ser un Presidente para los católicos, sino para la



El Presidente Eduardo Frei saluda al cardenal Silva Henríquez, al término del Te Deum con que culminan los actos de asunción del mando.

nación entera. Estaba persuadido de que serviría mejor a su fe con esa actitud, que con el uso proselitista del poder que se le había conferido.

Cuando iba a nombrar a su primer gabinete, Frei pensó en el académico Juan Gómez Millas para Educación. Pero como el Presidente sabía bien que éste era un ámbito que a la Iglesia le importaba

mucho, decidió llamarme para preguntar qué me parecía el nombramiento. Gómez Millas era masón, y alguien le había dicho a Frei que yo reaccionaría contra esto.

—Mire —le dije—, usted es el Presidente. Usted nombra a sus equipos. Yo sólo le puedo decir que nombre al diablo si quiere, pero el responsable es usted. A mí me basta con que, si es el diablo, me deje pasar a salvar un par de almas, con lo cual hasta le sacaré el sombrero si es necesario.

El Presidente rió de buena gana con esto, y lo cierto es que nunca tuvimos problemas con el ministro. En cambio, peleamos —amigablemente— con el subsecretario, Patricio Rojas, que sí era católico, pero que buscaba fervientemente la manera de mostrarse ecuánime en los difíciles asuntos que concernían a las subvenciones que el Estado entregaba a los colegios religiosos. “Pelemos” también con el ministro de Agricultura, Hugo Trivelli, cuyos organismos se llevaron a nuestros mejores técnicos del Instituto de Educación Rural y más encima se mostraron reticentes para cumplir con el aporte que el Estado daba al IER desde tiempos de Ibáñez.

Y nos dolió inmensamente que, llamado para hacerse cargo de la Consejería de Promoción Popular, nos abandonara uno de nuestros mejores colaboradores: Sergio Ossa Pretot. Ossa había trabajado muy cerca de la Oficina Técnica de Planificación del Instituto para el Desarrollo (IDE), una entidad cuya creación me fue propuesta por los padres Gabriel Larraín, Renato Poblete y Roger Vekemans; con gran acierto, ellos habían visto que numerosas fundaciones europeas estaban dispuestas a financiar proyectos de desarrollo en América Latina, pero no sabían cómo hacerlo ni a quien llegar: el IDE proporcionaría este indispensable “puente” para canalizar los recursos, y su tarea llegaría a ser fundamental en las iniciativas propias de la Iglesia o patrocinadas por ella, incluso a pesar de la “pérdida” de Ossa Pretot.

Tal vez estas deserciones eran parte del entusiasmo ingenuo de aquellos días: los nuevos funcionarios creían que ahora el gobierno podía, y *debía*, hacerlo todo; del otro lado, muchos hombres que habían trabajado con la Iglesia se entusiasmaron con la misma idea, convencidos de que el factótum del cambio era el Estado. Siempre recelé de esta actitud: por una parte, sospechaba que un enorme campo quedaría sin cobertura si nosotros abandonábamos nuestras tareas; por otra, intuía que la Iglesia debía mantener su fuerza propia, y acrecentarla si era posible. Creo que la historia demostró que tenía razón en pensar de este modo; pero ni yo, ni mis hermanos en la

Conferencia Episcopal, pudimos impedir en ese momento que una parte importante de los cuadros católicos se incorporara a la política activa del Estado.

En marzo de 1965, cuatro meses después de asumir el gobierno demócratacristiano, vinieron las elecciones parlamentarias para renovar la Cámara de Diputados y 20 de los 45 senadores. El resultado dejó al gobierno de Frei con el mayor respaldo parlamentario obtenido por un Presidente en muchos años. En la votación total alcanzó el 43 por ciento, y en la Cámara de Diputados se elevó hasta la mayoría absoluta, con 82 asientos sobre 147. En el Senado consiguió un importante avance, pero como sólo renovaba menos de la mitad, continuó en minoría: 13 asientos de 45.

Sin embargo, para entonces la derecha, que lo había apoyado en la elección presidencial, comenzaba a pasar a una oposición abierta. Primero, debido a la reforma tributaria que creó el impuesto patrimonial, y luego, ante el anuncio de que ese año serían despachadas otras reformas sociales.

La izquierda también preparaba una lucha dura contra el nuevo gobierno (lo que ya se había anunciado con su inasistencia al Congreso Pleno, con el fin de sabotearlo), bajo la consigna de que “le negaremos la sal y el agua”, e iniciaba la crítica radical contra los proyectos oficiales, por varios de los cuales el PDC le había disputado al FRAP los sectores populares.

En las líneas básicas de su programa, Frei se había comprometido a realizar la reforma agraria, iniciar la “chilenización” del cobre, construir 60 mil viviendas al año, ampliar el derecho a voto, iniciar una reforma educacional e impulsar la Promoción Popular, un vasto programa destinado a las organizaciones de base (juntas de vecinos, centros de madres, centros comunitarios).

Para la derecha, todo esto no era más que un vulgar programa revolucionario y socialista; para la izquierda, eran sólo fórmulas reformistas, nuevos disfraces de la dominación capitalista. Frei debía arreglárselas con ambas acusaciones.

En julio, durante una gira europea, Frei fue recibido en audiencia por el Papa. Aunque yo no asistí —al Vaticano no le gustan las mezclas en materia diplomática—, Pablo VI me dijo después que estaba muy contento con esta visita. Recordó que Frei había pedido

otra audiencia, cuando aún era candidato, y que algunos hombres de la Curia le habían aconsejado que no lo recibiera. Pero él lo hizo. "Y ahora es el Presidente", decía.

En verdad, en Chile se depositaban entonces muchas de las esperanzas acerca de este "continente nuevo", esta tierra que muchos europeos y norteamericanos empezaban recién a descubrir y a la que comenzaban a ver como un terreno posiblemente fértil para el sueño de una humanidad más justa.

No es una exageración decir que no hubo en aquellos años un proyecto de gran envergadura que no tuviera que ver con Chile: el país más estable de América Latina, el de tradición democrática más larga, el de avanzada política e ideológica. Fue también líder en los grandes planes de integración latinoamericana, un proceso que constituyó la moda de los 60 y en el cual se habían venido dando pasos lentos, pero progresivos. Era una aspiración muy propia de la época: las facilidades de comunicaciones, el progreso de las ciencias sociales, los avances tecnológicos, la multiplicación del comercio exterior, en fin, muchos factores habían difundido en América Latina la "conciencia del continente", la convicción de que una cierta identidad cultural y económica unía a los pueblos americanos.

Es cierto que en muchos casos se trataba de una "identidad negativa", es decir, que se buscaba en los problemas y los dolores comunes. Pero aun así, la integración era un impulso difundido en las capas dirigentes. También en la Iglesia: de hecho, al año siguiente, reunido en su X Asamblea Extraordinaria, en Mar del Plata, el Celam declaró formalmente que la integración era un paso indispensable para el desarrollo, que a su turno era, en palabras de Pablo VI, "el nuevo nombre de la paz".

Pero las condiciones para que este ideal se concretara eran muy difíciles. El año anterior, en 1964, el gigante de América del Sur, Brasil, había visto ceder su sistema democrático con estrépito, en un golpe militar que (aunque no lo sabíamos entonces) inauguraría todo un ciclo en nuestras naciones. En 1965, otro general se impondría en

el poder en Bolivia, mientras Colombia era azotada por una guerra sorda entre el gobierno y las guerrillas de distinto signo.

En Argentina, la inquietud era notoria el 65 y se expresaba, primero, en los roces fronterizos con Chile. La Iglesia de ambos países, alerta ante este peligro que a lo largo del siglo había venido intranquilizando esporádicamente a las dos naciones, trataba de dar siempre la máxima importancia a la conservación de la paz. El 64 el cardenal Antonio Caggiano, arzobispo de Buenos Aires, me propuso celebrar los 60 años de la construcción del Cristo Redentor, en



1º de junio de 1965: en la Casa Rosada aparecen, de izquierda a derecha, el presidente de la Cámara de Diputados, Arturo Mor Roig; el presidente de Caritas Argentina, Jacinto Cipriota; el adscripto para la visita, canónigo Alberto José Lattuada; el cardenal Silva Henríquez; el Presidente de Argentina, Arturo Illia; el embajador de Chile, Hernán Videla Lira; el subsecretario de RR.EE., José Noguero Armengol; un sacerdote no identificado, y el padre Baldo Santi.

plena cordillera de Los Andes, un símbolo de hermandad, pero también de la Iglesia vigilante de la paz. El acto tuvo lugar en febrero de 1965, con los cancilleres Gabriel Valdés y Miguel Angel Zavala Ortiz, y los ministros de Defensa, Juan de Dios Carmona y Leopoldo Suárez. Hubo sendos discursos (el cardenal Caggiano nos emocionó

a todos citando al obispo chileno Ramón Angel Jara: “Primero se desplomarán estas montañas antes que los argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor”), se envió un mensaje de paz al Papa y se dirigieron cartas a los presidentes de ambas naciones.



El cardenal Silva Henríquez es recibido en el aeropuerto de Plumerillo, en Mendoza, con honores de Vicepresidente de la República, el 13 de agosto de 1965, invitado por los salesianos de esa ciudad.

En junio de ese año fui invitado por las autoridades argentinas; me reuní con el Senado y con el Presidente Arturo Illia, y hallé una disposición muy favorable, ya no sólo a la paz, sino a las iniciativas de integración. Lastimosamente, a finales del mismo año se produjo el más grave de los incidentes, en Laguna del Desierto, donde el teniente chileno Hernán Merino cayó herido de muerte. La Iglesia de ambos países debió empeñar todos sus esfuerzos para evitar los desbordes nacionalistas en ese difícil trance; mi vicario Jorge Gómez Ugarte tuvo un destacado papel en ello.

Seis meses después, en junio de 1966, un general entró al despacho del Presidente Illia y lo declaró derrocado. Como el Presidente le hizo ver enérgicamente su condición constitucional, un pelotón fue a sacarlo de su despacho; y entonces, consciente de su impotencia, Illia salió dignamente de la Casa Rosada y se marchó a su hogar.

En marzo de ese año partí a la República Dominicana, para encabezar dos congresos que se realizarían en la capital, Santo Domingo: uno, mariológico (teología de la Madre de Dios), y otro, mariano (la piedad popular de María). El tema de ambos era la maternidad espiritual de María, una noción directamente inspirada por el Concilio,



Bendición de la Escuela Agrícola Salesiana de Moca, en República Dominicana. De izquierda a derecha, el arzobispo de Santo Domingo, Octavio Antonio Beras; el cardenal Raúl Silva Henríquez, y el nuncio Emanuele Clarizio.

que presidiría los trabajos. Pablo VI me nombró legado pontificio para dirigir los dos congresos. Y no faltó quien dijera que el Santo Padre quería que con ello me “arrepintiera” de mis opiniones sobre la Virgen en el Concilio. Esto no sólo era completamente absurdo, sino que además podía interpretarse al revés: Pablo VI me nombraba su representante precisamente porque tenía plena confianza en mi fidelidad a María.

Hablando ante los teólogos y sacerdotes que concurrieron a los dos congresos, subrayé que el mensaje central del Concilio acerca de este tema era la necesidad de conservar la unidad mística, tanto en la visión de la fe como en la devoción práctica. El Concilio quería

evitar las disociaciones que podían conducir a prácticas desviadas, las cuales serían dañinas no sólo para la Iglesia, sino sobre todo para los fieles. Al insistir en este punto, la Iglesia quería proteger la fundamental mediación de Cristo, dado que sin ella no se concibe salvación: ésta era la médula del asunto y no, como livianamente se supuso, el debate inicuo sobre si la eminencia de María se protegía mejor por separado o con una mariología autónoma.

Los dos congresos fueron excelentes y hasta significaron reanimar la vida de la Iglesia en esa hermosa república.

Cuando volvía a Chile, vía Nueva York, un violento terremoto azotó la zona central del país. De nuevo debíamos ponernos a trabajar para ayudar a varios miles de damnificados y víctimas. Pero en esta ocasión ya sabíamos bien cómo hacerlo, y gracias a eso las diócesis más dañadas —Valparaíso, San Felipe, Santiago e Illapel— pudieron recibir pronto la generosa ayuda de la Propagación de la Fe de Haaden (Alemania). Una vez más, la solidaridad haría posible que la nación volviera a reconstruir lo asolado y a levantarse desde la ruina para crecer con resignado empuje, tal vez uno de los rasgos más característicos del ser chileno.

Menos de un mes después de que dejé Santo Domingo, la conmoción política que ya se intuía en la nación caribeña derivó en un estallido de proporciones sorprendentes. El 24 de abril, un grupo de militares jóvenes se levantó contra el gobierno para reponer en su cargo al Presidente Juan Bosch, derrocado en 1963. Bosch esperó en Puerto Rico el momento de volver. Pero otro militar, el general Elías Wessin y Wessin, vio en la sublevación de los oficiales jóvenes una conspiración comunista, y mandó a bombardear parte de la ciudad para reducirlos. El pueblo se dividió en dos bandos y entró en el vértigo de la guerra civil. El 28 de abril, el Presidente de EE.UU. Lyndon Johnson decidió intervenir en favor del general Wessin y Wessin, y despachó 25 mil soldados para ocupar la capital de la República Dominicana. Pero esta virtual invasión sólo agravó las cosas: se instalaron dos gobiernos, con dos ejércitos.

En verdad, sólo el nuncio apostólico, monseñor Emanuele Clarizio, realizó esfuerzos eficaces en favor de la paz. Consiguiendo treguas de uno y otro bando, apaciguó la tensión hasta que el secretario general de la ONU, U Thant, lograra articular un plan de paz.

Volví a Santo Domingo a mediados de año, y vi por mis propios ojos los deplorables resultados de la intervención militar. La situación seguía estancada, y EE.UU, que al parecer se había dado cuenta del error, intentaba remediar su conducta, pero ya parecía demasiado tarde. Recuerdo que le escribí al Presidente Frei sobre esta actitud vacilante de EE.UU.: "El lado flaco de ellos es que quieren servir a dos señores, a la democracia y a la plutocracia. Están interesados económicamente en mantener la triste situación de la isla. Pero también quisieran defender la democracia y la libertad de los pueblos".

Estados Unidos había actuado ante el fantasma cubano, tomando medidas exageradas y que no causaban ningún bien. Pero también hay que reconocer que aquellos años fueron terribles; mirándolos retrospectivamente, uno aprecia que estuvieron marcados por el dolor y la sangre. Una lucha ideológica sin límites marcó buena parte de la década y formó sin duda el clima bajo el cual han de revisarse estos dramáticos sucesos.

Mientras en Indonesia la denuncia de una eventual asonada comunista produjo un contragolpe militar que dejó más de 30 mil muertos en sólo unos pocos días, Estados Unidos iniciaba los bombardeos masivos y los envíos de centenares de miles de soldados a la guerra de Vietnam, que terminaría siendo una de las más largas y terribles de este siglo; las sacudidas de la descolonización remecían todavía a los países africanos, y en China se preparaba la persecución implacable de la disidencia política a través de la llamada Revolución Cultural.

Ese año 65 fue también el primero en que las reformas aprobadas por el Concilio comenzaron a extenderse entre todos los católicos. La Conferencia Episcopal chilena autorizó ampliamente el uso del clergyman, con lo que se comenzaron a abandonar las sotanas; y poco después el cardenal Santiago Lercaro, presidente del Consejo para la Aplicación de la Liturgia, distribuyó una carta precisando los límites y la obligatoriedad de las reformas dictadas por la Santa Sede.

Decididamente, la Iglesia chilena no estaría atrás ni al margen del espíritu del Concilio. ¿Lo entendieron así también los dirigentes judíos que me visitaron para invitarme a asistir a la Sinagoga de Santiago? Seguramente: la invitación misma era una gran novedad,

pero el hecho de que el cardenal aceptara tenía un significado más extenso e influiría en el futuro de nuestras relaciones dentro de la patria. Fui de buena gana, para hablar sobre *El respeto a la persona humana en el Antiguo Testamento*.

La Sinagoga estuvo repleta, y hubo grandes aplausos cuando subrayé que la firme decisión del Concilio era romper con esa tradición de siglos por la cual se imputaba al pueblo judío la muerte de Cristo. El pueblo al que se confiaron las alianzas y las promesas, el "pueblo elegido", comparte con los cristianos la revelación del Verbo en el Antiguo Testamento; y no es una casualidad que de tal Libro Sagrado se desprendan las normas principales de la justicia y los derechos del hombre, vertiente en la que ha abrevado la civilización occidental. La protección del matrimonio, la fecundidad, la integridad física, y la defensa de los pobres, los extranjeros, los inválidos y hasta los esclavos, todo ello es un legado directo del Antiguo Testamento, y también, hasta donde éste se encarnó, de la tradición judaica. ¿Cómo no reconocer esa hermandad fundamental?

No ignoro que hubo quienes consideraron demasiado audaz mi presencia en la Sinagoga. Para algunos, romper la dura costra de las costumbres resultaba todavía difícil.

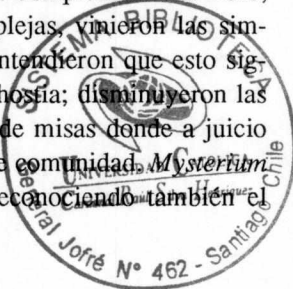
Pero yo no tuve duda del gran bien que esto significaría: y tal cosa se vendría a probar ampliamente mucho más tarde, cuando llegaran los tiempos más difíciles para la Iglesia.

El gozo y la esperanza

Pablo VI convocó a la cuarta sesión del Concilio precisando que sería la última. Restaba trabajar sobre once esquemas, pero la mayoría de ellos estaban muy avanzados y el período de cuatro años había sido ya suficiente. Además, hacía falta consolidar la obra conciliar, darle una aplicación y una eficacia global, “aterrizarla” en las diócesis y en los fieles, evitando, de paso, que una interpretación demasiado abierta del *aggiornamento* condujera a excesos o dividiera a los católicos en “antiguos” y “nuevos”.

Cierta dispersión se había notado ya en la reforma litúrgica, que comenzó a aplicarse con gran rapidez. Para prevenir ese daño, durante la intersesión el Papa dictó su encíclica *Mysterium fidei*, donde recordó que la eucaristía no es sólo el signo de la unión de Cristo con los hombres, sino también fuente de esa unión; la eucaristía es en sí misma un acto *en* Dios, no únicamente un gesto.

Se dijo con demasiada facilidad que *Mysterium fidei* era una respuesta del Santo Padre a la nueva teología holandesa, que, buscando dar nueva vitalidad a la eucaristía, había ideado el término “trans-finalización” para significar que la presencia de Cristo en la hostia no es estática, sino que tiene una finalidad, cual es la de profundizar la comunicación entre Dios y los hombres. Los holandeses no proponían el uso de este término para sustituir a la “transubstanciación” definida por el Concilio de Trento (según la cual Cristo está presente *en* la hostia), sino para complementarla. Pero, como suele ocurrir con las ideas muy complejas, vinieron las simplificaciones, seguidas de hechos: algunos entendieron que esto significaba que Cristo no *está realmente* en la hostia; disminuyeron las visitas al Sagrario y hasta hubo suspensión de misas donde a juicio de los celebrantes no se cumplía el sentido de comunidad. *Mysterium fidei* vino a poner las cosas en su lugar, reconociendo también el



esfuerzo de los cristianos de avanzada por enriquecer las dimensiones de la eucaristía.

El 14 de septiembre de 1965 se inauguró la cuarta sesión, con un discurso admirable del Santo Padre. Pablo VI era así: tenía una inteligencia fulgurante, que podía percibirse claramente en su rapidez para comprender problemas puntuales durante las conversaciones



El Papa concelebra la misa inaugural de la cuarta sesión con veinte cardenales y varios arzobispos y obispos.

privadas, pero que también emergía con un brillo inusitado en ciertas ocasiones solemnes, maravillando a grandes y exigentes auditorios. Esta vez hizo además dos anuncios: que viajaría a Nueva York para hablar en el foro de las Naciones Unidas, y que crearía un Sínodo de Obispos, la institución que la mayoría conciliar había pedido para que la Iglesia de fuera de Italia tuviese una presencia más activa asesorando al Pontífice.

Al día siguiente se promulgó el *motu proprio Apostolica Sollicitudo*, instituyendo el Sínodo. Este sería una entidad eclesiástica central, que representaría a todo el Episcopado y asesoraría al Papa en las ocasiones en que fuese convocado por éste. El Sínodo podría funcionar en asamblea general, extraordinaria o especial. La composición variaría en cada caso, pero básicamente habría miembros por derecho y por elección: los patriarcas y arzobispos mayores y metropolitanos; los cardenales prefectos de Curia; los obispos ele-

gidos por las conferencias episcopales de varias naciones; y los religiosos elegidos por los superiores generales de Roma.

La institución del Sínodo sobrepasó todas las expectativas que se había hecho la mayoría conciliar: era algo revolucionario, que introducía un elemento radicalmente nuevo para la participación de los obispos en el gobierno de la Iglesia Universal. Todos sabíamos



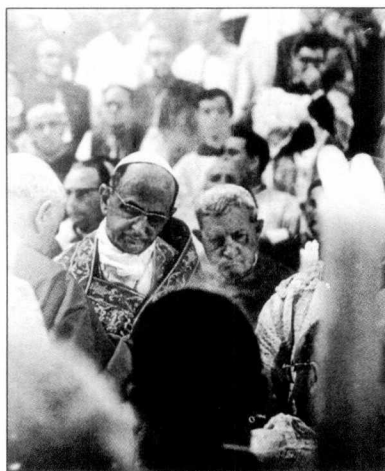
El 7 de diciembre de 1965, el Papa se dirige a entronizar personalmente el Evangelio.

que Pablo VI participaba de estas ideas; de hecho, en sus *vota* de la primera sesión conciliar él había propuesto que la renovación del Episcopado y la Curia se hiciesen según un criterio muy severo, exigiendo la renuncia de los obispos al cumplir 60 años. Aun así, dada la oposición que habían mostrado la Curia y el sector conservador, no se esperaba que la creación del Sínodo fuese un resultado a tan corto plazo.

Tal como se había prometido en el polémico final de la tercera sesión, el primer esquema que entró a debate fue el de la Libertad Religiosa, que en el intertanto había sido reelaborado, con notable mejoría.

Constaba de diez páginas, divididas en cuatro capítulos, y sus contenidos fundamentales se desprendían de un pequeño núcleo de principios, todos muy novedosos: 1) Todo hombre tiene derecho a no

ser coaccionado en materia religiosa por la sociedad civil o el Estado; 2) No se puede prohibir a ningún hombre que actúe según su conciencia; 3) Todo hombre tiene derecho a manifestar sus opiniones religiosas; 4) La libertad cívica no se confunde con la libertad ontológica; todo hombre tiene la obligación de discernir entre lo falso y lo verdadero y escoger en qué religión ha de servir a Dios.



El Papa Pablo VI entroniza el libro de los Evangelios, en la ceremonia inaugural de la cuarta sesión del Concilio.

Las implicancias de estos principios eran muy vastas, y así lo recogió el debate, que no fue muy extenso, aunque sí intenso: en tres días y medio hablaron más de 60 padres conciliares.

En una de las más notorias intervenciones iniciales a favor del esquema, el cardenal Charles Journet introdujo una reivindicación no menos sustantiva: si la Iglesia iba a afirmar la intrínseca libertad de las personas, debía también reconocer que quien se equivoca o peca conserva plenamente su derecho a ser tratado y considerado como persona. Esta idea modificaba el enfoque legalista que había primado en algunos sectores de la Iglesia, o en algunos períodos de su vida, a través de acciones punitivas en lo individual o excluyentes en lo social (por ejemplo, donde el Estado se declaraba católico).

En mi intervención en el aula, el 16 de septiembre, apoyé el texto, destacando su revalorización del sentido evangélico de la libertad, según lo había entendido San Ireneo, el obispo de Lyon del siglo II, para quien el Nuevo Testamento era “la economía de la

libertad". Y agregué, extendiendo las consecuencias de estos principios hasta el ámbito de nuestro propio trabajo pastoral: "Todo lo dicho contra el empleo de cualquier tipo de coacción en la presentación del Evangelio vale no sólo en relación a los paganos y a los cristianos no católicos, sino también respecto a la relación de la Iglesia con sus propios fieles". A nuestro juicio, una declaración de esta naturaleza no fomentaría el relativismo, como se decía, sino que señalaría el camino del recto uso de la libertad.

Afirmar estas cosas no era nada fácil, porque las doctrinas anteriores no habían sido muy claras. León XIII, por ejemplo, preconizaba que la tolerancia civil debía seguirse sólo cuando fuese necesario, mientras que la intolerancia había de practicarse donde fuese posible. Establecía la tajante diferencia entre la *tesis* (en el Estado católico sólo puede ser libre el catolicismo), y la *hipótesis* (en la sociedad pluralista se impone la tolerancia religiosa por necesidad práctica).

Esta doctrina leonina era complementaria con una vieja norma inquisitorial según la cual al error no se le podía reconocer derechos. Hablando contra estos hechos históricos, el arzobispo polaco de Poznan, Antoni Baraniak, pidió que se dijera expresamente que "algunas instituciones" de la Iglesia oprimieron en el pasado la libertad religiosa, mientras que el cardenal Josef Beran, de Praga, produjo conmoción al proponer que la Iglesia se arrepintiera de hechos como la muerte de Juan Huss en el siglo XV o las conversiones forzadas del siglo XVII.

Curiosamente, a pesar de lo avanzado de algunas intervenciones, la mayoría de quienes hablaron lo hicieron en contra de la declaración sobre la Libertad Religiosa. En verdad, esto se debía a que la mayoría estaba satisfecha con el texto (y por eso no hablaba); pero produjo la sensación generalizada de que había peligro de rechazo.

Gruesamente, los ataques contra la declaración se centraban en el peligro de fomentar el indiferentismo, la propiciación de estados laicistas, la "mutilación" del derecho de la Iglesia a proclamar el Evangelio, y el poner a la verdad y el error en un mismo plano de derechos. Un obispo español llegó a sostener que la Iglesia debía proclamar su derecho exclusivo a predicar el Evangelio, lo que cons-

tituía una ruptura total con el esquema Sobre Ecumenismo y con el espíritu mismo del Concilio.

Así se llegó al 20 de septiembre, cuando se reunieron presidentes, moderadores, coordinadores y secretarios del Concilio, para decidir si se hacía una votación exploratoria sobre el texto. Parece que debido al clima aparente que se vivía, una mayoría del grupo tuvo temor de que la votación fuera adversa y optó por no hacer tal exploración. Pero el Papa estaba a punto de viajar a las Naciones Unidas, y ya había decidido que su tema en el foro mundial sería precisamente el mensaje de la libertad, a un mismo nivel de importancia que el de la paz. Entonces se reunió con los cardenales Eugene Tisserant (del Presidium) y Gregorio Pietro Agagianian (de los moderadores) y les pidió que ordenaran la votación.

Se hizo el mismo día. 1997 padres votaron por aprobarlo, y sólo 224 lo rechazaron. Inmediatamente después del escrutinio vino un prolongado aplauso, con lo cual el esquema quedó refrendado y regresó a la comisión original para los últimos retoques previos a su promulgación.

En seguida, se presentó al aula el esquema Sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy, el ya famoso esquema 13, que también había sido reescrito sobre la base de las numerosísimas intervenciones de la sesión anterior. Esta vez se había conseguido ya un mayor equilibrio en el texto, y era inconfundible el predominio de una óptica optimista para juzgar y apreciar la historia humana. En los cuatro primeros capítulos se seguía la línea de una antropología cristiana para describir al individuo, su medio social, la actividad productiva y la función de la Iglesia. Luego se internaba con detalle en cinco grandes temas del mundo contemporáneo.

El primero era el del matrimonio, al que el obispo Remy de Roo, de Canadá, le introdujo el importante matiz de contrapesar los peligros que afronta la pareja con una visión positiva de su presente y futuro. El cardenal Paul Emile Léger propuso eliminar la tradicional distinción entre el fin primario (procreación) y el fin secundario (la unión mutua) para quitar todo rastro de una visión instrumental de la persona.

La parte más difícil de este capítulo fue la que se refería a la procreación. Por esos años se estaba poniendo de moda el uso de

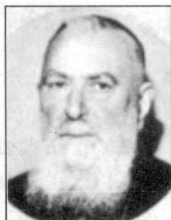
anticonceptivos (la famosa "píldora") y los movimientos abortistas habían ganado terreno a la zaga de las teorías de control de la natalidad y planificación familiar, casi siempre pensadas para los países pobres. Monseñor Colombo introdujo en el esquema 13 una importante modernización en la posición de la Iglesia al hablar de la "paternidad responsable" como un concepto clave: según éste, el hombre debía tener la posibilidad de buscar y el derecho de usar todos los medios honestos para conseguir el fin esencial, cual es el de que la procreación se realice en las mejores condiciones posibles.



Cardenal Josef Beran.



Cardenal Gregorio Pietro Agagianian.



Cardenal Eugene Tisserant.



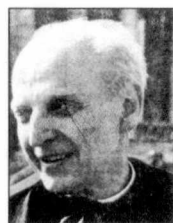
Cardenal Joseph Lefebvre.

Una intervención posterior del vicario patriarcal melquita de Egipto, monseñor Elie Zoghbi, que expuso al Concilio el dramático caso de un cónyuge joven que es abandonado por su pareja, hizo que algunos periodistas afirmaran que la Iglesia discutía el divorcio. Pero esto nunca llegó a ocurrir, porque la amplísima mayoría (si no la unanimidad) de los padres conciliares pensaba que la doctrina tradicional debía mantenerse intacta en esta materia.

Otro capítulo abordaba la cultura moderna, al cual el padre Pedro Arrupe, elegido ese año general de los jesuitas tras la muerte del padre Giovanni Janssens, introdujo un elemento polémico al alertar sobre la extensión mundial del ateísmo y proponer que la Iglesia asumiera una encuesta internacional para conocer el terreno y des- prender su acción futura.



*Patriarcas Esteban I Sidarous y
Maximos IV Saigh.*



*Padre Pedro
Arrupe.*

Don Manuel Larraín tuvo una memorable intervención en el capítulo sobre la vida económico-social, en la que subrayó la necesidad urgente de equidad y justicia. A decir verdad, estábamos bien preparados para este esquema: durante 1965 habíamos creado una comisión especial para estudiarlo, integrada por los padres Jorge Medina, Egidio Viganó, Julio Jiménez (un jesuita que había estado en el "exilio" durante Alessandri), Juan de Castro, Juan Ochagavía y Roger Vekemans. Esta comisión recibió además visitas especiales, como la del canónigo y perito Charles Moeller y la del padre Joseph Comblin, que en aquellos años aún no se había radicalizado.

En el ámbito de la comunidad política hubo una curiosa discusión sobre la poca presencia del Mal y del Diablo en los textos conciliares (en Chile la prensa dijo que el Demonio "fue jubilado en Roma"); en cuanto a los problemas de la paz y la comunidad internacional, los únicos hechos destacables fueron un encendido llamado del cardenal Ottaviani para condenar por igual todas las formas de totalitarismo, y la campaña realizada por los obispos de Estados Unidos para que el esquema no declarara explícitamente la perversidad de las armas científicas ni condenara genéricamente a todas las

guerras (lo cual se explica por el fuerte compromiso bélico asumido en esos años por EE.UU. en Vietnam y otras regiones del mundo).

El texto, otra vez con numerosas enmiendas y proposiciones, volvió a la comisión para su última redacción. Este proceso llegó a convertirse en un acto de heroísmo, porque, con la brevedad de los plazos, los expertos tuvieron que dedicarse a trabajar día y noche, durante dos semanas continuas, para poder tener la versión definitiva en la fecha que quería el Papa.

Después se revisó un esquema Sobre las Misiones, que fue rápidamente aprobado (en la sesión anterior se había rechazado un borrador muy insatisfactorio), y luego otro, Sobre los Presbíteros.

Este último dio pie a una discusión que hasta entonces había estado ausente en el Concilio: el papel que han de cumplir los sacerdotes. Con una extraordinaria visión de futuro, que anticipaba muchos de los problemas reales que tendríamos poco tiempo después, el cardenal Suenens le reprochó al esquema hablar demasiado de un sacerdote abstracto y genérico, de una figura casi puramente escatológica, dejando de lado al sacerdote concreto, al de hoy, al que vive en un mundo descristianizado y que empezaría a preguntarse para qué sirve y para qué está, si el apostolado de los seglares cumpliría con sus funciones tradicionales. El cardenal Lefebvre abundó en este punto al proponer que el Concilio declarara que el sacerdote encuentra su misión esencial en la "edificación del Cuerpo de Cristo". También se pidió que el texto subrayara la presencia paradójica del sacerdote, como signo trascendente (escatológico) y como signo encarnado de amor al mundo.

Un pequeño grupo de padres quiso plantear entonces el tema del celibato, debate que estaba muy de moda en algunos países europeos, pero que ciertamente no representaba el pensamiento mayoritario, ni de los obispos ni de los clérigos. La razón de esto es muy simple: en la Iglesia Católica de Occidente, el celibato tiene 16 siglos, y fue mantenido heroicamente, en tiempos muy difíciles, en medios sociales muy adversos, como la imitación viviente del Cristo sacerdote. Algunos obispos de América Latina, sin embargo, habían planteado la posibilidad de que, en países donde hay carencia de vocaciones, se aceptase un sacerdocio auxiliar casado; en ningún caso se propuso jamás que los sacerdotes ya ordenados pudieran casarse; esto no

existe ni siquiera en la tradición de las Iglesias Orientales, que en cambio sí aceptan ordenar a hombres ya casados.

En todo caso, el Papa intervino personalmente, mediante una carta al cardenal Tisserant, anotando que no era oportuna la discusión de este tema en el aula, y que el celibato no sólo se mantendría, sino que sería reforzado. La misiva fue recibida con un sonoro aplauso por el Concilio, lo que mostró bien a las claras cuál era el pensamiento mayoritario.

El 28 de octubre de 1965 se realizó una sesión solemne, presidida por Pablo VI, en la que se promulgaron formalmente cinco de los esquemas aprobados: Sobre los Deberes Pastorales de los Obispos, Sobre la Renovación de la Vida Religiosa, Sobre la Formación del Clero, Sobre la Educación Cristiana y Sobre las Relaciones con las Iglesias No Cristianas.

Quedaban, en consecuencia, otros seis esquemas todavía pendientes. De ellos, uno fue sometido al último debate al día siguiente: era el de la Revelación, que todavía buscaba, con mucha dificultad, el equilibrio entre la línea del pensamiento católico antiguo (que siempre tendió a privilegiar la tradición como fuente de revelación) y el pensamiento de algunos cristianos separados, que sustentaban la valía de la *sola scriptura* y que no reconocían peso alguno a la tradición.

El Papa intervino en este difícil debate en varios puntos, el más importante de los cuales fue el reconocimiento expreso de la "fe histórica" que tienen los Evangelios, un aspecto que no había sido debidamente reforzado. El *Coetus Internationalis*, que agrupaba a los sectores más conservadores, luchó duramente contra este esquema hasta el último momento antes de la votación, a través de panfletos y proclamas firmados por el obispo francés Marcel Lefebvre y el obispo brasileño Geraldo de Proenca Sigaud. Sin embargo, al someter el texto al voto, 2.081 padres dieron su *placet* y sólo 27 expresaron un *non placet*.

Con este cómputo culminaron los debates sobre esquemas y se abrió un período de vacaciones de diez días. El 9 de noviembre se reabría la sesión, pero ya no para continuar discutiendo, sino sólo para votar los esquemas en su fase final.

Las votaciones se sucedieron a toda velocidad, a pesar de que en varios casos se propusieron escrutinios por capítulos e incluso por

párrafos. El 18 de noviembre hubo una segunda sesión solemne, en la que Pablo VI promulgó otros dos esquemas: Sobre la Revelación Divina y Sobre el Apostolado de los Laicos. En esa misma jornada el Papa añadió dos anuncios que serían también profundamente renovadores: la reorganización de la Curia, tal como lo habían pedido numerosos padres conciliares, y el estudio de un nuevo estatuto para el Santo Oficio, ambas cosas en consonancia con los decretos dictados a partir de los esquemas del Concilio.



Cardenales del sector conservador: los españoles José Bueno y Monreal y Fernando Quiroga y Palacios, con el filipino Rufino Santos (al centro).

Al día siguiente se presentó en el aula, por fin, el último texto Sobre la Libertad Religiosa, que recogía con gran vigor las discusiones mantenidas durante las reuniones anteriores. Terminando con la dualidad entre *tesis* e *hipótesis*, proponía como única tesis la noción de que la libertad religiosa es un derecho natural que está en consonancia con el movimiento de la Revelación, con lo cual daba a este enfoque un rango teológico superior. Reafirmaba enérgicamente la incompetencia del poder civil en materia religiosa, instaba al reconocimiento por el Estado de todas las religiones y admitía como un error la intolerancia practicada por la propia Iglesia en otros momentos históricos.

La marcha de alta velocidad continuó en los días siguientes. El 7 de diciembre de 1965, el Papa promulgó los esquemas Sobre Ministerio y Vida de los Presbíteros, Sobre la Actividad Misionera y Sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy. Este último fue además elevado al muy alto rango de Constitución Pastoral, con el bello



El 8 de diciembre de 1965, tras clausurarse el Concilio, Pablo VI entrega a Jacques Maritain el mensaje a los intelectuales.

nombre de *Gaudium et Spes*, tomado de la primera línea del texto: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón”.

En *Gaudium et Spes*, que sería decisiva para los acontecimientos futuros de la Iglesia, los teólogos trabajaron día y noche para cumplir con el plazo, y en Roma se difundió cierta decepción por el hecho de que el esperado y discutido documento no ofreciera respuestas directas a ciertos problemas concretos. La verdad es que esto no era necesario y hasta hubiese perjudicado la coherencia de *Gaudium et Spes*; el brillante equipo que trabajó en la redacción final —mon-

señor Emilio Guano, nuestro amigo Marcos McGrath, el padre Roberto Tucci, entre muchos otros— confirió un delicado equilibrio a las urgencias pastorales en relación con las verdades fundamentales de la fe. Esta experiencia, que luego daría pie a la llamada “teología de los valores terrenos”, fue a larga la más fecunda del Concilio, porque estimuló un debate renovado sobre la misión del catolicismo, que se extendería a través de todos los ámbitos; con mucha razón decía alguien que este esquema era la obra esencial pedida por Juan XXIII, la viga maestra del *aggiornamento*, el comienzo de un nuevo diálogo con el mundo.

Como signo magnificante de esta renovación sincera y profunda, el 4 de diciembre Pablo VI celebró en el templo de San Paolo Fuori le Mure un gran culto ecuménico al que fueron invitados todos los observadores del Concilio. En su alocución, por primera vez, el Papa los llamó a todos ellos “hermanos” y destacó que el significado fundamental del Concilio era el de que “hemos comenzado a amarnos”.

El 7 fue la ceremonia de clausura, donde el Papa nos exhortó a todos a cumplir con las determinaciones y con el espíritu del Concilio, y a velar para que, por sobre todo, hubiese una gran unidad en la Iglesia. Resaltó las condiciones en que concluía el sínodo más importante del catolicismo en el último siglo: “Se ha llevado a cabo este esfuerzo en nuestro tiempo, caracterizado por el ateísmo y el orgullo prometido del hombre”. Guardo con especial alegría un pequeño momento de esa ceremonia: cuando el Papa consagró hostias confeccionadas con trigo cultivado en la Escuela Agraria Salesiana de Punta Arenas, en una experiencia extraordinaria que el obispo Vladimiro Boric se encargó de llevar hasta la Santa Sede. También recuerdo mi emoción al acompañar, en unión con el cardenal Julius Döpfner, al cardenal argelino Leon Esteban Duval en la lectura del mensaje del Concilio a las mujeres.

Aquella mañana la Santa Sede levantó la excomunión contra Constantinopla y contra el Fanar ortodoxo, mientras simultáneamente el Fanar levantaba la excomunión contra el patriarca católico Miguel Cerulario, dos actos de violencia dogmática ocurridos en 1504. Las iglesias de Roma y Constantinopla se declaraban por este acto, y a pesar de sus vigentes diferencias, hermanas.

El *motu proprio Integrae Servandae*, promulgado en la misma fecha, hizo realidad la reformulación del Santo Oficio. Este dicasterio se había creado en 1908, a partir de la antigua Inquisición, y ahora requería una nueva orientación, la que debía ser subrayada a través de un nuevo nombre. Los principios esenciales del cambio eran los que había expresado el cardenal Joseph Frings en la segunda sesión,



El Papa es recibido en las Naciones Unidas por el presidente de la Asamblea General, Amintore Fanfani, y el secretario general, U Thant.

durante la intervención que causó el enojo del cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio: modernización de los métodos procesales, una actitud caritativa más que una punitiva, derecho a la defensa y la reparación, conciencia de los desafíos de la modernidad. Así, el nuevo dicasterio se llamaría Congregación para la Doctrina de la Fe. (Y no deja de ser notable, y hasta simbólico, que el perito principal que asesoraba en el Concilio al cardenal Frings, un teólogo de alto nivel llamado Joseph Ratzinger, haya llegado a ser prefecto de esta Congregación, cargo que aún ocupa).

Como consecuencia directa de esta renovación, se suprimió también el *Index Librorum Prohibitorum*, creado oficialmente en 1557, por Pablo IV, y reestructurado en 1990 por León XIII, cuya vigencia en nuestros días resultaba ya completamente anacrónica y ponía a la Iglesia en la condición de anatematizadora de muchas cosas modernas.

Fue un gran epílogo para una de las obras más grandes en que me haya tocado la fortuna de participar. Estuve (y estoy) muy contento del papel que cumplimos los obispos chilenos, que llegamos a crear con nuestras intervenciones una relación desproporcionada en favor de nuestra Iglesia: a pesar de nuestro modesto tamaño numérico, que



Pablo VI se reúne con el Presidente Lyndon B. Johnson, durante su visita a Estados Unidos.

era superado por buena parte de los episcopados de América Latina, nos situamos en la vanguardia del Concilio y establecimos un diálogo de iguales con algunas de las más relevantes figuras europeas; nuestros teólogos se relacionaron en el mismo nivel con los principales pensadores del catolicismo moderno y fuimos para los padres de América Latina fuente de consulta y estímulo intelectual. Creo que esto contribuyó a cambiar nuestra fisonomía: yo sentí que muchos de nuestros sacerdotes, especialmente los más jóvenes, contemplaron con orgullo y con más ansias de perfección nuestro desempeño conciliar.

Es imposible cubrir en un resumen la inmensa riqueza del Concilio. Sin embargo, yo sintetizaría su mensaje diciendo que en él, la religión del Dios que se hizo Hombre se encontró con la religión del hombre que se hace Dios. La simpatía inmensa que lo cubrió todo, y que nos llevó a explorar los problemas humanos desde su dimensión escatológica hasta su aspecto más concreto, dio lugar a un nuevo humanismo, por el cual la Iglesia reclamaba para sí un papel principal como promotora del hombre. Toda la riqueza doctrinal se volvía en una sola dirección: servir al hombre, en todas sus condiciones, debilidades y necesidades. Desde aquel día de diciembre de 1965, la Iglesia se proclamaba servidora de la humanidad.

Preparando el cambio

Fuera de las grandes y muchas satisfacciones que nos dio el final del Concilio, hubo una, tal vez más pequeña y ciertamente más privada, que me produjo una especial alegría. No está en ningún libro y es seguro que no hay crónica del Concilio que la registre; de hecho, creo que yo mismo no he hablado mucho de ello, hasta hoy.

Tiene que ver con unos jóvenes enardecidos que me fueron a visitar un día de 1960 a la diócesis de Valparaíso, y que, pese a mi condición de obispo recién llegado, decidieron confiar en mí. Se anunciaron como Movimiento de Schoenstatt y parecían tener tanta urgencia y rabia, que mi secretario hasta dudó en dejarlos pasar.

Yo había oído decir que este Movimiento estaba sumido en una especie de crisis interna. Pero las cosas no se limitaban a esto: en realidad, los obispos de Chile habían dictado un decreto congelando su actividad en el país, tolerando sólo las reuniones entre sus miembros. Los muchachos se atropellaban para contarme su situación, que les desacreditaba en la nación.

Conversamos largamente y, en vista de que no iba yo a desautorizar una orden de los obispos, les propuse que un sacerdote de la diócesis estudiara el Movimiento y me informara sobre él. Hubo acuerdo; el padre Wenceslao Barra se encargó de la tarea. Unos meses después me dio su conclusión:

—Son unos macanudos.

Comencé a reunirme con los dirigentes principales de Schoenstatt en Valparaíso, el abogado Mario Young Reyes, por los adultos, y Fernando Molina Vallejo, por los jóvenes. Conocí su curiosa historia, que empezaba muchos años atrás, en 1912, cuando un padre alemán de la orden de los Pallotinos, llamado José Kentenich, asumió como director pallotino de Schoenstatt. Era un hombre original, sin duda: ya en esa época había proclamado su

programa en una frase que se adelantaba al Concilio en medio siglo: *Vox temporis, vox Dei*, la voz de los tiempos es la voz de Dios.

En Schoenstatt, el padre Kentenich sintetizó en María, la *Mater tres veces admirable*, el carisma que animaría su obra. No quería cualquier cosa: aspiraba a una pedagogía completa que desarrollara un hombre nuevo, uno que fundase la nueva comunidad desde los valores de la fe, la familia y la fraternidad. Pero su pensamiento no resultaba tranquilizador para los espíritus conservadores: la antropología, la sociología, la sicología, incluso el psicoanálisis (tan condenado por el Santo Oficio), eran para él herramientas de primer uso en la construcción de su espiritualidad.



El cardenal Silva Henríquez, durante uno de sus encuentros con el padre José Kentenich (extremo izquierdo).

Los nazis lo declararon peligroso durante la Segunda Guerra Mundial, y lo metieron en un campo de concentración. Con increíble arrojo, en el propio seno de Dachau fundó una comunidad schoenstattiana; de allí salió castigado, casi en los huesos, pero fortalecido en la fe; comenzó a viajar por el mundo (visitó Chile) y a fines de los años 40 hizo un duro diagnóstico de la situación de la Iglesia europea. Entonces cayó en desgracia. El Santo Oficio lo destituyó, lo separó del Movimiento y lo envió a una parroquia pallotina de Milwaukee, en un auténtico exilio.

Allá seguía cuando me interioricé del caso. Simpaticé con esta odisea y con la perseverancia de sus seguidores, que se habían hecho fuertes en Valparaíso, entre la juventud. Planteé el caso en la Conferencia Episcopal y conseguí que mis hermanos obispos permitieran que, al menos en mi diócesis, Schoenstatt pudiera funcionar.

Cuando llegué a Santiago, volví a toparme con el Movimiento. Las Hermanas de María tenían instalada una pequeña capilla de la *Mater* en La Florida, que llegaría a ser su santuario más notorio. Volvió a impresionarme esta fuerza.

Entonces quise preguntar en Roma qué pasaba con el padre Kentenich; pese a mi rango de cardenal, un padre dominico me dijo cortésmente en el Santo Oficio que mejor no indagara mucho. En 1962, para la primera sesión del Concilio, la arbitrariedad del castigo era ya palpable; y descubrí que otros pensaban como yo. En noviembre, junto con los cardenales Joseph Frings, Julius Döpfner y Laureano Rugambwa, escribí al Papa una nota pidiendo que se levantaran las sanciones al padre y a su obra. Yo tenía buenos fundamentos, porque muchos sacerdotes schoenstattianos trabajan en mi diócesis.

Parece que estas y muchas otras peticiones fueron causando efecto; en 1965, los Pallotinos decidieron cultivar sólo la espiritualidad de San Vicente Palloti, y poco después Pablo VI concedió la autonomía a la obra de Schoenstatt, con lo cual la separación tomó entidad canónica. Cosa extraordinaria, se fundó el Instituto de Schoenstatt, pero el padre Kentenich continuó desterrado. En septiembre de 1965, cuando se iniciaba la última sesión del Concilio, el padre apareció en Roma; lo habían llamado mediante un telegrama. No sé por qué razón, el cardenal prefecto de la Congregación para los Religiosos me culpó a mí.

—Los chilenos —me dijo, irritado— falsificaron el telegrama.

—Perdón, Eminencia —le dije—: le puedo asegurar que ningún chileno ha falsificado ni enviado ningún telegrama.

El hecho es que, por mano desconocida, el padre Kentenich estaba en Roma, y podía hablar con Pablo VI. Un mes después, el Santo Oficio levantó todas las sanciones y le fue sugerido al padre que se retirara de los Pallotinos. Estuve con él cuando recibió esa proposición; le dolió mucho, y no quería hacerlo: amaba a su Congregación. Le dije que lo aceptara como signo de la voluntad de Dios, y que se dedicara por entero a su obra, como había soñado. Juntos redactamos la carta al Santo Padre pidiéndole la liberación de sus promesas. Todo ocurrió muy rápido. Pablo VI lo recibió pocos días después de concluido el Concilio, y para la Navidad de 1965 regresó a Schoenstatt. La obra se había salvado.

El padre murió tres años después, serenamente, como un auténtico hombre de Dios. Muchas veces he agradecido al Señor por la visita del padre Kentenich a mi alma y sé que por su gracia, por su bendita aparición en mi camino, muchos hombres de Schoenstatt guardan aún hoy un rincón de su corazón para este viejo pastor.

El año 1966 significó el primer reflujo del Concilio Vaticano II. Todavía estremecida por la inmensidad del acontecimiento que acababa de concluir, la Iglesia Universal se preparaba para sacar las consecuencias prácticas de lo que los padres conciliares habían dicho y estudiado. Los textos finales del Concilio eran devorados por un clero ansioso de ver a su Iglesia en marcha hacia los nuevos desafíos.

En este clima de impaciencia y bastante confusión, parecía natural que las primeras reacciones fuesen un tanto superficiales. Algunos sacerdotes habían creído ver en los documentos conciliares una especie de carta blanca para la acción política; otros pensaban que lo central era el papel del sacerdote, su castidad o sus votos; otros creerían que la libertad de conciencia autorizaba a desbordar la doctrina; y aun otros tomarían los trabajos sobre la Iglesia en el mundo moderno para encerrarse en ellos, perdiendo de vista el fin misterioso de la Iglesia, su esencial misión escatológica.

El sacudón del Concilio no sólo había removido el polvo vetusto que parecía ocultar la doctrina viva de la Iglesia, sino que también había soltado los fantasmas de algunos de sus miembros, hasta entonces escondidos, pero siempre latentes.

Aquellos fueron los años de las primeras expresiones del "diálogo entre cristianos y marxistas", un concepto que pronto sería desfigurado en las distorsiones propagandísticas más enojosas. Muy pocos recuerdan hoy que uno de los primeros encuentros de ese tipo, que se realizó en una isla de un lago bávaro, Herrechiemsee, terminó con conclusiones muy cautelosas; y menos recuerdan que los dos principales polemistas fueron el teólogo jesuita Karl Rahner y el dirigente del PC francés Roger Garaudy... ¡que más tarde sería acusado de "revisionista"!

Pero si el remezón era fuerte en la Iglesia Universal, en la de América Latina podía constituir un verdadero terremoto. Aquí la tensión entre las estructuras anticuadas y minoritarias, y el clamor masivo por participar en las decisiones era simplemente insostenible: la Iglesia debía cambiar, y las sociedades también; y la primera debía ser vanguardia en la transformación de las segundas.



La foto de Camilo Torres como guerrillero, de enero de 1967.

La Iglesia debía ser más auténtica, más humana y servidora de los hombres. Para ello era indispensable que tomara debida conciencia del subdesarrollo que aprisionaba a los pueblos latinoamericanos; este era un hecho central en nuestras vidas, y debía hacerse un esfuerzo real por los cambios profundos, que significaran no sólo la liberación política, sino también la económica y social.

Evidentemente, hubo quienes malentendieron ese llamado; creyeron que equivalía a la intervención en la política partidista e incluso, extremando la tesis, en la lucha más dura que fuera posible concebir. El caso emblemático de aquel año fue el del sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo, que a principios de la década del 60 comenzó a radicalizarse bajo la consigna, acuñada por él mismo, de que "la lucha revolucionaria es una lucha cristiana y

sacerdotal". Actuando en una sociedad donde la violencia se había convertido en un método de acción política a través de varios decenios, como era la de Colombia, Camilo Torres, en vez de proponer como principal aporte de su Iglesia el del progreso en la paz, se convenció de que la violencia era un camino. Después de que el cardenal Luis Concha lo sacó de la Universidad Nacional y lo puso en una parroquia suburbana, Camilo Torres decidió levantar una plataforma política para oponerse al gobierno.

En mayo del 65 ya estaba acusando a la jerarquía de ser un instrumento de la oligarquía; en junio pidió ser relevado de sus funciones sacerdotales, prometiendo que "volveré a ponerme la sotana después que haga la revolución"; en noviembre abandonó también su plataforma partidista y se fue a la guerrilla. La experiencia fue terrible, y dramáticamente breve: el 7 de enero de 1966 se difundió una foto suya con el uniforme del grupo castrista Ejército de Liberación Nacional, y el 15 de febrero se anunció su muerte en una emboscada tendida por las tropas regulares en El Carmen, región de Santander.

No quisiera juzgar a un hombre que dio hasta su último hálito por una causa que creía justa: pero debo decir que el suyo no fue un camino de la Iglesia; estoy convencido de que no hay apostolado en la violencia, así como no lo hay en quien cree ser depositario de una verdad excluyente sobre la humanidad.

Lastimosamente, el rumbo separado de Camilo Torres cautivó a muchos jóvenes latinoamericanos, en un ambiente de confusión política e ideológica que produjo toda clase de sacrificios inútiles.

La coyuntura de Chile no hacía más fácil el discernimiento. Tras un año de gobierno democratacristiano, las tensiones políticas se habían ido polarizando demasiado rápidamente. La reforma agraria prevista en el programa del Presidente Frei encontraba inmensas dificultades en el Parlamento: la izquierda la acusaba de demagógica e insuficiente, y los propietarios de la tierra decían que los funcionarios a cargo del tema no daban garantías al país.

Otra ley básica de la administración DC, la de la "chilenización" del cobre, era también obstaculizada por la izquierda, y en particular por los comunistas, que querían fórmulas expropiatorias contra las compañías norteamericanas. En vista de que carecían de fuerza parlamentaria para detener el proyecto, estos sectores lanzaron

a fines del 65 una huelga en los principales minerales; el ministro del Interior, Bernardo Leighton, decretó el estado de emergencia en las minas, pero la situación continuó agravándose, hasta que el 11 de marzo, en El Salvador, después de intentar desalojar una sede sindical, las fuerzas policiales y militares recurrieron a las armas para contener a una inmensa masa enfurecida: hubo ocho muertos y 40 heridos. La tragedia enlutó al país, pero no detuvo las pasiones desatadas; al revés, las enardeció.

Para nosotros era evidente que Frei marchaba en la dirección de realizar profundas reformas, pero que no quería hacerlo a costa de aplastar a ningún sector político o social. Prefería sobrellevar la carga de unas expectativas desmesuradas antes que arrinconar a sus adversarios; mientras el programa de redención social seguía su curso, el gobierno debía soportar que se le criticara por su ritmo para hacer los cambios.

Así es que, en este cuadro, la Iglesia no iba a estar ajena a las conmociones de aquellos años; éstas nos iban a tocar a todos por igual. Sin embargo, mirando retrospectivamente, la Iglesia chilena debe dar gracias a Dios por la calidad de sus hombres, por la lucidez con que sus sacerdotes y seminaristas afrontaron ese período tan incierto. Todos ellos fueron partícipes de los debates de aquellos días, pero en su gran mayoría rechazaron las aventuras desviadas de la fe.

Los obispos de Chile tuvimos una preocupación preferente por nuestro clero en esa época. No queríamos perder su savia, ni por exceso de celo, ni por desidia. En mi caso, al regreso del Concilio inicié una serie de reuniones para explicar cuáles eran los puntos centrales en que debíamos trabajar.

Había tres metas muy claras: debíamos ayudar a los laicos para que pasaran de una actitud generalmente pasiva en la Iglesia a una presencia activa y responsable; teníamos que terminar el estilo de vida religiosa basada en las meras fórmulas, para adoptar una línea de vivencia más profunda; y el ideal colegiado debía hacerse presente desde ahora en la conducción de toda la comunidad cristiana.

Advertí una y otra vez en esas conversaciones que el camino estaría lleno de trampas. Era necesario cambiar, pero gradual y ordenadamente. Habríamos de afrontar dificultades de parte de los que querían todo de golpe, y también de los que se escandalizaban ante

el más mínimo cambio. El gran momento de irradiación de la fe que vivíamos (por ejemplo, en Santiago, la Gran Misión les había probado a los católicos que eran una inmensa mayoría, incluso en los sectores más marginados y pobres) no debía encandilar lo central de nuestra tarea.

"En un mundo centrado en el Hombre, convencido de su grandeza y preocupado de su porvenir, ¿qué hace el sacerdote?", pregunté en la homilía de Jueves Santo de 1967, dirigida al clero de Santiago. "En la hora de la técnica, del desarrollo de las ciencias y de la conquista del espacio, ¿vale aún la pena ser sacerdote? En una patria abocada al cambio de estructuras, donde los mejores ciudadanos se comprometen en la solución de los problemas sociales, económicos y políticos, ¿qué hace el sacerdote?"



El cardenal Silva Henríquez visita Puerto Williams, en febrero de 1966, durante una gira por la región austral.

Creo que muchos padres de la Arquidiócesis se plantearon estas interrogantes en ese año de confusiones. Nosotros teníamos que salir al frente de estas dudas: si la Iglesia existe para evitar la perdición del mundo e impedir el fracaso final de la Historia; si trabaja en un esfuerzo profético para que la vida humana se constituya en una alabanza activa de Dios; si su servicio básico es al pueblo de Cristo, representándolo a El, entonces la vocación sacerdotal no podía quebrantarse: inalterablemente, el sacerdote cumpliría su misión en el mundo, consagrado al Señor, y revestido en los tiempos modernos de

un requerimiento misionero. Era un desafío múltiple, polifacético, estimulante, ¡mucho más estimulante que nunca antes!

La Conferencia Episcopal chilena comenzó a tomar medidas para el cambio inmediatamente después de regresar de Roma. En abril, la misma Asamblea Plenaria que me reeligió como presidente para un segundo período, decidió iniciar el desarrollo de un Plan Nacional de Post-Concilio, el que debería concluir con sínodos diocesanos que comenzarían a fines del 67, tras un período de reflexión.

En Santiago planificamos el Sínodo en dos sesiones, las que serían precedidas por un período preparatorio. Este se inició de inmediato, a cargo del padre Ismael Errázuriz, uno de los sacerdotes descollantes



El cardenal Silva Henríquez visita al Presidente de Israel, Chalman Shazar, el 30 de junio de 1966, en la residencia del Palacio Cousiño, que el Mandatario ocupó durante su permanencia en Chile.

de la Arquidiócesis, que llegaría a convertirse en mi brazo derecho. Sobre la base de tres grandes objetivos: la traducción del Concilio a la realidad diocesana y nacional; la renovación del personal apostólico, y la actualización del Plan Pastoral, el padre Errázuriz hizo una amplísima planificación para que a mediados de 1967 estuvieran

decantados los temas y las observaciones del clero y el laicado de la Arquidiócesis.

Después vendrían los debates. El Sínodo llegó a hacerse famoso y bullado en su etapa final, en 1968; y quizás por eso hoy no se recuerda suficientemente que su solo anuncio provocó una ola de esperanza y entusiasmo. Sé que muchos no esperaban que yo hiciera esto: creían que no iba a querer escuchar críticas ni ventilar algunos asuntos; pero sé también que después reconocieron su equivocación.

Paralelamente al anuncio del Sínodo, y pensando en que éste fuera lo más eficaz posible, a mediados del 66 convoqué a la constitución del Consejo de Presbiterio. Este organismo, cuya creación había sido recomendada en los decretos conciliares *Christus Dominus* y *Presbyterorum ordinis*, debía ser un senado de sacerdotes que representara al presbítero en el gobierno de la diócesis, que asesorara al obispo y que trabajara con él en la pastoral.

Tendría 25 miembros, de los cuales sólo cuatro serían nombrados directamente por el obispo; el grupo más numeroso, de doce, provendría de las zonas, la mitad por elección y la mitad por nombramiento de los vicarios. Todo esto era tan nuevo y sorprendente, que aquella vez quisimos que la constitución se hiciese a manera experimental, por un año, para probar la eficacia del mecanismo.

Primero nombré a los vicarios; por la zona norte, Gabriel Larraín; por el sur, Pedro Castex; por el este, Ismael Errázuriz; por el oeste, Fernando Ariztía (que asumió también como vicario general); por el centro, Rafael Maroto; y por la zona rural-costa, Rafael Larraín. Todos ellos se integraron luego al primer Consejo de Presbiterio, que se constituyó el 30 de septiembre de 1966. Luego serían los cimientos del Sínodo.

Ese mes ocurrió lo que yo consideraba otro acontecimiento fundamental para nuestros planes: después de muchos esfuerzos, la Santa Sede accedió a nombrar un obispo auxiliar para Santiago. Como parecía natural y obvio a todos los que trabajaban en la Arquidiócesis, el elegido fue el vicario Gabriel Larraín.

Extrañamente, me había costado demasiado conseguir este nombramiento. Si bien es cierto que durante mis dos primeros años como arzobispo no había querido solicitar obispos auxiliares, a la espera de conocer detalladamente la situación, desde fines de 1964

venía insistiendo reiteradamente en ello; a pesar de eso, el Vaticano se mostraba renuente y cada vez que yo planteaba el nombre de Gabriel Larraín se me hacían nuevas preguntas. Los trámites y dilaciones parecían no tener fin.

Tengo que reconocer que en ese momento di poca importancia a un hecho que sería decisivo: la propia opinión de Gabriel. El sabía que yo quería que fuese mi obispo auxiliar, y en más de una ocasión fue a hablar conmigo para decirme que no se sentía capacitado para esto, que se acomodaba mejor a un trabajo más cercano a la grey, en lo posible con el mundo obrero. Repitió varias veces estos argumentos, y seguramente se encontró con el dictamen clásico según el cual es una falta de humildad presumir que uno puede discernir mejor que un superior, incluso acerca de uno mismo. Después supe que Gabriel incluso fue a hablar con el nuncio para pedirle que no se insistiera en su nombramiento. Tal vez esto explique en parte los acontecimientos que sobrevinieron más tarde, y que relataré en otro capítulo. El hecho es que aquel septiembre de 1966, la ordenación episcopal de Gabriel se realizó en la Catedral de Santiago, con varios obispos como concelebrantes, en una verdadera fiesta de la Iglesia local. Lastimosamente, fue para él un día triste, y casi nadie entendió por qué.

La noticia más dolorosa tuvo lugar poco antes, el 22 de junio de 1966. Ese día, el obispo de Talca, don Manuel Larraín, que había venido a Santiago para una reunión del Comité Permanente del Episcopado, del que era vicepresidente, murió en el auto que lo llevaba de regreso a su diócesis, frente a Rosario. Fue una muerte penosa: el vehículo se estrelló contra una carretela de tiro y don Manuel, que viajaba en el asiento del copiloto, fue golpeado por el caballo moribundo del carruaje.

Aquella mañana había salido de la casa de su hermano José Luis (donde se alojaba en Santiago desde que murió su señora madre, doña Regina Errázuriz) para llevar una carta al ministro Bernardo Leighton, a propósito de la reforma agraria, que en ese momento se discutía duramente en la Cámara de Diputados, en su parte modificatoria de la Constitución. Dos horas después sufrió el accidente.

La muerte de don Manuel sacudió a toda la Iglesia chilena. Era ciertamente uno de los obispos de más relieve en toda su historia.

Nacido con el siglo, don Manuel había estudiado Derecho en la Universidad Católica, para luego ingresar al Seminario y completar su formación en la Universidad Gregoriana de Roma. Su carrera fue paralela, y en verdad complementaria, con la del padre Hurtado, y no es una exageración decir que en los años 40 ambos fueron las figuras jóvenes más gravitantes de la Iglesia chilena.



Los Obispos de Chile despiden los restos de don Manuel Larraín (al centro, el cardenal Silva Henríquez) en Talca.

Don Manuel tuvo una carrera sacerdotal brillantísima. Ordenado en 1927, apenas doce años después fue consagrado obispo coadjutor de Talca, a la diestra de don Carlos Silva Cotapos. Fue su sucesor cuando éste renunció, en 1938.

Justo en 1950, don Manuel asumió el puesto de vanguardia en esta línea de la Iglesia, al convertirse en el asesor general de la Acción Católica. Desde entonces descolló en el Episcopado en toda la década, tanto desde el punto de vista doctrinario como en la acción social de la Iglesia. En la VII Semana Social de Uruguay, ya en 1952, definió un programa avanzado de acción:

—Trabajamos por una sociedad basada en principios que el capitalismo y el comunismo niegan y desconocen. No vamos a introducir parches en el capitalismo, cuyos principios y estructuras son materialistas, ni pretendemos colaborar con los marxistas, cuya postura anticristiana todos conocemos.

Ese año respaldó la creación de la Federación Sindical Cristiana de la Tierra, una organización pionera en la sindicalización campesina. Al siguiente, cuando estalló en Molina la primera huelga campesina de la historia de Chile, fue don Manuel quien se puso al lado de los



Una de las últimas fotografías del obispo Manuel Larraín.

peones; mientras los patrones de fundo despedían a los huelguistas y el gobierno de Ibáñez les aplicaba la Ley de Defensa de la Democracia, don Manuel partía a conseguir que el cardenal Caro interviniera en favor de los sindicalistas.

Fue también uno de los pocos obispos chilenos que en esos años apreció la importancia de las relaciones de la Iglesia local con sus hermanas de América Latina. En el mundo todavía provinciano de los 50, don Manuel salió de las fronteras para convertirse en un protagonista continental, adelantado a su época. Por eso figuró entre los fundadores de la Conferencia Episcopal de América Latina (Celam), una iniciativa desusada a través de la cual nuestros obispos potenciarían su presencia en la Iglesia Universal.

A él se debe una de las frases claves de la doctrina de la Iglesia en los tiempos modernos: "El progreso es el nuevo nombre

de la paz", que sería adoptada incluso en los discursos papales.

He contado ya el papel de don Manuel en la reforma agraria impulsada con la entrega de las tierras de la Iglesia. En el Concilio, fue el nexo indispensable para que los padres de otras naciones conocieran las posiciones del Episcopado chileno, gracias a los contactos establecidos en innumerables viajes. Como a veces es verdad que nadie es profeta en su tierra, este papel mundial le fue desconocido en parte de su propia grey; con más audacia que razón, en cierta ocasión sus "fieles" pusieron un aviso llamando a la comunidad a ver al obispo "de paso en la diócesis".



El Presidente Eduardo Frei presenta sus condolencias al cardenal Silva Henríquez.

Don Manuel fue muchas veces víctima de esta manera estrecha y mezquina de ver las cosas. Le tocó ser un hombre de avanzada cuando en la Iglesia chilena había muy pocos, y esto le acarreo enormes incomprensiones, aunque también un respeto inigualado en el clero joven.

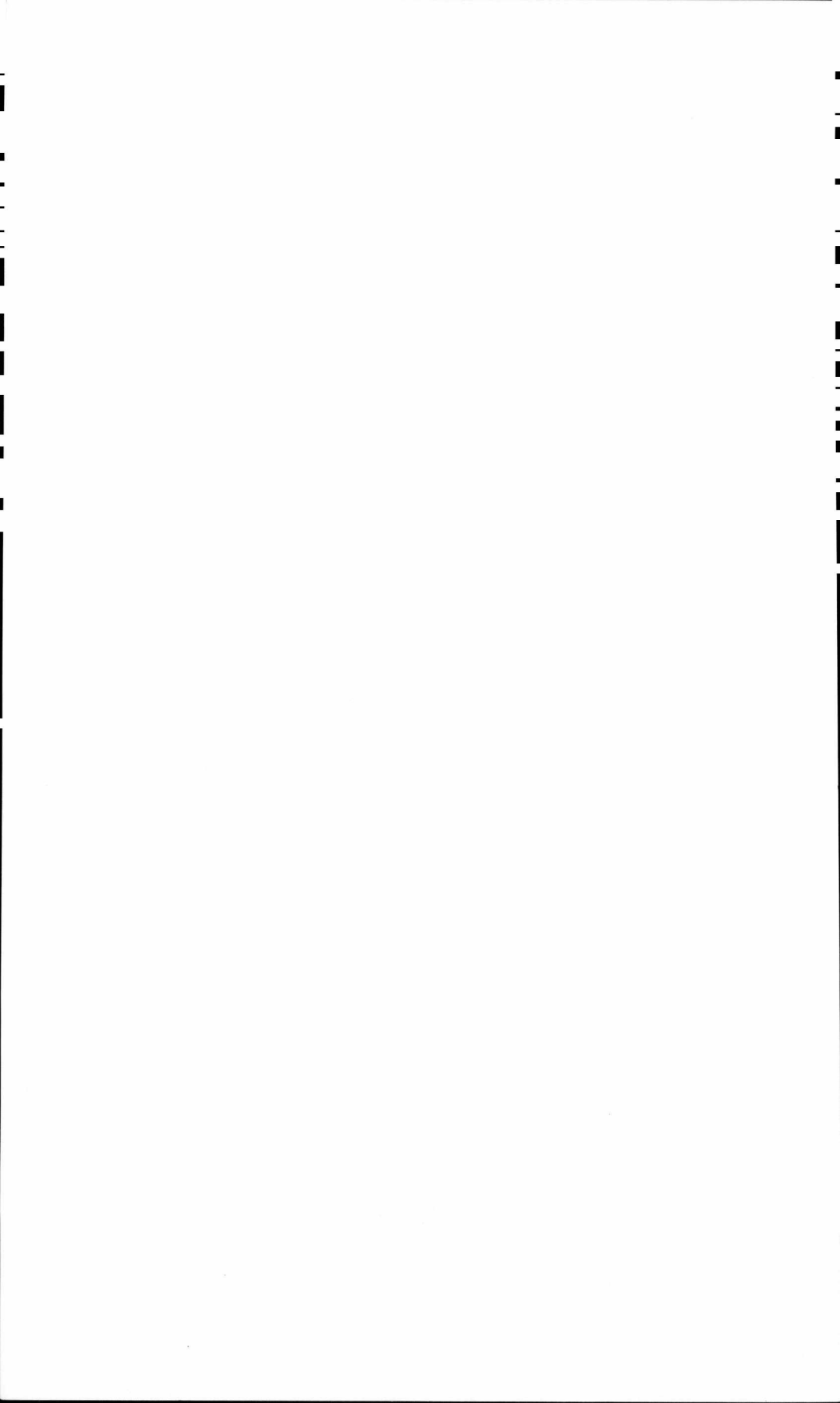
Por eso su muerte creó el sentimiento de una pérdida irreparable. Los funerales se prepararon en Talca y el obispo Augusto Salinas, que

había sido su amigo de juventud, quedó a cargo de la misa fúnebre. Pero esa decisión creó un inmenso malestar en el gobierno. Monseñor Salinas había sido quien condenara, en 1947, a la Falange, a través de una carta que la puso al borde de la disolución... y de ella la había salvado precisamente don Manuel.

Los demócratacristianos consideraron inaceptable que monseñor Salinas despidiera los restos de quien había sido su auténtico patrono espiritual, su ejemplo y su modelo de una Iglesia a la que reconocían como madre. El ministro del Interior, Bernardo Leighton, me envió una carta, en mi calidad de presidente de la Conferencia Episcopal, haciendo ver que en esas condiciones, y con pesar, no asistiría él ni ningún miembro del gabinete a la misa. Pero ya nada se podía hacer.

Poco después recibí un mensaje de algunos ministros DC: no asistirían a la misa, pero tampoco desearían marginarse de las exequias. Me pedían, pues, que yo oficiara un último responso fuera de la Catedral de Talca, en el portal o en la calle. Acepté esto y lo conversé con monseñor Salinas, pensando en que no sería justo que don Manuel no recibiera un homenaje de gente que lo quería tanto.

Y así ocurrió. Don Manuel tuvo el 25 de junio de 1966 dos despedidas, con distinto público y distintos oficiantes: sólo la pesadumbre y el dolor fueron los mismos.



El estallido universitario

La crisis de 1967 en la Universidad Católica fue uno de los episodios más difíciles de mi vida. Como le escribí a un cardenal del Vaticano en medio de la tormenta, “nunca se me había confiado un asunto más espinudo y que me haya proporcionado tantas incomodidades”. Por él fui atacado pública y privadamente, mi casa fue ensuciada con epítetos y se me acusó de las más increíbles maniobras. Todavía hoy, a más de 20 años, de cuando en cuando vuelve alguien a impugnarme en nombre de esa disputa.

No quiero volver a defenderme. Los que conocen la historia saben bien cómo juzgarla, y por qué razones pueden tomar una u otra posición. Para los que no la conocen, me he propuesto que este capítulo sea lo más pomenorizado posible, a fin de que todos los elementos estén sobre la mesa.

La crisis de las universidades católicas no fue un fenómeno aislado y nacional, aunque muchos de sus componentes tuvieron que ver con la situación local. Prueba clara de que en la Iglesia se sentía la necesidad de revisar el sistema universitario, es el hecho de que el Celam comisionó a su Departamento de Educación para estudiar el asunto a comienzos de 1967.

La reunión tuvo lugar en Buga, Colombia, y arrojó un diagnóstico penetrante sobre la situación de las universidades católicas. Planteó, por ejemplo, que la falta de acción de estas universidades en el campo social podía ser un grave síntoma de enajenación; que en ellas debía ejercerse una crítica activa contra la falsedad social, política e histórica; y que debían constituir un aporte al desarrollo.

El documento de Buga fue refrendado por el Vaticano; en su elaboración resultaron claves algunos peritos: nuestro amigo, el obispo panameño Marcos McGrath, a la sazón secretario ejecutivo del Celam y ex decano de la UC de Santiago; Cándido Padim, se-

cretario de Educación del Celam; el jesuita chileno Hernán Larraín; y los seculares brasileños Candido Mendes, Erani Fiore y Luis Alberto Gomez de Souza, todos profesores.

Buga contribuyó a difundir en los católicos una conciencia crítica de lo que ocurría en nuestras universidades. No obstante, gran parte de ese diagnóstico había sido ya hecho por los propios afectados, profesores y estudiantes, desde varios años antes. En el caso de la Universidad Católica de Valparaíso, el abogado Arturo Zavala Rojas fue nombrado rector en 1963, como el único secolar de América Latina en ese cargo, y desde su asunción habló de reforma; de



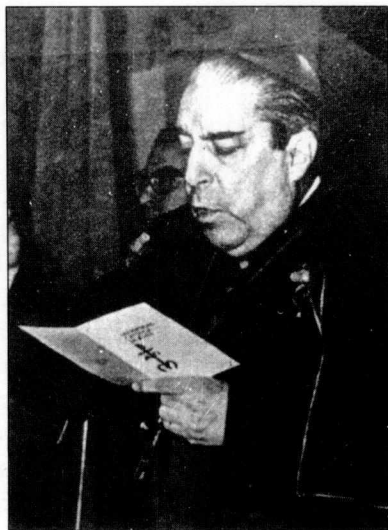
En una reunión del Celam en Bogotá aparecen, al centro, el obispo panameño Marcos MacGrath y el cardenal Silva Henríquez.

hecho, la Federación de Estudiantes (FEUC-V), la venía planteando con insistencia. En Santiago, la otra Federación (FEUC) había hecho sus propuestas, ya en 1962, para “abrir” la universidad a la sociedad, y las venía reiterando año a año, pese a que el rector, el arzobispo Alfredo Silva Santiago, las recibía con poco agrado.

Don Alfredo había sido profesor en la UC desde poco después de ser ordenado sacerdote. En los años 20 fue nombrado prorector, y continuó ligado a las aulas tras asumir como obispo de Temuco, en 1935. Más tarde llegó a ser arzobispo de Concepción y en 1953 fue designado rector de la UC. Su gestión fue prolífica en creaciones; muchas nuevas escuelas surgieron bajo su tutela. En 1961, un

decreto del cardenal Giuseppe Pizzardo, prefecto de la Congregación de Seminarios y Universidades, anuló un artículo del reglamento para que pudiera ser también Gran Canciller.

El reglamento establecía que el arzobispo *pro tempore* de la diócesis era por derecho propio el Gran Canciller. Pero ese año fui nombrado yo como arzobispo de Santiago, por lo cual el nuncio Opilio Rossi me explicó que se había hecho esta excepción para que don Alfredo pudiera cumplir sin limitaciones lo que había sido su vocación de toda una vida. Acepté esta disposición. Dos años más



Arzobispo Alfredo Silva Santiago.

tarde, en 1963, don Alfredo presentó su renuncia al Arzobispado de Concepción para concentrarse exclusivamente en la UC.

Pero para entonces la universidad ya vivía instantes críticos. Una delicada situación administrativa comprometía los sueldos, el Hospital Clínico se hallaba sin elementos y hasta había medicinas retenidas en la Aduana por falta de fondos para retirarlas. La deuda acumulada sobrepasaba el millón de dólares.

Pero además, numerosos académicos se quejaban de que eran excluidos de la UC; acusaban a sus directivos de convertir las aulas en un

reducto liberal-conservador, con un enfoque ideológico excluyente. De hecho, cuando el Episcopado, alarmado por la situación financiera, decidió escribir al Presidente Jorge Alessandri para instarlo a aumentar la ayuda presupuestaria, don Alfredo, que no quería enemistarse con el gobierno, se negó a firmar la nota.

Para mí comenzó a ser evidente que la UC estaba convirtiéndose en una diócesis dentro de la diócesis. Los planteamientos de los obispos no tenían cabida en ella, y los del arzobispo tampoco. Peor aún, los estudiantes no eran escuchados y se quejaban de que la doctrina de la Iglesia no tenía reflejo en su formación. Anticipando los problemas que podían surgir, escribí al sustituto del secretario de Estado de la Santa Sede, monseñor Angelo Dell'Acqua, para hacerle saber mis aprensiones.

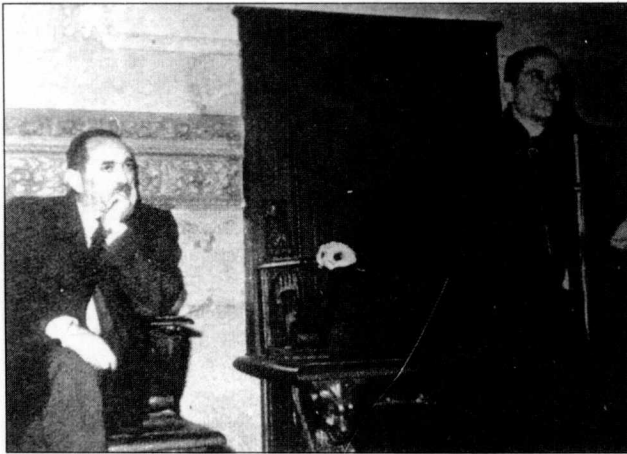
La crisis se arrastró penosamente por otros tres años, hasta que en 1966 resurgió, debido a una fuerte reducción presupuestaria en Medicina. Los estudiantes pasaron de la crítica por la representatividad de las autoridades a las acusaciones más gruesas sobre criterios. Una delegación de ellos decidió ir a hablar conmigo. Los escuché y les expliqué que yo no tenía atribuciones para intervenir; les pedí que, no obstante, evitaran actuar contra la autoridad y utilizaran caminos regulares. Parece que tales gestiones no prosperaron. En abril del año siguiente, 1967, el presidente de FEUC, Fernán Díaz, decidió partir a Roma y hablar con el pro-prefecto de la Congregación de Seminarios y Universidades, el cardenal Gabriele Garrone. Este le dijo que lo apropiado sería hacer los cambios a partir de los estatutos. Recordó que el período del prorector vencía en agosto del 67, y el del rector, a fin de año.

Pero los hechos se fueron precipitando. El primer estallido se produjo en Valparaíso, en mayo. En ausencia del rector Zavala, de viaje por Europa, el Consejo Superior se reunió para examinar la situación financiera y fue derivando a la crítica contra la gestión superior. El 15 de junio, la Facultad de Arquitectura, por sí, declaró "caducas" a las autoridades de la UCV, suspendió las actividades y se tomó las aulas.

Frente a ello, el Consejo Superior y la FEUC-V plantearon la necesidad de democratizar la universidad, en directo apoyo al movimiento de Arquitectura. El vicerrector, Fernando Molina, declaró en

reorganización la UCV y dispuso que el nuevo rector sería elegido por votación amplia. El acuerdo fue comunicado al Gran Canciller, el arzobispo Emilio Tagle, quien, viéndose ante algo que no había autorizado, destituyó a Molina y a otros miembros del Consejo, a la espera del regreso del rector.

El 21, unos 300 estudiantes ocuparon la UCV, en apoyo a la reforma. El arzobispo les dirigió una carta condenatoria, pero proponiendo también formar una comisión para resolver la crisis. Entretanto,



El arzobispo-obispo de Valparaíso, Emilio Tagle, se dirige a los académicos en medio de la crisis, acompañado del rector Arturo Zavala.

to, el rector Zavala, tras reunirse con el Consejo Superior, presentó su renuncia, pero el arzobispo la rechazó y expresó su decisión de defender el principio de autoridad.

La situación de Valparaíso activó a los estudiantes de la UC de Santiago, cuya directiva había cambiado en el ínterin; sus nuevos titulares, encabezados por Miguel Angel Solar (militante del PDC, de su ala izquierda) no tenían la menor confianza en que el rector Silva Santiago iniciara la reforma. Así que plantearon un plebiscito interno, con una sola frase: "Deseamos un cambio en la alta autoridad de la universidad". El 80 por ciento de los que votaron apro-

bó esa idea, la que naturalmente fue rechazada por el Consejo Superior.

La tensión se agravó cuando la Unión de Federaciones Universitarias de Chile, dirigida por José Miguel Insulza, convocó a un paro nacional estudiantil, en solidaridad con los jóvenes de la UCV. Estos nombraron a tres negociadores (Sergio Allard, Alejandro Foxley y Eduardo Vio) para conversar con el arzobispo, pero pronto estimaron que no se les daban garantías de reforma.



Un grupo de estudiantes vota en el plebiscito organizado por FEUC contra la autoridad de la universidad.

El 27 de junio, el obispo Bernardino Piñera pidió una reunión especial del Comité Permanente del Episcopado para analizar la situación de las universidades. Don Alfredo Silva Santiago planteó allí su posición; contó que venía solicitando una reforma de los estatutos a la Santa Sede desde hacía varios años, pero que esto sólo vino a hacerse cuando él mismo formó una comisión; ahora, dijo, los estatutos estaban casi listos, pendientes sólo de aprobación vaticana; el plebiscito enturbió las cosas, y se produjo debido a que el Consejo Superior no respondió a una carta que le dirigió la FEUC. A juicio de don Alfredo, el Comité Permanente debía intervenir. El obispo Carlos Oviedo (auxiliar de Concepción) planteó que el problema universitario debía ser analizado en forma global, sin ceñirse sólo a

la crisis, y Bernardino Piñera opinó que el principio de autoridad era sólo uno de los puntos en debate, no el principal.

Unos días antes, el nuncio Egano Righi-Lambertini, que estaba por concluir su misión en Chile, me había dicho que no podía desentenderme del problema, aunque no tuviese el mando; así que en la reunión planteé un plan de solución: en vista de que el período del prorector, que era el padre Adamiro Ramírez, estaba por concluir, podía nombrarse en su lugar a un laico que suscitara consenso, para relacionarse con estudiantes y profesores, y manejar una reforma prudente, pero efectiva.

La fórmula fue aceptada por el Comité Permanente, y en especial por don Alfredo Silva Santiago. Se acordó emitir una declaración reconociendo la necesidad de reforma en las universidades, e instando a respetar el principio de autoridad.

Me correspondía a mí publicar tal declaración. Cuando lo iba a hacer, mi obispo auxiliar, Gabriel Larraín, que conocía bien el ambiente explosivo que había entre los estudiantes, me recomendó conversar primero con los dirigentes de la FEUC. Así lo hice. Ellos se mostraron satisfechos con la propuesta del Comité Permanente, y se comprometieron a no realizar más acciones de fuerza si se cumplía. Parece que esta consulta disgustó a algunos miembros del Consejo Superior, quienes opinaron que de esta manera se daba el "triumfo" a los alumnos; convencieron de esto a don Alfredo, quien cambió de opinión y se negó a firmar el acta del Comité Permanente.

A pesar de ello, se inició la búsqueda de un prorector de consenso. Pero en las condiciones que se ofrecían, nadie quiso aceptar: iba a ser un cargo sin atribuciones reales.

Entretanto, el Vaticano se mostraba crecientemente inquieto. El cardenal Garrone esperaba que los rectores Zavala y Silva Santiago acudieran a Roma, pero tal cosa no ocurría; a su turno, el gobierno chileno trataba de conseguir que la Santa Sede actuara pronto en favor de la reforma. El embajador Clemente Pérez sostenía una nutrida correspondencia con el canciller Gabriel Valdés, siguiendo la crisis; según el embajador, el cardenal Garrone intentaría que el rector Silva Santiago terminara su gestión ese año, y aceptara por anticipado mi nombramiento como Gran Canciller.

En julio escribí a Garrone exponiéndole los puntos de mi propuesta: mantención de rector y Gran Canciller hasta fin de año; cambio de prorector por un laico, con atribuciones; y estudio de la reforma según las orientaciones de Buga. El cardenal aceptó estas proposiciones y las notificó a don Alfredo.

En Valparaíso, en tanto, el conflicto continuaba. Los profesores denunciaron que se los presionaba a través de los sueldos y en pocos días llegaron a ser 22 las escuelas paralizadas, mientras la Casa Central seguía ocupada. El Consejo Superior advirtió que podía cancelar las matrículas, y propuso un claustro pleno para decidir la reforma, tras lo cual dio por superado el conflicto. Pero los alumnos no aceptaron la propuesta.



Protagonistas de la crisis en la UCV (de izquierda a derecha): Gonzalo Calvo, ex secretario general; Luciano Rodrigo, presidente de la Federación de estudiantes; Roberto Serra, vicerrector renunciado; Fernando Molina, vicerrector destituido; y Hugo Montes, decano.

En vista de la *impasse*, el presidente de la FEUC-V, Luciano Rodrigo, y el presidente de los alumnos de Derecho, Eduardo Vio, vinieron a Santiago para conversar conmigo sobre los puntos en discordia, que se habían reducido a dos: ellos querían que la elección se hiciera con plazo fijo, aunque Roma no hubiera aprobado aún los estatutos, y pedían tener un 25% en el claustro pleno.

Trasladé estas peticiones hasta una nueva reunión del Comité Permanente, que se realizó el 1º de agosto; recomendé además que no se insistiera en rechazarlas, porque la situación se estaba deteriorando demasiado. El arzobispo Tagle recordó que el Consejo Supe-

rior aprobó la reforma y que había comisiones y plazos para ello. Dijo que el rector Zavala había refrendado esos planes. Insistí en que si el Episcopado se comprometía con determinados plazos, había que cumplirlos.

Aunque no fue una reunión muy grata, monseñor Tagle regresó a Valparaíso y consiguió que el Consejo aprobara los dos últimos puntos en discusión. Iba a comunicárselo a los alumnos, pero ese día había una marcha estudiantil por el centro y no pudo hallar a los dirigentes. Por desgracia, la policía intervino y se originaron graves incidentes en la zona cercana al Obispado, que culminaron cuando un grupo de alumnos exaltados ingresó al edificio obispal y ocupó las dependencias, causando serios destrozos. El episodio dilató la solución del conflicto. El gobierno se vio atrapado entre dos fuegos: por un lado, debía respaldar la actuación de su intendente y de la fuerza pública; por otro lado, los líderes de la reforma eran militantes del PDC.

Felizmente, monseñor Tagle logró llegar a acuerdo y el 6 de agosto, después de 50 días, se puso fin a la ocupación de recintos. El rector Zavala seguiría en su puesto hasta el año siguiente, cuando un claustro pleno elegiría a las nuevas autoridades; los miembros del Consejo Superior destituidos no volverían, pero se reincorporaría a los decanos renunciados.

Pero esto era apenas un respiro. En Santiago todo había empeorado. El 3 de agosto recibí cartas de la CUT y de los trabajadores del Servicio Nacional de Salud, expresando su apoyo al movimiento estudiantil de la UC e instándome a intervenir. Al día siguiente, Miguel Angel Solar advirtió que si el 9 de agosto no se reemplazaba al prorector Ramírez, habría nuevos actos de rebeldía.

En esos días, por encargo del Comité Permanente, y acompañado por el obispo Alberto Rencoret, fui a ver a don Alfredo Silva Santiago para rogarle que, cumpliendo el acuerdo del Comité, nombrara al prorector. Don Alfredo se mostró muy receptivo y hasta propuso que también se entregara el nuevo reglamento a los alumnos, para que lo aprobasen. Los tres sabíamos que el nuncio había aprobado el acuerdo del Comité, y que lo consideraba necesario para una solución. Además, le había pedido a don Alfredo que encabezara el proceso.

El 4 de agosto, el nuncio Righi-Lambertini debió partir a Italia, llamado por la Santa Sede, y lo fui a despedir al aeropuerto. Allí me encontré con el padre Raimundo Kupareo, decano de la UC y miembro del Consejo Superior; él me reveló que el Consejo estaba totalmente en desacuerdo con mis gestiones, y que sus miembros y el rector pensaban renunciar para poner de manifiesto que yo había dado un paso en falso.

Efectivamente, el 7 de agosto, mientras arreciaban las tensiones, el secretario general de la UC —que no era otro que mi amigo de adolescencia, Luis Felipe Letelier— anunció en televisión las renunciaciones de todos, aunque también que seguirían como dimisionarios hasta que el nuevo reglamento fuese aprobado. Con esto se buscaba, aparentemente, anular el efecto del nombramiento de un nuevo prorector. Una carta posterior de Pedro Lira Urquieta, que me explicaba por qué a su juicio el prorector sería completamente inútil, reforzó esta idea.

Poco antes de vencer el plazo para el cambio de prorector, don Alfredo y Luis Felipe Letelier me fueron a ver, para proponerme que les ayudara a convencer al padre salesiano Egidio Viganó de que aceptara ese cargo. A su juicio, era la solución apropiada. Pero yo tenía un profundo desacuerdo con esto: primero, porque me parecía que el nuevo prorector *tenía que ser* un laico; y segundo, porque Viganó era muy cercano a mí y su nombramiento se podía interpretar como una maniobra mía. Propuse, en cambio, al doctor Roberto Bobenrieth, director del Hospital Clínico, cosa que don Alfredo y Luis Felipe aceptaron. Insistí, además, en que las autoridades debían comprender la urgencia. En el PDC acababa de triunfar una directiva del ala izquierda, donde había quienes sostenían que todas las universidades debían pasar al Estado, expropiando incluso las de la Iglesia. Evidentemente, el gobierno y el Presidente Frei no querían llegar a esto, pero en su propio partido la tensión era irresistible.

Se consultó a Bobenrieth. Y éste puso como condición los plenos poderes y un retiro temporal del rector. Don Alfredo y el Consejo Superior rechazaron tales requisitos. Así se pasó la fecha crítica del 9; era evidente que las autoridades de la UC no querían dar importancia a este día, que consideraban un chantaje. Pese a esto,

y para tranquilizar al gobierno, llamé al Ministerio del Interior y anuncié el inminente nombramiento de nuevo prorector.

Pero tal cosa no ocurrió. 24 horas después, a la medianoche del jueves 10, la FEUC inició el paro de los 6.500 alumnos, simultáneamente con la ocupación de la Casa Central. El viernes 11 la noticia de la toma estalló como una bomba en el país. Grupos contrarios a la FEUC se organizaron esa misma mañana e intentaron una “contra toma” por la fuerza, lo que produjo violentos incidentes en los accesos de Marcoleta y Portugal.



Agosto de 1967: mientras la Casa Central de la UC de Santiago permanece tomada, grupos de estudiantes contrarios intentan reingresar a la fuerza.

En este clima inmanejable, las posiciones del rector y el Consejo Superior se hicieron aún más rígidas. Para peor, el nuncio no estaba, y el encargado de negocios, Angelo Sodano, se encontraba casi incomunicado, puesto que en Italia había comenzado el Ferragosto y las consiguientes vacaciones de medio mundo. El 14,

el Comité Permanente escribió a Sodano advirtiéndole sobre la gravedad de los hechos y haciendo ver que las cartas de la CUT y del SNS sugerían que podía haber un estallido de huelgas que agitara a todo el país. Así lo temía también el gobierno.

El jueves 17 de agosto, el Presidente Frei me llamó por teléfono. Dijo que lo que estaba pasando en la UC comprometía gravemente la estabilidad del país. Las Fuerzas Armadas tenían una asonada revolucionaria o, cuando menos, hechos de sangre. Si la Iglesia no podía detener la crisis, el gobierno tendría que hacerse cargo de la universidad. Para esto había un plazo fatal: el lunes 21 de agosto. Le expliqué que, entendiéndolo mismo, yo había tenido poco éxito en mis gestiones; le pedí que me expusiera su punto de vista por escrito, para tener una constancia de lo que pensaba. La carta me llegó el 19.

El viernes 18 en la tarde, mientras sesionaba con mi Consejo de Presbiterio, me llamó el canciller Gabriel Valdés. Repitió las preocupaciones del Presidente, reiteró la fecha límite del lunes 21 y contó que había llamado a Sodano para hacerle ver que el Vaticano debía tomar cartas en el asunto. Me dijo que, según su embajador, la Congregación de Seminarios y Universidades había despachado un cable ordenando mi intervención. En consecuencia, el canciller quería que yo suspendiera un viaje a Antofagasta que tenía proyectado (para asistir a la erección del nuevo arzobispado, con su titular, Francisco de Borja Valenzuela) y permaneciera en Santiago.

Llamé entonces a Sodano, quien no tenía noticias del cable. El decidió llamar al Vaticano, donde le informaron que el Papa había corregido el texto, pero que se había demorado en los canales internos. Sodano pidió que se lo dictaran por teléfono. Entretanto, para ganar tiempo, llamé a los dirigentes de los profesores y les pedí que adelantaran para el día 20 una reunión proyectada para el 21. En esa cita nominarían a cinco personas de entre quienes el rector podría elegir al nuevo prorector; era un acuerdo pactado con la autoridad de la UC.

Los profesores sesionaron en la mañana del 20; las tres primeras mayorías fueron para Fernando Castillo Velasco (profesor de Arquitectura, militante del PDC y alcalde de La Reina), el doctor Cruz y el padre Viganó. Poco después, el Consejo Superior acordó elegir

a la votación más alta: Castillo Velasco. Sin embargo, era una situación delicada, porque los alumnos insistían en el padre Viganó y se oponían a Castillo Velasco por su condición de político activo; decían no querer que su movimiento se politizara.

A las 13 horas de ese día recibí la nota de Sodano. Con ella en la mano, llamé a don Alfredo Silva Santiago, y le pedí que el Consejo Superior suspendiera cualquier medida nueva, para no entorpecer la solución. Me dijo entonces que el Consejo ya había designado prorector a Castillo Velasco, ante lo cual le solicité suspender el nombramiento, por lo menos hasta que yo hablase con los



Prorector Fernando Castillo Velasco.

estudiantes. A don Alfredo no le gustó la idea y sugirió que estas consultas con los jóvenes debilitaban el principio de autoridad, por lo que no las aceptaría. Convencido de que las cosas podían empeorar, le hice notar, ahora con más energía, que yo tenía la autoridad para disponer y le exigí que acatará.

Llamé entonces a los dirigentes de los profesores, que eran el propio Castillo Velasco, el padre Viganó y el académico Ricardo Jordán, y los reuní con los jefes de la FEUC. Yo pretendía que los estudiantes aceptaran a Castillo Velasco en presencia de los profesores, pero esto se hizo muy difícil. La sesión se prolongó por largo rato, y la verdad es que debí empeñar mis mejores esfuerzos para

persuadir a los estudiantes, que a la desconfianza por la militancia de Castillo Velasco sumaban ahora la sospecha de que el Consejo Superior les pudiera tender una trampa, descalificando su participación. Me comprometí a conseguir que don Alfredo aceptara a Castillo Velasco, ante lo cual los jóvenes dieron su consentimiento.

Con estos acuerdos fui a ver a don Alfredo. Ya era de noche y, al parecer, él había estado hablando con mucha gente. Se veía molesto. Me dijo que le parecía muy duro lo que se había hecho con él, pues ya tenía la huelga solucionada y el conflicto terminaría antes del lunes 21. Mi intervención había sido, pues, ingrata e injusta para él.

—Don Alfredo —le dije—, yo no creo que haya sido injusta. Además del rector, hay otras exigencias de los alumnos, que deben considerarse. Estoy hablando con ellos sobre estos puntos, y espero presentárselos cuando logre llegar a acuerdo.

—Yo conozco esas peticiones —me dijo—. Le he pedido al senador Ignacio Palma y al decano de Ingeniería, Raúl Devés, que realicen una mediación con los estudiantes, y ellos me han contado lo que quieren.

Pero yo ya sabía lo que había pasado con los mediadores. El senador Palma me había dicho que el conflicto no alcanzaba a una solución porque don Alfredo había cambiado sus proposiciones y objetaba una y otra vez las de los estudiantes. Más tarde el decano Devés ratificó esta impresión; me contó que en esos días hubo un momento en que casi se resolvió todo, pero don Alfredo se desdijo y a última hora negó su aceptación a lo que había aprobado.

No quise discutir más el punto; don Alfredo accedió a que el nombramiento de Castillo Velasco se hiciera de esta manera y me pidió que hablara con el Consejo Superior, cosa que acepté.

Cuando regresé a mi casa, volví a llamar a los alumnos. Les informé de la aceptación de don Alfredo a Castillo Velasco y les dije que los puntos pendientes debían quedar solucionados ese mismo día, sin importar la hora, por lo que era necesario que regresaran a visitarme. Los dirigentes aparecieron pasadas las 22 horas; nos reunimos hasta la 1 de la madrugada, cuando hubo acuerdo sobre todo lo pendiente: garantía de que no habría represalias, participación en la reforma del reglamento, participación de un 25%, por una sola vez, en el claustro pleno para elegir nuevo rector, y, sobre todo, amplias atribuciones para el rector. Con esto, esa misma madrugada se inició el desalojo de la Casa Central de la UC: la toma terminó en el día límite.

En la mañana siguiente, lunes 21, los miembros del Consejo Superior llegaron a mi casa para la primera reunión que habríamos de tener en todo el difícil proceso. Les expliqué el sentido de mi intervención, la autoridad con que había actuado y las razones de mis pasos; les dije que, como cuerpo, ellos eran para mí un consejo únicamente consultivo, por lo cual les pedía que tuviesen humildad y obediencia ante el criterio de la Iglesia. Las reacciones fueron muy dispares, pero fue evidente que la mayoría se sentía molesta por la intervención de una autoridad foránea; varios dijeron que el acuerdo con los alumnos les parecía inaceptable, y algunos sostuvieron que no pudieron solucionar el problema porque la carta de la Nunciatura (la del 20 de julio) les llegó después de la toma, y les ató las manos para actuar.

Para la mayoría, la solución propuesta significaría una virtual "entrega" de la autoridad a los estudiantes, a lo cual algunos añadían que, habiendo tenido éstos una actitud violenta, se legitimaba el uso de la fuerza.

Dije que no debía verse en esto una cuestión de personas ni de lucha de autoridades, y que si la Santa Sede toma una decisión, a los católicos les corresponde acatarla. Pedí con insistencia que el Consejo cooperara en la solución, la que, después de todo, había sido conseguida con mucho esfuerzo, en un clima nada favorable, precisamente debido al atraso de las autoridades universitarias en adoptar medidas de fondo.

Los consejeros acordaron que irían dejando sus cargos paulatinamente, a medida que fuesen cesando sus mandatos. La reunión concluyó con bastante tensión, pero algunos consejeros no cumplieron ni siquiera con la última parte: esa misma tarde comenzaron a entregar sus renunciaciones ante don Alfredo.

Después del encuentro con el Consejo Superior, me fui a la casa de don Alfredo, a presentarle el acuerdo con los estudiantes. Para mi sorpresa, me encontré con que varios miembros del Consejo, los mismos que acababan de estar conmigo, habían llegado también a la

casa de don Alfredo. Este estaba muy violento, e intransigente en su puntos de vista.

—Por ningún motivo voy a firmar ese acuerdo con los estudiantes —dijo—. Yo solamente voy a nombrar al prorector, porque las demás cosas van contra mi conciencia y ni la Santa Sede me puede obligar a aceptarlas.

—Bien —dije—, si es así, yo asumiré la responsabilidad sobre los otros puntos. Voy a tener que dictar un fallo ordenando estas cosas.

Don Alfredo agregó que el acuerdo era tan malo, que en él los alumnos obtenían para el claustro pleno una representación mayor que la que habían pedido. Así constaba, dijo, en una carta que el senador Palma le escribió durante las negociaciones. Esto demostraba, a su juicio, que sólo se buscaba dañar la autoridad. Preferí no seguir la polémica y me retiré.

Pero como luego debía reunirme con el Comité Permanente, quise cerciorarme de este delicado asunto. Llamé al senador Palma, quien negó la afirmación de don Alfredo y confirmó que los alumnos no habían aceptado en ningún momento menos del 25 por ciento. Aun así, volví a llamar a los dirigentes de FEUC, y los insté a que aceptaran sólo el 20 por ciento, dejando el 80 por ciento restante a los profesores. Les dije que por un asunto menor no debía detenerse el proceso. Los estudiantes, finalmente, aceptaron rebajar su participación, pero pidieron que el 5 por ciento de diferencia se asignara al Comité Permanente del Episcopado. Era una salida óptima.

A las 19 horas fui a la reunión con el Comité Permanente. Expuse todo el conflicto, y la fórmula de solución. La cuenta fue aprobada por todos los obispos presentes y media hora más tarde ellos me acompañaron a entregar a la FEUC el documento con los acuerdos aprobados. Una copia se envió rápidamente a la Nunciatura.

Allí debió finalizar el enojoso conflicto. Pero no fue así, para mi desgracia.

La Iglesia en ebullición

Al terminar el día 21 de agosto de 1967, yo estaba convencido de que la laboriosa crisis de la Universidad Católica había concluido, y que en adelante los pasos del cambio se irían dando con celeridad, pero sin tensiones.

El arreglo pactado con alumnos y profesores, y aceptado con disgusto por el rector, don Alfredo Silva Santiago, suponía que una vez que Fernando Castillo Velasco asumiera la prorectoría se establecerían nuevas relaciones entre los diversos estamentos, y comenzarían las reformas.

Con esa confianza me fui a Punta de Tralca, para la Asamblea de la Conferencia Episcopal. Pero la tranquilidad no duró nada. En los diarios y publicaciones del sector conservador comenzaron inmediatamente los ataques en mi contra, con una tergiversación abierta de los hechos. Una de esas noches pintarrajearon mi casa, escribiendo que no era un verdadero cardenal y calificándome de traidor y filocomunista.

Los miembros del Consejo Superior, pese a que habían dicho que renunciarían cuando fuesen terminando sus períodos, empezaron a abandonar sus cargos inmediatamente. El único que se retiró antes fue Carlos Vial Espantoso, uno de los seis consejeros de libre elección, que estimó que la toma era inaceptable y que no se podía negociar nada en las condiciones de ilegalidad que habían planteado los alumnos. Los otros consejeros del rector, mi antiguo amigo Julio Philippi, Salvador Lluch Soler, Carlos Infante Covarrubias y Enrique Evans de la Cuadra, dejaron también sus cargos. Y lo mismo hicieron los decanos de Tecnología, Carlos del Solar, de Medicina, Juan de Dios Vial Correa, y (bastante más tarde) de Teología, el padre Jorge Medina. En cambio, Enrique Serrano Viale-Rigo, que era vicerrector económico, y contrario a la reforma, aceptó quedarse por

un tiempo, a petición de Castillo Velasco, porque entendía que su conocimiento era decisivo para la marcha de la UC.

También renunció Sergio de Castro, el decano de Economía, que era una de las facultades donde los grupos liberal-conservadores habían puesto con mayor fuerza su impronta. El decano De Castro me escribió el 22 de agosto una extensa carta, que hizo pública, objetando mi fórmula de solución, expresando su desacuerdo con la gestión y afirmando que “la palabra interventor describiría mejor que mediador las funciones que usted ha asumido”. En ese tiempo, al decano De Castro le preocupaba mucho que la universidad fuese intervenida, incluso por la autoridad de la Iglesia.

Pero tal vez esto, en sí doloroso, habría sido soportable si la UC se hubiese tranquilizado. Sin embargo, la tensión había vuelto a surgir debido a que don Alfredo Silva Santiago no se mostraba dispuesto a aceptar al prorector ni menos a darle facultades ejecutivas. Los decanos renunciados no fueron reemplazados, como habían acordado las facultades, ni tampoco se elaboró el presupuesto de la universidad para el año siguiente. Esto último era imperioso, porque había que discutirlo con el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, quien debía incorporar el aporte del gobierno (cerca de un 60 por ciento) al presupuesto nacional, y enviarlo al Congreso el 8 de septiembre. En vista de esta situación, el prorector Castillo Velasco anunció su renuncia si el trato original no se cumplía.

Para peor, don Alfredo también decidió renunciar. Escribió una dolorida carta a la Congregación de Seminarios y Universidades, afirmando que en las condiciones actuales no podía continuar ejerciendo como rector ni como Gran Canciller. La Santa Sede rechazó la dimisión, y el encargado de negocios de la Nunciatura, Angelo Sodano, lo fue a ver para persuadirlo. Después Sodano me contó que rogó insistentemente a don Alfredo, pero no consiguió nada: él quería irse a toda costa y, según diría en una carta posterior al Vaticano, no ser partícipe de un acuerdo que le parecía “moralmente inaceptable”.

Todo esto se hizo bastante público. El viernes 25 de agosto debí salir de la Asamblea del Episcopado y regresar a Santiago, en vista de que la situación de la UC se hacía insostenible. Me reuní en un gimnasio con más de 400 profesores, y expliqué lo que estaba pasando y cuál

era nuestra idea. Los académicos reaccionaron muy bien, y me brindaron un cariñoso aplauso.

El martes 29, mientras en Punta de Tralca la Conferencia Episcopal emitía un comunicado respaldando la solución dada al conflicto, don Alfredo se reunió en Santiago con los decanos dimisionarios y anunció que si las cosas seguían en este ritmo, la universidad terminaría paralizada, pero que él no estaba dispuesto a hacer nada. Uno de los decanos me confidenció después que algunos creían que esto era deseable, para mostrar que yo había fracasado.

Ante esta situación, el miércoles 30, al concluir su Asamblea, el Episcopado acordó por unanimidad escribir a la Santa Sede "solicitando respetuosamente se digne concederle al Episcopado chileno el alto patrocinio sobre nuestras universidades católicas", visto que "se ha llegado a gravísimos excesos, sin que pudiéramos evitarlos, con daño muy serio de la Iglesia misma de Chile".

Entonces Fernando Castillo Velasco me visitó para contarme que la situación estaba en un punto límite. Don Alfredo no iba a la universidad desde el fin de la toma, y no se podía cursar ningún documento sin su firma. Le propuse que lo fuéramos a ver. Tuvimos una conversación bastante áspera, al final de la cual don Alfredo volvió a plantear su renuncia. Esta vez le dije que sí, que eso es lo que debería hacer.

El 31 de agosto escribí al cardenal Gabriele Garrone, instando a que se tomara una resolución definitiva, y que, en las presentes circunstancias, ella incluyera la aceptación de la renuncia de don Alfredo, el nombramiento como rector interino de Castillo Velasco y la restitución de los estatutos.

El aspecto más enojoso de todo este conflicto era, por cierto, lo que tenía que ver con la persona de don Alfredo Silva Santiago. Hasta entonces yo tenía con él una muy buena relación y admiraba su intensa vida espiritual; sabía que era un hombre de carácter fuerte, con un elevado concepto de la jerarquía, pero jamás hubiese querido que un episodio como éste lo dañara. Bastante tiempo después, en Roma, un secretario de un dicasterio me dijo que lo lamentable de la reforma era que por hacerla hubiésemos pagado el precio tan alto de sacrificar a una persona. Le contesté que, dolorosamente, eso era cierto, pero también que en todo momento habíamos querido evitarlo.

El 7 de septiembre monseñor Sodano me hizo llegar un cable del cardenal Garrone. Transcribo su texto: “Esta Sagrada Congregación, muy agradecida por la autorizada y eficaz obra desarrollada por Vuestra Eminencia Reverendísima y por el Comité Permanente del Episcopado de Chile, para solucionar la grave crisis surgida en esta dilectísima Universidad Católica, ruega a V.E., en su calidad de presidente de dicho Comité Permanente, continuar la delicada misión que le ha sido encomendada por la Santa Sede, hasta una rápida y completa normalización de la vida académica y la realización de la



El estudiante Jaime Guzmán, el profesor Julio Philippi y el rector Fernando Castillo Velasco conversan en un patio de la Universidad Católica.

reforma de los estatutos. Este Sagrado Dicasterio, frente a la insistencia del Excmo. y Rvdmo. Mons. Alfredo Silva Santiago en mantener su renuncia, nombra rector *ad interim* de la Pontificia Universidad Católica de Chile al profesor Fernando Castillo Velasco, actual prorector de la misma”.

Unos días más tarde se restituyó la vigencia de los estatutos, y en noviembre se realizó el claustro pleno, de donde salieron las tres primeras mayorías para la terna que fue presentada a la Santa Sede: Fernando Castillo Velasco, Ricardo Krebs Wilckens y William Thayer Arteaga.

El Vaticano ratificó a Castillo Velasco y la reforma se inició al año siguiente. En marzo de 1968 la Congregación de Seminarios y Universidades confirió la tuición de todas las universidades católicas de Chile a la Conferencia Episcopal y le encargó que ejerciese desde entonces el régimen general de las mismas. Nadie soñaba que sólo cinco años después, los plenos derechos del Episcopado serían

conculcados por la intervención militar de las universidades.

A pesar de todo, la reforma fue uno de los procesos más interesantes que se haya llevado a cabo en América Latina. Se desarrollaron grandes avances en lo académico y también en el plano de la fe, lo que fue posible gracias a las buenas relaciones entre las autoridades laicas, la Gran Cancillería y el Comité Permanente del Episcopado.

Para los detractores de la reforma, que fueron los mismos que condujeron la UC durante muchos años, ésta se resolvió en una fórmula de dos palabras: caos y marxismo. Cada suceso posterior (desde las elecciones en las facultades hasta la creación de nuevas cátedras) fue interpretado al amparo de esta idea, como si la reforma fuese la culpable de la fuerte politización que comenzaba a vivir el país. Por mi parte, creía entonces, y lo sigo creyendo ahora, que a fines del 67 se abrió uno de los mejores períodos que ha tenido la Universidad.

En medio de estos difíciles hechos, la Iglesia de Santiago había venido preparando los documentos para su Sínodo diocesano, el octavo de su historia, que se convertiría en el encuentro más importante de los últimos años, iniciándose además lo que se ha llamado "era de los sínodos" en las diversas diócesis de Chile. Ahora, además, el abordaje de este trabajo inmenso era favorecido por el hecho de que el Papa había accedido a concederme un segundo obispo auxiliar, Fernando Ariztía, hasta entonces vicario de la Zona Oeste, cuya consagración hicimos en julio, en el Templo de Lourdes.

El Sínodo era un acontecimiento marcado y exigido por una Iglesia en plena efervescencia, que veía frente a sí grandes tareas, misiones de una magnitud superior. El 26 de marzo de 1967, Pablo VI había entregado *Populorum Progressio*, una encíclica vibrante, rica en desafíos, que ya era, incluso en esa fecha, una de las grandes piezas de la doctrina social de la Iglesia. En plena concordancia con *Rerum Novarum*, *Populorum Progressio* le proponía a los católicos, ya no sólo la preocupación por los pobres, sino la participación activa en el desarrollo, concebido como "el nuevo nombre de la paz". Afirmaba que el cristianismo podía ofrecer al mundo un desarrollo integral, que no era otra cosa que entender la lucha por las condiciones humanas en el plan divino de la salvación; porque el hombre, cuando organiza la tierra sin Dios, la organiza contra el hombre, y porque

la historia carece de sentido si no tiene a la vista la trascendencia del Reino del Señor.

La súplica de *Populorum Progressio*, formulada ya no sólo a la conciencia de los individuos, sino también a la de las naciones, era verdaderamente impactante: para superar el subdesarrollo, decía, “la



3 de septiembre de 1967: peregrinación hacia Maipú, antes de inaugurarse las sesiones del Sínodo. En el ángulo inferior derecho se ve al cardenal Silva Henríquez, al obispo auxiliar Gabriel Larraín (izquierda) y al obispo Teodoro Eugenin, presidente del Voto O'Higgins (derecha).

hora de la acción ha sonado ya: la supervivencia de tantos niños inocentes, el acceso a una condición humana de tantas familias desgraciadas, la paz del mundo, el porvenir de la civilización, están en juego. Todos los hombres y todos los pueblos deben asumir sus responsabilidades”.

No cabe duda de que esta encíclica magistral presidió las tareas de toda la Iglesia en aquel período. Bajo su luz, el Sínodo de

Santiago fue preparado durante todo el 67, con el aporte de innumerales sacerdotes, teólogos y laicos, para desembocar en dos asambleas plenarias que tendrían lugar en septiembre y noviembre, conformando la primera etapa. La segunda vendría en 1968.



En la escalinata del templo de Maipú, aparecen el cardenal Silva Henríquez y los obispos auxiliares Gabriel Larrain y Fernando Ariztía.

Poco antes de septiembre, hubo una larga discusión sobre cómo iniciar el Sínodo a través de un gran acto que convocara al pueblo de Santiago. La propuesta consistió en realizar una peregrinación al Santuario de Maipú, que después de muchos años continuaba en construcción; el sacerdote Mariano Puga, de los Sagrados Corazones, era uno de los más activos promotores de estas marchas, que venía realizando desde 1963, principalmente con estudiantes. Las críticas no se demoraron: algunos opinaron que esta clase de actos

tenía un sabor triunfalista, mientras otros dijeron que la monumentalidad contradecía el deseo de acercarse más al mundo de los pobres.

En aquellos años la crítica contra las “formas” de la Iglesia se había puesto tan de moda, que muchos confundían lo “avanzado” con aquello que fuese en contra de algunas de las tradiciones más arraigadas. El Sínodo fue especialmente prolífico en expresiones



El cardenal se dirige a los fieles en Maipú; sentados, de izquierda a derecha, los vicarios episcopales Gabriel Larraín, Fernando Ariztía, Ismael Errázuriz y Javier Bascuñán.

contra los ornamentos, los templos, las vestimentas, los actos de piedad popular, y no faltó quien hallara “excesivamente rígida” la liturgia misma... ¡recién reformada!

Cierto es que muchos sacerdotes de Santiago se vieron arrastrados por esta corriente de criticismo algo infantil, a pesar de su buena fe; pero también es cierto que con ello desconocían de hecho la profunda piedad de nuestro pueblo, y que su posición aparentemente “popular” se volvía de ese modo puramente intelectual. Buena prueba fue aquella procesión: el domingo 3 de septiembre de 1967, 80 mil fieles, una de las cifras más altas que recuerde

nuestra Iglesia, se integraron a la marcha hacia Maipú, bajo un hermoso lema: "Juntos en el camino, para servir a Chile". 230 sacerdotes se hicieron pocos para celebrar aquella extraordinaria liturgia de Pentecostés.



Primera asamblea del Sínodo, en el local del Colegio de las Monjas Inglesas.

Con este espíritu se inició el Sínodo, seis días después, en el Colegio de las Monjas Inglesas. Desde un comienzo asistieron cerca de 400 sinodales, en un estado de verdadera euforia e incluso cierta desorganización. Sé que muchos temían que el Sínodo no fuera una expresión real de los problemas de la Arquidiócesis, sino algo dirigido por la jerarquía, abierta o encubiertamente. Pero yo en verdad quería oír todo, incluso aquello que personalmente pudiera disgustarme; estaba firmemente decidido a no intervenir en nada. Y creo haber cumplido de tal manera, que para muchos el Sínodo fue una sorpresa en materia de libertad y fraternidad.

No es que no hubiese conflictos. La asamblea produjo 111 votaciones, de las cuales 18 significaron rechazo a determinados esque-

mas, mientras otras 49 fueron aprobaciones con modificaciones. Gracias a algunas de ellas se pudo llegar al más preciso diagnóstico que hayamos tenido nunca sobre la realidad del catolicismo en Santiago.

Registro algunos datos aportados por los expertos en sociología religiosa, para recordar cuál era nuestra situación en esos años: según una encuesta de 1965, los católicos serían el 85% de la población de Santiago; sin embargo, como en tiempos del padre Hurtado, sólo un 12,9% asistía regularmente a misa dominical, y un 33% decía orar habitualmente; peor aún, la Contribución a la Iglesia era cumplida regularmente por sólo 31.698 personas. Para atender a toda la gente de la Arquidiócesis disponíamos de 1.161 sacerdotes, la mitad de los cuales eran extranjeros. Además, debía distinguirse entre 419 padres diocesanos y 742 religiosos; las religiosas eran 2.626, repartidas en 240 casas. Esto quería decir que, sin contar los efectos secundarios producidos por la distribución geográfica de las parroquias, teníamos más o menos un sacerdote por cada 2.072 santiaguinos. En el Seminario se preparaban sólo 33 seminaristas (uno por cada cien mil habitantes), aunque por otro lado los movimientos apostólicos reunían a 7.800 militantes laicos.

Desde el punto de vista de la formación, las cosas no eran muy luminosas. La catequesis alcanzaba al 67,8% en la clase alta, y al 22% en la clase obrera; en cuanto al Evangelio, un 64,6% admitía desconocer qué es la Biblia, mientras que un 78,2% no sabía qué es el Cuerpo Místico.

Por esta razón, el primer énfasis del Sínodo —y lo que a la larga puede considerarse como su resultado más concreto y a la vez más profundo— se puso en la necesidad de despertar y educar la fe: es decir, en la evangelización. Para ello habría que mejorar la catequesis infantil, orientándola hacia una verdadera y consciente conversión al Evangelio, y procurar por los medios más diversos que los cristianos se integraran en plenitud a la vida diaria.

Entre las prioridades de la evangelización, los sinodales distinguieron tres: la juventud, los centros de difusión social, y las agrupaciones populares, categoría que introducía una gran innovación, porque no se limitaba al ámbito de lo sindical, sino que abría el camino al mundo poblacional. Digo con cierto orgullo que nuestra Iglesia fue pionera en la exploración del fenómeno de los pobladores,

porque esto se convertiría después en un tema de primera importancia en América Latina, y hoy es una categoría obligada de estudio para la sociología.

La primera etapa de la sesión terminó a mediados de septiembre, y unos días después partí a Roma a otro Sínodo, esta vez de Obispos de la Iglesia Universal: el primero convocado por Pablo VI. Este fue citado para el 29 de septiembre de 1967, y tuvo casi 200 participantes.

De entre cinco temas principales que abordó, cuatro correspondían plenamente a las inquietudes surgidas después del Concilio: el análisis de los peligros contingentes para la doctrina de la fe; la necesidad de renovación en los seminarios; el problema de los matrimonios mixtos, y las normas de aplicación de la reforma litúrgica. Pero, a mi modo de ver, el quinto fue el que produjo cambios más sustanciales, con efectos también más perdurables: la revisión del Código de Derecho Canónico.

Más de un año antes, en enero del 66, el cardenal Pietro Ciriaci, presidente de la comisión revisora instituida por Pablo VI, de la cual yo también fui nombrado integrante en noviembre del 65, había enviado una circular pidiendo a las conferencias episcopales que propusieran votos y sugerencias en torno al nuevo Código. Gracias a este método "conciliar", se reunieron las suficientes observaciones como para saber que el Código Pío-Benedictino, establecido en 1917, necesitaba reformas profundas para adecuarse a los nuevos tiempos.

El Sínodo fue altamente productivo en este importante asunto. Por unanimidad, los prelados aprobaron un documento sobre principios para el nuevo Código; en síntesis, se buscaba que ahora la estructura jurídica de la Iglesia reflejara más ampliamente el espíritu de servicio a la Humanidad que la animaba desde el Concilio; que evitara, por tanto, el predominio de las reformas coactivas del derecho, estimulando una fe más libre y más auténtica; que ampliara la participación de las iglesias locales en las decisiones, descentralizando y promoviendo una sana autonomía, y que se favoreciese al máximo la cura de almas, teniendo en cuenta, además de la justicia, los valores de la caridad, la humanidad y la moderación.

Con este programa de acción, la comisión pontificia de revisión del Código trabajaría todavía durante quince años más, hasta

elaborar el Código nuevo que vino a promulgar Juan Pablo II en 1983. Sería tarea de especialistas enumerar cuantos y cuales fueron los cambios más importantes que el nuevo Código aportó a la Iglesia; por mi parte, creo que esa revisión, suscitada por el espíritu del Concilio, puso a nuestras normas jurídicas a tono con las necesidades de una pastoral más humana y una inequívoca vocación de servicio.



Cardenal Pietro Ciriaci, presidente de la comisión revisora del Código de Derecho Canónico.

Regresé a Chile para presidir la segunda etapa de la primera sesión del Sínodo de Santiago, que se realizó en noviembre. En esta fase fue cuando se alcanzaron algunos de los instantes más polémicos de aquellas jornadas. Después de definir la gran meta de la evangelización, los sinodales se sintieron impulsados a perfeccionar una visión pastoral coherente en los distintos planos donde la Iglesia debe actuar. Dos esquemas sobre educación (uno de pastoral juvenil, otro de medios de comunicación) y un tercero sobre los laicos fueron derechamente rechazados, por considerarlos demasiado simples.

La educación católica fue además sometida a una dura crítica. Entre los reproches centrales, se hizo notar que no teníamos una

buena definición del papel de la autoridad dentro de la idea de una educación para la libertad, que era la que veníamos estimulando; se anotó la ausencia de valores sociales en la instrucción a los jóvenes. Y, extremando los juicios, se acusó a los establecimientos católicos de ofrecer una imagen clasista, concentrada en los estratos altos y en desmedro de los pobres. Algunos plantearon incluso que el concepto mismo de establecimientos católicos debía ser revisado, en vista de que la Iglesia de Santiago debía aspirar a introducirse en todos los



En la mesa de la presidencia del Sínodo, el cardenal, acompañado por los obispos auxiliares y vicarios Fernando Ariztía y Gabriel Larraín.

ámbitos a través de sus fieles, y no creando o manteniendo instituciones especializadas; estas opiniones irían adquiriendo fuerza en los dos años siguientes, pero creo que la historia fue finalmente concluyente para demostrar su error.

De todos modos, el Sínodo, que se vio incapaz de resolver por sí solo los problemas envueltos en los temas de la cultura y la educación nacionales, decidió instar a los obispos de Chile para que orientasen sobre la materia. Ese llamado estuvo en la base de una pastoral colectiva que se emitiría en 1968.

Los reproches internos continuaron luego con la grandiosidad de algunos edificios eclesiásticos, con el "paternalismo" imputado a algunas obras de caridad, con el ejercicio de cierto poder político por parte de la jerarquía.

En un clima semejante, era difícil que algo se escapara de la mirada crítica de los sinodales. También a mí me tocó el turno. En un capítulo dedicado a “la figura del pastor”, los sinodales ensayaron un



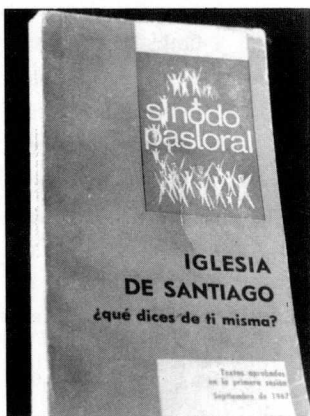
Un grupo de sinodales conversa durante una de las pausas de la asamblea. En el centro, el profesor de teología Waldo Romo.

verdadero desmenuzamiento de su obispo, sometido como estaba a una autoimpuesta ley de silencio, gracias a la cual muchos se sintieron estimulados para decir por primera vez lo que verdaderamente sentían. Suavemente, esta “autopsia” empezó por afirmar que las estructuras diocesanas eran inadecuadas al tamaño de la Arquidiócesis y a las exigencias modernas; luego se dijo que la colegialidad sacerdotal se realizaba deficientemente, y después se pasó a las alusiones directas: unos, diciendo que el obispo les parecía poco familiar, poco comprometido en las situaciones concretas de la vida; otros, que “cierto velo de secreto” rodeaba mis actividades, y unos terceros, que me veían más dedicado a las funciones de gobierno administrativo que a las tareas de evangelización y liturgia.

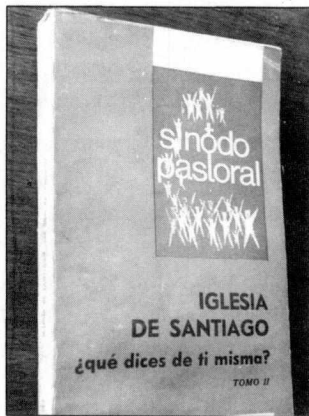
¡Cuántas cosas se me dijeron en mi propia cara! Tomo de las conclusiones una buena síntesis: “Los laicos lo quisieran más *profeta* de la hora presente; los religiosos (especialmente las religiosas) lo quisieran más interesado de su consagración y de sus carismas; los presbíteros lo quisieran más hermano, más dialogante, que haga

posible una buena modalidad de obediencia sacerdotal, más de colaboración que de dependencia”.

No puedo negar que algunas de esas críticas me dolieron, porque las creí injustas; otras me hicieron tomar conciencia de mis propias debilidades, y en algunos casos pude percibir que seguramente no había comunicado con suficiente claridad mis intenciones. A la vuelta de tantos años, creo ahora que el Sínodo nos ayudó a



Primer tomo de "Iglesia de Santiago, ¿qué dices de ti misma?", con las conclusiones de la primera sesión del Sínodo, editado a fines de 1967.



Segundo tomo de "Iglesia de Santiago, ¿qué dices de ti misma?", con las conclusiones de la segunda sesión del Sínodo de Santiago.

todos, a los sinodales y a mí, a reconocer, como diría el poeta Paul Verlaine, "entre tantos reparos, estas pobres virtudes". Sospecho que la historia, provisoria guía y caudal de nuestros actos, nos cambió a todos para bien, y espero, al menos en lo que a mí respecta, que algunos de los que entonces me criticaron puedan pensar ahora que no volverían a hacerlo.

Pero esto no fue ciertamente lo medular en el Sínodo. A mi modo de ver, una de sus partes centrales, en aquella sesión, fue el análisis de las relaciones entre Iglesia y Mundo de Hoy, tal como ellas habían sido prefiguradas por el Concilio.

El padre jesuita Roger Vekemans dice que la preocupación por este tema es una característica de la Iglesia chilena en el último medio siglo. Y creo que tiene razón: quienes hemos sido pastores en este difícil período, fuimos profundamente marcados por la invoca-

ción de la doctrina social para construir un mundo más humano, más fraterno y más cercano a los designios de Dios. Vivimos no sólo los cambios sociales pacíficos y progresivos en nuestra patria, sino que además nos sumergimos en el aire renovador que inspiró las sesiones del Concilio y las actuaciones de los papas Juan XXIII y Pablo VI. Desde nuestras posiciones humildes, frecuentemente limitadas y a veces provincianas, fuimos persuadidos y estimulados por la certidumbre de que la Iglesia debía asumir un papel activo en la realización de la dignidad humana.

Por eso el Sínodo encontró tanto respaldo y tanta fuerza para dedicarse a estos temas. La proposición de una Iglesia más cercana al hombre se tradujo al final en la petición de hacer nuestras ciertas aspiraciones que, pareciéndonos hoy obvias, fueron en ese entonces una innovación: se pedía aumentar la comunicación personalizada y personalizante, mucho antes de que la moderna pedagogía difundiera ese doble concepto; aumentar la participación de la mujer, cuando ni siquiera existían movimientos feministas en el país; comunicar el sentido profundo del amor humano, implicando en ello la esfera de lo sexual, en una época en que muchos tabúes seguían vigentes; guiar el trabajo pastoral con objetividad, racionalidad, eficacia, rigor y perseverancia; incrementar la conciencia de la igualdad de los hombres, y estimular la solidaridad, la participación social, la preocupación por los problemas ajenos, incluso internacionales.

No era una bicoca.

La barca en la borrasca

Muy pronto se vio que 1968 sería un largo momento crítico para todos, uno de esos períodos cortos y fulgurantes en los que la humanidad parece estremecerse entera, como si en cada rincón del mundo hubiese un acuerdo para agitar todos los más arduos conflictos. Fue un año de exaltación y locura, como hay pocos en el siglo XX y no hubo sobre el planeta conciencia que no se sintiese tocada por la efervescencia y el asombro de aquellos días.

En los lejanos arrozales del Sudeste Asiático, la guerra de Vietnam sufrió en enero el impacto de una embestida total de los ejércitos comunistas, la llamada “ofensiva del Tet”, lanzada en medio del Año Nuevo en esa nación. Cuatro meses después, Francia y el poderoso general Charles de Gaulle fueron puestos al borde del colapso por una rebelión estudiantil que vino a estallar en medio del *Quartier Latin* de París. Berlín, Roma, Madrid y otras capitales, fueron sacudidas al unísono por universitarios sedientos de reformas, que proclamaban indistintamente la libertad de la enseñanza o el rechazo a la intervención norteamericana en Vietnam. De abril a junio, la nación más poderosa de la tierra, Estados Unidos, fue estremecida por dos inmensos crímenes políticos, los del pastor Martin Luther King y el senador Robert Kennedy. En agosto, otra superpotencia, la URSS, secundada por sus aliados del Este europeo, envió tanques a sofocar la rebelión democrática de estudiantes, trabajadores e intelectuales de Checoslovaquia, muchos de los cuales se lanzaron al martirio enfrentando la invasión. En China, los estragos de la “revolución cultural” afligieron todos los espacios de las libertades individuales.

En la política chilena, las perspectivas no eran demasiado optimistas al comenzar aquel año. El gobierno del Presidente Eduardo Frei se enfrentaba al Senado, que se había resistido por casi dos años

a aprobar la reforma constitucional sobre el derecho de propiedad (que hacía posible la reforma agraria), y la CUT lanzaba un vasto movimiento de reivindicación salarial que llegó a producir casi mil huelgas al año.

La polarización iba en acelerado aumento: mientras los fragmentos de la antigua derecha se agrupaban en el nuevo Partido Nacional, en la izquierda se imponían las tesis revolucionarias y el Partido Socialista proclamaba la legitimidad de la lucha armada; en



El cardenal Silva Henríquez y el Presidente Frei recorren las instalaciones de la estación terrestre de Longovilo, recién terminada.

el campo se iniciaban las tomas de fundos, buscando acelerar la reforma. Para peor, el Presidente había perdido a mediados del 67 el control sobre su propio partido, el que, en una polémica Junta Nacional, había puesto fin al liderazgo del "freísmo" (encabezado por Patricio Aylwin) y elegido en su lugar a los elementos más críticos del ala izquierda: una mesa compuesta por Rafael Agustín Gumucio, Julio Silva Solar y Sergio Fernández Aguayo. Para sintetizar, baste decir que todos ellos, con la sola excepción de Fernández, abandonaron poco después el PDC.

En la Iglesia inauguramos el año con el más duro golpe que hubiésemos recibido en nuestra gestión: el retiro y posterior renuncia de

mi obispo auxiliar Gabriel Larraín, que pasaría a convertirse en el segundo prelado de América Latina que dejaba los hábitos, después del bullado caso del obispo auxiliar de Lima, Cornejo Ravadero. Su alejamiento produjo una conmoción tremenda en el clero; a pesar de que él fue muy cuidadoso para evitar que se conociera esta dramática decisión, ella se difundió rápidamente entre sacerdotes y seminaristas. Después de todo, Gabriel había sido uno de los más dinámicos sacerdotes de Santiago; así lo había visto Emilio Tagle, y así lo apreció yo, cuando llegué.

El retiro de Gabriel no fue un acto caprichoso, en modo alguno. El vivió una encrucijada histórica que puso a todo el mundo católico en discusión y duda; y aun cuando las circunstancias que lo agobiaron pudieron ser particulares, ciertamente su caso reflejó el de muchos otros. Gabriel provenía de una familia de clase alta, de entre lo más granado de la sociedad chilena. Desde muy joven sintió la inquietud social, en unos años en que esos sentimientos no podían canalizarse más que a través de la Iglesia. Pasó del colegio al Seminario sin estar seguro de tener una vocación sacerdotal firme. Realizó una carrera brillante y se convirtió, precozmente, en el brazo derecho de Emilio Tagle; llegó a ser rector del Seminario a los 33 años. Pero en verdad, su papel de liderazgo no era deseado por él mismo; muchas veces pidió que lo trasladaran a una parroquia obrera, donde creía que se realizaría mejor, con más plenitud. Nadie lo escuchó. Cuando comencé a insistir por un obispo auxiliar para Santiago, su nombre figuró en todas las ternas. Y una vez que el nombramiento salió, en 1966, él hizo todos los esfuerzos para evitar que se consumara; hasta habló con el nuncio. Muchas veces he meditado acerca de este caso doloroso, y creo que tuvimos una parte de responsabilidad todos aquellos que lo forzamos a ser lo que no quería. Lentamente, Gabriel fue entrando en una fase de crisis, en la que se vio afectada su fe misma y, ciertamente, su percepción del papel del sacerdote en el mundo moderno.

A mediados de 1967, le tocó además estar cerca del otro caso impactante que vivió la Arquidiócesis el retiro de Pedro Castex, que dejó el sacerdocio mientras era vicario de la zona sur. Castex se fue a Uruguay, y hacia allá partieron Gabriel Larraín y Carlos González (ambos obispos) para tratar de disuadirlo, lo que no consiguieron. Y aunque el caso de Castex fue totalmente distinto, con una motivación afectiva, es indudable que melló la fortaleza de quienes tenían dudas sobre sí mismos.

Gabriel fue a hablar conmigo, angustiado, al iniciarse 1968,

para decirme que quería irse. Traté de convencerlo de que no lo hiciera, pero terminé comprendiendo que se trataba de algo muy profundo. Conversamos mucho y, contra lo que se rumoreó, jamás hubo una pelea entre nosotros. Aceptó ir a Francia, donde quedaría bajo la tutela del arzobispo de Lyon, pero prácticamente recluso. Soportó esa situación varios meses, hasta que optó por la reducción al estado laical. Tiempo después fui a pedirle perdón al Papa Pablo VI por este triste episodio; me sentía responsable de mi propia porfía frente a Gabriel, de haber extremado la exigencia; aunque, por otro lado, no podía ignorar que en aquellos días, advirtiendo lo que podía ocurrir con las vocaciones, yo tenía la convicción de que se requería ser muy fuerte, muy autoexigente, muy enérgico en la defensa del sacerdote. Y en esto creo no haberme equivocado. Felizmente, pasados algunos años, Gabriel recuperó la fe y volvió a ser un católico fiel y abnegado para con la Iglesia.

Pero el fenómeno que comenzaba a minar las vocaciones sacerdotales era, por desgracia, más vasto y complejo. Tenía a lo menos dos componentes: uno, de carácter internacional, por el cual las nuevas definiciones del Concilio y el debate abierto en toda la Iglesia Universal, modificaron las formas tradicionales de entender la fe y sembraron interrogantes nuevas, que no todos los espíritus estaban en condiciones de soportar; el otro, nacional, tenía que ver con la polarización política, el deseo de ir más rápido en las transformaciones sociales, y cierto desencanto frente al gobierno DC, que impulsó a algunos clérigos hacia posiciones de izquierda, a menudo confusas y frecuentemente contestatarias. Las tareas eran muchas, y los peligros, multiformes. "Por medio de nosotros, pobres hombres", le dije al clero en la homilía de Jueves Santo de 1968; "por medio de nuestra fe vacilante, debe realizarse la comunicación de los dos mundos: del mundo de abajo, con su formidable poder de atracción vertiginosa, y del mundo de arriba, con su inmensa e infinita riqueza, pero actualmente escondida. Esta es nuestra misión esencial; si no hacemos esto, no somos sacerdotes".

Los fenómenos mundiales y nacionales se venían conjugando a lo menos desde un par de años antes. Aquello era muy visible en el Seminario de Santiago, donde se había abierto una polémica acerca del sistema de enseñanza. Algunos jóvenes sostenían que el Seminario era demasiado formal, que constituía una ostentación, que

estaba muy distante de los problemas del pueblo y que, además, era “despersonalizante”. Culpaban al sistema y a los métodos, pero también al edificio, ubicado desde 1954 en Apoquindo, cuando esa zona era aún parte de los extramuros de Santiago.

Cuando Carlos González fue creado obispo, nombré rector al padre Jorge Hourton, que llevaba casi 17 años enseñando en el Seminario y que tenía gran prestigio como académico y hombre de



Seminaristas de Santiago se trasladan del edificio Apoquindo, para iniciar la experiencia de las comunidades en los sectores populares.

pensamiento. Hourton tuvo sus dudas, pero Gabriel Larraín me ayudó a convencerlo. Y en unos pocos meses resultó que su propio equipo de profesores levantaba la teoría de que el Seminario debía disolverse y los seminaristas reunirse en pequeñas comunidades, para irse a vivir en las poblaciones obreras.

Hourton se opuso a esta disgregación, hasta que a fines del 67 se llegó a vivir un clima de virtual rebelión. Varios seminaristas optaron por retirarse y el rector parecía aislado por su propio equipo. Cerca de la Navidad, Hourton me fue a plantear la gravedad del problema. Y, enfrentado a un caso totalmente nuevo, yo decidí aceptar y dar curso a la idea del Seminario disperso en pequeñas comunidades, lo que comenzó a funcionar en 1968.

Parece que el buen Jorge Hourton se sintió algo dolido, porque él se había jugado en conciencia por la forma “conservadora” del Seminario. Me planteó entonces que quería irse a Valdivia. Le dije que sería muy malo para la Arquidiócesis que él se fuera, debido a la aguda falta de buenos sacerdotes que estábamos padeciendo; y que a mí me perjudicaría también, porque parecería que lo había echado. Lo pensó, pero finalmente (y aquí mostró su gran corazón) aceptó quedarse en una parroquia de Renca.

El Seminario se repartió por las comunas pobres, después de que tal idea fuese debidamente aprobada por una comisión del Episcopado que la estudió. Pero ya a mediados de año se veía que la experiencia no sería muy fructífera. En parte, porque algunos sacerdotes se secularizaron demasiado con esta fórmula, en parte porque la enseñanza de la Filosofía y la Teología se vieron debilitadas. Hourton terminaría por tener la razón: en menos de dos años, el Seminario se iría reuniendo de nuevo en un solo lugar.

Pero entretanto, el Consejo de Presbiterio se reunió una vez mientras yo estaba en el extranjero, y tomó la decisión de entregar el edificio de Apoquindo a una obra de caridad laica. Es cierto que el edificio era poco apropiado, pero esta súbita decisión preocupó a la Curia vaticana, que recibió la información. Me vi en un serio aprieto: yo mismo había dado atribuciones al Consejo de Presbiterio para opinar y actuar; ahora no podía desautorizarlo sin chocar con los sacerdote, ¡y en un momento tan delicado! Dejé que el tiempo consumiera las pasiones; el edificio no volvió a ser usado para el Seminario, los jóvenes comenzaron a reunirse en diversas casas de ejercicios, hasta que finalmente pude construir un nuevo recinto, ahora en La Florida.

En el intertanto, el nuevo nuncio había estado trabajando para conseguir que la Santa Sede nombrase un obispo auxiliar para Puerto Montt, cuyo titular era don Alberto Rencoret. Con seguridad, don Alberto había presentado buenos argumentos para obtener esto, probablemente relacionados con las extensas distancias de su diócesis, ya que no con el número de sus fieles.

El nuncio era Carlo Martini, y había llegado a Chile en octubre de 1967, procedente de la misión en Filipinas. Llevaba muy poco tiempo en el país cuando comenzó a gestionar este nombramiento para Puerto Montt. Lo ingrato del caso fue que para ello se fijó en uno de los sacerdotes más valiosos de Santiago: Ignacio Ortúzar, que era mi vicario en la zona sur, después de haber sido párroco en San Bernardo. Ignacio había figurado en varias ternas para el episcopado: su notoriedad como un abnegado pastor lo hacía merecedor de tal favoritismo. Pero él no quería salir de Santiago, y mucho menos dejar la zona sur, donde estaba desarrollando un trabajo intensísimo, justo después de las sucesivas salidas de Pedro Castex y Gabriel Larraín. Por mi parte, yo era totalmente contrario a que se sacara un sacerdote de Santiago.

Pues bien: a mediados del 68, la Santa Sede anunció la creación episcopal de Ignacio Ortúzar. Angustiado, él me dirigió una carta pidiendo que lo ayudara a quedarse en la Arquidiócesis. Planteé mi punto de vista al nuncio, pero éste se mostró totalmente cerrado. Dijo que, si yo había respaldado antes su nombramiento para otras diócesis, no veía por qué podía ahora oponerme. Le expliqué que la situación había sufrido cambios dramáticos, y que Ignacio estaba contribuyendo a remediar grandes males recientes. En vista de que no hubo acuerdo, escribí al sustituto de la Secretaría de Estado, el arzobispo Giovanni Benelli, para pedirle ayuda.

Duró unos cuantos días este tira y afloja. Entretanto, don Alberto Rencoret se enteró de que Ignacio prefería quedarse en Santiago, se enojó con él y dijo que ya no lo aceptaría en Puerto Montt. A su turno, al parecer la Santa Sede pensó que Ignacio quería ser obispo auxiliar en Santiago, lo que puede haberse reforzado con mi intervención. Las cosas no eran ni remotamente así, pero me temo que fueron erróneamente percibidas en Roma, y el episodio terminó de una manera dolorosa para todos: el Santo Padre decidió dispensar a Ignacio del cargo de obispo auxiliar. (Notablemente, al año siguiente fue nombrado Jorge Hourton como auxiliar de Puerto Montt).

Tras este cúmulo de dificultades, que se venían produciendo sin pausa desde la crisis de la UC, mis hermanos en el Episcopado estimaron que era el momento de que la Conferencia fuese presidida por otro obispo, para no gravar la ya pesada carga del arzobispo de Santiago.

Don Alberto Rencoret me lo fue a plantear así, y yo accedí de buena gana, porque estaba firmemente convencido de que era necesario vitalizar e integrar más a la Conferencia. En abril de ese año fue elegido José Manuel Santos, obispo de Valdivia, secundado por Carlos González como vicepresidente y Enrique Alvear como secretario: era un equipo joven, lleno de vida, que mostraría bien rápido todo su dinamismo.

Pero 1968 no era sólo un año de lamentos para los chilenos. También era de fiesta: se celebraban los 150 años de la Declaración de la Independencia.



Ejemplar de la edición original de la pastoral colectiva emitida el 5 de abril de 1968.

Pensando en esa fecha, los obispos entendimos que sería el momento de hablar sobre algunos temas de fondo; sabíamos que se esperaba nuestra palabra: el Sínodo de Santiago nos había pedido expresamente pronunciarnos sobre el tema educacional, y de ese llamado salió la pastoral colectiva *Los católicos y la educación*, que fue el primer documento de su tipo en América Latina y que abordó temas hasta entonces no tocados, como la necesidad de una adecuada educación sexual. Ahora había que iluminar aspectos oscuros de lo que estábamos viviendo.

Trabajamos arduamente en una nueva carta pastoral que expresara con precisión cómo veíamos a la nación. Como siempre, muchos teólogos, profesores y sacerdotes colaboraron en esta tarea. Sobre el borrador final hubo discusiones acaloradas, aunque también quedó claro que todos pensábamos en lo mismo. Para titularla tomamos una línea de Gabriela Mistral (de sus *Recados contando a Chile*): *Chile, voluntad de ser.*

La pastoral se proponía reflexionar sobre la comunidad nacional y el modo en que la Iglesia se insertaba en ella. Por ello, revisaba la historia, en un tipo de análisis que desconcertó a algunos: buscaba, en los desordenados datos de nuestros 150 años de Independencia, los rasgos que nos identifican como chilenos, queriendo demostrar que “la presencia de Dios recorre nuestra historia”. Decíamos que eran propios de Chile una generosidad fraternal, desarrollada en las durezas del territorio; un especial respeto por las normas de convivencia, y un dinamismo histórico en el cual la exigencia de participación se había tornado prioritaria. Anotaba también los defectos,



Nuevos estilos: el sacerdote Cristián Precht oficia misa en la Parroquia Universitaria de calle Villavicencio.

pero mirando hacia el futuro: “En el umbral que conduce al desarrollo, todos debemos, sin apagar la vivacidad criolla, templarnos en una disciplina más recia. Así, la afectividad no desembocará en un sentimentalismo veleidoso; así, la imaginación no será el recurso para improvisar sistemáticamente soluciones; así, la conciencia de la dignidad personal no degenerará en un individualismo antojadizo. En esto se deciden la grandeza o la mediocridad de Chile”.

Luego analizaba el papel de la Iglesia Católica. Pedía que los errores fuesen reconocidos, pero también medidos en sus circunstancias históricas. “Nos parece que hay entre los católicos juicios demasiado duros acerca del pasado de la Iglesia, porque en la práctica no se toma en serio el que Ella comparte muchas de las contingencias de la humanidad”.

En este paso a través de los siglos, la Iglesia rectifica la concepción humanista de la convivencia, porque procura que la sociedad

“permanezca estructuralmente permeable a una realidad superior”, y porque ofrece “una concepción integral y solidaria del hombre”. Como bien diría el padre Joaquín Alliende, que participó en esos trabajos, el texto bíblico básico era el canto de los Colosenses y Filipenses: “Con El, por El y en El”.

En el momento presente, advertíamos, Chile “vive una crisis de crecimiento”, que podía poner en peligro la convivencia misma: “Se pone en duda la eficacia del sistema democrático y se pierde la esperanza en efectivos cambios sociales dentro de la legalidad, se ahondan las divergencias ideológicas y cunde en algunos sectores la idea de que la vía ilegal y aun la violenta, sean las más efectivas”.

La pastoral era, en el fondo, un llamado a luchar por el desarrollo y a aumentar nuestra independencia, sin que el proceso se contaminara con el odio o la revancha.

Como suele ocurrir, la polémica que estalló en torno a la pastoral se quedó con algunos de los aspectos más accesorios. La prensa destacó profusamente una exhortación a no sacar capitales fuera del país, y otra a evitar la emigración de los profesionales jóvenes. Algún diario (de derecha) se centró en que en un párrafo había una cita del *Canto General* de Pablo Neruda (poeta comunista), mientras que otro (de izquierda) creyó encontrar una especie de legitimación de la lucha de clases en el llamado a ricos y pobres.

Otros crearon confusión al obtener, un día antes, un borrador no terminado de la pastoral, en el que se incluía un párrafo donde pedíamos perdón (“porque hemos faltado a nuestra misión”, “porque no supimos defender los derechos de los trabajadores”, “cuando fuimos altaneros, cobardes o mezquinos”), y que después fue eliminado precisamente porque no queríamos que se olvidara la dimensión histórica de nuestras actuaciones, y también porque en algunos planos las referencias eran demasiado concretas y polémicas (por ejemplo, al excusarse por las luchas del siglo pasado sobre los cementerios, en las cuales muchos católicos actuaron de buena fe).

Igual que otras veces, los ataques no tardaron: el diario comunista, *El Siglo*, dijo que la pastoral “no está entre las iniciativas más audaces” del *aggiornamento*. *El Mercurio* editorializó afirmando que faltaba un “examen a fondo de los problemas planteados” y que “se deslizaba una que otra frase apetecible para el extremismo”, entre-

gando "ciertos materiales combustibles, que otros se encargarán de echar al fuego de las pasiones del momento".

Así y todo, *Chile, voluntad de ser* se convirtió en la pastoral más importante del Episcopado desde 1962, cuando *El deber social y político de los católicos en la hora presente* produjo también un auténtico remezón. Muchos chilenos que no se identificaban con las posiciones comunistas y conservadoras tomaron la pastoral como un mensaje sincero y profundo. Se convirtió en un tema de análisis en diversas cátedras universitarias y el Banco Interamericano de Desarrollo nos brindó un generoso reconocimiento al publicarla *in extenso* en su boletín continental.

Lo pastoral ocupaba, sin duda, el centro de nuestras preocupaciones en esos días difíciles. Mirando retrospectivamente, hasta se puede pensar que este enfoque obstaculizó a veces la percepción adecuada de los temas trascendentes.

Así ocurrió con la encíclica que Pablo VI entregó en julio de 1968.

En aquel tiempo estaba de moda el debate sobre la incapacidad de la humanidad para producir recursos suficientes para alimentar a una población en crecimiento geométrico. Revirtiendo lo que había sido una doctrina del desarrollo sobre la base del aumento de la natalidad, se decía ahora que los países pobres no podrían progresar si no controlaban el número de nacimientos, ejerciendo una planificación central sobre la fecundidad. Una cruenta guerra de hambre ocurrida en Biafra mostraba cada día el horror vivido por miles de niños, mujeres y ancianos. No era el único argumento: también era un momento en que la juventud del mundo parecía vivir una "revolución sexual", dentro de la cual jugaba un papel preponderante la difusión de la "píldora", el más sencillo de los métodos anticonceptivos conocidos hasta entonces.

La Iglesia Católica tenía una doctrina clara respecto de la anticoncepción; tan clara como la condenación del aborto y, en el plano de la pareja, del divorcio. Los enunciados principales se encontraban expuestos en la encíclica *Casti connubii*, dictada por Pío XI en 1930. Claro que las discusiones del Concilio habían dejado abiertos estos puntos a un nuevo pronunciamiento papal. De hecho, Juan XXIII nombró una comisión para estudiar el tema, la que luego

fue ampliada por Pablo VI, quien además pidió al Concilio no pronunciarse sobre estos temas. En 1966 esta comisión entregó un informe con posiciones divididas, y después de mucho estudiarlo y de sufrir angustia en ese proceso (según contó más tarde), el Papa escogió el punto de vista de la minoría; pero esto no es nada extraño, porque en cuestiones de moral no se supone que deba regir una norma de mayoría, sino más bien el consejo del Espíritu Santo, que actúa en la conciencia del Santo Padre.



El Papa Pablo VI, en julio de 1968.

El 24 de julio de 1968, el texto final fue enviado a las conferencias episcopales de todo el mundo. Es normal que las encíclicas sean distribuidas a los prelados con cierta anticipación, para que eventualmente opinen sobre ellas. Pero en este caso, *Humanae Vitae* llegó con muy poco tiempo: la fecha de emisión sería el 25 de julio.

Era un texto notable. Por un lado, reafirmaba la doctrina tradicional, la de *Casti connubii*; pero, por otro, aportaba una luz nueva a la reflexión sobre la pareja, proponiendo una unión más solidaria del hombre y la mujer, y una visión más total del amor conyugal.

La parte sensitiva venía en el párrafo 14, donde el Papa declaraba la exclusión absoluta de cualquier método anticonceptivo, y de “toda acción que, en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación”. La

prohibición regía para todos los casos, incluso aquellos de parejas con una vida conyugal fecunda.

El Papa admitía solamente que, existiendo serios motivos para limitar los nacimientos, las parejas pudiesen emplear el método de los ritmos naturales, llamado entonces de Ogino-Knaus. Fundaba esta disciplina en un respeto total a la naturaleza humana, a la integridad del organismo y de sus funciones, advirtiendo sobre los "límites infranqueables a la posibilidad de dominio del hombre sobre su propio cuerpo".

La discusión se encendió de inmediato. En todos los planos: mientras los teólogos discutían qué es lo que puede entenderse como "natural" en el hombre, los sociólogos se preguntaban hasta dónde las poblaciones asediadas por el hambre podrían seguir los consejos papales. Los moralistas proponían un enfoque centrado en la conciencia, los politólogos hablaban del nuevo *rol* de la mujer, los educadores polemizaban sobre la formación en el sexo.

Nuestra preocupación tomó nuevamente, en este caso, el sesgo pastoral.

Creíamos que si los católicos no se sentían en conciencia obligados a respetar o creer justa la palabra del Papa, se ponía en peligro la autoridad misma de la Iglesia, su credibilidad y su fuerza. Cuando entregué el texto al Consejo de Presbiterio, me encontré con una oposición cerrada al parágrafo 14. Al día siguiente me reuní en el Centro Bellarmino con algunos de nuestros teólogos, moralistas y sociólogos más destacados (Juan Ochagavía, Juan de Castro, Egidio Viganó, Roger Vekemans y otros), y también ellos creían que la encíclica ponía en riesgo la solvencia pastoral de la Iglesia. Insistieron en que yo debía pedirle al Papa que la suspendiera hasta una discusión más amplia. Argumenté, creo que débilmente, que, conociendo a la Santa Sede, esta petición sería inútil, porque el Papa sentía la obligación de hablar de esta materia y no tendría por qué cambiar de opinión.

Los teólogos me propusieron consultar con otros cardenales. Esa misma noche llamamos a Julius Döpfner, a Munich; a Léon Josef Suenens, a Bruselas, y a Bernard Alfrink, a Amsterdam. En efecto, también ellos creían inconveniente la encíclica en sus términos presentes. Pero, a decir verdad, en esta consulta había un ele-

mento errado: sabíamos que esos cardenales podían pensar como nosotros; ellos no representaban el pensamiento de la Curia ni tampoco, esta vez, el del Papa.

En todo caso, yo me convencí de que nuestro deber pastoral estaba primero; que nuestra obligación fundamental era aliviar la pesada carga de los fieles, y especialmente de los más débiles, de los pobres no sólo en bienes, sino también en cultura, que debían sentir la cercanía y el apoyo de su Iglesia.



Nuncio Carlo Martini.

Con estos pensamientos envié en la noche del 25 un breve cable al Santo Padre, pidiendo postergar la publicación de la encíclica.

Fue una mala idea.

Cuatro días después, recibí una severa carta del cardenal Amleto Cicognani, secretario de Estado, recordándome que la decisión del Papa había sido tomada tras larga reflexión, y que necesitaba la comprensión y la colaboración de todos.

No podía yo calcular que mi modesto testimonio, eminentemente pastoral, se iba a sumar a una tempestad desatada en diversos lugares del mundo, y que llegó a producir incidentes muy serios. En Estados Unidos, 200 teólogos simplemente contradijeron la encíclica,

mientras que en la Universidad de Washington, católica, la suspensión de un profesor que se opuso al texto motivó gravísimos disturbios estudiantiles. La Conferencia Episcopal de Alemania fue muy cautelosa en su análisis, y en Holanda las discusiones se extendieron por el clero, ya suficientemente sometido a tensiones por un *Catecismo* demasiado moderno que había publicado el cardenal Alfrink. Era una polémica tremenda.

En Chile, un grupo de profesores de la Facultad de Teología escribió directamente al Papa haciendo presente que el párrafo 14 se ponía en contradicción con sus conciencias; y un obispo chileno llegó a pedir que tales maestros —la mayoría sacerdotes— fuesen exonerados por su atrevimiento.

Me vi envuelto, pues, en algo que me superaba. Comprendiendo que la borrasca no traería ningún bien, preparé con la Facultad de Teología una intervención por TV para explicar a los fieles la profundidad y el alcance de *Humanae Vitae*. Hubo muchas discusiones antes de terminar ese discurso, pero finalmente lo hice. Quería poner el acento en la dimensión del amor que la encíclica nos proponía, junto con subrayar que la recta conciencia del hombre es la última medida de la decisión justa.

Pero el nuncio Carlo Martini opinó que yo había tratado de “enmendarle la plana” al Santo Padre —nada más lejos de mis intenciones—, así que se enojó conmigo y me acusó a la Santa Sede. No hubo reacción inmediata, pero esto originaría luego un nuevo incidente.

Menos de tres meses más tarde, visité al Santo Padre, que me reprochó duramente.

—Ha sido como si me clavaras una espada en el corazón—, me dijo.

Quedé deshecho por estas palabras. Bien podía ser lo más doloroso que me hubiesen dicho en la vida.

—No, Santo Padre, por favor —creo que dije, torpemente—. Jamás hubiese querido causarle ningún dolor. Le pido perdón, pero no piense eso de mí...

Creo que lo hizo. Me perdonó con la mirada, con el gesto, con esa inteligencia deslumbrante que parecía atravesar las cosas. Poco después, los hechos mostraron que él había tenido una posición

moral, pero también profética, porque la propia ciencia reveló que la famosa “píldora” tenía propiedades cancerígenas. Ahora sabemos, además, que *Humanæ Vitæ* es una de las piezas más hondas sobre el amor y la pareja.

Pero desde entonces, y hasta el último de mis días, le agradezco a Pablo VI ese perdón extraordinario.

Asalto a la Catedral

En la carta que envié al sustituto del secretario de Estado, Giovanni Benelli, a comienzos de julio de 1968, anoté un ejemplo de los gravísimos problemas que afrontábamos: “En estos días un sacerdote español, párroco en una barriada de Santiago, publicará una carta en contra del Santo Padre, de protesta por su venida a Bogotá. No ha habido forma de convencerlo (...). Prefiere ser mártir de una causa que juzga justa”.

En efecto, el 14 de junio, un grupo de sacerdotes, religiosas y laicos de la parroquia San Luis Beltrán, en Barrancas, se había reunido para emitir una declaración cuyo título era *¿Folclore o cristianismo en Colombia?* Reaccionaban de esa manera al anuncio de la visita de Pablo VI a Bogotá, para presidir el 39º Congreso Eucarístico. La noticia de este viaje había producido un tremendo movimiento de fe en la mayor parte de América Latina: era la primera vez en la historia que un Papa visitaba el “continente de la esperanza”; mucha gente, sobre todo del pueblo, se preparaba para ver a este “Mensajero de la Paz”, que traía una palabra de aliento.

No sólo esto implicaba la visita. En un sentido más profético, representaba la decisión de la Iglesia de llevar a la práctica el Concilio en su consecuencia fundamental, el servicio al hombre: todos los hombres y todo el hombre. Lo expresé de esta manera en una entrevista con *U.S. News & World Report* ese año: “Este proceso, válido para toda la Iglesia, se singulariza y reviste de connotación particular en América Latina. Continente en vías de desarrollo, el servicio eclesial a América Latina se concreta en un servicio al desarrollo, entendido en la acepción de *Populorum Progressio*: de condiciones menos humanas, hacia un humanismo integral, que incluye el don de la fe”.

Pero para este grupo de Barrancas, la visita significaba legi-

timar la situación de injusticia que se vivía en gran parte de América Latina.

“¿A qué viene el Papa?”, se preguntaban. “¿A bendecir la miseria, el dolor? ¿A predicar la paciencia en la injusticia? (...) ¿O viene, como otro Cristo, a denunciar la injusticia bajo todas sus formas, a comprometerse con los pobres que sufren, a gritarles a los ricos la verdad del Evangelio? Si esto último hiciera —así lo esperamos todos los cristianos de América Latina—, lo matarían como otro Camilo Torres, o por lo menos lo harían callar”.



La parroquia de Barrancas, cuna de la "Iglesia Joven".

Cuando conocí la declaración, pedí a mis vicarios que tomaran contacto con este grupo y le hicieran ver la inconveniencia de sus actuaciones, con suavidad y cautela. Pasaron varios días de vaivenes en estos diálogos, hasta que decidí hablar yo mismo con quien parecía su dirigente, el sacerdote español Paulino García. Fue una conversación imposible. El hombre estaba totalmente convencido de que era correcto lo que hacía; todos los cambios le parecían poco, quería reformas radicales y de golpe, y se sentía como iluminado para predicar la revolución. Yo me fui enojando mientras transcurría el diálogo. Al final le dije que por qué no se iba a España a proponer esas cosas, a ver si Franco le iba a permitir hablar siquiera.

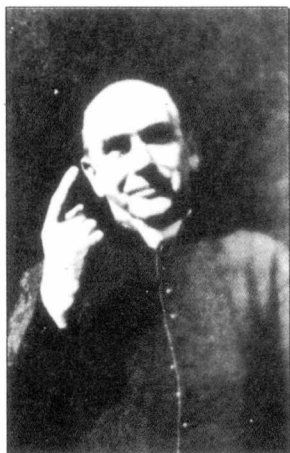
En julio, el grupo, ampliado por estudiantes y sindicalistas, muchos de ellos provenientes de la Juventud Obrera Católica, la Asociación

de Universitarios Católicos y la Juventud Estudiantil Católica, pasó a llamarse "Iglesia Joven" o "Iglesia Clandestina". Primero hicieron una protesta en contra de la construcción del Templo Votivo de Maipú, al que consideraban un lujo. Luego dieron algunas entrevistas (anónimas, por supuesto) criticando a los obispos.

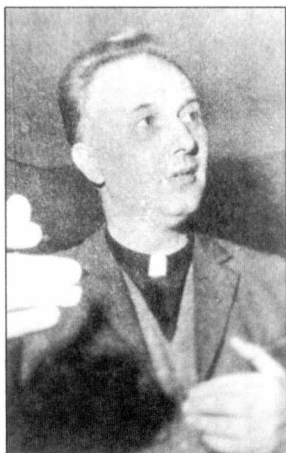
No es extraño que en este clima haya surgido, al otro lado del espectro, otro grupo que también buscó en los obispos el chivo expiatorio para las dificultades que veía en la Iglesia. Así, a fines de julio, la Sociedad de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP), más conocida con el nombre de su revista, *Fiducia*, difundió una declaración titulada *Reverente y filial mensaje a Su Santidad el Papa Pablo VI*. En ella condenaba al marxismo, fundándose en razones teológicas, pero también en que éste negaba "la legitimidad de una proporcionada y armoniosa jerarquía de clases"; en vista de esto, expresaba su angustia porque, a su juicio, algunos eclesiásticos chilenos ayudaban al crecimiento del peligro comunista; acusaba concretamente a la revista *Mensaje*, al Centro Bellarmino y al Desal (el centro que dirigía el padre jesuita Roger Vekemans), y pedía con urgencia que "sea eliminada enteramente la acción de eclesiásticos y laicos progresistas favorables al comunismo".

Hasta entonces, *Fiducia* no era conocida más que por la edición clandestina de un libro llamado *Frei, el Kerensky chileno*, escrito (según revelarían más tarde) por el abogado brasileño Fabio Vidigal Xavier da Silveira. A nivel internacional, su presencia sólo se había reflejado en ciertas actuaciones del *Coetus Internationalis* dentro del Concilio, en las declaraciones de apoyo del obispo brasileño Geraldo de Proenca Sigaud, y en los ataques del fundador, Plinio Correa de Oliveira, contra los obispos de Brasil, y en particular contra don Helder Cámara. Ahora se lanzaban a la conquista del público: su declaración se imprimió como inserción en varios diarios, y se distribuyó en miles de panfletos.

El arzobispo Alfredo Cifuentes, que ya estaba jubilado, fue el único que les dio cierto reconocimiento, a través de una carta. Para despejar equívocos, mi obispo auxiliar Fernando Ariztía emitió una declaración condenando la actitud de este grupo, pero con paciencia y comprensión. Luego afirmó que conversaría con los miembros de la TFP, si así lo deseaban. Pero éstos replicaron con un agresivo comunicado en el que sostenían que la Iglesia de Santiago se cerraba al diálogo. En realidad, era claro que buscaban un pretexto para atacar al pastor. Estaban decididos a declararle la guerra. Igual que los otros: ¡es tan cierto aquello de que los extremos se tocan!



Padre Jorge Gómez Ugarte, vicario general.



Padre Roger Vekemans, S.J., director de Desal.



Padre Hernán Larraín, S.J., director de Mensaje.

A comienzos de agosto recibimos la información de que el grupo de la "Iglesia Joven" intentaría una acción de propaganda en la Catedral de Santiago. Le conté al vicario Jorge Gómez Ugarte y le pedí que contactara al ministro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, para prevenir cualquier acto insensato. El ministro dispuso protección policial en las afueras del templo.

Pero en la noche del sábado 10 de agosto, varios sacerdotes y laicos asistieron al oficio nocturno y se las arreglaron para esconderse dentro de la Catedral. En la mañana del domingo, abrieron las puertas para que ingresaran los demás. En total eran unos 200, dirigidos por ocho sacerdotes. Pusieron un lienzo entre las dos torres de la Catedral, y divulgaron dos documentos: un *Manifiesto de la Iglesia Joven* y *Por una Iglesia servidora del pueblo*.

"Nuestra voz", decían, "no se alza hoy contra el Papa Pablo VI. Tampoco contra el pastor de nuestra diócesis, el cardenal Raúl Silva. Denunciamos la estructura de poder y de riqueza en la que se

ejerce a menudo la acción de la Iglesia; la mentalidad y las organizaciones que condicionan y desvirtúan la labor de la Jerarquía”.

Recibí la noticia en María Pinto, fuera de Santiago. Había ido a oficiar una misa, a las 10 de la mañana. Me comuniqué con mi vicario Gómez Ugarte, quien, muy afligido, me dijo que ya no había nada que hacer. Continué mi programa en San Antonio, sabiendo que



11 de agosto de 1968: mientras la Catedral permanece tomada, los ocupantes despliegan un lienzo entre las dos torres.

regresar aun sería inútil. A eso de las 17, los ocupantes dejaron la Catedral. En el retorno a Santiago, un joven me reconoció al pasar:

—Padrecito —me dijo—, ya le devolvieron su iglesia.

Esa noche reuní en mi casa a los vicarios, quienes resolvieron sacar una declaración que firmó Fernando Ariztía. Entretanto, el Cabildo se hizo cargo de la Catedral, en uno de cuyos muros interiores se halló una leyenda: “El pueblo está sufriendo”. La firmaban las Juventudes Comunistas.

Tras la reunión resolví la suspensión *a divinis* de los ocho sacerdotes que encabezaron la acción. Y emití una declaración cuyo comienzo no olvido: “La acción de unos pocos sacerdotes descontrolados, olvidados de su misión de Paz y Amor, ha llevado a un grupo de laicos y de jóvenes a efectuar uno de los actos más tristes de la historia eclesiástica de Chile...”. Convoqué enseguida a una misa de desagravio, que se realizó con una Catedral repleta.

En los días siguientes, el obispo Carlos González asumió la tarea de hablar uno por uno con los sacerdotes suspendidos. Según parece, los convenció de escribirme una carta pidiendo perdón y reconsideración de la medida. Admití las disculpas y levanté la suspensión.



El cardenal Silva Henríquez, acompañado del vicario Jorge Gómez Ugarte, informa a la prensa sobre la ocupación de la Catedral y las sanciones para los sacerdotes envueltos en ella.

Pero con ello no se mitigó mi propio dolor. En verdad, me parecía que este grupo había cometido un acto de injusticia incalificable; la Iglesia de Santiago estaba en medio de un Sínodo, de un proceso de diálogo que era el más profundo de su historia; yo mismo era criticado ácidamente, y sin embargo nada de eso era importante para estos jóvenes: tenían que emplear un mecanismo traicionero y violento para expresarse.

Por lo demás, el uso político de la toma era difícil de ignorar. La presencia en ella del ex dirigente de la FEUC, Miguel Angel Solar, y el hecho de que la fecha coincidiera exactamente con la toma de la UC, permitían presumir que se quería producir una deliberada identidad entre los dos actos.

Así que tuve una opinión muy dura respecto de la acción de estos jóvenes, que no ha hecho sino reforzarse con los años. Sin embargo, y porque ellos representaron la emergencia de fuerzas descontroladas en nuestra Iglesia, también vi en su acto la señal de nuestros defectos: "No hemos sido quizás suficientemente humildes, pues creíamos que nuestra Iglesia era la mejor de todas; quizás nuestro diálogo no ha sido suficiente; tal vez no hemos sabido darnos a nuestros sacerdotes y a nuestro pueblo en la medida que hoy se necesita".

El tiempo demostró que, si esto pudo ser verdad, más cierto era que los ocupantes de la Catedral habían pensado en otro rumbo, en el que ni el diálogo ni la comprensión tenían cabida. La mayoría abandonó más tarde el sacerdocio.

Al nuncio Carlo Martini, que ya estaba disgustado conmigo, le pareció débil mi reacción ante la toma. Y lo expresó así en el momento de declinar una invitación del embajador de Colombia para una comida que daría en mi honor, poco antes de mi partida hacia Bogotá. Parece que el embajador comunicó la dura respuesta del nuncio al gobierno; el hecho es que éste se enteró de la situación y se propuso hacer un gesto de advertencia al representante vaticano, instruyendo simultáneamente al embajador chileno ante la Santa Sede para que protestara. Un ministro me dijo después que se había tomado esta determinación no sólo por la actuación del nuncio en Santiago, sino también porque su consejo al arzobispo-obispo de Valparaíso, Emilio Tagle, en el sentido de no tolerar "rebeldías" del clero, motivó la renuncia de 23 sacerdotes a sus cargos en esta diócesis, en el segundo episodio grave de aquel período. Los presbíteros, todos jóvenes y varios extranjeros, pedían que en Valparaíso se realizara un Sínodo como el de Santiago, y que se reformaran algunas estructuras para dar más presencia en el gobierno pastoral a los sacerdotes. Emilio Tagle logró superar la crisis poco después, y los sacerdotes se reincorporaron a sus tareas.

El disgusto del nuncio vino a sumarse a un cuadro que a mí me parecía muy poco alentador. Dicen mis colaboradores que en esos días, en una reunión de Consejo de Presbiterio, hablando del incidente de *Humanae Vitae*, la toma de la Catedral y los ataques al Papa, pronuncié una frase que los impresionó:

—No doy un centavo por mi permanencia en Santiago.

¡Menudo lío vinieron a provocar estas palabras! Algunos de los sacerdotes se reunieron, preocupados, y escribieron una carta a la Santa Sede para defender mi condición de arzobispo de la capital chilena, la que fue firmada por varias decenas de presbíteros. Un padre joven y ágil, Luis Antonio Díaz (que después sería mi secretario), entregó la carta al senador Tomás Reyes, quien, alarmado también, se ofreció para llevarla a Roma. Allá la entregó al embajador, quien obtuvo una audiencia con el Papa para hacerle presente su preocupación. Pablo VI respondió que jamás había pensado en



El cardenal conversa con el periodista Leonardo Cáceres, en un intermedio del programa "Polémica", del Canal 13, tres días después de la toma de la Catedral.

mover al arzobispo de Santiago. La inopinada gestión creó un nuevo lío protocolar, porque el canal oficial entre la Cancillería y la Nunciatura fue sobrepasado de hecho.

No retengo muchos más detalles de aquel incidente, entre otras cosas porque parte de él coincidió con mi viaje a Colombia. Lo que sí sé es que las relaciones con el nuncio no volvieron a ser muy buenas, aunque tampoco tuve más problemas de esta magnitud.

El 21 de agosto de 1968, el mismo día en que las tropas soviéticas entraron a aplastar la "Primavera de Praga" en Checoslovaquia, partí a Bogotá. El Congreso Eucarístico empezó al día siguiente, con la llegada del Papa, y reunió a multitudes pocas veces vistas en el continente.

Pablo VI habló para todos: sacerdotes, campesinos, técnicos, enfermos, pobladores, altos funcionarios. Ratificó en cada discurso que la Iglesia es solidaria con la causa del pueblo pobre, con la defensa de sus derechos y su dignidad; fue enfático para condenar la violencia —aun la revolucionaria— e instó a los dirigentes a asumir la urgencia de los cambios. "No olvidéis", dijo, "que ciertas grandes crisis de la historia habrían podido tener otras orientaciones, si las reformas necesarias hubiesen prevenido tempestivamente, con sacrificios valientes, las revoluciones explosivas de la desesperación".

La Segunda Asamblea General del Celam fue inaugurada por el Papa, quien luego regresó a Roma. Fue entonces que yo decidí no concurrir a Medellín. En Bogotá había sufrido innumerables molestias por la toma de la Catedral de Santiago. Era lo único que interesaba a los periodistas: hacían las preguntas más indiscretas y afirmaban las cosas más inverosímiles. Si me quedaba, no podría ni concentrarme en los trabajos. Regresé a Santiago, confiado también en que mis hermanos en el Episcopado me contarían después las discusiones.

Medellín fue un esfuerzo de gran magnitud por traducir el Concilio a la realidad latinoamericana. Sus documentos son de gran trascendencia, aunque algunos de ellos, si se los lee hoy, aparecen influidos por las circunstancias de entonces. De esas deliberaciones surgieron algunos conceptos claves para el desarrollo posterior: la idea de una "economía verdaderamente humana", por la cual se recordaba que la empresa, en la óptica cristiana, no se identifica con el dueño del capital, sino con la comunidad de personas que hace posible la producción de bienes; el concepto de "violencia institucionalizada", con el cual se describía la situación de injusticia objetiva, fáctica y jurídica, por la cual se violaban derechos fundamentales; el de "estructura de pecado", para describir aquellas realidades institucionales que violan la voluntad del Señor, produciendo la pobreza o induciendo a la marginación y la indignidad.

"Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a

la justicia”, decía el documento sobre este tema, “cree también que la justicia es una condición ineludible para la paz... No debe, pues, extrañar que nazca en América Latina la tentación a la violencia. No hay que abusar de la paciencia de un pueblo que soportó durante años una condición que difícilmente aceptarían quienes tienen una mayor conciencia de los derechos humanos”.



El Papa llega a Bogotá, el 22 de agosto de 1968, para presidir el 39º Congreso Eucarístico.

Para llegar a estos formidables resultados, Medellín debió atravesar por debates muy difíciles. Ya se intuía en el aire el surgimiento de corrientes muy antagónicas en el seno de la Iglesia; es innegable que allí hicieron su estreno, por ejemplo, las primeras tesis “liberacionistas”, con el papel protagónico del padre Joseph Comblin, que a la sazón dirigía el equipo teológico del obispo Helder Cámara, de muy notoria actuación en Medellín. Allí también centraron su acción (y posteriormente su crítica más acerba) los grupos integristas, o ultraconservadores, con su ataque a los obispos.

En todo caso, Medellín dio un impulso extraordinario a las prioridades pastorales en que ya estaba trabajando la Iglesia chilena; junto con reafirmar la importancia del laicado, preconizó la forma-

ción de las “comunidades de diálogo” (que más tarde derivaron hacia las “comunidades de base”), una eficaz herramienta pastoral que permitiría integrar a los fieles en sus órdenes propios, de trabajo, de localidad, de familia o de estudios. Medellín hizo que esta experiencia, que el Episcopado chileno había acordado impulsar en su Asamblea de Chillán ese mismo año, alcanzara a las diócesis más pequeñas o más remotas del continente.

Mientras la reunión del Celam concluía en Colombia, en Santiago iniciábamos la segunda y última sesión del Sínodo, con una etapa en septiembre y otra en noviembre. Aunque para estas reuniones se había previsto el estudio de cuatro temas, uno solo copó la totalidad de los debates: el del laicado. (Los otros tres, sobre medios de comunicación, pastoral asistencial y cultura, fueron rechazados por segunda vez). El documento base, el más extenso del Sínodo, con 160 páginas, fue elaborado por un equipo a cargo de Fernando Massad. Tuvo tres grandes líneas de desarrollo, que en cierto modo marcaron los énfasis futuros: los jóvenes, los obreros y los empresarios.

La parte más polémica se produjo en las discusiones entre estos dos últimos sectores. En este sentido, el Sínodo reflejó lo que estaba viviendo la sociedad chilena: una agudización del conflicto de intereses entre grupos contrapuestos, que comenzaban a considerarse enemigos y se combatían en todos los terrenos. A pesar de sus buenas intenciones, el MOAC (Movimiento Obrero de Acción Católica) y la USEC (Unión Social de Empresarios Cristianos) no lograron entenderse; la vieja tensión que mantenían desde comienzos de la década se hizo manifiesta, y hubo incluso rupturas personales entre los sinodales de una y otra organización.

El Presidente Eduardo Frei se mostró muy preocupado por estas polémicas en el Sínodo. Tres o cuatro veces en este período me llamó para explicarme que su generación, y muchas otras, habían sido formadas en el estudio de la doctrina social de la Iglesia y con la guía de la Acción Católica; ahora, ambas cosas eran sometidas a una crítica tan ácida, que él temía que estas vertientes se destruyeran y los nuevos líderes no llegasen a tener una formación doctrinaria solvente. Frei insistió por muchos años —literalmente, hasta su muerte— con esta idea.

También esta sesión tuvo críticas duras al pastor. Esta vez me impugnaron la tendencia a crear grandes organizaciones, según ellos desvinculadas del quehacer pastoral. Entre los reproches más duros y sostenidos, estuvo el de participar en Dilapsa, una empresa construida para distribuir publicaciones católicas, que luego adquirió una parte de Zig-Zag, la mayor editorial chilena de entonces.



Misa del Sínodo de Santiago, realizada poco antes de abrirse la segunda sesión.

La verdad es que Dilapsa era una sociedad en la que participaba el Arzobispado en conjunto con algunos empresarios de la construcción, el más notorio de los cuales era Sergio Torretti. Cuando Zig-Zag ofreció vender acciones, Dilapsa aceptó adquirir un tercio, mientras el otro tercio era comprado por un grupo encabezado por Ricardo Claro. Todo funcionó con cierta normalidad hasta que el 68 Claro quiso comprar un tercio más y tomar el control de Zig-Zag; Torretti consiguió impedirlo, pero Claro se querelló en su contra. Yo quise entonces que el Arzobispado se retirara de esto, que se convertiría en una lucha entre católicos. Pero la inversión me fue enrostrada agriamente en el Sínodo; más tarde, sectores de la derecha llegaron

a decir que el arzobispo amparaba publicaciones pornográficas, debido a que Zig-Zag tenía unas revistas de tono bastante subido. Escuché en silencio: de poco valía que me defendiera, si yo mismo creía que la aventura de Dilapsa no había sido una buena idea.

Hay que decir, sin embargo, que esta segunda sesión tuvo menos fuerza que la primera. Lamentablemente, los representantes del sector más conservador, que estaban en desacuerdo con muchas cosas que se decían en el Sínodo, se fueron marginando y dejaron de asistir. De hecho, tuvimos que reemplazar a más de cien delegados, pero así y todo no se recuperó el empuje inicial.

Sin embargo, de entre la maraña de debates surgió claramente para la Arquidiócesis un conjunto de seis prioridades: en la evangelización; en el carácter misionero; en los pobres; en los "ambientes" vitales, por sobre las estructuras; en la formación de un laicado adulto y responsable, y en la corresponsabilidad pastoral. Con ellas se construiría la tarea pastoral de los años venideros.

Pero si el Sínodo reflejó las asperezas de la vida nacional, fue también porque ellas se habían venido agudizando. Una severa sequía, que completaba ya casi dos años, había elevado los precios de los productos básicos, y la inflación golpeaba los bolsillos más pobres. La agitación seguía en las universidades (todas las cuales iniciaron sus procesos de reforma después de la UC) y en el mundo obrero la CUT, dirigida por los comunistas, había conseguido la plena hegemonía en las organizaciones sindicales. Para hacerles frente, el empresariado había creado ese año la Confederación de la Producción y el Comercio. Y ya resultaba evidente que las plataformas sociales y políticas de ambas serían irreconciliables.

En el campo político, la tensión más fuerte afectaba al partido de gobierno, la DC. Cansado de una dirección que le era adversa y que se quería mostrar independiente de su gobierno, el Presidente Eduardo Frei había decidido intervenir a comienzos de año en el Congreso partidario realizado en Peñaflor. Allí, en una dramática sesión nocturna a la que llegó silenciosamente, Frei puso a su partido frente a la disyuntiva tajante de solidarizar con el gobierno o abandonarlo definitivamente. El aplauso que recibió determinó la caída de la directiva de Rafael Agustín Gumucio, que fue reemplazado por Renán Fuentealba.

Con esto terminó la “insurrección” del PDC, pero no la de su juventud, a la que lideraban Rodrigo Ambrosio, primero, y luego Enrique Correa. Los jóvenes mantuvieron la posición crítica hacia Frei y comenzaron a propugnar una política de alianzas hacia la izquierda, que reuniera al PDC con los partidos marxistas para crear una “Unidad Popular” de arco muy amplio. Estas tensiones se expresaron en las elecciones universitarias, donde la dirección nacional propugnó la formación de listas propias, mientras la JDC propició una entusiasta alianza con la izquierda.

La estrategia de la “Unidad Popular” era impulsada sobre todo por el Partido Comunista, lo que a su vez determinó la ruptura del FRAP, en vista de que los socialistas, endurecidos desde su Congreso de Chillán de 1967, insistían en una política revolucionaria, e incluso armada. El PC cargó sus dados hacia el Partido Radical, en el cual, a la vez, comenzó a predominar la corriente de izquierda, también proclive a un frente amplio. El Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), nacido en Concepción de entre los universitarios más radicalizados, atrajo las simpatías del PS en lo político, mientras que en los hechos iniciaba las “acciones de propaganda” con asaltos a supermercados, bombazos “contra el imperialismo” y formación de grupos paramilitares.

Muchos hombres de Iglesia se vieron envueltos en este torbellino. En octubre, cuando la Conferencia Episcopal se reunió en la Casa de Ejercicios de Las Rosas para examinar las conclusiones de Medellín, los obispos decidimos salir al paso de este estado de cosas. Emitimos entonces una declaración que comenzaba con un llamado a “no dispersarnos” y con una crítica a quienes habían empleado los nombres de “Iglesia Joven”, “Iglesia Clandestina” y otros similares. Llamábamos a mantener íntegra la fe y moral evangélica, firmemente: “Preferiríamos quedarnos solos en nuestras iglesias desiertas antes que claudicar en este punto”.

Pedíamos consecuencia a quienes decían defender los derechos de los más pobres. Y advertíamos: “Una cosa es la justicia y otra es el marxismo (...). Las confusiones no aprovechaban a nadie. Los marxistas saben que no se puede ser a la vez un buen marxista y un buen cristiano”. Y luego sobre la violencia: “En el fondo de esta violencia impaciente hay más odio que amor, más pasión que razón, más

voluntad de ver y destruir el mal presente que de construir el bien futuro, que permanece las más de las veces lejano y confuso". Un párrafo final desaprobaba expresamente "ciertas actitudes de algunos dirigentes estudiantiles de la UC", y "ciertos artículos publicados en *Mensaje*", en los cuales "no sentimos pasar el hálito del amor".

Los jóvenes se molestaron con estas críticas. Algunos organizaron una recolección de firmas con dirigentes anteriores y actuales de la FEUC, y respondieron con una dura carta al Comité Permanente, censurando la "intervención" de la jerarquía en sus opciones temporales y afirmando que asumían plenamente su papel "en la construcción del socialismo". ¡Parecía que lo que les molestaba no era el reproche de la falta de amor, sino el del marxismo!

Por mi parte, llevé la carta al día siguiente de su redacción, el 5 de octubre, a mi reunión con el Papa Pablo VI.

En esa audiencia —donde él me reprochó el cable que le había enviado por *Humanae Vitae*— le conté lo que estaba ocurriendo en Chile. Debí empeñarme en los detalles, porque se mostró muy interesado, y también preocupado, sobre todo por el peso que atribuía a nuestro país dentro de América Latina. El había recibido la opinión de muchos sacerdotes que se sentían desconcertados por el clima polémico que se había creado en la Iglesia, y que veían con temor cómo algunas de sus tradiciones más queridas eran arrastradas por la audacia y el afán de "modernidad" de unos cuantos.

Yo también había oído esas quejas. De hecho, veía en ellas el peligro de que algunos de nuestros mejores padres se desalentaran. Cuando un grupo de ellos me escribió una carta expresándome esas aprensiones, les respondí lo que pensaba que ocurría entre muchos de nuestros jóvenes: "Se les ha debilitado la fe en la Iglesia. La han considerado como una estructura puramente humana (...). Por mi parte, creo y estoy persuadido que mi camino es el siguiente: tener comprensión para con los jóvenes que, llevados tal vez por su ardor y espíritu juvenil, desean cambiar las estructuras de la Iglesia; desean dejar a un lado muchas de las cosas del pasado, con la buena intención de conseguir que la Iglesia cumpla mejor con su misión... Respecto a los demás, el Pastor tiene el deber de manifestar claramente en estos difíciles tiempos... cuál es la idea de la Iglesia en este momento".

A mi regreso, se organizó una Peregrinación Nacional al Santuario de Maipú, con la cual la Iglesia chilena cerraría la conmemoración de los 150 años de la Independencia. Ante casi cien mil peregrinos, centré mi mensaje en la violencia:

—Pedimos a Jesucristo, por la intercesión de su Madre Santísima, que nos haga conocer de qué espíritu somos; que ponga en evidencia ante nuestros ojos que los chilenos, y especialmente los sacerdotes, somos los sembradores del amor y no del odio; que la prueba del supremo amor que debe llegar hasta nuestros adversarios, es dar la vida por los amigos y los enemigos, siguiendo el ejemplo de quien nos amó hasta el fin; que este espíritu de amor es incompatible con el espíritu de violencia y de guerra, y que la prueba única de que somos verdaderos discípulos del Señor, es que nos amamos los unos a los otros.

Pero me temo que era una plegaria en el desierto. La violencia en Chile se había desatado, primero en las palabras y luego, poco a poco, en los hechos. Y no se detendría sino hasta mucho, demasiado tiempo después.

La tentación de la fuerza

En los últimos días de 1968, hablando ante superiores y alumnos del Seminario Lombardo, el Papa Pablo VI afirmó que la Iglesia estaba atravesando un período de “autodestrucción”. Aunque el Santo Padre agregó que confiaba en Jesucristo, que finalmente llevaría a su barca por buen rumbo, la declaración agudizó la alarma que muchos padres venían sintiendo de manera vaga e inorgánica. Menos de cuatro meses después, en abril de 1969, precisó su sentir: dijo que había que preguntarse si no existía un fermento cismático en la actitud de algunos católicos, y se refirió en particular al sufrimiento inferido a la Iglesia por la deserción y el escándalo que provocaban algunos eclesiásticos.

Estas palabras reflejaban con exactitud la preocupación con que veíamos algunos hechos de aquellos días. Querían decir dos cosas: que teníamos que estar alertas, pero que debíamos mantener también la calma. Hablando en televisión con los periodistas del Canal 9 de la Universidad de Chile, en abril de 1969, expliqué que, a mi modo de ver, la crisis por la que atravesábamos no era vital, sino de crecimiento. Recordé que tras el Concilio Vaticano I sí hubo un cisma importante (el de los llamados “viejos católicos”) y que, en cambio, después del Concilio Vaticano II se podían apreciar sólo disensiones dentro de marcos básicos, no luchas de fondo.

Entre las causas de la crisis, enumeré dos que me parecían ser las centrales: la de los sacerdotes que abandonaban su ministerio, y el enfrentamiento entre el clero más joven y el más anciano. En lo primero, la diferencia sustantiva estaba dada por el hecho de que, aceptando la libertad de la conciencia humana, el Concilio había abandonado las viejas tesis condenatorias de la apostasía y abierto la posibilidad de que se retirara quien lo sintiera necesario, sin ser execrado ni perseguido por la Iglesia. En lo segundo, recordé lo dicho

por Jean Guitton, que comparó a la Iglesia con un automóvil: algunos quieren que sólo tenga dos frenos, y otros, sólo dos aceleradores; pero en verdad debe tener un freno y un acelerador.

En materia de aceleradores, en esos días los campeones eran quienes se reunían bajo el nombre de "Iglesia Joven". Después de la toma de la Catedral, este grupo había continuado activo, pero varios de los sacerdotes que lo dirigieron en esa ocasión no parecían sentirse con



Obispo Ismael Errázuriz.

ánimo para insistir. Salvo uno o dos, sus apariciones se hicieron muy escasas en lo sucesivo y la figura misma del daño que infligieron fue desdibujando la identidad de sus protagonistas. Los laicos eran otra cosa; después de todo, ellos no estaban ligados a la antigua cultura de la Iglesia, a sus respetos y a sus tradiciones tan arraigadas.

El domingo 4 de mayo de 1969 iba a ser uno de los días más importantes para la Iglesia de Santiago. Después de los dolorosos acontecimientos del año anterior, el Santo Padre había accedido a nombrar un nuevo obispo auxiliar para Santiago, y tal designación había recaído en Ismael Errázuriz, un sacerdote destacado que era a la sazón vicario episcopal en la Zona Oriente.

Ismael había recibido la noticia con una gran alegría y su

consagración se preparaba con verdadero fervor. Pero el día de la ceremonia, en la parroquia del Sagrado Corazón de El Bosque, un grupo de la "Iglesia Joven" se hizo presente, y en medio de ella el jefe del grupo en Santiago, llamado Leonardo Jeffs, irrumpió en voz alta para exigir que el pueblo católico participase en la elección de los obispos. La interrupción originó una verdadera batahola, porque un grupo de laicos presentes reaccionó con indignación y sacó a empujones y golpes a los manifestantes.



Leonardo Jeffs, jefe del grupo "Iglesia Joven" en Santiago, lee su declaración durante la consagración del obispo Ismael Errázuriz, en la parroquia de El Bosque, el 4 de mayo de 1969. Escucha, sentado, Clotario Blest.

—Me han echado a perder el día más hermoso de mi vida—, dijo después Ismael, verdaderamente dolido por el incidente.

La "Iglesia Joven" pretendió a la postre convertir su violenta invasión en un problema de libertad de expresión. No dijo que incluso el obispo Helder Cámara, que se reunió con ellos poco antes cuando estuvo de visita en Chile, les recomendó hablar con su pastor; tampoco dijo que, si bien se nos informó que harían esto, era una

mera notificación, no un diálogo. Así que ninguno de los obispos chilenos aceptó su tesis; todos solidarizaron con Ismael y recogieron, en respuesta, lo principal de su protesta: "Una idea que necesita expresarse en esta forma, es una idea enferma".

Con el tiempo resulta quizás más evidente la profunda inmadurez que contenían los actos de la "Iglesia Joven", así como otras manifestaciones de irreverencia realizadas en contra de la tradición católica (como por ejemplo la obra teatral *El Evangelio según San Jaime*, de Jaime Silva, estrenada en esos mismos días, donde se ofendía a la fe presentando a un Cristo hijo de un padre tiránico y una madre adúltera); pero también sería inicuo pretender que ellos no tenían conexión con el proceso de polarización política que vivía el país, vertiginosamente acelerado por la proximidad de las elecciones presidenciales.



Villa Las Dunas, San Antonio, abril de 1969: un grupo de pobladores escenifica una obra llamada "El Cristo moderno", para celebrar la Semana Santa.

Prácticamente todo el año 69 estuvo cruzado por estas pasiones. La derecha, que hasta entonces se mostraba debilitada y dispersa, comenzó a recuperar su antigua fuerza con la reaparición de la figura del ex Presidente Jorge Alessandri, cuya candidatura empezó a ser impulsada por grupos independientes, estudiantiles y empresariales. La izquierda, fragmentada en partidos con líneas políticas diferentes, vivía en una tensión entre la estrategia de "frente amplio" impulsada

por el Partido Comunista y la tesis del “polo revolucionario” encabezada por el Partido Socialista. El Partido Radical, fuerza tradicionalmente moderadora de tensiones, fue fracturado desde dentro y se dividió, saliendo un sector hacia la derecha (para terminar apoyando a Alessandri) y otro a la izquierda, para consumir la alianza con el PC.

A su turno, en el partido de gobierno la polémica era tan difícil, que ya se hablaba abiertamente de una posible secesión. Radomiro Tomic, uno de los fundadores de la Falange y del PDC, quizás su orador más brillante, y el hombre a quien todos atribuían el derecho indiscutido de suceder al Presidente Frei, decidió dejar la embajada de Chile en EE.UU. y regresó al país para ponerse al frente de la lucha electoral.

Frei y Tomic eran las dos figuras de mayor peso histórico en la DC. Compartieron luchas tempranas en el seno del Partido Conservador, levantaron al unísono su voz en el Parlamento cada vez que lo creyeron necesario y estuvieron muchos años juntos en el centro de la escena política. Cuando el PDC se hizo fuerte, a Tomic le fue guardada la oportunidad de proclamar a Frei para las elecciones presidenciales, primero en 1958 y luego en 1964. En el subconsciente colectivo de la DC era un hecho obvio que, si había “gobierno por 30 años”, como tan fervientemente lo creían en el 64, el sucesor de Frei sería Tomic.

El mismo Frei me contó que, una vez elegido Presidente, se reunió con Tomic y le ofreció el cargo que quisiera; conversando, acordaron que fuera como embajador a Washington, donde se libraría una parte crucial de la batalla por el cobre, al que Frei consideraba “viga maestra” de la economía nacional y cuya chilenización veía como el eje de su programa. Pero al regresar, la posición de Tomic era indisimuladamente crítica hacia el gobierno de Frei; no eran objeciones directas, porque Tomic tenía una inteligencia privilegiada y porque también guardaba un cariño entrañable y verdadero hacia Frei; pero sus enunciados solían representar justamente lo que no estaba haciendo su antiguo amigo; mientras los partidarios de Frei insistían en que había que proponerle al país la “continuidad” en un gobierno de realizaciones, Tomic ponía distancia y afirmaba que su gestión no sería “continuista”. Tanto es así, que en cierta ocasión Frei, sabiendo que yo tenía una ya vieja amistad con Tomic, me pidió que le dijera que no continuara con sus críticas.



En un agitado ampliado del PDC que tuvo lugar a fines del 68 en Cartagena, Tomic lanzó lo que sería la frase clave de su campaña: "Si no hay unidad popular, no habrá candidatura Tomic". Naturalmente, se refería a una alianza con los partidos de izquierda; pero esto era en sí mismo improbable, porque esos partidos desarrollaban una tan activa como dura oposición hacia el gobierno de Frei. Desde entonces, la contienda electoral se transformó para el PDC en un trabajoso esfuerzo por resolver las discrepancias internas.

El 2 de marzo todas las tesis se pusieron a prueba en las elecciones parlamentarias. Allí quedó de manifiesto la fuerza creciente del alessandrismo, que hizo saltar la votación de la derecha desde un 15% hasta poco más de un 20%; en la izquierda registraron pequeñas bajas el PR y el PS, y una pequeña alza el PC: si los tres se unían, sin embargo, podían acercarse al 40%; el PDC, en cambio, cayó de un 35% a un 31%, la cota más baja de todo su período.

Hubo muchas interpretaciones para estas cifras; en el caso del PDC, se las atribuyó al "natural desgaste" del gobierno. Sin embargo, los números eran elocuentes: si la izquierda no había subido mayormente su apoyo, quería decir que los puntos perdidos por la DC se estaban yendo hacia la derecha, donde la campaña para convencer a Jorge Alessandri de aceptar la candidatura adquiría un ritmo galopante. Este era un dato relevante para todos los involucrados, pero evidentemente algunos de ellos no quisieron reconocerlo.

Exactamente una semana después de las elecciones, varios cientos de pobladores sin casa de Puerto Montt ocuparon terrenos pertenecientes a Daniel Irigoín Oyarzún (llamados "Pampa Irigoín"), reivindicando su derecho a un sitio. Carabineros inició el desalojo en la mañana del 9 de marzo, pero la resistencia fue ardua y generalizada. Los incidentes causaron seis muertos y dejaron más de 50 heridos. La izquierda culpó de inmediato al ministro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, contra quien se sumaron sectores de la JDC y algunos parlamentarios y dirigentes del ala izquierda de su partido. Tomic

estimó que “la sangre de Puerto Montt” hacía inviable la unidad popular y renunció a la candidatura.

En mayo, el PDC se reunió en Junta Nacional en Santiago, para decidir las bases programáticas y políticas de su candidatura presidencial. Dos tesis se presentaron a la asamblea: una, que seguía la idea de la unidad popular, fue auspiciada por la directiva que encabezaba Renán Fuentealba; la otra, que proponía el “camino propio” (sin alianzas, ni a derecha ni a izquierda, con fuerte respaldo a la obra del gobierno de Frei), contó con las firmas de Patricio Aylwin y Jaime Castillo Velasco, entre muchos otros.

Aunque en la Junta había una amplia mayoría en favor de esta última tesis, la votación final fue muy estrecha, porque muchos militantes demócratacristianos querían dar su respaldo a Tomic. De todos modos, el “camino propio” triunfó y Fuentealba fue sustituido por Castillo Velasco. Algunos de los disidentes —Rafael Agustín Gumucio, Alberto Jerez, Julio Silva Solar— se reunieron más tarde por separado, y decidieron renunciar al PDC; meses después constituirían el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que se incorporaría a las negociaciones de la izquierda para obtener un candidato.

En junio el Presidente Frei anunció la consecución de un acuerdo con la compañía cuprífera Anaconda para que el Estado pasara a tener el 51% de las acciones de las minas más grandes del norte, proceso al que se llamó “nacionalización pactada”. La izquierda, que prefería la estatización inmediata, sin pago a las compañías norteamericanas, criticó duramente los acuerdos, y el ministro de Minería, Alejandro Hales, debió sostener duros debates en el Parlamento para conseguir la tramitación del proyecto. Otra vez en esto Tomic, que también era partidario de la nacionalización rápida, criticó la estrategia del gobierno y estimó que ella obstaculizaba un entendimiento con la izquierda.

Los dramáticos vaivenes continuaron hasta agosto, cuando la Junta Nacional del PDC se reunió de nuevo y, por fin, consiguió proclamar a Tomic como candidato, aceptando la tesis de éste de trabajar para conseguir la unidad popular. Según parece, Tomic pensaba que los partidos de izquierda no conseguirían un acuerdo entre sí en torno a un candidato y accederían a una alianza amplia con el

partido al que estaban atacando. Tomic había sido un temprano profeta del entendimiento entre el PDC y el PS, a comienzos de la década del 60, entendiendo que era posible construir juntos un proyecto nacional, popular y anticapitalista, y ahora, en 1969, pensaba que se podría dialogar también con el PC y el PR.

Pero las cosas marchaban en otra dirección. El PR proclamó a Alberto Baltra, el MAPU a Jacques Chonchol, el API y los socialdemócratas a Rafael Tarud, el PC a Pablo Neruda y, finalmente, en contra de la opinión mayoritaria de su propio Comité Central, el PS apoyó a Salvador Allende. Poco después se constituyó un comité de coordinación entre estos partidos, con el objeto de estudiar un programa común, que debía derivar en un candidato común. Lo primero que hizo tal comité fue declarar la tajante exclusión de la Democracia Cristiana como interlocutor.

Con eso se terminó, a fines de septiembre de 1969, la idea de la coalición amplia sostenida por Tomic, y la carrera electoral se lanzó con ferocidad a la caza de los votos.

La Iglesia chilena vivió estos avatares con una intensidad desusada, a veces con cierto apasionamiento que 20 años antes hubiera sido solamente excepcional, reservado a quienes tenían un interés metódico en la política. ¿Por qué ahora las cosas eran tan distintas? Por una razón muy simple, aunque difícil de entender para las mentalidades tradicionalistas: al abrir sus puertas al mundo, y reconocer en plenitud su naturaleza doblemente trascendente y humana, al ponerse en la encrucijada compleja de ser parte de la historia pero velar también por su éxito final, muchos sacerdotes fueron sensibilizados por las opciones políticas y sociales en juego, que les parecían ser parte esencial de sus deberes para con los hombres.

Por supuesto, esto no era un fenómeno local, sino que se retroalimentaba con informaciones y teorías procedentes de todo el convulsionado planeta. En junio de ese año, hablando ante el Colegio Cardenalicio, Pablo VI dijo que algunas de las dificultades de su Pontificado podían esconder peligros graves para la Iglesia. Describió dos: un menor sentido de la ortodoxia doctrinal, y cierta desconfianza en el ejercicio del ministerio jerárquico.

Fue como una profecía. Cuatro meses después, con ocasión del Segundo Sínodo Mundial, convocado especialmente para dialogar

acerca de la colegialidad de los obispos (quizá el avance eclesiológico más sustantivo del Concilio), un grupo de sacerdotes contestatarios se reunió en Roma para exigir la elección por voto popular de los obispos, la eliminación del Código de Derecho Canónico, de la Secretaría de Estado y de los cardenales, el derecho a casarse y comprometerse con causas temporales, y... ¡hasta la elección del Papa por períodos breves!



El obispo de La Serena, Juan Francisco Fresno, recibe al cardenal Silva Henríquez en la ciudad sede de la Asamblea Plenaria de obispos de junio de 1969.

Se trataba, evidentemente, de un grupo menor, pero con esos planteamientos consiguió notoriedad en la prensa. Lo increíble era que tales cosas se fueran a plantear justo cuando el Santo Padre daba la más clara señal de que el progreso en el gobierno de la Iglesia Universal era una de sus preocupaciones prioritarias. El cardenal Seper, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, elevó ante los sinodales un informe que respaldaba todas las tesis sostenidas por quienes éramos partidarios de la colegialidad episcopal en el Concilio. Aunque no se puede ignorar que las sesiones estuvieron marcadas por los episodios que un año antes rodearon la publicación de la encíclica *Humanae Vitae*, lo cierto es que Pablo VI estaba dando un salto inmenso al impulsar con tanta decisión la corresponsabilidad de los obispos y su indispensable participación en los grandes problemas de la Iglesia.

De modo que los pastores chilenos no vivíamos dificultades solitarias. Teníamos conciencia de la magnitud del problema, y que-

ríamos afrontarlo: en junio nos reunimos en La Serena y nos propusimos orientar todos nuestros esfuerzos a reforzar la calidad del desarrollo cristiano, a través del instrumento más eficiente que conocíamos a la fecha, las comunidades de base. Esta unidad celular de la Iglesia no era estrictamente una creación chilena, pero habíamos sido el primer Episcopado de América Latina en definirla como un campo de acción prioritario, asumiendo una opción que fue corroborada en Medellín, en 1968.

Un mes después, en la Asamblea Plenaria que tuvimos en Padre Hurtado a fines de julio de 1969, advertimos sobre el deterioro de la vida espiritual que veníamos observando, sobre el abandono de los sacramentos y ciertas arbitrariedades cometidas en la liturgia, así como una deliberada distancia de la Iglesia y de sus autoridades, patente en el surgimiento de grupos católicos que se constituían sobre la base de su lejanía con la jerarquía.

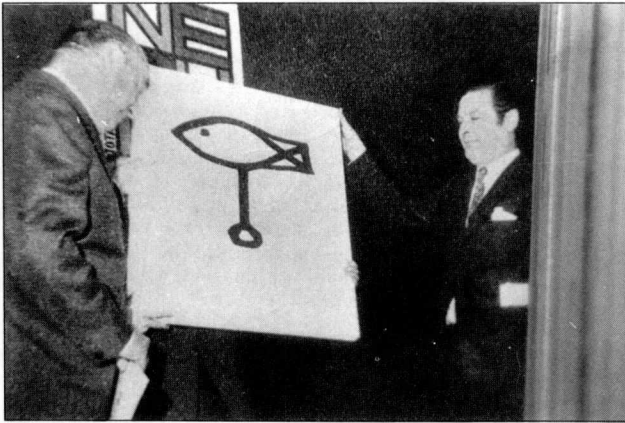
Pero advertimos con especial énfasis sobre las confusiones conceptuales que querían envolver a la Iglesia con las opciones políticas.

“La Iglesia”, dijimos, “se define por su conciencia de ser portadora de una Palabra absoluta: ella no es una ideología, es decir, una doctrina especulativa acerca del hombre y el mundo; no es tampoco una empresa de civilización y promoción humana. Es el signo de Cristo resucitado y vivo... Un cristianismo sin Iglesia sería una mera ideología humana. No nos dejemos instrumentalizar por quienes nos llaman a unimos a ellos en la empresa de liberar al hombre por caminos que pasan por el odio, el ateísmo y la reducción del cristianismo a mera ideología o alienación”.

Por supuesto, la prensa de izquierda, que se mostraba más que interesada en las reales o supuestas “tendencias” de la Iglesia, afirmó que entre los obispos se había impuesto la “línea espiritualista”, contraria a las preocupaciones sociales.

En esos mismos días, el Consejo Superior de la Universidad Católica discutió la posibilidad de entregar un doctorado *honoris causa* al poeta Pablo Neruda, que era la más destacada pluma nacional. La proposición había sido formulada por la FEUC y varios miembros del Consejo la respaldaban; otros la miraban con recelo, porque Neruda era un militante activo del Partido Comunista. Yo apoyé la

iniciativa, y argumenté ante el Consejo que Neruda había sido homenajeadado por muchas instituciones similares del exterior, y ya parecía bastante extraño que la UC no reconociera los tan evidentes valores de un hijo de esta tierra. Agregué que esto podría ser un signo extraordinariamente valioso para quienes estaban un tanto alejados de la Iglesia, y que sólo podría llamar a escándalo a un grupo muy reducido, más bien pusilánime. Recomendé, eso sí, que para no crear imágenes erróneas, se diese el mismo título a católicos destacados en diversos campos. Y dejé la decisión sobre la oportunidad de la distinción al Consejo. Este acordó entregar el doctorado casi de inmediato, en un acto que tuvo lugar el 14 de agosto, donde Neruda leyó un hermoso discurso.



Pablo Neruda recibe el doctorado honoris causa de manos del rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco, en agosto de 1969.

El incidente que esto generó se expresó con muy poca fuerza en Santiago, donde solamente algunos voceros conservadores criticaron el acto. En cambio, en diciembre recibí una carta del cardenal Gabriele Garrone, prefecto de la Congregación de Instituciones Católicas (antes de Seminarios y Universidades), donde me hacía presente la preocupación del Vaticano por “las inquietantes circunstancias en que se halla la UC”.

Como datos fundantes de esta calificación, citaba en primer lugar la concesión del doctorado a Neruda, “un candidato del PC a la Presidencia”; el éxito de la corriente de “extrema izquierda” en las elecciones de la Facultad de Teología; la entrega de cargos impor-

tantes a personas “de tendencias extremistas o implicadas en el juego de política de partido”; la exhibición de una Semana de la URSS, y la proposición de crear “una cátedra de comunismo”.

Respondí con un extenso documento que partía desmontando la primera noción: a mi juicio, la situación de la UC era en ese momento “muy buena”, con notables progresos en la línea académica y en la catolicidad de la institución. En los cargos concretos, expliqué las razones del doctorado para Neruda, como asimismo el hecho fundamental de que a la fecha de tal decisión el poeta no era aún nominado candidato por su partido (lo que, por lo demás, duró



Sacerdotes y religiosas votan en el sector oriente de Santiago durante la elección de vicarios, a fines de 1969.

brevemente y fue poco más que un acto simbólico); en Teología había ganado efectivamente una tendencia de izquierda, pero no extremista, y esto se debía sobre todo a la calidad de los candidatos; en cuanto al nombramiento de políticos, que tal vez se refería a Jacques Chonchol, expliqué que muchas personas de alta figuración política habían estado siempre en la universidad, aunque de todos modos el nombramiento aludido no tuvo mi aprobación; la proposición de una cátedra sobre marxismo era de momento sólo una idea, pero ciertamente con fines académicos, no de proselitismo; en cuanto a la Semana de la URSS, recordé las críticas hechas a Juan XXIII por recibir al yerno de Kruschev; “alguien dijo en esa oportunidad”, escribí, “que lo que le llamaba poderosamente la atención era que la Iglesia *no tuviera* relaciones diplomáticas con la URSS, dada la enorme importancia que esto tendría para los intereses de la Iglesia”.

También se intentó acusarme por una iniciativa relacionada con la elección de vicarios para las distintas zonas pastorales.

Esta era una idea que había tomado forma tras unos pasos experimentales que dimos en 1966, con el Consejo de Presbiterio, y que expresaba la voluntad del Sínodo de Santiago.

Mil 200 personas, entre laicos, religiosos y sacerdotes, fueron convocadas a votar a fines de noviembre de 1969. Debían ceñirse a una lista de 20 nombres por zona, de entre los cuales saldría una terna para que el pastor nombrara al vicario

A pesar de que se trataba de un mecanismo restringido, que buscaba evitar cualquier influencia política, la derecha atacó ácidamente la idea misma de la elección, a través de *El Diario Ilustrado*. Pero los ataques más duros vinieron del sector que se hacía llamar “de avanzada”; ellos objetaban todo el procedimiento, y desde luego el hecho de que la lista se limitara a 20 nombres. Dijeron que los candidatos “eran desconocidos”, a pesar de que se trataba de sacerdotes de las zonas.

Me enfrenté a estos críticos en una asamblea que tuvo lugar en la zona sur, adonde pertenecía la mayoría de ellos. Allí plantearon sus argumentos, y concluyeron afirmando que si no se realizaba a su manera, preferían que la designación la hiciese al modo tradicional. Repliqué con mucha calma:

—He tenido la pretensión de decir que confío en ustedes. Todo lo pequeño que queráis, éste será un gran paso. Ahora se trata de unir dos voluntades: la del pastor que entrega parte de su autoridad y la del pueblo.

Por supuesto, la votación se hizo con una gran concurrencia. En la zona sur fue elegido el padre Pablo Laurin; en el centro, Rafael Maroto; en el poniente y oriente, los obispos Fernando Arizúa e Ismael Errázuriz; en el norte, Mario González y en la zona rural-costa, René Vio.

Durarían seis años en sus cargos. Claro que esto no pudo ser: menos de cuatro años después, el golpe militar cambiaría dramáticamente las condiciones.

Las severas tensiones políticas de aquel período fueron cristalizando, finalmente, hacia el mes de octubre, cuando el gobierno inició conversaciones con las Fuerzas Armadas para estudiar un reajuste a sus remuneraciones, demanda que se venía formulando desde hacía ya tiempo entre la oficialidad.

En medio de la Junta Calificadora del Ejército, el general Roberto Viaux Marambio, que era comandante de la Primera División, con asiento en Antofagasta, escribió una nota pidiendo audiencia al Presidente Frei para hablar de estos temas, saltándose y desafiando de hecho los canales regulares, lo cual, como se vería después, era precisamente uno de sus objetivos.

La superioridad consideró inadmisibile el procedimiento. Viaux fue pasado a retiro al día siguiente y el comandante en jefe, general Sergio Castillo Aránguiz, lo llamó a Santiago. Viaux llegó el día 20, anunció que no había abandonado el mando y se fue a su casa. En la madrugada del 21 una patrulla militar lo pasó a buscar y lo llevó



General Roberto Viaux, jefe de la insurrección, junto al coronel Gustavo Kunstmann.

al Regimiento Tacna, del que previamente se había apoderado un capitán. Este le hizo entrega de la unidad, en la que Viaux se acuarteló con las tropas, apoyado por la vecina Escuela de Suboficiales.

El gobierno reaccionó rápidamente ante el cuartelazo. Canceló la legislatura extraordinaria del Congreso, decretó el estado de sitio, restringió la información y ordenó al general Alfredo Mahn que sofocara la rebelión. Entretanto, Viaux recibió el apoyo del Regimiento Blindados Nº 2 y de un curso de la Academia de Guerra que lo fue a visitar al Tacna. Le tocó al general Emilio Cheyre cercar militarmente a los amotinados, y a un sobrino mío llevar las delicadas negociaciones con el grupo insurrecto: era el subsecretario de Salud, Patricio Silva Garín, que ejercía como médico del Hospital Militar.

Las gestiones de diálogo se realizaron en un ambiente muy crispado (los estudiantes se movilizaron para defender al gobierno, los camiones basureros rodearon La Moneda para impedir un asalto, y en la noche del 21 hubo una balacera, con civiles heridos), pero tuvieron éxito en la madrugada siguiente, con la firma de un acta en la que Viaux ratificaba su lealtad al Presidente y el gobierno comprometía el pronto despacho de un proyecto de reajuste.



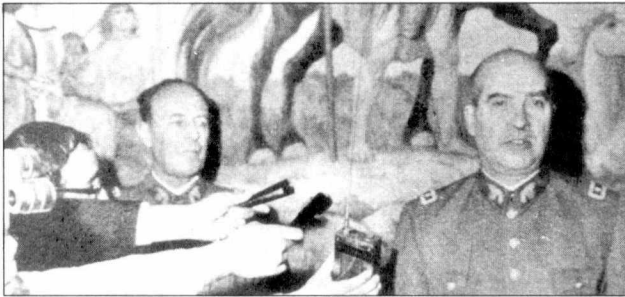
Unidades militares motorizadas y aéreas se movilizan en los alrededores del Regimiento Tacna, acuartelado en la mañana del 21 de octubre de 1969.

El general Castillo renunció y en su lugar el Presidente nombró al general René Schneider; también dejó su cargo el ministro de Defensa, general (R) Tulio Marambio, para ser sustituido por nuestro amigo Sergio Ossa Pretot, que pasó a ese puesto desde el Ministerio de Obras Públicas. El general Mahn y sus compañeros Ramón Valdés y Emilio Cheyre también pasaron a retiro.

Pero la crisis no terminó aquí; en los días siguientes se hizo notorio que en numerosos oficiales se había alojado un duro resentimiento contra el gobierno. En noviembre, cuando se inició el proceso por sublevación contra el general Viaux, unos 200 uniformados

llegaron hasta el Palacio de los Tribunales para solidarizar con el jefe de la revuelta. Por su parte, Viaux, que había insistido en que su movimiento tenía carácter estrictamente profesional y gremial, comenzó a dar opiniones sobre el manejo del gobierno, y poco tiempo después llegó a ser proclamado en una efímera candidatura a la Presidencia.

El "tacnazo" fue un fracaso como asonada y motivó la solidaridad de muchas de las más altas instituciones con el gobierno, pero reveló que una profunda grieta estaba abriéndose en la convivencia nacional. El sistema democrático no era defendido con la fuerza necesaria; muchos grupos, partidos y dirigentes se habían embarcado en los caminos de la violencia y la retórica de lucha continuaba



El nuevo comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, habla con la prensa, mientras observa el comandante saliente, general Sergio Castillo.

subiendo de tono. Las extrañas cosas que rodearon la sublevación del Tacna eran indicios muy claros: por un lado, la derecha estuvo insistiendo, antes del cuartelazo, en que el gobierno diera un reajuste a las Fuerzas Armadas, en un debate que agitó los ánimos más allá de lo prudente, por mucho que sus intenciones no fueran ésas; por otro, algunos dirigentes notorios de la izquierda marxista llegaron al Regimiento Tacna, mientras estaba sublevado, a ofrecer su apoyo a las reivindicaciones.

Yo asistía al Segundo Sínodo en Roma, y a una nueva sesión de la comisión revisora del Código de Derecho Canónico, mientras ocurrieron estos acontecimientos. Mis obispos auxiliares y vicarios emitieron inmediatamente una breve declaración expresando la solidaridad de la Iglesia de Santiago con el régimen democrático libremente escogido y llamando al ejercicio de un patriotismo responsable, que impidiera el enfrentamiento entre hermanos.

Pero como las señales de peligro continuaron, en diciembre del 69 el Comité Permanente del Episcopado publicó una declaración más extensa, analizando la situación del país. Contenía unas líneas, acerca de la tentación de las soluciones de fuerza, cuya clarividencia aún asombra: "La experiencia triste de muchos países nos recuerda que, tarde o temprano, la Iglesia, en defensa de estos mismos valores (democráticos) se ha encontrado enfrentada a regímenes de fuerza. Estos regímenes terminaron por cometer las mayores injusticias para mantenerse en el poder. Nuestra palabra hoy quisiera ser un elemento de reflexión para prevenir situaciones que traerían consigo inútiles e injustificados sufrimientos... Creemos que la supresión del régimen democrático, sea por partidos políticos o por las Fuerzas Armadas, traería tales daños a la nación, a las instituciones y organizaciones nacidas por la voluntad libre de los chilenos, que nos parece indispensable recordar ahora el valor fundamentalmente humano de la convivencia democrática".

El mensaje era bastante inequívoco. La "Iglesia Joven", sin embargo, estimó que otra vez los obispos no interpretaban al rebaño y que de hecho eran "cómplices de la violencia establecida"; ¡pero hasta el diario comunista *El Siglo* consideró desafortunada esta expresión de fanatismo! A su turno, una llamada Unión de Oficiales (R) me escribió para decirme que "Vuestro Reino no es de este mundo", y luego atacó al Episcopado por estar "impartiendo directivas admonitorias a las fuerzas de nuestra Defensa Nacional". ¡Concienzuda interpretación de una carta pastoral!



Tantas voces airadas...

Es un hecho indiscutible que la campaña electoral para las presidenciales de 1970 fue una de las más tensas que haya vivido Chile en este siglo. La violencia se había instalado en el centro de la vida política y, aunque se trataba de grupos minoritarios, contribuía poderosamente a la sensación de que en los comicios se jugaba el todo por el todo. Contribuía también el hecho de que, amagada la tesis del pacto con la izquierda que sostenía Radomiro Tomic, la lucha final sería entre dos polos, la derecha y la izquierda, sin que el centro tuviese nada que hacer.

¿Cómo se llegó a esta situación después de haber comenzado el PDC con un respaldo tan amplio a su gobierno? No soy historiador ni politólogo, pero una vieja experiencia de pastor tal vez sea útil para dar una mirada retrospectiva.

El gobierno de Eduardo Frei comenzó con el mayor apoyo nunca antes visto, numérica y socialmente hablando. Aunque se ha dicho mucho que ello se debió al "mal menor" elegido por la derecha, la verdad es que ese apoyo aumentó en las elecciones parlamentarias de seis meses después. La explicación de esto es sencilla: Frei le pidió al pueblo un Parlamento que le permitiera gobernar, porque el primer paquete de leyes que envió fue rechazado *ipso facto*, tanto por la derecha como por la izquierda; en consecuencia, las elecciones ratificaron la voluntad de que Frei dispusiese de las herramientas para gobernar.

Estos dos triunfos tan resonantes tuvieron, sin embargo, un efecto negativo: el PDC adquirió una visión desproporcionada de su propio poder; se convenció de que, habiendo ganado solo, podía gobernar a solas; y algunos funcionarios transformaron esta confianza en una forma de arrogancia política. Pero, aunque el PDC no hizo ningún esfuerzo por buscar aliados, tampoco hubo nadie que se lo

quisiera ofrecer. Los dos pilares básicos de la gestión le fueron sabotados por lado y lado: contra la reforma agraria se levantó la derecha, que consiguió dilatar la ley hasta mediados del 67; contra la “chilenización” del cobre (la “viga maestra” de Frei), la izquierda puso dificultades que impidieron que el proceso se concretara sino hasta 1968.

Así que Frei dedicó la mitad de su período, sus tres primeros años, a luchar contra la estructura económica del país y contra una legislatura adversa, en una batalla continua que fue sin duda muy desgastadora.



El Presidente Frei y el cardenal Silva Henríquez visitan una planta de Nylinsa, el 17 de abril de 1970. Los acompañan el ingeniero Gunther Trauner y el presidente de la compañía, Carlos Gellona.

Frei debió poner todo su énfasis en esto. Además, estaba convencido de que el crecimiento económico era la única base posible para la justicia social. Debido a esto, dio más importancia a las soluciones técnicas que a las políticas y sociales. Caso característico fue el desdibujamiento de la Promoción Popular —una idea que sí nació en las filas de la Iglesia—, que, tras ser bloqueada por la oposición en el Parlamento, permaneció como una entidad lateral; incluso en esa posición, la Promoción Popular logró hacer grandes cosas y significó el advenimiento de una nueva era para el mundo vecinal y poblacional.

La cuestión del cobre y la reforma agraria consumieron muchos esfuerzos del Presidente; la reforma de la empresa, en cambio, no estuvo en sus planes para el período de gobierno; tampoco la de la banca, que la Juventud de su partido comenzó a exigir prontamente.

En materia social, sus resultados fueron más que eficientes: a pocos meses de concluir el gobierno la educación primaria había aumentado su cobertura en un 46% y el analfabetismo se había reducido de 16,4% a 11%; el total de "soluciones habitacionales" alcanzaba a 470 mil, muchas más que las 360 mil prometidas en el programa; 28 mil familias tenían tierras de la reforma agraria y más de 100 mil campesinos estaban sindicalizados; el desempleo había bajado hasta un 4%, las exportaciones crecieron en un 50% y la balanza de pagos adquirió amplios excedentes. La inflación fue muy baja en los primeros cuatro años, aunque en 1969 comenzó a subir de nuevo, en parte por la sequía que azotó al país desde el 67.

Pero estos éxitos tenían un sabor técnico que no se ganó la simpatía y la comprensión de los más pobres: aparecían un tanto paternalistas, como soluciones impuestas desde arriba.

Los problemas políticos graves, que afectaron el desenvolvimiento económico del gobierno en su fase final, comenzaron el 67. Por un lado, la oposición adoptó actitudes definitivamente intransigentes, que se revelaron bien cuando el Congreso le negó a Frei el permiso para viajar a EE.UU. accediendo a una invitación del Presidente Lyndon B. Johnson. Por otro, su partido comenzó a mostrar fracturas internas entre una línea "oficialista" y una "rebelde", que quería ver transformaciones radicales en materia de propiedad. Ese año el PDC cayó casi diez puntos en las elecciones municipales.

Se ha dicho a menudo que el gobierno de Frei desató expectativas que lo desbordaron, especialmente en las clases populares. Yo creo que esto es cierto; pero también lo es que muchas de esas expectativas fueron usadas políticamente por sus adversarios. Es sintomático que cuando se iniciaron los atentados por parte del MIR y las definiciones revolucionarias en los partidos de izquierda (el 67), fue justamente cuando los índices de producción y crecimiento comenzaron a caer. El 66, el PGB creció en un 6,6%; al año siguiente el aumento sólo llegó a 2,7%.

Afectada por la violencia, la sequía y el menor ritmo de la economía, creo que la clase media, gran soporte del gobierno, se fue sintiendo desprotegida, mientras el proletariado y el campesinado eran azuzados para obtener del gobierno lo que éste no les podía dar. La derecha aprovechó el desencanto de la clase media; la izquierda, el de los sectores más postergados. Las disensiones internas del PDC restaron "piso político" al gobierno, y la decisión de éste de afrontar con energía las dificultades (la derrota inferida por Frei al sector "rebelde", la instalación de Edmundo Pérez Zujovic en el Ministerio del Interior, la ruptura del MAPU) llegó cuando quizás ya era tarde. Y le sirvió a la izquierda, incluso a la que aún quedaba en el interior del PDC, para incrementar sus críticas, atacar al Presidente y alimentar la impresión de que el gobierno se había alejado definitivamente del pueblo. A pesar de su programa exitoso, estos sectores usaron peyorativamente la palabra "desarrollista", cuando no "reformista", para referirse a la política de Frei; la empleaban por contraste con la propuesta de una gestión "revolucionaria". Durante la campaña electoral, el propio Tomic resumió estos sentimientos con una frase que a Frei le dolió enormemente: "Hemos hecho mucho, pero no hemos hecho la revolución".

Con todo, resultaba impresionante constatar que, habiéndose deteriorado el prestigio del gobierno y habiendo caído su partido a las más bajas cifras electorales de la década, hacia el final de su período el Presidente concitaba aún un inmenso respaldo. Una encuesta de abril de 1970 mostró que Frei tenía una popularidad de 61%, a pesar de que, al mismo tiempo, otros sondeos daban al PDC un 30% o menos en las elecciones.

Un comportamiento con ciertos rasgos fatalistas atrapó a la sociedad chilena en ese angustioso final del primer gobierno demócrata-cristiano de la historia. Jorge Alessandri, proclamado candidato, inició su campaña con un programa de giras durante el verano de 1970, en las que fustigó una y otra vez la gestión del PDC. Por las mismas fechas, después de que el PC ejerciera una fuerte presión sobre el PR, la Unidad Popular, formalmente constituida, nominó candidato a Salvador Allende, uno de los precandidatos que había obtenido menos votos dentro de la coalición.

No sé si fue un efecto de la propaganda o del crecimiento que

experimentó la derecha entre el 68 y el 70: el hecho es que desde comienzos de la campaña se pensó que Alessandri tenía las mejores posibilidades de ganar, y que, como en el 58, su cariz independiente le haría derrotar nuevamente a la izquierda y el PDC.

En febrero, el MAPU, y después la DC, presentaron ante el Congreso un proyecto para establecer la segunda vuelta presidencial en caso de que ninguno de los candidatos obtuviese mayoría absoluta. Con sentido visionario, Rafael Agustín Gumucio fundamentó la iniciativa diciendo que una clara decisión de mayorías era indispensable para dar legitimidad al próximo Presidente, dada la situación política y social. Pero la derecha, actuando con la lógica de quien ganaría las elecciones, rechazó terminantemente la propuesta y *El Mercurio* hasta editorializó contra ella, basándose en la tradición republicana de elegir a la primera mayoría relativa en cualquier circunstancia. Socialistas y radicales también hablaron en contra.

Esta actitud marcó decisivamente los hechos posteriores y, desde un punto de vista puramente institucional —no político—, tal vez significó la pérdida de la última oportunidad para evitar la desestabilización del régimen democrático.

Para la Iglesia chilena la situación no era nada fácil. El envolvente juego de la política había penetrado en algunos sectores de religiosos y la polarización surtía los efectos más perturbadores. Por un lado estaban aquellos que, siguiendo una evolución paralela a la de la DC, se habían inclinado cada vez más hacia la izquierda, por desilusión o por convicción. Por otro, los que, formados como sacerdotes en un clima de grandes turbulencias, habían extremado su crítica hacia las estructuras eclesiales y se sentían interpretados por las acciones directas al estilo de la "Iglesia Joven".

Los dos grupos convergieron en este clima preelectoral de tan agudas aristas. Eran una minoría dentro del clero de Santiago, pero se hacían notar. "La inmensa mayoría de nuestros sacerdotes trabaja silenciosamente, en alegría y en paz. Ellos son el rostro más genuino de nuestra Iglesia", le dije al diario *La Tercera* cuando me preguntó por esto. Como decía San Francisco de Sales: "El ruido no hace bien... y el bien no hace ruido".

En marzo de 1970, los obispos nos reunimos en una Asamblea Plenaria que se rodeó de cierto misterio, especialmente porque no

hubo consultas a los consejos de presbiterio. Aunque el temario consultaba varios aspectos de carácter general, lo central fue la actitud del Episcopado ante las elecciones.

En cuanto comenzaron los debates nos dimos cuenta de que casi todos estábamos soportando durísimas presiones de parte de las tres candidaturas. Todos habíamos recibido peticiones o mensajes para que, cada uno en su diócesis, nos pronunciáramos en favor de una u otra alternativa. Y a pesar de que parecía haber cierto acuerdo sobre lo inadmisibles de estas presiones, de pronto se planteó en la Asamblea la proposición de condenar expresamente el votar por el candidato de la izquierda. Sometida a votación, una inmensa mayoría la rechazó. Vino entonces una segunda propuesta: si no se hacía una condena, al menos había que decir que no correspondía a los católicos votar por esta opción. En este punto la discusión se encendió. Pasó un día entero de muy arduos debates, hasta que, pasada la medianoche, se volvió a votar: sólo dos obispos terminaron respaldando esa tesis. La mayoría coincidió en que nuestro papel era de una estricta prescindencia, ahora agudizada porque el peligro de división alcanzaba al seno mismo de la Iglesia, y el clero se podía ver lanzado a la disputa.

Entonces se me pidió que, en compañía del reelegido presidente de la Conferencia Episcopal, José Manuel Santos, diera una conferencia de prensa para dejar constancia de que los obispos no se pronunciarían. Así lo hicimos. “Los políticos quieren meternos a nosotros en la contienda”, declaré ante los periodistas, “pero nosotros les pediríamos que no lo hagan, porque no lo vamos a aceptar”.

Sin embargo, también era necesario insistir en que la Iglesia no se desentendía del progreso material, ni menos de los problemas sociales. La homilía de Jueves Santo, preparada por el Episcopado, aclaraba expresamente esto: “El papel propio y específico del ministerio sacerdotal consiste fundamentalmente en proclamar el Evangelio con la palabra y la vida, a fin de que el cristiano aporte la riqueza de ese mensaje a las opciones contingentes, sin pretender jamás que una de ellas... pueda arrogarse el privilegio de ser la traducción única del Evangelio.”

Aquella declaración insistió también en la necesidad del celibato sacerdotal. Se trataba de dos advertencias indispensables, por-

que muchos padres habían abandonado el ministerio en función de uno de estos dos aspectos, que se ligaban bastante a menudo. La Iglesia a la que acusaban de opresora, de servidora de las clases dominantes, era también la que coartaba sus libertades emocionales, sus pasiones terrenas: uno y otro motivo podían confundirse, en la melaza ideológica de aquellos días, para dejar los hábitos.

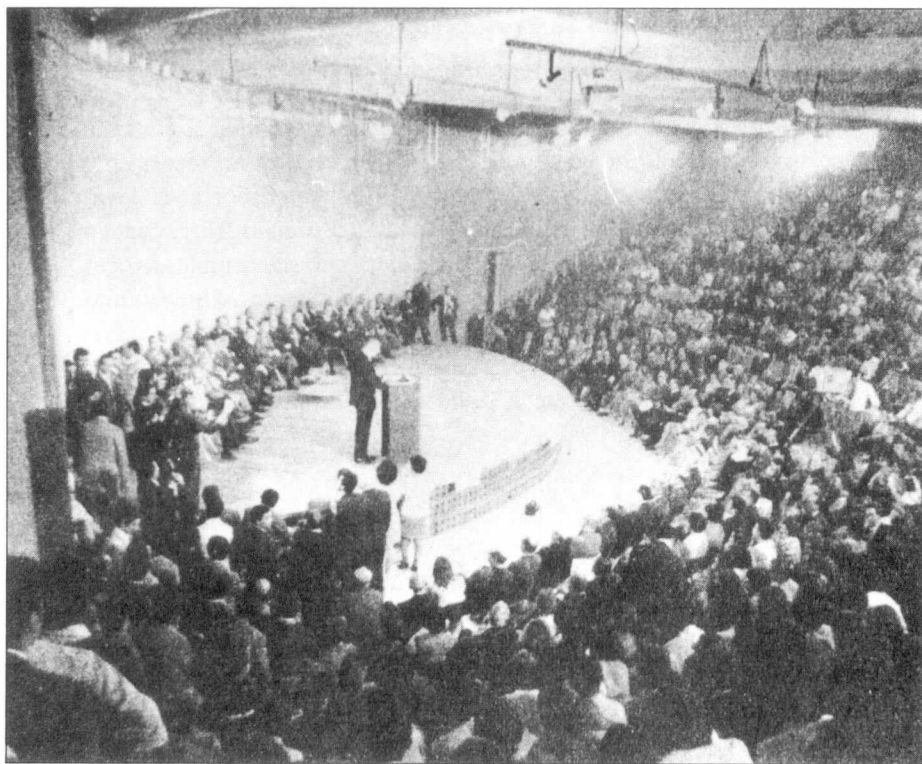
Se había presentado además un conflicto de gran magnitud en Europa: el Episcopado de Holanda emitió a comienzos de año una declaración afirmando que sería necesario para la Iglesia Católica aceptar sacerdotes casados. Como primera opinión obispal de este tipo, suscitó una inmensa polémica en torno al celibato. El Papa salió con energía al paso de la declaración, bastante dolido, pero el Episcopado holandés no retiró su opinión. En nuestro caso, los obispos chilenos nos preocupamos de zanjar el debate expresando el respaldo al celibato como una condición esencial del ministerio.

Con todo, nuestro objetivo principal era contribuir a evitar la polarización. “En este año, en nuestro Chile”, dije en mi mensaje de Pascua de Resurrección, “el Señor llama a los cristianos a ser levadura en la masa, la sal de la tierra, la luz del mundo. Hoy, cuando en nuestra patria, debido a la contienda electoral, suenan tantas voces airadas, pareciendo que la paz y la equidad y el amor no tienen más cabida en ella; hoy, más que nunca, Cristo nos llama a deponer toda clase de violencia y edificar el bien de la nación sobre la base de la generosa entrega, de la serena equidad y de la justicia que se construye sin estridencias”.

En la Universidad Católica, cuya reforma había comenzado a tomar un perfil más claro a través de los cambios académicos, los conflictos resurgieron en abril, también como reflejo de la campaña electoral. En marzo hubo un anticipo de las tensiones, cuando el Consejo Superior, a proposición del profesor Ricardo Krebs, debatió la concesión de un doctorado *honoris causa* para el Presidente Frei, que había sido el alumno más destacado de su generación y el primero en llegar a la más alta Magistratura de la nación.

El ex presidente de la FEUC, Miguel Angel Solar, y Carlos Montes se opusieron duramente en nombre de la izquierda, mientras que por la derecha atacaba el profesor Raúl Lecaros. Pero la proposición consiguió mayoría y el doctorado le fue conferido al Presidente en una hermosa ceremonia en la que leyó uno de sus mejores discursos, acerca de la construcción de la utopía y las limitaciones de la realidad.

En abril, la FEUC (cuya conducción había perdido el PDC en el año anterior, cuando se impuso electoralmente el Movimiento Gremial) inició la publicación de una serie de inserciones en el diario *El Mercurio*, afirmando que el rector Fernando Castillo Velasco intervenía en favor de los grupos de izquierda. El rector replicó con una declaración en el Canal 13, pero Hernán Larraín Fernández, un alumno de gran talento que presidía la FEUC, continuó con sus llamadas “denuncias”.



El Presidente Frei lee su discurso en la ceremonia en la que fue investido con el doctorado honoris causa de la Universidad Católica, en abril de 1970.

A Castillo Velasco y a su vicerrector, Fernando Molina, les pareció que en verdad la FEUC aspiraba a debilitar al rector para derrotarlo en las elecciones que debían realizarse a finales de año, y que inevitablemente estarían cruzadas por la contienda presidencial (donde, como se ha dicho, la derecha esperaba ganar). El rector me dijo que a su juicio las elecciones de la UC no debían mezclarse con las nacionales, cosa en la que yo estaba de acuerdo; luego, agregó, él debía renunciar para provocar una elección anticipada. Acepté su propuesta, advirtiéndole que consultaría al Episcopado. Este respondió que, aun pareciéndole inoportuna la renuncia, la decisión final debía tomarla yo.



El rector subrogante Ricardo Krebs, el rector dimisionario Fernando Castillo Velasco y otros profesores, poco antes de las elecciones de 1970 en la UC.

De modo que acepté la renuncia de Castillo Velasco y nombré en su lugar al profesor Krebs, quien trabajó concienzudamente para

conseguir una votación ordenada. La FEUC se vio atrapada en su propia campaña, no logró levantar una candidatura propia y finalmente tuvo que llamar a la abstención, tal vez con la esperanza de que una gran movilización contra las elecciones las echara a pique.

El 30 de junio se hizo el comicio, con Castillo Velasco como candidato único. Obviamente, obtuvo el 86,9% de los votos emitidos: pero lo más notorio fue que la abstención resultó muy baja en profesores y administrativos, mientras que entre los alumnos alcanzó el 49%, lo que era apenas algo superior a la abstención de las elecciones anteriores. *El Diario Ilustrado*, vocero de la derecha, criticó con cierta acidez a la FEUC por no calcular el efecto de su operación política, que en definitiva legitimó a Castillo Velasco como rector por otros cinco años.

Fracasado este camino, se intentó usar al Vaticano para cambiar la autoridad de la UC. Viéndose ante decenas de cartas y llamados que le informaban de cosas terroríficas en la universidad, el cardenal Gabriele Garrone decidió mandar a un visitador apostólico para que observara qué sucedía. La misión fue encargada al padre jesuita Paolo Dezza, quien trabajó en secreto durante medio mes, revisando programas y entrevistando gente. Su informe no fue en absoluto desfavorable. Lamentablemente, medio año después, habiendo adoptado posiciones encontradas respecto del triunfo de la Unidad Popular, Castillo Velasco y Molina rompieron y el impulso inicial de la reforma se fue perdiendo en medio de la politización.

Entre tanto, el ritmo de la campaña electoral y la violencia asociada a ella iban en aumento. A fines de abril, mientras los funcionarios de la CORA expropiaban el fundo La Piedad, en Longaví, un joven analfabeto que trabajaba en el predio mató con un golpe de garrote al jefe zonal de la CORA, Hernán Mery Fuenzalida. En la acalorada sesión de la Cámara de Diputados que siguió a este desgraciado suceso, un parlamentario llegó a decir que "no le rindo homenaje a familias de gente que anda robando fundos". Esta declaración inaudita, que motivó que el diputado fuese expulsado de su partido, refleja hasta qué punto había llegado el desborde de las pasiones.

En junio, dos jóvenes murieron en Puente Alto en incidentes. En julio, la CUT lanzó un paro nacional para protestar contra las fuerzas antimotines de Carabineros, llamadas Grupo Móvil. Muy

pronto nos llegó la noticia de que en uno de los actos había participado, como orador, un sacerdote. Con el obispo auxiliar Fernando Ariztía investigamos hasta saber que se trataba de Roberto Lebegue, cura obrero, dedicado a la peluquería, francés, de cuyo testimonio tomo un párrafo para que se comprenda mejor aquel clima: "A las 18:45, un grupo me buscó entre los oyentes del mitin, para que dijera el sentido de mi presencia como sacerdote en esta concentración... Me recordé en ese instante de la presencia de Cristo y de Pablo entre grupos que tenían opiniones y actuaciones muy diferentes, y a veces bien opuestas a la liberación anunciada por Cristo. Vi a esta gente caminando 'sin pastores' y me decidí a predicarles 'a tiempo e a contratiempo'... La lucha de clases divide a la Iglesia. Cuando un cristiano se une en la lucha a no creyentes, se separa de muchos cristianos. Divide a la Iglesia. ¿Tenemos que renunciar a la lucha de clases para no romper la unidad entre cristianos?"

Las palabras de Lebegue (que por otro lado era un sacerdote muy sacrificado, con una real vocación evangélica) reflejaban un lenguaje y una concepción que habían venido expandiéndose en América Latina y que llegarían a convertirse, para decirlo francamente, en una verdadera moda. Así, en Colombia había nacido el grupo de Golconda, con el apoyo de un obispo local, que declaraba su opción por el socialismo y por "las diversas formas de acción revolucionaria". En Argentina, el Movimiento Tercer Mundo, también pro-socialista, fue condenado por los obispos. En Perú, alrededor de la Organización Nacional de Información Social (ONIS) se agruparon religiosos y laicos de izquierda que al principio respaldaron al jefe militar Juan Velasco Alvarado, quien derrocó a Fernando Belaúnde Terry. De estas filas estaba naciendo la llamada "Teología de la Liberación", concepto empleado por primera vez en 1968, en Chimbote, durante una conferencia del teólogo Gustavo Gutiérrez.

De modo que el caso del cura obrero no era único, ni mucho menos, en Chile. En Valparaíso, el sacerdote Darío Marcotti asistió a una concentración en favor de Salvador Allende y declaró su apoyo a ese candidato.

En vista de estos hechos, el 20 de julio de 1970 decidí leer en el Canal 13 una carta titulada *Iglesia, sacerdocio y política*. Recordaba en ella el caso de un benemérito padre que, al ser despedido cariño-

samente por sus fieles, agradeció los dones de Dios, para luego añadir: "Tengo la satisfacción de haber recibido esta parroquia con 40 votos, y entregarla ahora con 400".

"La Iglesia como tal", subrayé, "no tiene ni está ligada a ningún sistema ni partido político". Y sobre los sacerdotes: "El servicio propio (de ellos) es ofrecerse para que, en la Iglesia, los hombres encuentren su Casa: la Casa donde se puede legítimamente discrepar, ser incluso adversario, pero no enemigo".

Sin embargo, el problema de los sacerdotes extranjeros iba mucho más allá. Constituían más o menos el 60% del clero de Santiago y, en su mayoría, habían venido a Chile dando muestras de una generosidad sin límites, expansiva, a veces incontenible. En un continente con tantas carencias, ellos proyectaban el compromiso con la pobreza hacia el compromiso socioeconómico y, luego, político, con una facilidad mucho mayor que los sacerdotes chilenos. No quiero decir que los chilenos fuesen movidos por sentimientos distintos; nunca he creído que un sacerdote que trabaje en los medios obreros pueda ser un defensor del capitalismo; me parece natural e inevitable que tienda a pensar como ellos, incluso en sus opciones sociales y políticas. Afirmo, simplemente, que nuestros sacerdotes, conocedores de nuestra idiosincrasia, podían relacionarse mejor con los pobres, pero también con la jerarquía: a los obispos nos era muy fácil dialogar con los padres "comprometidos" chilenos, pero extremadamente difícil con los extranjeros, que a veces se sentían portadores de una verdad indiscutible.

En ese tiempo hubo, por ejemplo, conflictos con los bautizos en sectores populares. Recibimos muchos reclamos de gente pobre a la cual determinados padres les habían negado el sacramento, simplemente porque consideraban que no tenían una educación suficiente en la fe, o porque cuando les preguntaban por qué querían bautizar a sus hijos, les respondían con la antigua expresión española: "Para que no sea moro, padrecito". Estos hermanos extranjeros ignoraban la densidad teológica y el arraigo histórico de la fe popular, y con ello se iba creando un problema pastoral de preocupantes dimensiones.

La radicalización tuvo mucho que ver con estos fenómenos. Un dirigente obrero me dijo una vez: "Por favor, señor cardenal, que los curas no se hagan políticos, porque le creen después lo mismo a Marx que a la Sagrada Escritura; le creen lo mismo, porque están acostumbrados a leer en los Libros Santos la palabra de Dios, y libro santo pasa a ser el Manifiesto Comunista".

Las elecciones entraron en su recta final en agosto. Alessandri, que había marchado como favorito durante la mitad del año, fue perdiendo puntos debido a la intensa campaña que se hizo en su contra, destinada a mostrarlo como un anciano.

Percibiendo ese ambiente, Allende vio más clara la posibilidad de triunfar. El pensaba que en la elección anterior se le había escamoteado la victoria debido al repliegue de la derecha, pero ahora era notorio que no había entendimiento posible entre la derecha y la DC. Así me lo dijo cuando me fue a visitar, unos días antes de las elecciones, igual que en 1964.

En aquella reunión reiteró su compromiso de entonces, en el sentido de que la Iglesia no sería hostigada por su gobierno.

—Le puedo prometer, don Raúl —dijo, con solemnidad—, que no tocaré a la Iglesia ni con el pétalo de una rosa.

Esta frase se le quedó grabada, sin duda. Después de ser elegido, su embajador en la Santa Sede la repitió textualmente ante el Papa Pablo VI; y cada vez que hubo alguna dificultad, él mismo se encargó de recordárnosla, como una promesa que había cumplido.

Tomic, en cambio, creía que sus opciones eran muy altas, pese a todas las evidencias en contrario. En uno de esos últimos días de campaña coincidimos en la mesa del almuerzo de un médico que era amigo de ambos. Le pregunté cómo iban las cosas.

—Muy bien —dijo, con firmeza—. El pueblo ya ha hablado.

Y se explayó sobre el tremendo éxito de sus concentraciones recientes, que habían congregado a cientos de miles de personas. Encontré excesivo su optimismo, pero me reservé mi opinión. Después se dijo que los comunistas habían “inflado” deliberadamente los actos públicos de Tomic, precisamente para crearle una confianza que impidiera su retiro de última hora o el vuelco de sus votantes a la derecha.

Pero como todos preveíamos que el resultado iba a ser muy estrecho, los obispos creímos indispensable evitar hasta el último momento que la Iglesia pudiera ser instrumentalizada. Por eso se pidió al secretario general de la Conferencia Episcopal, el obispo Carlos Oviedo, que el 3 de septiembre, un día antes de las elecciones, emitiera una declaración precisando que los representantes del Episcopado harían la tradicional visita al candidato triunfante sólo si

éste obtenía mayoría absoluta. De no ser así, esperarían la siguiente etapa del proceso electoral, es decir, la ratificación por el Congreso pleno.

Esa noche leí un mensaje a los chilenos pidiendo paz. Aventura un deseo: "El candidato elegido no podrá, ni más ni menos, que ser intérprete, coordinador del anhelo de paz y justicia, tarea que viene desde el pueblo y necesita del pueblo mismo como su principal protagonista e insustituible ejecutor".

El 4 de septiembre hubo mucha tensión. Los tanques salieron a las calles y miles de soldados se esforzaron para vigilar la corrección del proceso. Afortunadamente, no hubo incidentes. Hacia la noche, después de sucesivos cambios en las tendencias que daban el triunfo a la derecha y a la izquierda, Salvador Allende se perfiló como el ganador, por un margen de votos enervantemente estrecho.

El proyecto de la Unidad Popular se había impuesto sobre los demás en la hora decisiva de las urnas, en las conciencias de cientos de miles de chilenos que veían en él una esperanza de días mejores.

Aquella noche dormí con inquietud.

Encrucijada de 50 días

No había transcurrido todavía un día desde el término de los escrutinios presidenciales y de la confirmación de la estrecha ventaja de Salvador Allende, cuando, el 5 de septiembre de 1970, los partidos de derecha que habían apoyado a Jorge Alessandri declararon que la elección no estaba concluida aún y llamaron a la unión de las fuerzas democráticas, entendiendo por ello a los antimarxistas.

Se pretendía que el Congreso Pleno dirimiese la contienda entre las dos primeras mayorías. Los votos de la Unidad Popular no alcanzaban para dar el triunfo a Allende en el Parlamento, pero tampoco los de la derecha alcanzaban para impedirlo. De modo que la pieza clave pasaba a ser la Democracia Cristiana, cuyos parlamentarios quedaban en posición de decidir.

El mismo día 5, el candidato de la DC, Radomiro Tomic, desde su posición de tercero, adelantó un paso: fue a ver a Allende a su casa.

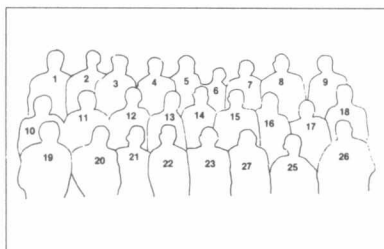
—Vengo a visitar al Presidente electo de Chile —declaró a la prensa expectante—, mi gran amigo Salvador Allende.

No todo el PDC compartía esta idea, evidentemente. Tal vez algunos querrían que el Congreso Pleno no votase por Allende; pero en todo caso, los más creían que era la hora de obtener de Allende garantías de que el país no sería conducido a fórmulas totalitarias. Así que el gesto de Tomic les pareció precipitado. La directiva del PDC declaró que el llamado de la derecha era “ilegítimo”, pero al mismo tiempo anunció que su posición final la adoptaría en un ampliado posterior.

El plazo no era muy largo: 50 días debían mediar entre la elección y la sesión del Congreso Pleno. Por mi parte, estaba convencido de que los obispos habíamos tomado una muy acertada decisión al anunciar por anticipado que no haríamos visita a un



La Conferencia Episcopal en 1970: 1) Enrique Alvear (San Felipe); 2) Jorge Hourton (Puerto Montt); 3) Raúl Silva Silva (auxiliar de Rancagua); 4) Augusto Salinas (Linares); 5) Francisco Valdés (Osorno); 6) José del Carmen Valle (Iquique); 7) Sergio Contreras (Ancud); 8) Carlos González (Talca); 9) Ismael Errázuriz (auxiliar de Santiago); 10) Alejandro Durán (Rancagua); 11) Bernardo Cazzaro (Aysén); 12) Ramón Salas (Arica); 13) Vladimiro Boric (Punta Arenas); 14) Carlos Oviedo (auxiliar de Concepción); 15) Fernando Ariztía (auxiliar de Santiago); 16) Guillermo Hartl (Araucanía); 17) Orozimbo Fuenzalida (Los Angeles); 18) Carlos Camus (Copiapó); 19) Eladio Vicuña (Chillán); 20) Francisco de Borja Valenzuela (Antofagasta); 21) Emilio Tagle (Valparaíso); 22) José Manuel Santos (Valdivia); 23) Raúl Silva Henríquez (Santiago); 24) Manuel Sánchez (Concepción); 25) Alfredo Silva Santiago (honorario); 26) Juan Francisco Fresno (La Serena).



candidato triunfante con mayoría relativa. En un clima de tanta pasión, ello habría sido una intervención política; muchos de los que después nos han acusado de injerencia olvidan ese momento difícil,

que incluso difería de la tradición de la Iglesia de Santiago: en 1964, el cardenal José María Caro, acompañado del obispo Augusto Salinas, visitó a Gabriel González Videla dos días después de la elección donde obtuvo el 40,2%; a Carlos Ibáñez (46,8%) lo visitó al día siguiente, y lo mismo hizo con Jorge Alessandri (31,2%). Sólo en el caso de mi visita a Eduardo Frei se había dado el hecho de una mayoría absoluta.

A pesar de este acuerdo, el 7 de septiembre el obispo auxiliar de Puerto Montt, nuestro buen amigo Jorge Hourton, declaró por su cuenta que “el pueblo de Chile eligió para sí un gobierno democrático y de progreso social; tiene derecho a esperar y exigir que éste le sea dado, y no otra cosa”.

Las palabras de Hourton cayeron en terreno minado. Una mayoría de los obispos sentía temor por el rumbo que podía tomar una coalición predominantemente marxista, que no tenía ya los visos del antiguo Frente Popular (dominado por los radicales) ni se cuidaba de apagar los desbordes totalitarios de algunos de sus miembros. Claro que tampoco era el temor del 64, cuando rondaba el fantasma de la revolución cubana, tan fuertemente anticatólica; no: ahora se trataba de saber si por el camino de la UP se llegaba a un modelo de socialismo nuevo, en democracia, como insistía Allende, o a la imitación de los “socialismos reales” de detrás de la Cortina de Hierro, como proponían ciertos dirigentes. Era, pues, una disyuntiva mucho más compleja, con más matices.

Anticipándose a la posibilidad peor, el padre jesuita Francois Houtart había preparado un detallado estudio sobre las implicancias de estos sistemas para la Iglesia y cómo debían afrontarse. El trabajo se basaba en las experiencias de los católicos en Cuba, Polonia y otros países de Europa Oriental, y comenzaba con una advertencia precisa: “Un régimen comunista significa para la Iglesia la hora de la verdad”.

Houtart había establecido que en todos los casos la Iglesia Católica se lamentaba de no haber superado a tiempo tres aspectos: una adecuada promoción de su doctrina social; una reorientación de sus establecimientos educativos, para borrar la percepción de que favorecían a las clases ricas, y una desconfianza metódica hacia el triunfalismo eclesiástico.

Houtart sostenía que ya no era probable, como en tiempos del stalinismo, que la Iglesia fuese objeto de persecuciones violentas. En cambio, era seguro que había que esperar medidas sistemáticas: intentos por suprimir la enseñanza católica, por restringir los medios de prensa, dificultades con los actos públicos religiosos, presión sobre algunos elementos del clero, e incidentes locales. En un régimen encaminado al comunismo, todo ello iría acompañado de una progresiva radicalización ideológica. Recomendaba, como medidas activas, evitar que los sacerdotes abandonaran el país; mantener una firme unidad en el Episcopado, y de éste con el clero; tomar una opción por el largo plazo, readecuando el trabajo pastoral; mantener la representación de la Santa Sede; reforzar los canales internos, y permanecer, en fin, dispuestos a lo inesperado.

Aunque se trataba de experiencias ajenas, las conclusiones de Houtart eran muy útiles. Recogían lo esencial de lo que había sido la vida de la Iglesia bajo las más difíciles condiciones a lo largo de este siglo. ¿Cómo aplicar esto a Chile? ¿Era realmente pertinente, frente al triunfo de un conglomerado como la UP? ¿Se justificaban las aprensiones, los temores?

Lo cierto es que en ningún sector había mucha claridad. Inmediatamente después de la elección se habían iniciado grandes corridas bancarias y gente de la clase alta había comenzado a emigrar a otros países, particularmente a Estados Unidos. Para salir al frente de estas cosas, el 9 de septiembre el ex Presidente Alessandri ensayó una definición: dijo que si el Congreso Pleno votaba por él, renunciaría para dar paso a una segunda elección, en la que no se presentaría. Se trataba de un mensaje dirigido al PDC, y en concreto al Presidente Frei: en ese caso él podría presentarse a la nueva elección, puesto que técnicamente no serían períodos continuos, como prohibía la Constitución de 1925. Era obvio que en tal situación contaría con los votos de la derecha: en el fondo, ésta le proponía repetir el esquema del 64, al cual había atacado tan duramente durante toda la campaña.

Me consta que Frei tuvo una dura reacción frente a esta idea. Fue tajante para decir que no aceptaría un trato como ése, aunque muchas voces de su propio partido lo instaban a ello. “A quién se han creído que se lo están ofreciendo”, decía, con enojo.

Pero Allende, que no tenía por qué conocer estas reacciones privadas, respondió el día 13 con una gran concentración, en la que amenazó con paralizar el país si se intentaba esta maniobra. “No habrá una empresa, una industria, una tienda, una escuela, un hospital o fundo que funcione, como primera demostración de nuestra fuerza”, dijo. “Deben saber que los trabajadores ocuparán las fábricas y los campesinos la tierra, que los empleados están en las oficinas públicas esperando las órdenes de la Unidad Popular”.



El Presidente Eduardo Frei y el ministro del Interior Patricio Rojas.

Los dirigentes máximos de la UP sentían que debían emplear todos los recursos para cortar de raíz la ambigüedad que se estaba creando en torno al triunfo de Allende. Algunos, entre los que destacaban los socialistas, querían trasladar la lucha al terreno de las masas, movilizándolo a sus partidarios y adoptando una actitud agresiva en las calles. Otros, tal vez más conscientes de lo relativo de su fuerza en una confrontación muy aguda, preferían las iniciativas políticas. Este era muy claramente el caso del Partido Comunista, cuyos dirigentes fueron a verme uno de esos días.

—Señor cardenal —me dijeron—, venimos a pedirle que usted visite a Salvador Allende, para que se entienda que reconoce su triunfo. Usted tiene la primera autoridad moral del país, y su palabra sería suficiente para detener el enfrentamiento que se va a producir si la reacción quiere desconocer la victoria popular.

—No —les dije—, miren: yo no quiero inmiscuirme en esto. No quiero ser yo la causa determinante de quién va a ser Presidente

de Chile. Hay, para empezar, un acuerdo muy claro del Episcopado, que no voy a trasgredir. Pero además, esto les toca a los políticos, a los laicos, según su conciencia. Desde el día en que el Congreso diga por quién va a votar y se sepa quién va a ser el elegido, yo voy a visitarlo al día siguiente. Excúsenme, pero es algo que no puedo hacer.

Tuvimos una larga conversación. Ellos insistieron mucho en sus planteamientos, pero se dieron cuenta de que mi decisión era irrevocable. Les aseguré que, como siempre, la Iglesia defendería los derechos de todos y respaldaría la legítima voluntad del pueblo, pero que para ello era necesario respetar también los caminos constitucionales y no caldear los ánimos más de lo que ya estaban.

El 14 de septiembre, el PDC sesionó para decidir qué haría con sus votos en el Parlamento. Aquí fue donde se presentó por primera vez la alternativa de votar afirmativamente (la otra era abstenerse), siempre que Allende accediera a suscribir un estatuto de garantías para los derechos civiles.

Sin embargo, no se sabía claramente qué actitud adoptarían los uniformados y por doquier abundaban los rumores sobre un golpe militar. Para despejar nuestras propias dudas, pedí una audiencia al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, y le pregunté directamente sobre el tema.

—Señor cardenal —me dijo—, nosotros vamos cumplir la Constitución. Siempre vamos a estar con la Constitución.

El general subrayó que la institución acataría el veredicto del Congreso, y que nada lo haría moverse de esa línea. Confirmaba así algo que había dicho públicamente a mediados de año, y que había causado las iras de la derecha, por entonces convencida de que Alessandri ganaría con mayoría relativa. El planteamiento de Schneider estaba en la mejor tradición constitucionalista del Ejército, pero las pasiones del momento habían hecho que muchos no entendieran esto. El general Schneider sentía las incomprensiones, pero era un hombre de convicciones, sólido y lúcido.

Según se supo después, fue por estas fechas también que algunos sectores del gobierno de EE.UU. se embarcaron en un esfuerzo clandestino por impedir que Allende asumiera. La transnacional telefónica ITT (cuyos intereses en Chile serían intervenidos un año

más tarde) movió todas sus influencias para conseguir que la CIA actuara con medios ilícitos. Ellos habían llegado a la conclusión de que el PDC no estaría disponible para impedir el ascenso de Allende por la vía legal.

Nosotros habíamos escuchado, como todo el mundo, versiones acerca de que Estados Unidos podría intentar intervenir en el proceso chileno; habíamos visto suficientes ejemplos como para aprender. Pero la situación era poco clara, porque el embajador en Santiago, Edward Korry, parecía ser partidario de que el proceso siguiera un curso normal, sin sobrerreaccionar. Lo que no sabíamos aún era que el Presidente Richard Nixon tenía una personal preocupación en contra de Allende, y que no contar con el PDC le había producido irritación.

En efecto, el 30 de septiembre, después de una difícil negociación, el PDC y la UP llegaron a un acuerdo sobre una lista de garantías que sería incorporada a la Constitución, y que incluía aspectos tan importantes como dar rango constitucional a los partidos políticos, consagrar la libertad de opinión y el derecho a réplica, asegurar la libertad de reunión y, sobre todo, de enseñanza, refrendar la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas, reforzar la libertad de trabajo, afianzar el derecho a la seguridad social, y declarar expresamente que las Fuerzas Armadas y Carabineros tenían el uso exclusivo de la fuerza pública.

El senador demócratacristiano Benjamín Prado, que encabezó la tesis de la negociación, la defendió comparando la situación con aquéllas que condujeron a las guerras civiles en España, Colombia y a nuestro propio país, en 1891. El texto fue afinado mientras el plazo fatal se acercaba. La primera quincena de octubre tuvo a la nación en ascuas, entre estas conversaciones y una ola de atentados terroristas dirigidos contra la infraestructura pública. Tiempo después se descubriría que los atentados fueron perpetrados por grupos de ultraderecha que trabajaban en la misma idea de bloquear la asunción de Allende, pero con la intención de culpar del frenesí dinamitero al MIR y la ultraizquierda.

La derecha trató escépticamente el pacto de garantías. El PN consideró que se trataba de “un dique de papel” frente a las pretensiones totalitarias. A pesar de ello, una vez concluidas las negociaciones del PDC con la UP, la directiva nacional, encabezada por Sergio Onofre Jarpa, decidió que “la garantía para nosotros somos nosotros mismos” y que no le cerrarían ahora todas las puertas a Allende.

A su vez, el ex Presidente Alessandri entregó una nueva carta, pidiendo esta vez a sus partidarios que no votasen por él en el Parlamento, “lo cual contribuirá a que don Salvador Allende asuma el Mando Supremo en un clima de mayor tranquilidad, que robustezca la confianza”.

Allende visitó después a Alessandri para agradecerle este gesto; tuvieron una conversación muy formal, pero también muy gentil, en la que Alessandri incluso le entregó los estudios de sus técnicos sobre la realidad nacional.

De modo que, al menos para los líderes políticos principales, las cartas estaban echadas.

Pero esto no era así para todos. Paralelamente a las negociaciones del estatuto de garantías, a lo menos dos grupos de conspiradores habían comenzado a trabajar en una acción directa de última hora, seguramente previendo que la vía constitucional terminaría por cerrarse. Uno era encabezado por el general (R) Roberto Viaux, cuya actuación en el *tacnazo* le había atraído la simpatía de algunos jóvenes de la derecha más extrema. Otro, de más envergadura, estaba organizado en torno a altos jefes de las Fuerzas Armadas: el general Camilo Valenzuela, jefe de la Guarnición de Santiago, por el Ejército; el almirante Hugo Tirado, por la Armada; el general Joaquín García, por la Fuerza Aérea, y el general Vicente Huerta, por Carabineros.

Con posterioridad se ha discutido mucho hasta qué punto dirigió la CIA a estos grupos. En el Congreso norteamericano se probó que hubo contactos y aportes de financiamiento, pero siempre quedó en una nebulosa qué es lo que concretamente quería la CIA que hicieran. Un alto funcionario me dijo tiempo después que mientras

algunos pensaban en una asonada que obligara a los políticos demócratacristianos a llegar a un entendimiento con la derecha, otros creían que existía la oportunidad de dar un golpe de Estado e instalar un régimen militar, que era lo que muchos sospechaban que había querido hacer el año anterior el general Viaux.

Lo cierto es que tanto el grupo del general Valenzuela como el de Viaux llegaron a la conclusión de que el obstáculo para sus propósitos era el comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, por su apego a la Constitución.

Resultaba inquietante observar que los pasos dados por estos sectores eran verdaderamente desesperados. Primero, se habían opuesto a que el Congreso Pleno tuviera autoridad para decidir quién era el elegido; luego, habían intentado que precisamente el Congreso Pleno, en uso de esa misma autoridad, desconociera a la primera mayoría relativa y, finalmente, querían que toda la institucionalidad fuese violentada *de facto*.

El Congreso debía decidir el 24 de octubre. En los días previos, varios intentos dirigidos contra el general Schneider fallaron. Pero en la mañana del 22, 48 horas antes de la sesión crucial y el mismo día en que se votaban en el Parlamento las nuevas garantías constitucionales, cinco vehículos cercaron al automóvil del general en las calles Martín de Zamora con Américo Vespucio. El propósito, dijeron después los culpables, era secuestrarlo. Pero cuando los agresores descendieron de los vehículos y comenzaron a romper con herramientas pesadas el auto del general, éste desenfundó su pistola. Los conjurados perdieron el control y dispararon sobre el general, que cayó alcanzado por cuatro balazos. Los ocho terroristas huyeron, pero su pista comenzó a ser revelada muy pronto. El general Schneider agonizó tres días más en el Hospital Militar, irreversiblemente herido.

El gobierno ordenó el acuartelamiento en grado 1 de las tropas, decretó el estado de emergencia e implantó toque de queda en Santiago. Por un momento pareció que el régimen democrático sufría un golpe de muerte. Pero el feroz crimen no hizo más que reforzar la decisión del Presidente Frei de no moverse ni un milímetro del orden constitucional; también influyó, exactamente en sentido contrario al buscado, en ratificar dentro de los demócratacristianos el acuerdo alcanzado con la UP y su subsecuente compromiso de votar por Allende en el Congreso.

Así ocurrió. El 24 de octubre, el Congreso Pleno se reunió y procedió a votar. Allende obtuvo 153 sufragios; hubo siete votos en blanco, y 35 parlamentarios del Partido Nacional, obedeciendo la última orden de su directiva, votaron por Alessandri. El presidente del Senado, Tomás Pablo, proclamó entonces como nuevo Presidente de la República a Salvador Allende.



27 de octubre de 1970: el cardenal entrega al Presidente electo Salvador Allende una Biblia.

Allende, que siguió la votación desde su casa, por televisión, esperó la notificación oficial y partió al Hospital Militar para conocer el estado del general Schneider, que murió al día siguiente, domingo 25. Esa tarde visitaron al nuevo Mandatario en su casa de Guardia Vieja el comandante en jefe subrogante, general Carlos Prats, y el Presidente Frei. En medio de esos ajeteos, Allende se dio tiempo para llamarme y pedir que lo recibiera en una visita oficial en el Arzobispado, el martes 27.

El lunes 26 se realizaron los funerales del general Schneider. Sobrecogido aún por la magnitud del crimen, dije la homilía conteniendo apenas la congoja. Releo esas palabras: "Reunidos hoy en

este templo, donde la patria ha orado en todos los grandes momentos de su historia, no venimos sólo para llorar al padre, al amigo, al jefe, sino para proclamar nuestra fe en los grandes valores que su sacrificio encarna. La patria no ha muerto: llora emocionada, con noble entereza, ante el sepulcro que es también emblema de grandeza ciudadana, y mudo y elocuente testimonio de amor a las nobles tradiciones republicanas y democráticas de Chile”.

El martes en la mañana, Allende llegó hasta el Arzobispado en medio de una nube de periodistas. Tuvimos una conversación breve, sin temas trascendentes, con mucho humor. Allende estaba gozoso; se le veía jovial, con ánimo, muy optimista. La tensión de los días anteriores había desaparecido por completo.



El cardenal acompaña al Presidente electo a la salida del Arzobispado, tras la visita protocolar.

Notablemente, él había insistido en realizar esta visita de saludo antes que la Iglesia tomara la iniciativa: quería darnos ese privilegio para dejar en claro cuáles serían sus relaciones con nosotros. Cuando se iba a despedir, le ofrecí una Biblia.

—Me gustaría regalarle este libro, señor Presidente —le dije—. Claro que no sé si usted lo querrá aceptar...

—¡Cómo no lo voy a aceptar! —dijo, rápido—. ¡Si aquí está la historia del primer revolucionario del mundo!

Al día siguiente, el secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo Carlos Oviedo, mi vicario Jorge Gómez Ugarte y yo mismo fuimos a devolver la visita al domicilio presidencial, donde Allende nos esperó con su esposa.

Frei dirigió después un hermoso mensaje de despedida a la nación. Sé que estaba verdaderamente conmovido mientras lo pronunciaba. El lunes 2 de noviembre, mientras el primer funcionario de Allende juraba en La Moneda, Frei me escribió una carta que aún me emociona:

“Hoy es el último día que estaré en La Moneda y tal vez sea esta la última carta que escriba en ella. El objetivo es muy simple.



Hortensia Bussi de Allende y Salvador Allende reciben al cardenal Raúl Silva Henríquez en su casa de Guardia Vieja, después de la ratificación por el Congreso Pleno, el 28 de octubre de 1970. Atrás, el vicario Jorge Gómez Ugarte y el obispo Carlos Oviedo.

“Darle las gracias por su amistad inalterable, por el afecto de que me ha rodeado, por la confianza que ha tenido en mí, por la discreción maravillosa que ha demostrado y, sobre todo, por su permanente lección de hombría, de tranquilidad y de valor.

“Usted no podrá imaginar cuánto me ha ayudado saber que usted era el jefe de la Iglesia chilena, porque para mí lo es como cardenal y arzobispo de Santiago. Usted ha sido un gran pastor. Con el tiempo se reconocerá su labor. Su prudencia en un momento tan difícil para Chile nunca será suficientemente apreciada.

“Antes de abandonar este cargo, reciba usted el sentimiento de mi gratitud y, sobre todo, de mi más profundo afecto”.

Eduardo Frei, Presidente de la República.

El 3 de noviembre, Allende fue ungido en el Parlamento con la banda tricolor, en una ceremonia que duró poco menos de media hora. Luego, el Presidente y las autoridades se dirigieron a la Catedral, donde me tocó presidir el Te Deum ecuménico de acción de gracias.

Esta ceremonia fue algo sorprendente. Para empezar, contra lo que muchos creen, ni en el protocolo ni en la historia cívico-religiosa de Chile se establece que haya una Acción de Gracias por la asunción de un nuevo Presidente. Hasta entonces, sólo Alessandri y Frei lo habían pedido, y, por razones muy distintas y remotas, Juan Esteban Montero. Esta vez recibí la solicitud mientras estaba en Roma: me la transmitió la embajada de Chile. Y me pareció doblemente novedosa, porque se trataba de Allende, un hombre ateo y marxista.

Significaba una gran cosa para la Iglesia chilena: establecía el reconocimiento general a su preeminencia como entidad moral, como una institución considerada por encima de las pasiones del día. Por eso insistí en leer yo mismo la homilía (lo que tampoco era usual), para rogar por la patria y subrayar la íntima identidad de la Iglesia con el ser nacional, con sus tradiciones y con su historia. Algunos lo quisieron ver de una manera más estrecha, sin apreciar esta dimensión de tanto valor, y me criticaron por la ceremonia.

Por mi parte, guardo con cierto orgullo un momento posterior, cuando Allende recordó el acto y me dijo:

—Cardenal, el Te Deum fue la ceremonia más importante y más hermosa de la transmisión del mando. Fue la que produjo más impacto en las delegaciones extranjeras, usted no se imagina.

Unos días después pasó algo aún más notable, durante un cóctel en la embajada soviética. Sabiendo que daba un paso delicado, pero decidido también a no perder oportunidad que nos sirviera para dar el testimonio de la Iglesia, acepté la invitación y fui a la recepción. Enrique Kirberg, comunista, rector de la Universidad Técnica, se me acercó y me saludó en voz alta:

—Señor cardenal: nunca me había pasado una cosa semejante; me impresionó profundamente. Allí se hizo en efecto la transmisión

del mando de Chile; en la Iglesia Catedral de Santiago. Todo lo otro fue formal. Esto no lo había visto jamás, y le estoy profundamente agradecido.

El 5, Allende celebró su asunción con un acto en el Estadio Nacional, donde reafirmó su programa, puso encendido énfasis en las "40 medidas" que había prometido para favorecer a los más pobres, se apoyó en Engels para declarar su convicción en un camino al socialismo por la democracia, y planteó que "la nuestra será una revolución a la chilena, con vino tinto y empanadas".

Tal como lo había enunciado, con una reafirmación tan fuerte del respeto a los derechos, el proyecto de Allende pareció en esos días cobrar una fuerza nueva, revestirse de valores que muchos apreciaban y compartían. Incluso la derecha siguió cautelosamente estos discursos. Y yo mismo, tal vez demasiado estimulado por estos aires de cambio, dije a un grupo de periodistas extranjeros que "desde muchos puntos de vista, el socialismo es superior al capitalismo"; aunque en estricta doctrina esto estaba de acuerdo con la enseñanza social de la Iglesia, tales palabras me atrajeron nuevas y más acerbas críticas; y tal vez he de reconocer que su contexto no era el más apropiado.

En los últimos tres meses de 1970, el nuevo gobierno empezó a aplicar rápidamente sus medidas. Entre las más conmovedoras, que contó con la simpatía de muchos hombres de Iglesia, estuvo la entrega, por el Estado, de medio litro de leche a cada niño en edad escolar. Aunque quizás los técnicos dirán que esta decisión era demasiado gravosa para el erario fiscal, y los políticos opinarían que fue un arranque demagógico, es difícil negar que aquí se encarnaba una antigua aspiración en favor de nuestros niños, en muchos casos tan pobres, que su alimentación era apenas un poco de té.

En lo económico, se inició de inmediato la proyectada estatización de la banca, comprando acciones en gran escala a través de la Corfo. Al presentar el presupuesto del 71, el gobierno consideró alzas de salarios, aumentó las pensiones y propuso un déficit fiscal para reactivar la producción. También se agudizó el control de precios y se incrementó la emisión en un 25 por ciento para comenzar 1971.

En el agro, el ascenso de Allende fue seguido por un proceso

de radicalización que se expresó en las tomas masivas de fundos y la formación de grupos de choque. En enero del 71, el nuevo ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, llegó a trasladar su gabinete al sur para dirigir *in situ* “la aceleración de la reforma agraria”; cuando anunció la expropiación de doce grandes fundos, ese mes ya se habían tomado más de 260.

A fines de año Allende indultó a los militantes del MIR que estaban presos; los calificó de “jóvenes idealistas”. Casi simultáneamente, el Partido Socialista nombró secretario general a Carlos Altamirano, quien asumió declarando estar seguro de que muy pronto el Presidente tendría que romper con la “legalidad burguesa”.

Aquel verano encontró a todo el país reorganizando sus fuerzas para un conflicto que ya se intuía en el aire y que sería largo, agotador, angustiante.

Por mi parte, afrontaba en la Iglesia de Santiago síntomas parecidos a los que se advertían en la esfera política. El temporalismo nos había invadido y no pocos sacerdotes confundían su deber de pastores con la opciones políticas del momento. Había presbíteros — y lo sabíamos — que se sentían punto menos que militantes de los partidos de izquierda.

El fenómeno de las deserciones por razones sentimentales (el abandono del celibato) se había terminado mezclando con motivos políticos y sociales. Según nuestras estadísticas, hasta fines de año habían abandonado el sacerdocio 202 personas; cerca de un 70% eran chilenos, y el 30% restante, extranjeros. La cifra era impresionante porque hasta el año 60 se habían retirado sólo 35 sacerdotes.

Pero lo peor de todo fue que ese año 70 se batió un triste récord: ninguna vocación entró al Seminario. Muchos padres que trabajaban en el Arzobispado o en las vicarías coincidían en el diagnóstico: la experiencia de las comunidades disgregadas había agudizado una crisis que, por supuesto, tenía muchas otras causas. La falta de un Seminario “visible”, con un propósito inequívoco, era para mí, ahora, un factor adicional.

En el verano tuve una larga discusión sobre esto en Punta de Tralca con el encargado de las comunidades separadas, el padre Mario González. Fue un encuentro áspero, pero también franco y fraternal, porque Mario era un hombre muy inteligente, sensible y

firme en sus convicciones. El creía que esta forma de trabajo era positiva; por tanto, la defendía y proponía que continuara.

Pero yo, que nunca había estado muy convencido de su utilidad, sentía la certeza de que no podíamos continuar en este camino, menos que nunca cuando la unidad de la Iglesia podía verse en grave peligro. Estaba dispuesto a terminar con esta experiencia y construir un nuevo Seminario diocesano, en un nuevo lugar; como no quería desautorizar a Mario y a los que trabajaban en esto, finalmente acepté que hubiese dos seminarios, uno con la forma de comunidades y otro con los métodos tradicionales. Para este último conseguí fondos europeos y construí un nuevo edificio en La Florida. Los padres de Schoenstatt se hicieron cargo de la docencia. Y a la vuelta de los años, creo que ha sido un magnífico centro de formación.

El Evangelio y los socialismos

Todos sabíamos que en la primera elección posterior a la presidencial, la gobernante Unidad Popular tendría la oportunidad de anotarse un nuevo triunfo.

Los comicios municipales tuvieron lugar a comienzos de abril de 1971, apenas cinco meses después de la asunción de Salvador Allende como Presidente de la República. Los partidos de la UP reunieron el 49,7% de las preferencias, mientras que el PDC bajaba a 25,6% y el Partido Nacional obtenía el 18,1%. A pesar de estas cifras, las dos primeras mayorías individuales quedaron en manos de la oposición (Carmen Frei, hija del ex Presidente, y Sergio Onofre Jarpa, líder del PN) y los asientos conseguidos por ésta entre los regidores fueron también más que los del gobierno.

Aunque la interpretación de los datos era controvertida, para la UP significaron un indiscutible estímulo, al menos subjetivo. No es casual que en las semanas siguientes se produjera una verdadera ola de agitación, la que tuvo sus momentos críticos en el campo, donde las expropiaciones y las tomas, mezcladas unas con otras, llegaron a causar víctimas fatales.

Los obispos mirábamos con inquietud creciente estos hechos. La tensión estaba aumentando por doquier y no se veía quién podría poner atajo a los estallidos de violencia. La ideologización, como se nos había pronosticado, tomaba un ritmo galopante. Y estaba alcanzando a la Iglesia: la influencia del MAPU, cuyos fundadores habían tenido formación cristiana, llevaba aguas católicas hasta el molino de la UP. Para no ir más lejos, el más relevante obrero católico, José Aguilera, que un año antes había sido elegido presidente del Movimiento Obrero Católico mundial, era fundador y miembro de la comisión política del MAPU, hecho que algunos prelados quisieron argüir para vetar su presencia en ese tan importante organismo.

Sabíamos que el más destacado líder del MAPU, Rodrigo Ambrosio (que moriría más tarde en un trágico accidente de auto), se reunía a menudo con sacerdotes de Santiago, especialmente en la zona sur, y que entre sus seguidores se contaban ex seminaristas, jóvenes de la Acción Católica Universitaria y otros cuadros laicos.

Unos meses después, en julio, una nueva fractura del PDC, originada en una disputa sobre la línea frente a la UP, determinó el retiro de varios dirigentes (Bosco Parra, Luis Maira, Pedro Felipe Ramírez y otros), los que constituyeron la Izquierda Cristiana. Este nuevo partido, que se sumó a la UP, también influyó en la posición de algunos sacerdotes y militantes católicos.



Toma del fundo El Carmen, en Cautín, dirigida por el MCR, en mayo de 1971.

A mediados de abril de 1971, la Asamblea Plenaria del Episcopado debía reunirse en Temuco para analizar los temas más acuciantes. Estábamos allá cuando supimos que un grupo de sacerdotes había dado una conferencia de prensa para informar sobre unas jornadas que habían organizado en la zona sur, cuyo contenido podía verse ya en el título: *La participación de los cristianos en la construcción del socialismo en Chile*.

Se trataba, según decían ellos mismos, de 80 sacerdotes, principalmente de Santiago, más algunos de Talca, Valparaíso y Concepción, cuyo rasgo común era su trabajo en medios obreros. El grupo aparecía encabezado por el jesuita Gonzalo Arroyo y los sacerdotes Alfonso Baeza, Ignacio Pujadas, Esteban Gumucio, Sergio Torres y Santiago Thijssen, y emitía ese día lo que sería su primer documento público, de una serie que luego se volvería agobiante. Los sacerdotes

eran prácticamente los mismos que, en septiembre de 1970, desoyendo las decisiones del Episcopado, habían ido a expresarle a Allende el reconocimiento a su triunfo, antes del Congreso Pleno.

La declaración usaba unilateralmente mi frase sobre las ventajas del socialismo y adoptaba la terminología de los partidos de izquierda para describir el momento que vivían el país y la Iglesia. Asumía un compromiso frontal con el gobierno: "Constatamos la esperanza que significa para las masas trabajadoras la llegada al poder del Gobierno Popular y su acción decidida en favor de la construcción del socialismo. Esta intuición del pueblo no es errada". La conferencia de prensa fue más explícita: ante las preguntas, Arroyo dijo que había "prejuicios" contra el marxismo, debido a algunos hechos ocurridos en los países socialistas.



Los sacerdotes Ignacio Pujadas, Alfonso Baeza y Gonzalo Arroyo, en la conferencia de prensa que informa del primer encuentro de "Los 80", el 16 de abril de 1971.

Si la Asamblea Plenaria fue sorprendida por esta repentina irrupción de "Los 80", más lo fui yo. Y como entre ellos figuraban sacerdotes en los cuales yo había depositado mi confianza y amistad, me sentí dolido por la intempestiva novedad. La Asamblea había acordado elaborar un documento sobre las relaciones entre cristianismo y marxismo, pero para mediados de año; esta nueva circunstancia obligó a emitir una declaración breve, que sería una sinopsis del trabajo posterior.

Decía, en síntesis, que la Iglesia no está ligada a ningún sistema político, que el socialismo marxista planteaba interrogantes fundadas, y que el sacerdote podía tener posición política, "pero no debe en ningún caso dar a esta opción el respaldo moral de su carácter sacerdotal".

Enterados de mi enojo, "Los 80" designaron una comisión integrada por Esteban Gumucio, Alfonso Baeza y Santiago Thijssen, para darme las explicaciones: que no pretendían ir contra la jerarquía, que la rueda de prensa no estaba prevista, que no querían hacer proselitismo, que la suya era una opción para que la Iglesia no se convirtiera en un obstáculo para los cambios.

Tuvimos, después de ésa, muchas otras reuniones. Y no puedo negar que sentía que comprendía su situación; veía en algunos de estos sacerdotes una auténtica bondad evangélica. ¿Podría pensar algo diferente de alguien como Alfonso Baeza, cuya consecuencia y autenticidad como hombre de Dios no han puesto en duda ni sus detractores? Ellos trabajaban en medios obreros; eran vecinos de la pobreza, de las privaciones, del sentimiento de injusticia. Los obreros no pueden ser personas que defiendan el orden establecido; sería inhumano pedirles que no tuvieran aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida; del mismo modo, era antinatural creer que los sacerdotes que trabajaban con ellos, con tanta abnegación, no se identificaran con sus luchas.

Pero mi simpatía por estas causas no podía ser obstáculo para ver que ellos equivocaban el camino al politizar su tarea de pastores. No era una equivocación inocua: tal como la habían planteado "Los 80", conducía directamente al marxismo. Y en este punto sí que yo no tenía dudas de que terminarían enfrentándose con el magisterio de la Iglesia. La doctrina marxista no tenía posibilidad de conciliación con la doctrina católica, y cada vez resultaba menos clara la distinción que algunos hacían entre una categoría de "análisis marxista" y el marxismo como opción concreta y actuante. Esto se perfilaba nítidamente en el libro *Teología de la Liberación*, publicado el año anterior por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, que daría el primer impulso teórico a esta corriente. Gutiérrez fue justamente el "invitado estelar" a la primera jornada de "Los 80".

La polémica no tardó en estallar. Varios padres y teólogos les dirigieron cartas de críticas o recriminaciones a "Los 80", subrayándoles que la suya era una actitud puramente política, a la que querían revestir (en palabras de Beltrán Villegas), con una "plusvalía" teológica, y que su espectacularidad reflejaba un hondo clericalismo.

En sus respuestas a estos padres, "Los 80" insistieron en que

se sentían en comunión con la jerarquía y que no pensaban formar un movimiento dentro de la Iglesia. Por mi parte, sin embargo, estaba convencido de que se pretendía justamente crear una fracción socialista dentro de la Iglesia; de otro modo, era difícil explicar el revuelo; era difícil creer que no hubiera en ello un acto proselitista. La tendencia del grupo a establecerse y captar más adherentes corroboró esta impresión sólo unos días después, cuando un grupo de once profesores de Teología de la Universidad Católica emitió un comunicado de respaldo a "Los 80". Varios de ellos se integrarían más tarde a la estructura orgánica que adquirió el movimiento.

Pese al bullicio, sabíamos que eran una minoría. La Oficina de Sociología Religiosa, dirigida por el padre Renato Poblete, acababa de terminar una encuesta entre más de 700 sacerdotes. Según ella, un 52% de los presbíteros creía posible colaborar con los marxistas, pero dejando muy claras las diferencias; un 82% rechazaba las definiciones partidistas en el clero.

En el medio del debate, a fines de abril recibí un llamado del Presidente Allende. Quería decirme que la Central Unica de Trabajadores (CUT, a la sazón bajo control comunista) me invitaría al acto del 1° de mayo, al que él asistiría y le gustaría que pudiese yo estar ahí en fecha tan señalada.

En verdad, yo tenía un compromiso para ese día: una de mis hermanas cumplía un aniversario de vida religiosa y había quedado de ir a acompañarla a Talca. Así se lo dije al Presidente, quien lo lamentó y me pidió que de todos modos lo pensara.

Pero yo no quería asistir a ese acto. Con todas las acusaciones que soportaba desde la derecha, sentía que mi presencia sería un nuevo factor de encono; tampoco ignoraba que la izquierda buscaría instrumentalizar lo que hiciera y dejara de hacer allí. Pero, por otro lado, era la fiesta de los trabajadores: quizás la Iglesia desperdiciaría una oportunidad para marcar su presencia en un medio que estaba entre sus prioridades pastorales.

Unos días después recibí la invitación oficial de la CUT, firmada por su presidente, Luis Figueroa, y el secretario, Nicolás Pérez Suárez. Iba a responderla negativamente. Pero, en una sesión del Consejo de Presbiterio, varios padres plantearon que yo tenía que aceptar. Recuerdo que Renato Poblete usó un argumento muy persuasivo:

—Don Raúl —dijo—, Wyszinski es muy distinto de Mindszenty. Usted lo sabe bien. El primero ha mantenido el diálogo con el gobierno de Gomulka, y consigue muchas cosas para la Iglesia y la fe de Polonia; y el segundo se opuso con todo, y está en la cárcel, aislado y sin poder dar su mensaje.

También habló Luis Antonio Díaz, asesor de la JOC en Santiago, para quien mi presencia en el acto era muy importante. Poco antes, los asesores de la JOC habían intentado expulsar al padre Díaz por no querer adherir al programa socialista, y yo le había exigido quedarse. La JOC estaba de hecho dividida en dos; su ausencia en los actos del Trabajo sería muy dañina.



1° de Mayo de 1971: el cardenal en el estrado oficial de la CUT, junto al ministro del interior, José Tohá, y el Presidente Allende.

Como yo insistía en que debía ir a Talca, Poblete y otros padres dijeron que me conseguirían un helicóptero para que me llevara directamente al terminar el acto. Agregaron que debía dar un mensaje a los allí reunidos. Como se sabía que el único orador sería Allende, ellos mismos se comprometieron a lograr que se leyera un texto nuestro. Y Figueroa los autorizó. En él aprovechamos de anunciar que el Episcopado había acordado pedir la canonización del padre Alberto Hurtado.

Así fue como llegué hasta el estrado de la CUT. Y como la política tiene unas reglas casi increíbles, las fotos que allí me tomaron fueron usadas primero por la UP, y después, bastante después, por la derecha e incluso por el régimen militar.

El 27 de mayo, finalmente, el Episcopado emitió el documento de trabajo *Evangelio, política y socialismos*, en cuya redacción tuvo importancia el padre schoenstattiano Hernán Alessandri. Era un análisis doctrinario de primer nivel, que quería demostrar que la Historia es guiada por la liberación de Cristo, pero de una manera integral, puesto que las estructuras de opresión no están en un solo lado, sino en toda obra humana. Explicaba que la opción de la Iglesia por los pobres no debía entenderse a la manera clasista, excluyendo a otros, sino como la búsqueda de la participación y la justicia más allá de los sistemas políticos.



Ejemplar original del documento "Evangelio, política y socialismos".

El análisis del pensamiento marxista, decía, no se puede desvincular de sus resultados concretos, incluso reconociendo una intención positiva en su declarado amor al hombre. Los cristianos debían tomar su opción en conciencia, pero con pleno conocimiento de los riesgos e implicancias. Y debían, en fin, luchar por los valores del Evangelio. En cuanto al gobierno, la Iglesia mantendría el respeto de siempre por la autoridad legítima.

Aprovechando el llamado a meditar sobre este documento, "Los 80" no demoraron en responder con unas *reflexiones*, a mi parecer bastante pobres, con muchas consignas y pocas ganas de examinar el fondo. Respondí con un *Comentario a las reflexiones*, anotando que no me parecía que fuese un aporte el análisis crítico de "Los 80".

Mucho papel se invirtió en esos días y en los siguientes. La verbosidad del debate fue, quizás, una de sus características centrales. Y es innegable que todos entramos en ella: yo me vi envuelto en un intercambio con el obispo Bernardino Piñera, que consideró muy severo el *Comentario a las reflexiones* y que quería descubrir elementos positivos en "Los 80". Releo una de esas cartas, que explica por qué reaccioné con fuerza:

"No puedo aceptar que alguien pretenda desvirtuar un acto serio de magisterio episcopal, partiendo del supuesto, nunca demostrado, de que los obispos son tributarios de una mentalidad alienada, ahistórica, anticientífica y clasistamente determinada. Aceptar eso implica disociar la Iglesia... en el fondo, entregarse maniatados a la criteriología marxista, para la cual no hay una verdad, una moral, una fe, que no sea expresión y defensa de una clase".

Viendo que el problema se extendía por diversos ámbitos, aproveché la apertura del Claustro Pleno en la UC para aclarar la tarea que cabía a los jóvenes católicos: "Así como no podemos imponer por decreto un humanismo cristiano, tampoco podemos prohibir por decreto la marxización de nuestra universidad... Si fuera cierto que este peligro de marxización existe y crece, no queda otro camino... que robustecer la vitalidad de nuestro humanismo cristiano, fortaleciendo la vitalidad de la fe, la esperanza y la caridad cristiana".

En julio, varios de "Los 80" (no todos) decidieron dar un salto cualitativo y organizaron una jornada acerca del sacerdocio, con el fin de aportar al Sínodo de Obispos que se realizaría en octubre en Roma. Esta vez los convocantes se hicieron llamar "Los 200", y sus objetivos apuntaban directamente a la Iglesia. Esta jornada fue mucho más dañina que la anterior (incluso en términos institucionales, porque un vicario, Rafael Maroto, se unió al grupo) y sembró más desconcierto. Por este motivo, reafirmé mi convicción de que se trataba de una escalada.

Las proposiciones que emergieron de “Los 200” mezclaban y confundían deliberadamente las opciones políticas por el socialismo con una eclesiología “revolucionaria”, que empezaba por discutir el celibato, pero que en el fondo apuntaba a la disolución de toda estructura para sustituirla por una especie de Iglesia abstracta, inconcreta, sin definición ni tarea específica. (El Sínodo romano, en octubre, hizo una sólida reafirmación del celibato, por amplísima mayoría. El cardenal Suenens, que representó la posición más avanzada, pidió la ordenación de hombres casados, pero jamás mencionó nada que pudiese desnaturalizar la misión del sacerdocio).

Tal vez lo más grave de estas discusiones era una omisión: el absoluto silencio, la inacción y, en casos extremos, hasta la coonestación por estos sacerdotes de la violencia y la división, que aumentaban aceleradamente en el país.

El 8 de junio de 1971, un comando del grupo extremista Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) emboscó al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic en una calle de Providencia. Tal vez ignorante de que, desde Caín, el crimen significa la doble muerte del que cae y del que mata, un hombre lleno de odio rompió el vidrio del auto y disparó diez balas sobre el desarmado dirigente demócratacristiano.

La policía dio muy pronto con la pista de los criminales y, tras una intensa balacera, los capturó... muertos.

El crimen no era un acto solitario. Venía a sumarse a un clima en el cual la política iba perdiendo sus límites morales y todo podía justificarse en nombre de las ideologías, incluso el homicidio a mansalva. Impactado por este ambiente temible, invoqué al país desde la Catedral de Santiago, ante el féretro de Edmundo Pérez Zujovic y recordando la muerte todavía reciente del general Schneider: “Dos veces, dos hombres: ¡ya es demasiado! Tenemos que matar el odio, antes de que el odio envenene y mate el alma de Chile”.

Pero a nuestros sacerdotes “rebeldes” sólo parecía preocuparles la militancia de la Iglesia junto al gobierno.

Sin embargo, sé muy bien que les extrañaba el trato deferente que el Presidente Allende entregaba a la Iglesia de Santiago y a este viejo pastor, tan burgués y tan representativo de la “estructura de poder”. Les inquietaba este fenómeno y murmuraban sobre él. En la

UP, con más humor y menos complejos, había quienes decían que yo me había subido al “carro de la victoria”.

Debo decir la verdad: yo desconfiaba de este trato preferencial; creía que era una medida táctica, y que más tarde sonaría la hora de la verdad. Pero, claro, las cosas no eran tan simples —nunca lo son—, y por otro lado veía que el Presidente insistía en la vocación democrática de su proyecto, aun cuando afrontaba una oposición implacable y la manifiesta discrepancia de no pocos de sus partidarios.



El niño José Luis Pérez Yoma encabeza los funerales de su padre, el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic.

Varios obispos tenían también estos sentimientos encontrados. Uno de ellos contó que en cierto acto público en su región, el representante del gobierno había comenzado su discurso diciendo: “Señor intendente, señor alcalde, *excelentísimo* señor obispo...”. Y este prelado sintió que manifiestamente le estaban tomando el pelo, por lo cual proponía no aceptar más estas invitaciones. Pero eso nos hubiera cerrado puertas que queríamos mantener abiertas.

Conversé de esto con Pablo VI en octubre, cuando viajé a Roma; y ese intercambio reafirmó mi intuición de que, así como la Iglesia no debía ser refractaria al cambio social, tampoco podía

constituirse en juez de los gobernantes; su voz debía ser firme para defender los valores evangélicos, pero no para introducirse en la lucha política.

La propia apreciación de los dirigentes marxistas era muy sutil respecto de la Iglesia.

Una noche de ese año invité a cenar a mi casa a Luis Corvalán y Volodia Teitelboim, los más notorios jefes comunistas. Aunque no la ocultamos, la reunión casi no se conoció (yo estaba preparado para alguna nueva campaña). Y ¿qué dijeron ellos? Lo que nuestros “rebeldes” no apreciaban: que la voz de la Iglesia era una de las más poderosas del país, que su credibilidad entre los pobres no tenía parangón, que en sus propias bases había respeto y atención para los pastores. Mireya Baltra, también comunista, parlamentaria y dirigente de los suplementeros, que también me acompañó a cenar en una ocasión, llegó más lejos: dijo que a su juicio un 70% de las bases comunistas eran católicas, o se confesaban católicas.

No eran elogios. Lo creían de verdad. Y por esos nos invitaban a todo: no por mí, sino por la Iglesia de Santiago. En junio, para la nacionalización del cobre (que fue aprobada por unanimidad en el Congreso), el Presidente quiso que fuera a la ceremonia de firma: pero yo no estaba en Chile, e invitó entonces al obispo auxiliar Ismael Errázuriz.

A cada rato debíamos discernir en qué lugar y momento era apropiado estar o no estar. En diciembre, Allende me pidió que fuera a la firma del proyecto para crear la Cámara Unica del Congreso; pero este era un punto que tenía que ver con su estrategia de poder, así que me preparaba para excusarme, cuando el propio Allende, que se dio cuenta, me llamó:

—Señor cardenal —dijo—, hay un malentendido. Le ruego que me perdone, pero este asunto de la firma del proyecto es una cosa política, y muy discutida. No me parece muy justo ni muy oportuno que lo molesten a usted por eso.

¡Hasta ese punto llegaba la prudencia con que se nos quería tratar! Más de una vez comenté con mi clero que este trato era diametralmente distinto del que nos brindaban los políticos católicos; aunque esto no significara confundir la cercanía doctrinal de cada quien, y aunque fuese lamentable, los dirigentes marxistas mostraban una

conciencia más refinada de la importancia de la Iglesia en la vida del pueblo chileno.

En noviembre se produjo la visita más controvertida del período: Fidel Castro, primer ministro de Cuba y jefe indiscutido de la revolución, llegó para estar unos diez días en Chile, aunque se quedó casi un mes.

El 22 de noviembre tuvo un encuentro con "Los 80", donde declaró que para él la alianza con los cristianos era de carácter estratégico, no sólo táctico.

Al otro día nos visitó en el Arzobispado. Este encuentro fue muy debatido, pero pocos notaron dos cosas: primero, que me fue solicitado por el propio Fidel Castro; y segundo, que entre esa petición y el día 23 tuve el tiempo necesario para hacer consultas con la Santa Sede. Fue Pablo VI quien me recomendó aceptar esa reunión, y me dio algunas sugerencias para ella.

Entre otras, la de permanecer acompañado por dos testigos inobjektables: el obispo auxiliar Ismael Errázuriz, quien reforzaría la presencia de la diócesis como tal, y el obispo Carlos Oviedo, secretario de la Conferencia Episcopal. Precisamente Oviedo hizo la detallada relación en la que ahora me baso para reconstruir ese momento.

Fidel Castro llegó a nuestras oficinas en la tarde (a las 18.45), acompañado por el ministro secretario general de gobierno, Jaime Suárez (que era su edecán oficial en el viaje), el ministro de Educación de Cuba y su embajador en Chile, además de un oficial de la FACH. En nuestro pequeño grupo estaba además el padre Sergio Valech, a la sazón secretario del Arzobispado.

Después de las presentaciones, el ministro Suárez dijo que quería dejar a Castro a solas conmigo, e invitó a retirarse a todos. Valech los acompañó a otras oficinas, pero los obispos Errázuriz y Oviedo, como estaba convenido, se quedaron junto a mí. Castro aprovechó este tema para comenzar.

—Señor cardenal —dijo—, yo he pedido que esta entrevista sea a solas, porque quiero mantener reserva y discreción acerca de ella. Creo que no es necesaria ninguna publicidad.

Le respondimos que estábamos de acuerdo.

—Pero, señor primer ministro —dijo—, yo quisiera conocer

ahora los verdaderos motivos por los cuales usted ha solicitado este encuentro.

—Me parece muy justo lo que usted me pide, cardenal —contestó—. En verdad, yo tengo tres razones para venir a saludarlo. La primera es que cuando se programaba mi visita, el gobierno chileno me envió una lista de las personas que debía ver y otra lista de las personas que no debía ver. En la primera lista se encontraba usted, cardenal. Por eso, cumplo un elemental deber de cortesía con Chile. La segunda razón es que yo conozco las buenas relaciones que tiene el gobierno chileno con usted, y cómo usted comprende las tareas que está desarrollando el gobierno popular. Por esta razón, me siento



El cardenal Raúl Silva Henríquez y el primer ministro de Cuba, Fidel Castro, atienden a la prensa a la salida de su encuentro privado, el 23 de noviembre de 1971.

también en la obligación de expresarle mi reconocimiento a quien está así ayudando al gobierno. Y la tercera razón es que vengo como revolucionario, porque veo que el trabajo de la Iglesia concurre en muchas partes a la tarea de liberación de los pueblos. Estoy consciente de que esta visita puede producirle alguna incomodidad, señor cardenal, porque aparecerá para muchos como un acto de propaganda política. Pero yo vengo sinceramente a saludarlo, por lo que ya le he dicho.

—Bien, señor. Comprendo lo que me dice, y se lo agradezco. Quiero decirle que la posición de la Iglesia es de compromiso con la tarea de liberación de los pueblos latinoamericanos; ése es el gran

empeño que se tiene, y que aparece más notorio últimamente desde el Concilio, Medellín, las encíclicas papales. Y por eso la Iglesia tiene también que mirar con simpatía y compromiso a todos los que se empeñan en tareas semejantes.

“Yo le pido, señor primer ministro, que nunca vea usted en la Iglesia a una enemiga ni a una opositora de los cambios, aunque pueda ver a hombres de Iglesia que aparezcan en esas actitudes; pero la actitud fundamental de la Iglesia ha sido y es otra. Por eso, no la considere nunca como enemiga.

“Ahora, como usted dice, reconozco que seguramente esta visita me acarrearé muchas dificultades y críticas. Pero desde el momento que usted solicitó esta entrevista, yo me siento también con la obligación de recibirlo, porque la Iglesia está siempre dispuesta al diálogo y esta es una excelente oportunidad de dialogar. Yo siempre recuerdo el ejemplo del Papa Juan XXIII, de santa memoria, que no dudó en recibir a un alto representante de la Unión Soviética”.

La alusión al yerno de Kruschev, Alexei Adjubei, hizo sonreír a Castro. Con humor y soltura sugirió que él era mucho más importante que Adjubei.

—Pero le quiero agregar, cardenal, que si a usted le ocasiona críticas y dificultades esta visita, mucho mayores van a ser para mí estas dificultades.

—Señor ministro, yo admiro la acción moralizadora que usted hace. Me he dado cuenta de que en sus discursos insiste mucho en la defensa de los valores morales, tales como el trabajo, la disciplina, la sobriedad.

—Bueno, es que yo creo que tenemos que luchar contra la mentalidad de la sociedad de consumo, que hace que nuestros pueblos derrochen sus energías y bienes gastando mucho más de lo que pueden y tienen, sin una verdadera utilidad para el desarrollo. Le digo más, cardenal: yo creo que en Chile también se lleva una vida dispendiosa, y que los chilenos gastan más de lo que pueden. Aquí habrá que hacer un trabajo muy grande de educación. El desarrollo de los pueblos y el desarrollo que la revolución obtiene, sólo se logra como un subproducto de la formación y educación de las personas.

—Bueno, yo creo que en la tarea de moralizar y educar a los

pueblos, la Iglesia es imprescindible. Nosotros pensamos que el desarrollo y la liberación de América Latina no se podrá hacer sin la colaboración de la Iglesia Católica. Pero ahora en Chile, señor Castro, ya que usted lo menciona, tenemos un gran temor de que la situación actual pueda desembocar en un enfrentamiento violento.

Castro frunció el ceño y levantó la voz.

—¡Hay que hacer todo lo posible por evitar la violencia! Mire, si es posible ahorrar una sola gota de sangre, debe hacerse el mayor esfuerzo para lograrlo. Creo que la Iglesia chilena tiene un gran papel en esto. Y yo le digo que estoy admirado de la evolución que veo en la Iglesia, donde tanta gente de izquierda se compromete en América Latina, y donde el aporte de cristianos es muy grande en las luchas de liberación de nuestros pueblos. Yo veo también esto en Chile. Estoy admirado de las buenas relaciones de la Iglesia y el gobierno. En mi país, si bien no tengo relaciones óptimas con la Iglesia, tampoco son malas. Creo que el nuncio allá ha sido muy prudente, muy inteligente.

Castro aprovechó este punto para explayarse sobre el papel de marxistas y cristianos en su idea de la liberación. No tuvo ni una palabra de crítica hacia la Iglesia en Cuba, pese a que su régimen la persiguió y hostigó duramente. Se estaba cuidando, sin duda.

—Reconozco las diferencias que nos separan —agregó—, pero estoy convencido de que es necesario unirse, porque también tenemos muchas cosas en común. A mí se me critica porque dicen que yo entiendo que esta colaboración es táctica. Pero no es táctica, es estratégica. Y una semejanza que veo entre marxistas y cristianos es que ambos han padecido y padecen persecución. Los cristianos se han nutrido del martirologio; también los marxistas, cardenal.

Le hicimos notar que había dicho estas cosas ante los universitarios. Con esta referencia, se extendió más en el punto. Después, la entrevista concluyó. Había pasado media hora.

—Señor Castro —dije, antes de despedirnos—, le tengo un regalo. Pero no quisiera forzarlo a recibirlo, de manera que con la misma confianza que hemos conversado le pido que me diga si es posible este gesto o no, porque comprendo que le puede ser difícil. Es una Biblia.

—Se lo agradezco mucho, señor cardenal— dijo, con énfasis—.

Por supuesto que lo acepto. Aún más, le doy la seguridad de que voy a leerlo... Me servirá para recordar muchas cosas.

Castro tuvo formación católica. Cuando habló con los periodistas, poco después, recordó esto y anotó que sin embargo esa formación no había calado en su espíritu, que había sido puramente superficial.

—Señor cardenal— agregó en ese momento el obispo Errázuriz—, ponga su firma en la Biblia.

—Sí, por favor —dijo Castro—. Con la firma basta, no se preocupe.

Cuando íbamos saliendo, intervino el obispo Oviedo.

—Señor ministro, los obispos querríamos hacer un regalo de diez mil Biblias al pueblo cubano, pero hemos encontrado algunas dificultades para hacerlo.

—Bien —dijo Castro, dudando un poco—, yo voy a arreglar este asunto, pero les ruego que se mantenga en la más estricta reserva, porque de otro modo va a fracasar.

Después se invitó a la nube de periodistas que esperaba afuera a que ingresara para las fotografías. Castro exhibió notoriamente la Biblia que le había regalado, y después se entretuvo haciendo declaraciones.

No quiero extenderme en las críticas que se me hicieron. En aquellos días, la prensa practicaba el insulto y el improperio como norma de rutina. Tuvieron que pasar años para que algunos católicos que me atacaron entonces vinieran a comprender el sentido que para nosotros tuvo el encuentro con Fidel Castro. El Papa nos dio un generoso aporte para la compra de las diez mil Biblias, y el padre Werenfried van Straaten puso los recursos más fuertes. Las Biblias llegaron a la isla caribeña para quedarse.

1972, congoja y esperanza

Hablando para el diario italiano *L'Avvenire*, nuestro antiguo nuncio Sebastiano Baggio, ya convertido en cardenal y hombre relevante en la Curia romana, mostró una excepcional sutileza de percepción al describir la situación de la Iglesia de Chile a fines de 1971. "Se encuentra", dijo, "ante la oportunidad de dar un testimonio cristiano independiente de cualquier forma de poder; la suya es una situación casi ideal y única, en el sentido de que está en condición de participar en la construcción de una sociedad que por su sesgo ideológico le es necesariamente extraña. No se debe olvidar que la doctrina del actual gobierno chileno es de clara tendencia marxista". Baggio calificaba de "valiente" el documento *Evangelio, política y socialismos* y decía que "pocos episcopados del mundo habrían podido emitir uno tan lúcido".

Lo que maravillaba de este juicio no era su elogio hacia los pastores chilenos, sino la manera tan refinada de captar lo esencial de nuestra situación, estando el cardenal Baggio tan lejos, y habiendo dejado el país más de una década antes. Era una paradoja irónica que se hiciera un esfuerzo tan sincero por comprendernos en el exterior, y que en nuestro propio suelo afrontásemos en cambio tantas incomprensiones.

Y no era menos paradójal que, en el propio Chile, los reconocimientos más calurosos viniesen de los no católicos; en aquel año 1972, por ejemplo, el Congreso Judío Latinoamericano decidió entregar al arzobispo de Santiago su Premio Derechos Humanos 1971, en una ceremonia que no he olvidado y que me emocionó como pocas otras. De entre los laicos católicos que levantaron su voz en aquel período, recuerdo un artículo de Ricardo Boizard, que usaba el seudónimo de *Picotón*, y que se publicó bajo el título: "Yo defiendo al cardenal", en el diario *La Segunda*, cuyo director era particular-

mente entusiasta para hacer blanco en la cabeza de este vapuleado arzobispo.

En cambio, dentro de la Iglesia la situación de turbulencia estaba llegando a sus puntos culminantes. Mirando hacia atrás, creo que entre el fin del 71 y la mitad del 72 se alcanzó este punto climático; después, silenciosamente, incluso sin que muchos hombres de Iglesia lo notaran, la tendencia comenzó a revertirse y una poderosa fuerza espiritual se fue recuperando para la evangelización.



El Congreso Judío Latinoamericano entrega al cardenal el Premio Derechos Humanos 1971, por intermedio de Isaac Goldenberg, presidente de la organización, y Gil Sinay, presidente del Comité Representativo de las Entidades Judías en Chile.

Pero en ese momento debíamos pasar todavía muchas dificultades.

Para 1971, y como parte de un cuadro de énfasis pastoral donde no estaba ausente la crítica de algunas "instituciones" de la Iglesia, se produjo un movimiento entre religiosos, incluso con eco en sus congregaciones, apuntado a revisar la función educadora de la Iglesia. Con posterioridad a la primera redacción de este capítulo, se me ha hecho notar que tal movimiento se daba junto con una discusión muy extendida en la Iglesia de Santiago, y también en la de muchas partes de Chile, en la cual tendía a primar el argumento de que algunos colegios católicos tenían un carácter pagado y selectivo que no era

compatible con el ideal de gratuidad y democratización que promovía el Episcopado chileno.

Después de la declaración de la Conferencia Episcopal, reunida en Temuco en abril de ese año 1971, que pedía fuertemente la democratización de los colegios, los provinciales de la Compañía de Jesús y de la Congregación de los Sagrados Corazones, padres Manuel Segura y Manuel Illanes, me propusieron entregar tres de los colegios que ellos tenían —San Ignacio de El Bosque, y Sagrados Corazones de Alameda y Manquehue—, al Estado, pidiendo que para esto se dictara una ley, quedando con la dirección espiritual de los mismos.

Estas ideas me las expresaron los dos provinciales, pidiéndome que yo aprobara la entrega de los colegios al Estado, con las especificaciones antes dichas. Yo acepté su proposición, pero efectué numerosas consultas, porque no estaba seguro de que pudiera llevarse a cabo sin causar oposición. De hecho, pedí que la resolución final se tomara tras consultar al Episcopado. Entretanto, la publicación de esta noticia desató un movimiento entre padres y alumnos para impedir el traspaso al Estado, amenazando con “tomarlos” por la fuerza si llegaba a ser necesario. La FIDE, que dirigía el padre jesuita Patricio Cariola, uno de nuestros mejores especialistas en educación, se oponía también a la entrega. En cambio, en el gobierno se veía la mejor disposición. Cuando los provinciales se reunieron con el subsecretario de Justicia, José Antonio Viera-Gallo, recibieron de éste, por expreso encargo del Presidente Allende, la respuesta positiva a la idea.

La clave del asunto era el alto costo de mantención, que originaba forzosamente aranceles muy caros y, por tanto, producía la exclusión de quienes no podían pagar. Pero además estaba el clima de cierta hostilidad contra la educación particular en general —la católica incluida—, que a todos nos hacía temer una intervención masiva del Estado en los colegios; considerando esta situación, parecía razonable entregar ciertos establecimientos, si ello era necesario para proteger el conjunto de la educación católica. En agosto del 71, la Conferencia Episcopal se pronunció tajantemente en contra del traspaso de los colegios al Estado y confirmó su deseo de que todos los colegios de la Iglesia estuviesen abiertos y no permitieran discriminación alguna.

Esta decisión zanjó el debate, pero no del todo; los jesuitas, que después de todo tienen un carisma pedagógico, aceptaron seguir en el San Ignacio, aunque abriéndolo a una experiencia de becas para alumnos de escasos recursos. (Este intento no fue del todo feliz, porque se produjo una discriminación de hecho, en la base, al notarse

las diferencias de recursos entre los alumnos). En cambio, los padres de los Sagrados Corazones aclararon que no podían seguir manteniendo sus establecimientos; en vista de esto, les propuse que los transfirieran al Arzobispado de Santiago, desde donde me haría cargo personalmente de su funcionamiento.

La ironía del caso es que hubo quienes creyeron que yo era el promotor del traspaso al Estado, e incluso un grupo de diputados demócratacristianos me visitó para preguntarme cuál era mi participación en esto. La meta de la gratuidad de la enseñanza católica, que sólo era concebible con una subvención estatal fuerte, a la que los



El cardenal es visitado por los diputados demócratacristianos ante la proposición de entregar colegios católicos al Estado. En la fotografía aparecen Luis Pareto y Humberto Palza.

creyentes tenían derecho como ciudadanos que pagaban sus impuestos, había sido uno de nuestros puntos de mayor fricción con el gobierno demócratacristiano, de modo que no costó mucho despejar el equívoco. Pero para otros fue una prueba más de las “izquierdistas” inclinaciones de este “cardenal rojo”, como tuvo la malaventura de calificarme en cierta ocasión un diario italiano.

Pero la tensión más fuerte dentro de la Iglesia no era ésta, sino la que se registraba con los grupos de “Los 80” y “Los 200”. De estos

últimos recibimos en diciembre del 71 un documento, preparado por uno de sus dirigentes, que profetizaba para muy pronto el colapso de la Iglesia como institución; por ello, decía, “no vale la pena dedicar esfuerzos a reformarla”; anunciaba también el desaparecimiento del clero “célibe, *full time*, con autoridad excesiva y privilegios”; proponía trabajar en las comunidades “de cristianos” (curiosamente, ya no hablaban de católicos en ningún documento), y hasta consideraba el cambio de las diócesis de Chile, según un plan inédito.

El autor de este trabajo negó primero su responsabilidad, y más tarde quiso atenuarla por distintos medios; por esto, le envié una carta en que le decía que si él y su grupo querían verdaderamente un diálogo; debíamos saber con qué moral, en qué términos, sobre qué realidades hablábamos. El afirmaba que se trataba de opiniones suyas, a las que les faltaba precisión; ¡pero este hombre era vicario en una diócesis, la mano derecha de un obispo, una autoridad a la que consideraba ya anacrónica!

Para mí era claro que la ideología los había capturado totalmente, y que muchos ya no eran capaces de identificar el tremendo daño que podían producir. Por eso nos preocupaba enormemente el nuevo encuentro que habían preparado los Cristianos por el Socialismo (como habían pasado a llamarse “Los 80”), ahora con carácter latinoamericano, para abril del 72.

Tenía claramente un propósito publicitario: quería coincidir con la realización en Santiago de la III Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad III), que reuniría a varios centenares de delegados de todo el mundo. El padre jesuita Gonzalo Arroyo, a nombre de los organizadores, me envió una carta contándome del encuentro, e invitándome a patrocinarlo. Al menos esta vez habían tenido el buen cuidado de que el arzobispo se enterara de una manera oficial, aunque en ningún caso podía entenderse que quisieran pedir permiso.

La Unctad III se había convertido en todo un acontecimiento. Iba a ser no sólo el primer encuentro de este rango en Chile, sino el primer foro internacional donde el gobierno de la Unidad Popular podría mostrar cómo llevaba el proceso “a la chilena”. Ya se sabía que los ojos del mundo estaban puestos en este rincón del planeta, donde se intentaba una experiencia hasta entonces inédita. Prueba de ello es

que en febrero recibí una carta del Consejo de las Iglesias de Holanda, pidiéndome un mensaje para orientar a los europeos sobre las necesidades de este mundo en desarrollo que ganaba las primeras páginas con sus fenómenos tan novedosos.

Mi respuesta fue una carta abierta que alcanzó enorme difusión. En Holanda fue leída en varios templos principales, y poco después la Iglesia Protestante de ese país nos ofreció una parte de su presupuesto para ayudarnos.

La carta abierta decía, en síntesis, que muchos cristianos de las naciones desarrolladas desconocen las realidades del Tercer Mundo. "No nos conocen: no saben del drama de nuestros hacinamientos humanos, con su cortejo de insalubridad, promiscuidad, atenuación y pérdida del sentido moral. No sospechan el proceso de acumulada frustración, que deviene resentimiento y rencor, y desemboca en el odio y la violencia, cuando se ve que tantos tienen tan poco, y tan pocos tienen tanto, y que los individuos y los países ricos se hacen siempre más ricos, mientras que los pobres siguen siendo, día a día, más pobres".

"Esta situación", agregaba, "amenaza condenar, a unos, al subdesarrollo material, y a todos, al subdesarrollo moral". Y recordaba la Cuaresma (era la fecha) con Isaías: "Romper las cadenas injustas, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento; ése es el ayuno que me agrada, dice el Señor".

El Presidente Allende me dirigió poco después una calurosa felicitación, en la que expresaba su intención de que la Unctad III asumiera esta perspectiva para analizar los problemas del desarrollo.

Contesté a la invitación del padre Arroyo después de esto. Fue una respuesta bastante dura, que produjo cierta polémica y extendió el debate a otros ámbitos. Yo quería reconocer en estos cristianos el soplo de la fe: no podía ser indulgente, ni ambiguo, ni vacilante. Muchas veces se me ha acusado por lo que algunos consideraban mi "dureza" para tratar al clero. Hay quienes me lo han reprochado en forma divertida. Cierta padre cuenta con frecuencia que cuando algún sacerdote se ponía chúcaro en mi oficina, yo me paraba y le decía: "Bien, mi amigo, este es mi asiento, ocúpelo usted y sea el arzobispo de Santiago".

No sé si sería tan así, pero tiene gracia. En todo caso, pediré perdón hasta el último de mis días en todo lo que haya podido ser injusto. Pero creo que en determinados aspectos la autoridad de que uno es depositario no puede dejar espacios para la vacilación o la tibieza; la autoridad de la Iglesia no es un don ni un atributo para deleitarse: es un deber imperativo, un compromiso con el Evangelio, ejercido con la luz de la caridad.

De los Cristianos por el Socialismo, yo valorizaba su compromiso con los pobres, su deseo apasionado de contribuir al cambio social; pero, como les dije en la carta, “no comparto en absoluto la idea de escoger el marxismo como única solución para los problemas de nuestra América”. Toda la tesis de ellos operaba a través de tremendas simplificaciones, de reducciones sistemáticas y encadenadas: del cristianismo a la lucha de clases, de la teología a la ideología, de la redención a la transformación socioeconómica, de lo místico a lo sociológico.

En el caso particular del padre Arroyo, yo veía un activismo peligroso, inevitablemente asociado a la influencia que tenían los jesuitas en nuestro medio. “Quiero decírselo con toda franqueza”, le escribí. “Me parece que su acción es destructora de la Iglesia”. Arroyo se sintió —quizás justamente— dolido por mis palabras. Me las reprochó vivamente en una nueva misiva, y luego lo hicieron algunos de sus compañeros de los Cristianos por el Socialismo.

Pero sus conductas no cambiaron en nada; al revés, pareció que se radicalizaban aún más. Algunos de ellos, invitados por Fidel Castro, fueron a Cuba para trabajar en la zafra del azúcar, y volvieron haciendo la apología del régimen comunista. Los otros apresuraron sus reuniones preparatorias para el encuentro de abril.

La insistencia generó la respuesta. Mi secretario, el padre Luis Antonio Díaz, me contó que se había reunido con otros padres para reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo y sentían el deber de manifestar públicamente su pensamiento. En su trabajo pastoral en el mundo obrero, Luis Antonio veía la presencia de un fuerte absolutismo ideológico; a los militantes de la Acción Católica Obrera se les imponía la militancia en partidos de izquierda bajo el pretexto de ser leales con los pobres, mientras que la doctrina social de la Iglesia era despreciada como una “expresión burguesa” de defensa del *statu quo*.

Naturalmente, lo dejé en libertad para que procediera en conciencia. Luis Antonio reunió a un grupo de sacerdotes —Renato Poblete, Enrique Le Fort, Patricio Guerrero, entre otros— y redactaron una carta donde reafirmaban su comunión con los obispos y rechazaban los intentos de politización del clero. Recibieron un apoyo sorprendente: más de 600 sacerdotes de todo Chile firmaron la adhesión a ese documento. Para no acentuar las divisiones, se reservaron los nombres de los firmantes, que fueron entregados al obispo Carlos Oviedo y al nuncio.

Casi paralelamente con esto, aunque sin conexión directa, la Conferencia Episcopal se reunió en Punta de Tralca y emitió una declaración repudiando la actitud político-partidista que adoptaban algunos sacerdotes. Usaba un tono más tajante: “En caso de que alguno creyera que su vocación es política, le pedimos reconsidere su vocación sacerdotal”.

Así es que, aunque no lo quisiéramos, la semilla de la división se había infiltrado en la Iglesia. Yo sabía muy bien que en algunos sectores había sacerdotes que se consideraban adversarios entre sí, y que se producían discusiones políticas a menudo. Incluso había recibido una insólita proposición para promover que los sacerdotes se reunieran con grupos de laicos de su mismo pensamiento, con el fin de evitar los altercados y las descalificaciones. Parecía una solución salomónica, pero no lo era en absoluto: equivalía a dar un estatuto oficial a los principios partidistas que se querían adueñar de la Iglesia. Debíamos ser el sacramento de la unidad, decíamos los obispos; pero muy pocos estaban dispuestos a practicar esto. La condición humana (de los sacerdotes) y la dimensión histórica (de la Iglesia) habían tomado provisoria preeminencia sobre sus significados más trascendentes. Pero reconocer esto era distinto que aceptarlo: yo sentía que si luchábamos firmemente, la doctrina cristiana terminaría por resistir este embate del temporalismo, y resultaría más fortalecida.

Para asegurarnos de que el encuentro de los Cristianos por el Socialismo no moviera a confusión a nadie, sobre todo en los otros países de América Latina, entre los cuales la Iglesia chilena se había ganado un lugar de respeto, el secretario del Episcopado, obispo Carlos Oviedo, distribuyó una circular explicando que la jornada que

se realizaría en Santiago no tenía el patrocinio ni la autorización de la Iglesia. Lo mismo hizo poco después, al nivel de Santiago, el secretario del Arzobispado, Sergio Valech. Esta advertencia no impidió, sin embargo, que llegara a Santiago el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, y no pude ocultar ante él mi desazón por el hecho de que, concurriendo a mi diócesis, no se hubiese tomado la molestia de anunciarme su venida.

Pero pocos días antes de inaugurarse el encuentro, mientras sesionábamos en Punta de Tralca, tres miembros de "Los 80" fueron a verme para conversar de las tensiones que estábamos viviendo. Eran Alfonso Baeza, Mariano Puga y Pablo Fontaine, tres padres a los que yo apreciaba mucho y en los que me parecía ver la más auténtica generosidad cristiana. Recuerdo haberles dicho esa noche que a la larga yo prefería que ellos estuvieran dentro de ese movimiento, al menos para que no se perdiera definitivamente el aliento de la fe. En esa conversación, ellos me propusieron que tuviera una reunión con los dirigentes y algunos de los principales invitados del encuentro.

Pero cuando la organizaron, se dieron cuenta de que era imposible limitar la asistencia. La Iglesia chilena gozaba de un gran prestigio en América, y todos querían oír la voz del cardenal o de sus pastores. En vista del número tan elevado, hicimos la reunión en el auditorio de Caritas (irónicamente, una de las instituciones más criticadas por estos grupos), al que concurrí acompañado por el obispo Oviedo.

No fue algo muy grato. Un sacerdote argentino pretendió emplazarnos por la comunicación que habíamos despachado a los episcopados de América, mientras que una religiosa se permitió preguntar cómo nos comprometíamos los obispos chilenos con la liberación de los pobres, con qué programas y hechos concretos. Respondí con cierta severidad a estos planteamientos, sobre todo porque ellos revelaban un desconocimiento profundo de la realidad nacional.

Supe después que la reunión fue considerada "un desastre" por los organizadores. Muchos de los asistentes quedaron molestos —al parecer, se sintieron amonestados por mis respuestas—, al punto de que en una sesión posterior del encuentro se planteó una moción para suspender una audiencia que habían conseguido con el Presidente Allende, porque, según su razonamiento, éste era seguramente otro "reformista", y les produciría una decepción igual que la del cardenal. Lo peor fue que la moción se impuso por mayoría, y si no

es porque el padre Arroyo intervino con sus mejores esfuerzos persuasivos, los Cristianos por el Socialismo habrían producido un mayúsculo agravio al Presidente.

Fue la última gran actividad de este grupo. En los meses siguientes su núcleo dirigente se fue radicalizando cada vez más, y terminó junto a movimientos francamente extremistas. En términos partidarios, las vertientes originales del MAPU y la IC fueron sustituidas por el MIR. Esto mermó su resonancia y provocó el retiro de muchos de los que habían sido sus fundadores, incluyendo, naturalmente, a Arroyo, Baeza y otros.

Esta decadencia era, al cabo, una consecuencia lógica, no sólo de la minusvaloración que hicieron de la Iglesia, sino del papel subordinado que ellos mismos se asignaron dentro de un proceso dirigido y dominado por aquellos a quienes les correspondía tal tarea, es decir, los políticos. Al pesar su incondicionalidad a un modelo que no era sólo social, sino sobre todo partidista, los Cristianos por el Socialismo estaban irremediablemente relegados a la condición de "vagón de cola" de la UP. Este juicio puede parecer demasiado severo, pero yo creo que es justo con los hechos.

No ignoro, sin embargo, que de estos grupos salió también una importante fuerza cristiana que fue a nutrir con un alimento conceptual nuevo a una izquierda que hasta entonces era dogmáticamente atea, antirreligiosa y laicista. La incrustación de estos cristianos en ese medio transformó también la fisonomía interna de esos partidos; y hay en esto un aporte objetivo a la evangelización que sería injusto desconocer.

Pero, para terminar con el episodio del encuentro de abril de 1972, diré que el desenlace, varios meses después, devolvió el problema a la Arquidiócesis. Y ocurrió así porque los dirigentes de los Cristianos por el Socialismo enviaron un cable al Papa Pablo VI ofreciéndole el testimonio de su fe común en Cristo y presentándole las principales conclusiones del encuentro. El secretario de Estado, cardenal Jean Villot, me escribió una carta haciéndome ver que para la Santa Sede las conclusiones eran del todo inaceptables; pero que, en vista de la adhesión al Santo Padre, me encargara yo mismo de transmitirles el deseo del Papa de ver reafirmada también la lealtad hacia los obispos y de que la generosa aspiración de la justicia social

no asumiera bajo ningún respecto como instrumento de afirmación la lucha de clases.

No diré que pasé la crisis tan tranquilo. Sufrí un preinfarto que me tuvo en cama casi un mes.

En cuanto al gobierno, las cosas siguieron como antes. Aunque Allende expresó su apoyo a los Cristianos por el Socialismo, evitó darles una preeminencia especial, probablemente consciente de que la jerarquía podría ver con desconfianza un gesto de ese tipo. Aquel



El Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo, en abril de 1972: el padre jesuita Gonzalo Arroyo y el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo.

1º de mayo fui nuevamente invitado por la CUT al acto oficial del Día del Trabajo, y por segunda vez estuve en el estrado, aunque ahora en compañía de mi secretario, el padre Luis Antonio Díaz, también asesor de la JOC. No hice tantas consultas para asistir en esta ocasión, pero dudé privadamente mucho más que en la primera, porque los signos de la división —a todo nivel— eran más fuertes y más dolorosos. Mi secretario se encontraba igualmente incómodo. Las comunidades de la JOC, que él dirigía, estaban presentes en el acto con su propia identidad cristiana. Grandes telones elevaban fra-

ses de las Encíclicas Pontificias y dos hermosas pinturas gigantescas, muy bien hechas, del cardenal Cardijn (fundador de la JOC) y don Manuel Larraín. Por eso también las críticas fueron más agudas. Un católico que escribió a un diario de Santiago instándome a no asistir más a actos de esta naturaleza, me proponía un truco: "Recordemos al cardenal Caro; estaba siempre presente en todo, parecía que dormía y estaba más despierto y consciente que nadie".



El cardenal Raúl Silva Henríquez junto a su secretario, el padre Luis Antonio Díaz, en el estrado oficial de la celebración del 1º de mayo de 1972.

Dos meses después, un dolor inmenso vino a sumarse a todas estas dificultades: mi vicario general, mi mano derecha, mi amigo de tantos años y mi maestro en muchos sentidos, Jorge Gómez Ugarte, murió silenciosamente, con esa discreción y ese coraje de hombre íntegro que siempre le admiré. Su partida fue desoladora: en las horas más difíciles, a lo largo de muchos años, yo había contado con él y con su inacabable exaltación de los valores cristianos.

Estoy convencido de que Jorge Gómez fue uno de los grandes sacerdotes de su generación. Su tenacidad, y una poderosa vocación pedagógica, lo convirtieron en el educador de muchos hombres que durante los años 60 dirigieron los destinos del país. No siempre estuve de acuerdo con sus enfoques tan apasionados sobre el tema educacional; de hecho, polemizamos muchas veces en los años de la

FIDE. Pero no dudo que la imagen del maestro es la que más se ajustaba a este hombre notable. Quizás por eso, había en él una nobleza auténtica, una nobleza de modales que no era sólo urbanidad, sino la expresión de una finura del alma.

Como he dicho, fui amigo de Jorge Gómez desde que ambos éramos jóvenes. Pero cuando asumí como arzobispo de Santiago, él decidió cambiar nuestro trato y nunca más me llamó "tú". Pasé a ser "el señor cardenal", pero con el mismo tono fraterno, sin mengua de afecto, sin menoscabo de lealtad, sin pérdida de familiaridad. Frágil, enfermizo, acosado por dolores sin cuento, Jorge Gómez sufrió a la Iglesia más que a su cuerpo. No hubo quien, como él, sintiera con tanta intensidad la desafección o la claudicación de los sacerdotes, los cambios postconciliares que no siempre pudo explicarse, los aires de división y lucha que cruzaron la patria. "¿Quién desfalleció que él no desfalleciera? ¿Quién sufrió el escándalo que él no se abrasara?"

Dije frente a su cuerpo yerto, en la Catedral de Santiago, algo que creo exacto: "Hemos visto al Señor: pasó a nuestro lado haciendo el bien. Y desde el fondo de nuestra alma... te alabamos, Señor, por el sacerdote que nos diste, porque en él volviste a nosotros y con nosotros has caminado iluminando los senderos de nuestras vidas, fortaleciendo nuestra debilidad, avivando nuestro amor".

Mientras, la crisis nacional había ido tomando forma demasiado rápidamente. A fines del 71, la primera "Marcha de las Cacerolas Vacías", que reunió a varios miles de mujeres, fue duramente disuelta por la policía, lo que motivó una acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Tohá, y la consecuente salida de quien era uno de los elementos moderados del Partido Socialista. Estas acusaciones se repetirían una y otra vez en los meses sucesivos, pero Allende, que no quería aparecer cediendo nada a la oposición, desafiaba al Parlamento cambiando a sus ministros destituidos para otras carteras.

La coalición de la UP empezó a resentir esta situación. En marzo del 72, el PS —partido del Presidente— se declaró "vanguardia revolucionaria" y propuso directamente abandonar el programa de la UP "para avanzar más velozmente por la vía de los hechos". El Presidente y otros partidos de la UP criticaron este acuerdo, pero

era inocultable que lo que se había propuesto era sobrepasar la autoridad del Jefe del Estado y desechar su reiterado camino en democracia.

Y la tensión interna que esto originaba se hizo más notoria cuando el PDC propuso definir las llamadas “tres áreas de la economía” (la estatal, la semiestatal y la privada), para impedir la seguidilla de tomas y estatizaciones *de facto* en el sector industrial. Aunque Allende aprobó negociaciones que permitieron avanzar, cuando éstas se acercaban al final las desautorizó, aparentemente por presión de su partido; el resultado fue que la coalición perdió al Partido de Izquierda Radical (PIR), que pasó a la oposición.

Antes de mediados del 72 la economía había entrado en una crisis profunda. Una ola de huelgas azotaba al país en distintos sectores, mientras que los signos de un agudo desabastecimiento de artículos de primera necesidad se hacía sentir en largas filas de personas frente a almacenes y tiendas. Se dijo entonces que esto era producto del “acaparamiento” practicado por los sectores altos, y, con esta convicción, se crearon las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), organizaciones vecinales cuyo principio original (asegurar la existencia de víveres) degeneró pronto en la persecución a los pequeños y medianos comerciantes. La inflación, que siempre ataca los bolsillos más pobres y que se había situado en un nivel muy bajo en 1971, escaló rápidamente durante 1972, a rangos promedio de 5% mensual.

Los grupos de extrema izquierda, buscando sobrepasar la institucionalidad y precipitar las decisiones del propio gobierno, se habían lanzado a las calles e infiltrado en poblaciones, industrias y fundos, para imponer la ley de la fuerza. El propio Presidente fue desafiado tras un enfrentamiento entre policías y pobladores en Lo Hermida, y la autoridad del Estado parecía disolverse en las contradicciones de los partidos y las tendencias.

En septiembre, muchos políticos, amigos y sacerdotes me convencieron de que era la hora de intervenir para tratar de frenar la violencia. Había la sensación de que por este camino llegaríamos a la guerra civil. Resumí mis sentimientos de ese instante en dos palabras: congoja y esperanza. “Congoja, cuando pensamos en los hombres y mujeres, en los jóvenes y niños de nuestro pueblo, de ese pueblo que es, en definitiva, el gran derrotado en toda contienda fratricida; el gran postergado en todas las guerrillas de grupos humanos hambrientos de poder; el gran sujeto y víctima de todas las violencias que cambian de mano... Esperanza, sin embargo. Con-

fianza en la madurez de los hombres y mujeres de Chile. Confianza en su generosidad y responsabilidad...”.

Si se le pudiera medir por las reacciones favorables que llegaron hasta mí, tendría que decir que el mensaje tuvo un gran efecto. Pero sería engañarse: era no más que una gota en medio del vendaval. La violencia había diseñado su propio curso.



El cardenal aparece con el Presidente Salvador Allende, su esposa Hortensia Bussi y el general Carlos Prats, en 1972.

Por si todo esto no fuera suficiente, Estados Unidos intensificó su presión sobre el gobierno en la disputa por las indemnizaciones a las compañías cupríferas norteamericanas, afectadas por la nacionalización de la minería. He dicho antes que el acuerdo de la nacionalización tuvo la unanimidad de los partidos, de derecha a izquierda, cuando se votó en el Parlamento. Hay que agregar que ese acuerdo consideraba el informe emitido por el contralor Héctor Humeres acerca de la forma y montos de las indemnizaciones, y en algunos casos tal informe señalaba que no debía pagarse ni un centavo.

Esto no fue aceptado por el gobierno de EE.UU., ni menos por las compañías afectadas, que llevaron sus reclamaciones al Tribunal de Gran Instancia de París. Como producto de esto, en septiembre de 1972 algunas partidas de cobre chileno fueron embargadas en puertos europeos. El daño que estas medidas causarían sobre la economía

chilena, si se generalizaban, sería total. Fue esta percepción lo que motivó la declaración que hice en octubre de ese año, recordando que, según principios de la ONU, “la propiedad y explotación de nuestra principal riqueza básica pertenece soberanamente al pueblo de Chile”, e instando a crear un clima de entendimiento para superar el litigio.

Los obispos de Chile habíamos tenido el buen criterio de plantear el problema moral de las nacionalizaciones en el Sínodo romano del año anterior. Pero ni el Sínodo ni la Santa Sede pudieron emitir pronunciamientos rápidos, porque se trataba de un tema cuya casuística era escasa y que presentaba matices muy variados en distintos países y continentes. De modo que mi afirmación de la legitimidad de lo obrado por Chile se basaba en el gran consenso nacional, en una opinión fundada sobre el interés vital que el cobre representaba para Chile, y en los antecedentes jurídicos disponibles. Así y todo, las secciones nacionales de varios países europeos de la Comisión Justicia y Paz se pronunciaron dándonos su apoyo y respaldando la causa del cobre chileno.

Pero Estados Unidos, que se sentía desafiado y que creía posible que con Allende se instalara en América Latina “una segunda Cuba”, aumentó sus represalias, cortando el flujo crediticio y poniendo restricciones al intercambio comercial.

Violencia interna, crisis económica, falta de recursos, presión internacional: todas las piezas del drama se habían reunido con asombrosa facilidad. En octubre, los comerciantes, los transportistas y los mineros del cobre lanzaron un paro general cuyos efectos desestabilizadores fueron tremendos. Años más tarde hubo ciertas comprobaciones de que en aquel famoso “paro de octubre” se infiltraron manos foráneas, proporcionando dinero para mantener la inactividad; pero esto, que pudo favorecer a algunos, no justifica la magnitud que adquirió el movimiento: el descontento había tomado una forma viva y actuante, y era hasta malsano atribuirlo a la conspiración de unas pocas manos. Se requería, para llegar a tal punto, la intransigencia de los adversarios de la UP, pero ésta sería siempre menos eficaz y voluminosa que los errores del propio conglomerado.

El incidente de la ENU

El llamado “paro de octubre” de 1972 comenzó con un pequeño incidente de transportistas en el sur, pero el caldeado ambiente que vivía Chile en aquellos meses lo extendió como una llamarada, en pocos días, de norte a sur. En cosa de una semana ya había 47 mil camiones paralizados, y el comercio se había plegado con un cierre general. Pronto se sumaron los colegios profesionales, los empleados, los pequeños empresarios: más de 600 mil chilenos.

En la tercera semana del paro el país ya había perdido más de 150 millones de dólares. La reacción del gobierno fue dura desde el comienzo. En esto seguramente erró el cálculo; no esperó que las organizaciones gremiales se volcaran masivamente en su contra. Bajo la tesis de que el movimiento era obra de la “sedición”, la Unidad Popular agudizó la tensión requisando más empresas, mientras amenazaba a los transportistas con el peso de la ley.

No estuve en Chile en esos días. Supe que varios obispos que se reunieron en Santiago por razones diversas acordaron conversar con el Presidente Salvador Allende para conocer sus puntos de vista, y designaron para ello a José Manuel Santos y Carlos Oviedo. Sus impresiones coincidían en que el Presidente parecía no controlar a muchos de sus partidarios, que actuaban por su cuenta, según la exaltación del momento. Con todo, el Comité Permanente emitió una declaración llamando a proteger la continuidad institucional y crear las condiciones necesarias para la pacificación. Por mi parte, y a recomendación de mis vicarios, envié desde Roma un mensaje (*Chile necesita una operación respeto*) que instaba a todos los sectores a establecer un clima de paz a través del debido reconocimiento de cada uno: de la autoridad legítima, de los individuos, de la verdad, de la nación. En el fin de año, todos los obispos insistimos en esta urgencia: “Nuestro mensaje de Navidad se reduci-

rá... a una simple súplica: Señor, ayuda a Chile a encontrar la paz”.

El Presidente vino a controlar la situación recién al comenzar noviembre, cuando pidió y consiguió que las Fuerzas Armadas se integraran al gabinete. El jefe del Ejército, general Carlos Prats, asumió el Ministerio del Interior; el contralmirante Ismael Huerta se hizo cargo de Obras Públicas, y el general de la Fuerza Aérea Claudio Sepúlveda asumió en Minería. Esta medida pareció calmar el movimiento huelguístico, que cesó de inmediato. En los mismos días, además, el gobierno accedió a levantar su veto sobre una ley de control de armas propuesta por Juan de Dios Carmona en el Senado, por la cual se entregaba a las Fuerzas Armadas la capacidad de incautar las armas en manos de civiles.



En noviembre de 1972 asume el nuevo gabinete, que incluye al dirigente comunista Luis Figueroa en Trabajo y al general Carlos Prats en Interior. A su lado, el Presidente Allende.

Allende resultó dañado por el paro. Unos días después sufrió un infarto y debió guardar algún tiempo de reposo. El nuevo gabinete, en tanto, se hacía cargo del difícil fin de año y se presentaba como el equipo que garantizaría la limpieza de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

Estas elecciones eran vistas por muchos como un acontecimiento crucial. Para combatir a la UP, los tres partidos de oposición —la Democracia Cristiana, el Nacional y el PIR— se habían unido

en un solo conglomerado, la Confederación Democrática (CODE), y se preparaban para afrontar los comicios como "un plebiscito". Sus declaraciones convencieron a Allende de que buscaban una mayoría en el Senado que les permitiera acusar constitucionalmente al Presidente, y destituirlo. Así que las elecciones se convirtieron en algo así como un último recurso: el peor de los climas posibles para un acto cívico.

En aquel fin de año, Allende realizó una gira por varios países, incluida la Unión Soviética, y habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas denunciando un virtual bloqueo económico de Estados Unidos contra Chile y la acción concertada de empresas transnacionales para desestabilizar a su gobierno. Evidentemente, culpaba de esto al gobierno republicano y llamaba a la ONU a defender a las naciones en desarrollo de la "agresión" de esa gran potencia. Supe que, antes de viajar, Allende pidió reunirse con el Presidente Richard Nixon, pero la proposición nunca le fue contestada; sólo consiguió una audiencia con el entonces embajador norteamericano ante la ONU, que era George Bush y que 20 años más tarde también llegaría a ser Presidente de su nación.

En el verano la UP concentró su estrategia electoral en la descalificación de la oposición. Víctima principal de los más despiadados ataques fue el ex Presidente Eduardo Frei, quien a poco andar se convenció de que se estaba creando en su contra el tipo de ambiente propicio a los atentados. No tengo dudas de que esta campaña marcó decisivamente la actitud de Frei para los sucesos posteriores.

Las esperadas elecciones, el 4 de marzo de 1973, no hicieron más que prolongar la tensión política. La UP consiguió un 43% de los votos, con lo que canceló la posibilidad de una destitución parlamentaria del Presidente y aumentó ligeramente su presencia en las cámaras. La CODE sobrepasó el 55% de los sufragios, pero no alcanzó a alterar la correlación de fuerzas; Frei, a su turno, obtuvo la más alta mayoría senatorial de la historia.

En vez de apaciguar los ánimos, a la vista de la consumación de un virtual “empate político”, los partidos se involucraron en gestos y retóricas aún más duras. Incluso los propios aliados entraron en conflicto, como si no fuera ya suficiente la lucha de facciones. La oposición, que después de todo estaba a la defensiva, no sufrió este fenómeno en un grado tan agudo, pese a que eran notorias las diferencias de objetivos y estilos entre el PDC y el PN.

En cambio, en la Unidad Popular se llegó a las puertas de un virtual quiebre interno. El Partido Socialista llevó adelante una política más agresiva, inspirada por el lema “avanzar sin transar”, con una dirigencia convencida de que sólo agudizando las contradicciones (que para este tiempo ya eran, derechamente, tensiones violentas) se resolvería el empate de poderes en las instituciones democráticas, para ellos “burguesas”. El otro aliado fuerte de la coalición, el Partido Comunista, se definió abiertamente en la tesis contraria, con el *slogan* de “consolidar etapas”; el PC fue tal vez el que más tempranamente divisó en el estancamiento institucional el peligro de una ruptura, cuyos resultados serían desfavorables para la UP. A una y otra tesis se fueron adscribiendo los demás partidos de la UP, y lo cierto es que esto enojaba a Allende, quien no sólo no estaba con el lema intransigente de su partido, sino que tampoco quería opiniones alineadas dentro de la UP. En alguna conversación que tuvimos en ese tiempo se quejó, por ejemplo, de que los radicales hubiesen abrazado el marxismo; ¿para qué iba a querer más partidos marxistas, si ya tenía suficientes? Lo que necesitaba era justamente lo contrario: ampliar su base de apoyo con colectividades que procedieran de otras culturas, otras ideologías.

En la Iglesia, las elecciones también echaron leña a algunos conflictos no resueltos. Un padre de Talca se presentó como candidato a diputado por el MAPU, lo que fue severamente condenado por el obispo Carlos González; pero los Cristianos por el Socialismo habían recibido un nuevo (y último) impulso con la instalación, también en Talca, del padre Joseph Comblin, a quien el gobierno dictatorial de Brasil había impedido el reingreso. La presencia de Comblin atrajo hacia Chile, con más frecuencia que antes, a los “teólogos de la liberación” de toda América; las visitas de Hugo Assmann, Gustavo Gutiérrez y otros comenzaron a hacerse rutinarias.

En vista de este “renacimiento” de las tendencias centrífugas, en abril la Asamblea Plenaria del Episcopado decidió emitir un nuevo documento en el que, ahora sí, se condenara expresamente la posición de los Cristianos por el Socialismo y se ordenara a los padres abstenerse de ingresar a este grupo.

El trabajo se preparó durante meses y, desgraciadamente, estuvo listo recién en octubre de 1973, cuando ya las condiciones habían cambiado y estos hermanos, equivocados o no, estaban sufriendo los rigores de la persecución política. Creo que, sin esta circunstancia desafortunada, el documento, titulado *Fe cristiana y actuación política*, habría conservado mejor su valioso contenido doctrinal.



Portada del opúsculo “La misión social del cristiano: conflicto de clases o solidaridad cristiana”, con textos del cardenal Raúl Silva Henríquez, editado en mayo de 1973.

En todo caso, las elecciones extendieron la sensación de que los caminos se agotaban. Meses más tarde, cuando ya la violencia parecía inatajable, el decano de Derecho de la Universidad Católica, Jaime del Valle, hizo público un estudio según el cual los comicios habían sido fraudulentos en favor de la UP. El rector Fernando Castillo Velasco intentó que Del Valle no entregara este informe,

porque lo consideraba metodológicamente mal realizado, pero sus esfuerzos no dieron resultado: también la UC se había convertido en una trinchera política.

Entre las crisis más serias que ese año soportó la Universidad, indiscutiblemente la principal fue la que tuvo relación con su estación de televisión, el Canal 13. Los hechos comenzaron a fines del 71, cuando el término del mandato de Claudio di Girolamo como director ejecutivo del Canal dio paso a las elecciones para su sucesor por los siguientes dos años. La izquierda promovió la reelección de Di Girolamo, quien tenía altas posibilidades de triunfo; para contrarrestarlo, la DC, agrupada en el Frente Cristiano de la Reforma, propuso que su candidato fuese el padre Raúl Hasbún, quien vivía conmigo, actuaba como uno de mis secretarios y dirigía el Departamento de Opinión Pública del Arzobispado.

Yo creía conocer bien al padre Hasbún. Apreciaba mucho sus virtudes y le tenía un gran cariño, pero no ignoraba su temperamento apasionado, fogoso, a veces incontenible. No me parecía que, en las circunstancias que vivía Chile, un carácter como el suyo fuese el apropiado para morigerar y apaciguar, y en definitiva mantener una imparcialidad a toda prueba. En su descargo debo decir que en realidad tal ideal era muy difícil, si no imposible, de hallar en el efervescente clima de entonces.

Pero sobre todo fue debido a los cargos tan notorios que tenía Hasbún, que me opuse tenazmente a la idea; me parecía que ellos podrían influir en la elección. Sin embargo, los del Frente querían justamente eso, asegurar su triunfo. Y fue tanta su insistencia, que pronto advertí que estos dirigentes, entre los cuales había muy leales y buenos amigos, podrían llevar las cosas al extremo si yo no cedía. Decidí consultar al Consejo de Presbiterio, el que, después de una discusión nada fácil, decidió que diera la aprobación.

Hasbún ganó por amplio margen, y se hizo cargo de la dirección del Canal en un momento en que los sectores de gobierno que buscaban controlar los medios de comunicación comenzaban a poner todo tipo de obstáculos al desarrollo y crecimiento de las transmisiones. Reestructuró el departamento de prensa, procuró renovar algunos de los equipos y trazó un plan para aumentar la cobertura hacia fuera de Santiago.

Para octubre del 72, el gobierno ya consideraba al Canal como un adversario, y a Hasbún como su enemigo. Las recriminaciones llegaron hasta el Consejo Superior de la Universidad, que realizó varias sesiones para analizar las denuncias en contra del director ejecutivo. Pero el padre Hasbún, con su privilegiada oratoria, tuvo también la oportunidad de hacer una brillante defensa.

Con la perspectiva de las elecciones parlamentarias de marzo del 73, las presiones oficiales y oficiosas no hicieron más que incrementarse. El propio Allende participó de ellas haciendo pública su negativa a concurrir a un programa del Canal 13, y lanzando sobre él la acusación de no ser objetivo.

Hasbún estaba convencido de que el gobierno quería asfixiar al Canal porque su estrategia caminaba hacia el control de la libertad de expresión, empezando por la televisión, que era el instrumento más peligroso. En su opinión, el Canal 13 era la última posibilidad de mantener una expresión independiente. Y debo decir que, sin estar totalmente de acuerdo con la conducción del Canal, los hechos me fueron convenciendo de que era vital preservar su autonomía y su capacidad de resistir a las presiones.

Por eso, cuando Hasbún me contó en esos días que la Universidad Técnica del Estado, controlada por la UP, pensaba poner en funciones su propio canal, y que para ello adquiriría la empresa Protab, compartí su alarma. Protab era la única productora independiente que podía abastecer de servicios y producciones al Canal 13: su absorción podía equivaler al desabastecimiento total. Como Protab pertenecía en parte a una empresa norteamericana, nuestros abogados propusieron seguir una estrategia en dos niveles para adquirir Protab; la parte chilena sería comprada por una fundación compuesta por funcionarios del Canal, y la parte norteamericana podría ser adquirida por alguna institución de ese país que yo debía conseguir. La International Educational Development, entidad que ya me había ayudado en otros proyectos, cumplió este valioso papel, y Canal 13 pudo tener a Protab bajo su control en unos meses.

Paradójicamente, un año después, la autoridad que intervino la Universidad no quiso continuar con el proceso de compra, con lo que Protab debió regresar a manos privadas. Pero, claro, esa misma autoridad quiso que en cambio se le entregara el dinero que nuestros amigos norteamericanos habían puesto taxativamente para este único fin, a lo que por supuesto me negué.

Las elecciones de marzo aumentaron también las posibilidades de expandir las transmisiones, porque mucha gente estaba dispuesta a ayudar al Canal en ese esfuerzo. Un primer paso se dio cuando la planta ejecutiva consiguió que la Armada le ayudara a transportar los equipos para llegar hasta San Fernando. El siguiente fue alcanzar hasta la zona de Concepción, desde Talcahuano.

En ambos casos, el gobierno no negó el permiso; pero tampoco lo dio: actuaba, intencionadamente, por omisión. Pero las autoridades del Canal, decidiendo en forma también precipitada, instalaron sin más un transmisor en Talcahuano. La dirección de Servicios Eléctricos comenzó a impedir las emisiones a través de una señal de interferencia, y un grupo clandestino entró al recinto de esa repartición para impedirlo. Al cometer esa acción, amordazaron a un vigilante, que aquella noche murió asfixiado.

El gobierno denunció el crimen como producto de un acto subversivo, y encarceló al director regional del Canal. Además, aumentó las medidas de presión sobre la Universidad. La crisis no demoró en trasladarse hasta el seno del Consejo Superior, ante el cual el rector Fernando Castillo Velasco realizó una dura intervención contra el padre Hasbún, acusándolo de violar reiteradamente las instrucciones de la rectoría y de separarse de la legalidad de la UC. De hecho, Castillo Velasco quiso conseguir los votos del Consejo Superior para destituirlo. Entonces me sentí obligado a intervenir, y logré que, con la buena voluntad de ambos, las tensiones entre ellos se disiparan, a lo menos temporalmente.

Pero lo que pasaba en el país era superior a todos nosotros. Las noticias de violencia aumentaban cada día, mientras la economía entraba en una enloquecida espiral de desabastecimiento, inflación, mercado negro y caos. El gobierno no se mostraba capaz de dominar la situación y, en vez de evitar nuevos problemas para resolver los que ya tenía, iba abriendo nuevas brechas a cada paso.

A mediados de marzo del 73, inmediatamente después de las parlamentarias, uno de esos desastros vino a convertirse en el peor problema que la UP enfrentara con la Iglesia. El detonante había sido activado en febrero, cuando el Ministerio de Educación, a cargo del radical Jorge Tapia, distribuyó en los colegios un documento titulado *Informe sobre la Escuela Nacional Unificada (ENU)*. La apasionada campaña electoral impidió en cierto modo una reacción más rápida, porque nadie se dio el tiempo de estudiarlo.

El proyecto buscaba unificar criterios, programas y prácticas en todos los niveles de la enseñanza del país, incorporando a ella, según decía, “finalidades más acordes con las necesidades nacionales”.

En su parte más conflictiva, el objetivo principal de la ENU se declaraba de esta manera: “La construcción de una nueva sociedad socialista basada en el desarrollo de sus fuerzas productivas, la superación de la dependencia económica, tecnológica y cultural, el establecimiento de nuevas relaciones de propiedad, y la auténtica democracia y justicia social garantizada por el ejercicio efectivo del poder del pueblo”.

El documento era entregado para su discusión en los colegios, pero junto con ello el gobierno aclaraba que de todos modos la ENU sería aplicada, a contar del 1º de junio, en todo el sistema educativo nacional. El arzobispo-obispo Emilio Tagle fue el primero en reaccionar públicamente, declarando que la implantación de la ENU “llevaría al control de la educación por una ideología partidaria”.

Los seguidores del gobierno respondieron con una nueva campaña de ataques a insultos contra Emilio, como lo habían hecho ya varias veces. En uno de esos días, fue a verme al Arzobispado. Venía realmente alarmado por el asunto de la ENU, y se mostraba dispuesto a dar una lucha abierta en esto.

—Raúl —me dijo—, tú tienes que ir a hablar con el Presidente para detener esto. ¡Tienes que hacerlo, cuanto antes!.

A fines de marzo nos reunimos con el Comité Permanente y decidimos que yo y el secretario (el obispo Carlos Oviedo) realizáramos gestiones directas ante el ministro Tapia y ante el Presidente Allende.

Allende nos recibió con la cordialidad habitual. Le expliqué que el asunto de la ENU había tocado una de las fibras más sensibles de la Iglesia, uno de los aspectos más próximos a su vocación y que



El cardenal Silva Henríquez sale de La Moneda tras una audiencia con el Presidente Allende, en 1973,

consideraba irrenunciable en todos los niveles. Le dije que la Iglesia no sólo apoyaba, sino que propiciaba, desde hacía ya varios años, una reforma educacional profunda, que diera acceso a la enseñanza a todos los niños de Chile. Pero para esto era condición *sine qua non* que la educación fuese pluralista, lo que el proyecto de la ENU no ofrecía ni garantizaba. Escuchó atentamente mientras me explayaba en nuestra visión de la educación como instrumento de liberación, solidaridad y desarrollo humano. Al final Allende culpó duramente al ministro por la precipitación para presentar el texto, y agregó:

—Bien, señor cardenal, si la Iglesia opina así, yo considero totalmente desafortunado este proyecto de la ENU. Esta ha sido una

torpeza y yo me comprometo a que será postergado y en definitiva no se promulgará si no tiene el acuerdo más amplio.

Llevé esta satisfactoria noticia hasta el Comité Permanente. En la nueva reunión se acordó emitir una declaración en la que se valorizaban los dos aspectos positivos que le veíamos al proyecto —la incorporación de todos los chilenos a la educación y la integración, en algunos niveles, del estudio con el trabajo— y se sentaba claramente nuestra preocupación por la ausencia de los valores humanistas y cristianos propios de nuestro patrimonio espiritual. Dejamos constancia de que habíamos pedido al gobierno postergar la ENU.

Pero la decisión gubernamental no fue inmediata. Nuestra declaración salió el 27 de marzo. Dos semanas después, el ministro Tapia continuaba promoviendo el proyecto en distintos ambientes. Nosotros sabíamos, además, que en la idea original había tenido especial importancia el PS (que era el del Presidente), para lo cual se había inspirado en el modelo aplicado por la República Democrática Alemana, una de las más rígidas dictaduras del bloque soviético. Los radicales que mandaban en el Ministerio de Educación habían hecho suya la ENU, y ahora la defendían con particular obstinación.

El ministro, sin embargo, dio su peor paso en falso el 11 de abril, cuando se reunió con unos 150 oficiales de las Fuerzas Armadas para exponer el proyecto. El malestar de los asistentes resultó visible, pero, por si no bastara, una intervención del contralmirante Ismael Huerta (que poco antes había sido ministro) dejó en claro que a lo menos la Armada se oponía tajantemente al proyecto. Una reunión posterior del comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Prats, con oficiales de Santiago, en la que expresó su apoyo a la reforma educacional, no cambió para nada la situación y hasta puede haber contribuido a agravarla: la molestia de los asistentes fue pública y notoria. Entretanto, los estudiantes secundarios, bajo la conducción del PDC, y la dirección misma del partido, ordenaron movilizaciones generales para resistir a la ENU.

El mismo día de la reunión del ministro con los oficiales, los obispos, crecientemente intranquilos por la demora, emitimos una segunda declaración, esta vez firmada por todos. Dijimos, ahora más ex-

presamente, que “nos oponemos al fondo del proyecto por su contenido que no respeta valores humanos y cristianos fundamentales, sin perjuicio de sus méritos pedagógicos en discusión”.

Este conjunto de circunstancias contribuyó, sin ninguna duda, a que el gobierno no continuara dilatando el problema. Según he sabido años después por boca de ex funcionarios de la Unidad Popular, se dieron cuenta que habían cometido uno de sus errores más graves, especialmente al ganarse la reprobación pública de la Iglesia.

En esa misma ocasión anunciamos también que emitiríamos un documento fijando las líneas que considerábamos centrales en el problema en discusión. (Irónicamente, el trabajo, titulado *El momento actual de la educación en Chile*, salió el 1° de junio, el mismo día que debía ponerse en marcha la ENU).

El 12 de abril, 24 horas después de nuestra segunda declaración, el ministro Tapia me dirigió una carta aceptando nuestra proposición de postergar el proyecto. Expresaba, además, su preocupación por el hecho de que los obispos creyéramos que no se respetaban los valores humanos y cristianos, y ofrecía introducir modificaciones sustanciales a la ENU si el debate posterior las revelaba necesarias.

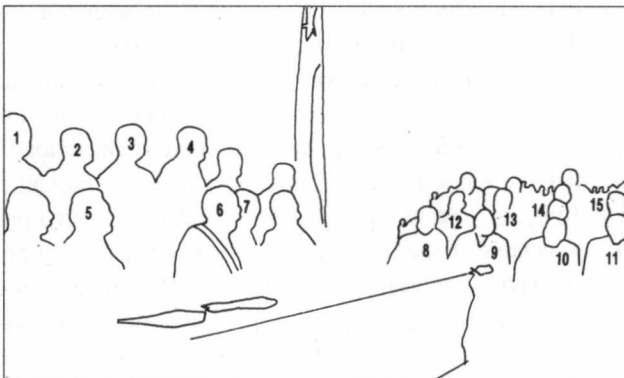
Era suficiente. Nos dábamos cuenta de que con esto, la famosa ENU había fallecido. Pero el gobierno, que no quería parecer derrotado y a cada momento trataba de afirmar su autoridad en público, continuó actuando en forma ambigua.

Los estudiantes secundarios siguieron adelante con su plan de movilizaciones, y en las semanas siguientes hubo serios desórdenes en las calles de Santiago, Valparaíso y Concepción. En uno de los episodios más graves de ese momento, la CUT decidió impulsar una contramanifestación; mientras sus participantes desfilaban por la Alameda, se produjo un incidente frente a la sede del Partido Demócrata Cristiano y un militante de izquierda fue muerto por un balazo. Era la primera víctima fatal de la polémica.

El Presidente Allende no quiso tampoco ser más claro. Un mes después, en su mensaje anual ante la nación, reafirmó su apoyo a la ENU y dejó abierta la posibilidad de su reflatamiento para más adelante.



Mensaje presidencial del 21 de mayo de 1973, leído ante el Congreso Pleno. Aparecen: 1) Teniente coronel Sergio Badiola, edecán del Ejército; 2) Comandante Arturo Araya, edecán de la Marina; 3) Comandante Roberto Sánchez, edecán de la Fuerza Aérea; 4) Coronel Vallejos, edecán de Ejército del Congreso; 5) Américo Acuña, vicepresidente del Senado; 6) Salvador Allende, Presidente de la República; 7) Fernando Sanhueza, presidente del Senado; 8) Héctor Humeres, contralor general; 9) Jacobo Schaulsohn, presidente del Tribunal Constitucional; 10) Cardenal Raúl Silva Henríquez, arzobispo de Santiago; 11) Enrique Urrutia Manzano, presidente de la Corte Suprema; 12) General José María Sepúlveda, director de Carabineros; 13) General César Ruiz Danyau, comandante en jefe de la FACH; 14) Almirante Raúl Montero, comandante en jefe de la Armada; 15) General Augusto Pinochet, comandante en jefe subrogante del Ejército.



Por supuesto, nada de esto contribuía al apaciguamiento. Con creciente angustia, los que no tomábamos parte en la batalla diaria de las descalificaciones y las agresiones, veíamos que cada sector político anteponía su propio orgullo a los intereses superiores de la paz en la nación. Cada quien consideraba vital no dar señas de tolerancia ni de error, porque al frente ya no estaba sólo un adversario, sino un enemigo que lo aplastaría a la más mínima vacilación.

“Las envidias, los odios, las luchas que la desangran, las pasiones desatadas que la acosan, ponen en el rostro de nuestra patria la corona de espinas, los golpes, los salivazos que también han desfigurado el rostro de Cristo”, dijimos en el mensaje de Resurrección de ese año.

“¿Es que los cristianos de Chile, que somos la inmensa mayoría del país, hemos olvidado el gran mandamiento de amar?”, nos preguntábamos. “¿Es que no sabemos sobreponernos a los propagadores del odio, de la mentira, de la injusticia, de la lujuria, de la avaricia? No es posible que el grande e inmenso anhelo de cambios mejores que vive en el corazón de la gran mayoría de los chilenos, para hacer una patria más humana, más justa, más abierta a todos sus hijos en igualdad de posibilidades, se frustre por todos estos grandes pecados personales y colectivos, y el anhelo de justicia social desemboque en otro modelo de sociedad injusta y tiránica, que nada resuelva y que sólo haga pasar el poder de un grupo minoritario a otro”.

Pero los obispos no éramos oídos. La voz de la pasión política tendría en esos tiempos muchísima más fuerza que la nuestra. E intuíamos que el tiempo se agotaba, que quedaba muy poco plazo para evitar una tragedia. En esto no nos equivocamos ni un ápice.

En aquellos días, por tercera vez fui invitado al acto oficial organizado por la CUT para conmemorar el Día del Trabajo. Pero esta vez sentí que no podía ir. Ante la petición de la Juventud Obrera Católica, expliqué mis razones: “Contemplo con angustia —tal vez la misma de ustedes— la división que se ha creado en el corazón del mundo obrero, llena de injurias y de odios, donde son lanzados obreros contra obreros. Esto no lo puedo aceptar. Como obispo y como pastor, debo ser más que nadie el centro de unidad de mi pueblo. Mi presencia en la concentración tendería a radicalizar aún más esta división, y se le daría una interpretación político-partidista que nunca aceptaré. Espero que mi gesto sea entendido, y abrigo la esperanza de que la unión y la solidaridad lleguen nuevamente al alma de nuestro pueblo, para que juntos celebremos un nuevo 1° de Mayo”.

Fue una buena decisión. El de aquel año fue el más politizado, y también el más agresivo, de los actos del Día del Trabajo.

En el Parlamento, la lucha se había tornado también feroz. La oposición insistía en la promulgación del proyecto sobre las tres áreas de la economía, que tendría el rango de reforma constitucional y que pondría fin al caótico proceso de estatizaciones, ocupaciones ilegales y expropiaciones de hecho.

En vista de que las negociaciones sobre esto habían fracasado, y como el proyecto suponía devolver numerosas empresas que estaban ya traspasadas a la llamada "área social", la Unidad Popular decidió impedir su promulgación y el Presidente Allende envió su veto al Congreso sobre una parte del texto.

Pero el Parlamento rechazó el veto del Ejecutivo. Tras ello sobrevino una polémica sobre qué le correspondía al gobierno hacer. La oposición sostenía que debía promulgar el proyecto entero, o llamar a un plebiscito para que el pueblo decidiera. Allende afirmaba que podía promulgar la reforma sin las partes objetadas, y que el Tribunal Constitucional decidiera sobre estas últimas. Pero el Tribunal Constitucional, siguiendo la tesis de su presidente, Jacobo Schaulsohn, se declaró incompetente. A su turno la Contraloría se negó a promulgar la reforma parcelada.

Narro estos detalles —que pueden parecer un tanto veloces— porque a través de ellos se vio claramente, ya en mayo de 1973, que se había planteado un conflicto institucional sin salida. Creo que Allende lo tenía muy claro. Fue entonces cuando comenzó a pensar en un plebiscito, consciente de que probablemente no habría otro camino.



Los esfuerzos por el diálogo

El Presidente Salvador Allende me llamó dos veces en privado durante mayo de 1973. Hasta ahora, nunca había hablado de esas conversaciones.

Vivíamos días muy difíciles. El conflicto planteado entre el Parlamento y el Ejecutivo, a propósito de la reforma que establecería las tres áreas de propiedad en la economía, había conducido a una virtual parálisis política; pero era una parálisis en medio de la violencia.

En El Teniente, los obreros habían iniciado una huelga que se prolongaría finalmente por casi tres meses, produciendo al país una pérdida diaria de un millón de dólares. Los estudiantes continuaban movilizados en las calles, resistiendo las directivas del gobierno, y la toma de empresas y fundos continuaba sin pausa. Las Fuerzas Armadas habían comenzado a intervenir en la requisición de armamento, allanando industrias a razón de tres por semana. El hallazgo de arsenales, en algunos casos, y los rumores sin cuento que circulaban a cada hora, sugerían que sectores civiles se estaban armando en cantidades ingentes.

En nuestras reuniones de mayo quedé las dos veces con la impresión de que Allende sabía que la situación se encaminaba hacia el desastre, y que deseaba ayuda para salir del trance. Pero Allende también era un hombre de mundo, un político de muchos años, que en innumerables ocasiones había sorteado peligros graves y que sentía, por tanto, una gran confianza en sus capacidades. La primera vez mencionó el peligro de una guerra civil, y fue como un fogonazo, una chispa en la cual se alcanzaba a vislumbrar el miedo, un miedo sincero y profundo a recortarse contra la historia como el Presidente bajo cuyo mandato se pudiera producir la peor de las desgracias nacionales.

Allende quería encontrar una manera de aproximarse a la DC. No es que él no tuviese medios propios para hacerlo, porque muchos políticos del PDC conservaban una amistad antigua con él; quería que este acercamiento no pareciera una capitulación, sino un diálogo por el cual ciertos consensos básicos permitieran resolver los conflictos pendientes.

El sabía que sus amigos dentro del PDC pertenecían, casi sin excepción, al ala izquierda; y este sector había quedado en minoría poco antes, con la elección de Patricio Aylwin como presidente.



El Presidente Allende y el cardenal, en una de las invitaciones de mayo de 1973 a La Moneda.

Entendía que un diálogo verdadero no iba a resultar si lo hacía sólo con un ala del PDC; debía ser con el grupo de dirigentes que le presentaba una oposición más decidida. ¿Por qué me buscaba a mí para eso? Por dos razones: primero, porque quería tener una especie de “testigo moral” que fuese, según sus propias palabras, respetable para los dos bandos; y segundo, porque él, político masón, de formación atea, que casi no había tenido contacto con la Iglesia en su carrera, estaba convencido de que yo tenía una influencia decisiva en el PDC. Y mi persistente negación de ello no lo convenció; simplemente, creía que las cosas se daban de ese modo.

La segunda conversación se produjo cierta noche en que yo iba a cenar con el ex Presidente Frei. Me llamó con urgencia y me pidió que fuera a verlo por unos minutos, aunque retrasara mi llegada a la cena. Allí planteó directamente que su aspiración era conversar en privado con Frei, porque, decía, frente a frente ambos podrían resolver todos los malentendidos y los desacuerdos que estaban haciendo ingobernable al país.

Allende y Frei habían sido amigos durante muchos años. Compartían una larga trayectoria en el Parlamento, a través de la cual, cada uno en su sector, habían llegado a erigirse como los líderes jóvenes y renovadores de la política chilena. Muchas veces habían votado juntos en las causas sociales y la enemistad de la derecha los había fustigado por igual.

La amistad sufrió un quebranto definitivo en la campaña de 1964, cuando Allende y Frei, tras el retiro del candidato de derecha, quedaron como únicos contendores. Allende fue presentado como un servidor de la Unión Soviética y se publicaron imágenes amenazantes de tiranía asociadas a su eventual triunfo. Fue la llamada "campaña del terror". Allende se sintió herido por el hecho de que Frei no hiciera nada para detener estos ataques, siendo que, decía, se conocían de tantos años.

La ruptura se profundizó durante el gobierno de Frei. En uno de esos años, cuando alcanzó la presidencia del Senado, Allende hizo un desaire negándose a presidir la sesión del Congreso Pleno donde Frei leería el mensaje anual a la nación.

Además, las diferencias de estilo de ambos se fueron convirtiendo en rasgos de adversidad. Frei era un hombre notablemente inteligente, con una cultura expansiva, muy metódico y riguroso en sus juicios; Allende tenía sagacidad y rapidez, una gran capacidad para percibir el "clima humano" en distintas situaciones y se mostraba a menudo impetuoso, tenaz, voluntarioso.

Así que aquella noche de mayo le dije a Allende que me parecía difícil que Frei accediera a una reunión, considerando lo tenso del ambiente político. Insistió en que Frei me escucharía, sugiriendo que en todo caso él mismo no tenía otra alternativa. Le prometí intentarlo.

La cena la había organizado el padre Baldo Santi, que es una

persona a la que nadie jamás le rechaza una invitación, porque su hermana, italiana como él, cocina por encima de todos los gustos. Nos iban a acompañar además Sergio Ossa Pretot y Sergio Muñoz. Frei había llegado puntualmente a las 21, y me esperaba en la puerta, con el padre Santi, cuando llegué, ya cerca de las 22. Les conté que me había llamado Allende.

—La segunda vez en quince días...—, comentó Frei, cavi-
lando.

Durante la cena, los amigos presentes me pidieron que dijera cómo veía la situación del país, ante lo cual hablé largamente, insistiendo en la necesidad de que las fuerzas políticas buscaran un entendimiento. Describí, en síntesis, una situación de intransigencia en los dos bandos, el gobierno y la oposición, y agregué que, por mis conversaciones, creía que el Presidente quería romper ese círculo.

Luego habló Frei. Lo hizo brillantemente, como siempre, aunque desde un ángulo que a mí me pareció excesivamente pesimista. Dijo que el gobierno no controlaba a los sectores más exaltados, y que la actitud de sus líderes, incluido el Presidente, era ambigua. Por tanto, no existían las garantías objetivas para que una gestión de acercamiento pudiese ser fructífera. Anotó los hechos de violencia, la anarquía económica, la descalificación sistemática de la oposición, el deseo declarado de algunos jefes de la UP de llevar la situación al terreno del enfrentamiento.

Discutimos un poco sobre estos puntos, hasta que en cierto momento le planteé que él debía respaldar un esfuerzo de diálogo. Le dije que, en concreto, Allende quería conversar con él, en privado, sin condiciones. Tal reunión podría ser en mi casa. Meditó unos segundos. Luego dijo, lentamente:

—Don Raúl, si usted me lo pide como católico, yo debo decir que sí, porque es mi pastor. Pero si me lo pide como político, debo decir que no.

—Se lo pido como católico—, contesté.

Frei guardó silencio. Había un ambiente un tanto dramático, y todos estábamos nerviosos, tensos, hasta irritables. En la conversación que siguió a ese instante, supongo que motivado por un deseo exagerado de persuadir a Frei, llegué a decir una barbaridad:

—Si yo tuviera que analizar cuál gobierno ha sido más cristiano, en su cercanía con los pobres, si el anterior o el actual, me costaría elegir...

Estuve mucho tiempo arrepentido por esto que dije. Supe que había herido a Frei como nunca antes, y que debió hacer un gran esfuerzo para creer en mi buena fe. Se produjo un silencio tremendo, y la cena terminó a los pocos minutos. Si hubiese imaginado siquiera lo que esta patochada iba a significar para mi amigo de tantos años, hubiese pedido perdón de inmediato. Pero lo que recuerdo es que yo deseaba fervientemente que Frei tomara la iniciativa en la solución de la crisis política, y que la enervante situación hacía que a menudo perdiésemos el valor de las palabras, exagerando o minimizando nuestras ideas.

Pocos días después, Frei me envió una carta respondiendo a la proposición: “Con total franqueza, quiero decirle que después de leer cuidadosamente el último mensaje (presidencial), considero inútil esta reunión, ya que en ella se insistiría en un planteamiento que no tiene base para ninguna solución de los problemas que enfrenta el país. Además creo que ella es muy inconveniente, por cuanto tiende a crear una imagen de confusión en la opinión pública, de la cual el PDC ha sido víctima reiteradamente”.

“Yo naturalmente siempre estoy dispuesto, en un caso de urgencia para el país, a concurrir si soy llamado por el Presidente de la República en forma clara y pública hasta su despacho y jamás negaría mi contribución. De esto puede usted tener la certeza”.

Agregaba que si yo llevaba adelante la invitación, no podría negarse, “por estar usted de por medio y ser en su casa”. Pero advertía que, siendo muy difícil guardar reserva de estas cosas en Chile, ya circulaban rumores sobre el eventual encuentro. Y concluía:

“Si le formulo estas consideraciones no es por evitarme una reunión que desde luego, siendo en su casa, es muy grata, sino porque creo realmente que si en un momento dado es necesario que yo contribuya a la paz pública o a cualquier solución útil para Chile, es conveniente que los pasos se den muy cuidadosamente, sin quemar oportunidades que pueden ser satisfactorias desde el punto de vista personal, pero estériles desde el punto de vista de lo que usted, yo y seguramente su invitado patrióticamente buscan”.

Acompañaba un recorte de *La Nación* donde se le atacaba duramente. “Este es el diario oficial del gobierno”, decía, con letra manuscrita. “Se maneja directamente desde La Moneda. Mientras esta campaña continúa, creo (que) es inútil todo, por dignidad”.

En efecto, Frei estaba siendo objeto de una de las peores campañas de prensa de todo el período. Unas semanas antes, las investigaciones en EE.UU. sobre la intervención de la CIA en la política chilena habían sido usadas para decir que el triunfo del PDC en 1964 fue posible por “el dinero del imperialismo”. Los diarios de la UP llegaron a afirmar que el propio Frei había recibido dinero. Sé que dirigentes demócratacristianos pidieron a Allende que detuviera esas injurias, pero eso no sucedió. Renán Fuentealba declaró que no desmentir esas versiones por parte de Allende “es una actitud impropia de un hombre que se dice hombre”.

Frei asumió la presidencia del Senado en mayo, lo que no impidió que la campaña continuara. En verdad, este descontrol de la prensa no tenía frenos. En junio, cuando la Corte de Apelaciones sumarió a un funcionario de gobierno por no acatar un fallo, los miembros del Poder Judicial fueron objeto de las calificaciones más insolentes que pueda recordar. Esto llevó incluso a un enfrentamiento entre Allende y la Corte Suprema, que comenzó cuando el tribunal se quejó del incumplimiento de las órdenes judiciales por funcionarios de gobierno y el Presidente replicó acusándolo de “falta de celo en el castigo a los sediciosos”; la Corte escribió una carta de dúplica diciendo que el Presidente se sumaba a la campaña en su contra, y Allende la devolvió por “irrespetuosa e inconveniente”.

La tensión institucional tenía su deformado reflejo en las calles. Ese mes, la huelga de los mineros se trasladó hasta Santiago, con una marcha de centenares de trabajadores que se enfrentaron duramente a la policía. Varios días de violencia se sucedieron, y la huelga otra vez amenazó con extenderse a más campos laborales.

A la vista de esta situación, el 1º de junio de 1973 todos los obispos de la zona central nos reunimos en Rancagua y emitimos una declaración (*Sólo con amor se puede construir un país*) que expresaba no sólo nuestra angustia, sino también nuestro cansancio, ante los problemas que veíamos: las colas, el mercado negro, el desabastecimiento, el éxodo de profesionales, la falta de veracidad de los

medios de comunicación, la constante incitación al odio. “Socialismo y capitalismo”, decíamos, “son dos expresiones ideológicas que se han convertido en símbolo. Querer reducir todo el problema chileno a estas dos palabras es una simplificación que no se ajusta a la verdad”.

Pedíamos que el Señor obrara sobre nuestra tierra el milagro de Pentecostés: “Los hombres que hablaban idiomas diferentes lograron entenderse y superar las distancias”.

Aunque evidentemente los obispos que lo firmábamos no habíamos tenido una misma opinión frente a la UP, aquel texto obtuvo un notable consenso. Era nuestra primera invitación pública al diálogo.

Pero ya al otro día se vio que un llamado no bastaba. La derecha estimó que el mensaje era una denuncia contra la UP; la izquierda dijo que los obispos habían desenmascarado a la oposición.

De Pentecostés no habló nadie.

Aquel año, el Papa Pablo VI esperó esa fecha para proclamar oficialmente la preparación de un nuevo Año Santo, que tendría lugar en 1975 y cuya culminación se celebraría en Roma. Los Años Santos son una tradición instituida para celebrar los jubileos de la Redención y, desde 1300, se celebran cada 25 años. Pero esta vez el Papa deseaba que la celebración se encarnara en las realidades locales, por lo que convocó a la realización de un Año Santo en cada país, para 1974, como preparación del jubileo universal. Pidió que ese encuentro local de la catolicidad estuviese dedicado a la reconciliación de los hombres, consigo mismos, con Dios y con la sociedad. Era algo que se ajustaba a nuestros propósitos y afanes de esos días con maravillosa precisión.

Subrayamos esto en nuestro mensaje de convocatoria. La Iglesia chilena debía exhortar a la reconciliación, “porque tal vez nunca en su historia... ha sentido tan en carne viva la necesidad de ella” y porque “nos urge liberar a Chile cuanto antes de este torbellino fratricida”.

Atenazado cada vez más por el mismo fantasma de la guerra civil, en esas mismas fechas Allende planteó a la dirección de la UP la realización de un referendo para dirimir la reforma sobre las tres áreas de la economía. Allende creía que esa iniciativa audaz cumpli-

ría el doble objetivo de resolver la *impasse* institucional y devolver el debate a los temas de fondo, sacándolo de la espiral de violencia. Además, le permitiría ganar el tiempo necesario para hacer ajustes en los sectores que le estaban causando problemas, incluidas, probablemente, las Fuerzas Armadas, cuyas expresiones de hostilidad se habían hecho notorias.

Pero la dirección de la UP no llegó a acuerdo sobre el plebiscito, y entregó su negativa a Allende. El Presidente se quedó entonces sin ese instrumento y la oposición corroboró su idea de que el gobierno no quería buscar ninguna salida pacífica.

El Partido Comunista inició en esos días su campaña de "No a la guerra civil". Esta consigna, que nadie podría haber rechazado, tenía sin embargo el ingrato cariz de una contradicción entre palabras y hechos, puesto que sectores de la UP estimulaban la constitución de grupos armados y proclamaban su decisión de no negociar nada con nadie. Es por eso que muchos pensaban —y, francamente, yo me incluía entre ellos— que el rechazo tan publicitado a la guerra civil se debía en realidad a que no estaban seguros de ganarla.

Tuve que viajar a Europa en aquel mes, así es que muchos de los acontecimientos de entonces los conocí sólo de oídas. De todos modos, antes de partir recibí la visita de una delegación comunista, que quería pedirme una intervención directa para evitar el estallido de una conflagración, que a ellos les parecía casi inminente, en vista de que parte de la derecha utilizaba el complot y el terrorismo contra el gobierno. No sólo los comunistas me expresaron esta inquietud; muchas otras personas pensaban que se estaba al borde de una tragedia armada, y algunas creían que una gestión mía podría evitarla.

El 29 de junio, mientras regresaba acompañado por el padre Renato Poblete, el avión en que veníamos fue advertido de que no podría aterrizar en Santiago; el aeropuerto estaba cerrado debido a un amotinamiento militar cuyos resultados completos aún no se conocían. Debimos regresar a Buenos Aires, donde nos recibió el embajador Ramón Huidobro. Por él supimos los primeros detalles de lo que había ocurrido.

En los días anteriores, una infidencia del abogado Sergio Miranda Carrington, vinculado a grupos nacionalistas, permitió al gobierno saber que un grupo de oficiales preparaba una sublevación.

El Servicio de Inteligencia Militar logró identificar a los conjurados, cuyas cabezas se hallaban en el Regimiento Blindados N° 2. Un capitán de esa unidad fue arrestado.

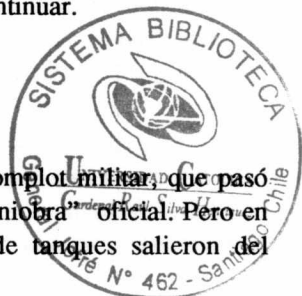
Pero, paralelamente, el comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Prats, había llevado hasta el consejo de generales la proposición de que la institución volviera a entrar al gabinete, por expresa petición de Allende. Ocurrió que los generales rechazaron por amplia mayoría la tesis de Prats, en lo que era una de las primeras señales de que el mando estaba perdiendo el control de la



29 de junio de 1973: unidades y tropas del Regimiento Blindados N° 2 atacan el Palacio de La Moneda, mientras las fuerzas leales organizan la defensa.

situación. A la salida de esa reunión, que debió ser muy amarga, mientras Prats se dirigía a su casa, una mujer le hizo una mueca, y el general desenfundó su arma y disparó. El incidente, que no llegó más lejos, sirvió a quienes lo atacaban para demostrar que el general Prats no estaba en situación anímica de continuar.

En este contexto cayó la denuncia de un complot militar, que pasó a convertirse, para la oposición, en una "maniobra" oficial. Pero en la mañana del 29 de junio, tres grupos de tanques salieron del



Blindados Nº 2 y se dirigieron a atacar el Ministerio de Defensa, para rescatar al capitán detenido, y también al Palacio de La Moneda, con el evidente fin de ampliar el alcance de la sublevación.

Prats se puso al frente de las tropas para reprimir la asonada, cosa que consiguió pasado el mediodía. En la refriega hubo 22 muertos y 50 heridos, y el dirigente del grupo militar, el coronel Roberto Souper, fue arrestado. El embajador Huidobro nos contó que además Allende había llamado a los obreros a ocupar las fábricas, e incluso había anunciado que “si el golpe viene, armas tendrá el pueblo”. Coincidimos en que esta intervención había sido imprudente, porque sería vista como una provocación contra las FF.AA.



El general Carlos Prats y el general Augusto Pinochet (a la izquierda, con casco) salen de La Moneda tras informar del control de la asonada, el 29 de junio.

Yo estaba convencido de que los militares no permitirían que se formasen grupos armados en el país, porque eso significaba amenazar directamente su integridad. Se lo dije muchas veces a los jefes de la UP: “Ustedes están locos si creen que los militares se van a dejar encañonar”.

Y fue así, porque el llamado “Tancazo” sirvió a los militares para detectar dónde y cómo podía resistir la UP. Además, ésta reaccionó enardecidamente; en esa sola tarde fueron ocupadas unas 250 fábricas más y nuevos “cordones industriales” afloraron en distintos

puntos. Con esto, la oposición se negó a conceder el estado de sitio y los generales volvieron a negar su acuerdo a un gabinete militar.

Allende decidió entonces acudir a uno de los hombres moderados del PS, Carlos Briones, para que se hiciera cargo del Ministerio del Interior. Su misión era una sola: conseguir el diálogo con el PDC. Cuando los jefes del PS descubrieron esto, quisieron negarle la autorización para asumir. Pero parece que Briones los encaró y obtuvo el pase.

El mismo día de la asonada, en Buenos Aires, el padre Poblete comenzó a insistir en que yo debía hacer un nuevo llamado a la pacificación, ahora de manera apremiante. No me convenció tan rápidamente, pero estimuló una inquietud que ya tenía. A nuestro regreso, el tema volvió a surgir en el Consejo de Vicarios, donde una



Julio de 1973; el Presidente Allende toma juramento al nuevo ministro del Interior, Carlos Briones.

mayoría de los padres compartía esta idea. Con todo, me pareció que un nuevo llamado debía tener más peso que el anterior y representar al Episcopado. Ante la urgencia, elegimos el camino del Comité Permanente, cuyo secretario, el obispo Carlos Oviedo, redactó el borrador, con la belleza de expresión y la facilidad de palabra que siempre le han sido características.

La declaración salió el 16 de julio, con un título inolvidable (*La paz de Chile tiene un precio*) y un comienzo que buscaba darle fuerza: "Hablamos en una hora dramática para Chile...". El precio de la paz, decíamos, es "la necesidad de que todos cambiemos de actitud", buscando ya no la afirmación de las propias ideas, sino la parte de verdad que asiste a los adversarios, para construir un gran consenso nacional. Pedíamos una tregua política, y a los grupos sociales y políticos "les imploramos que den los pasos necesarios para crear las condiciones para un diálogo que haga posible un entendimiento".

En menos de 24 horas recibí una carta del secretario general del PC, Luis Corvalán, dando la inmediata aceptación del PC a nuestra propuesta, "para evitar una guerra fratricida". También ese día el Presidente, hablando ante la CUT, se refirió al tema, y llamó al PDC a iniciar conversaciones, aunque no dio detalles. Más tarde se supo que tampoco podía darlos: su partido se oponía firmemente al diálogo, y más con el PDC, al que el secretario general, Altamirano, llamaría luego "lugarteniente del gopismo".

El 23 de julio, Allende me invitó a La Moneda para conversar de la iniciativa. Recuerdo haberle dicho que la última oportunidad estaba en sus manos y que pasaría a la historia como el salvador de Chile si encontraba un camino original para detener la crisis. Me contó de sus dificultades con la UP, y del enojo que sentía con su propio partido; ahora estaba dispuesto a enfrentarlo, y a desautorizar a la dirigencia si era necesario. Yo le reiteré nuestra disposición a ayudar en lo que se pudiera.

Entonces él afirmó que yo debía llamar a Patricio Aylwin y decirle que se contuviera, que no hiciera una oposición tan dura, que la presencia de su amigo Carlos Briones en el Ministerio del Interior era una prueba de la rectitud de intenciones del Presidente. Siguiendo con su antigua idea, agregó que él sabía que yo era poco menos que el dueño de la DC. Como otras veces, le insistí en que esto no era así; le recordé lo que había ocurrido con Frei y le conté que incluso con Aylwin tenía por esos días escasos contactos, aunque evidentemente éramos amigos. Simplemente, le dije, no debía ser yo quien lo llamara; esa era una tarea que le correspondía a él, y que yo lo instaba, por favor, a que lo hiciera.

Salí de ese encuentro con un cierto pesimismo, pero también con la esperanza de que el deseado diálogo se concretara por fin. Lo cierto es que el Presidente mostró su decisión dos días después, cuando enumeró en un discurso ocho puntos para el diálogo, entre los que se hallaban la definición de las áreas de propiedad, el freno de la inflación y el desabastecimiento, el rechazo a fuerzas armadas paralelas y el fin del bloqueo legislativo.

El 28 recibí la carta de Aylwin aceptando el diálogo, en nombre de "un deber moral y patriótico..., sobrepasando para ello los legítimos sentimientos de duda y recelo que la polarización y la inseguridad provocan en el espíritu de nuestros compatriotas".

Yo sabía que a Aylwin le había costado mucho esta aprobación. Cuando la planteó, poco antes, en una reunión ampliada de su partido, fue abucheado y hasta la prensa adicta le fue hostil. Consiguió que su posición fuese aceptada bajo la enfática afirmación de que mientras hubiese la posibilidad de una salida democrática, el PDC no podía desestimarla.

Para reforzar su política, Allende quería proponer al PDC integrar a cuatro de sus dirigentes al gabinete, para lo cual obtuvo dificultosamente el acuerdo de la UP. Mi amigo José Antonio Viera-Gallo, que militaba en el MAPU y había sido subsecretario de Justicia, realizó los contactos con Gabriel Valdés, Domingo Santa María, Radomiro Tomic y Fernando Castillo Velasco. Pero el PDC, en una reñida votación, rechazó la oferta. Castillo Velasco se mostró dispuesto a asumir sin permiso de su partido, pero esto no parecía muy razonable ni tampoco cumplía con los propósitos de Allende.

Los sectores interesados en impedir el diálogo intensificaron sus acciones en los días previos. Se sucedieron los atentados terroristas y el 26 de julio, después de haber regresado de una recepción en la embajada de Cuba, fue asesinado el comandante Arturo Araya Peters, edecán naval del Presidente. El comandante Araya había estado bajo fuerte tensión en las semanas previas, debido a que se le reprochaba su cercanía con el Presidente. Con el tiempo se supo que la autoría del atentado correspondía a un comando de ultraderecha, que actuó con lógica semejante a la de quienes asesinaron, tres años antes, al general René Schneider.

El encuentro entre Allende y Aylwin fue fijado para el lunes 30 de julio de 1973. Aylwin estimaba tan grave el momento, que el día anterior pidió al padre Percival Cowley que oficiara una misa en su casa para orar por el diálogo.

A la reunión concurren Aylwin y el vicepresidente Osvaldo Olguín; los recibieron Allende, Briones y el canciller Clodomiro Almeyda, que representaba la anuencia del PS, conseguida por el Presidente después de grandes dificultades. En las varias horas de debate, Aylwin y Olguín plantearon que el PDC requería la resolución de puntos básicos (afianzar el estado de derecho, garantizar a las FF.AA. el monopolio de la fuerza, terminar con las tomas y definir el régimen de propiedad), y recomendaba la formación de un gabinete con militares, para producir un clima "de desarme espiritual y material".

Allende y Briones propusieron que se estableciera un gran acuerdo sobre los problemas más urgentes (grupos armados, competencia entre poderes del Estado, aspectos puntuales de la propiedad, fin de la especulación), para luego convertir cada tema en legislación. Ellos estaban de acuerdo en que la mayor parte se resolvía con la reforma constitucional, pero insistían en que no podían promulgarla tal como el Congreso lo pedía. En verdad, esto era una cuestión de voluntad política; el impedimento del gobierno se debía a dos cosas: el temor de que este mecanismo pudiera emplearse después para inhabilitar al gobierno y el hecho de que muchas empresas habían sido tomadas por sus partidarios, y la reforma obligaría a devolverlas, con el consiguiente deterioro de la UP.

Allende propuso que para estudiar estos puntos se formaran comisiones bilaterales y que la conversación continuara otro día. Pero Aylwin, que veía estas sugerencias como dilatorias, planteó una urgencia mayor. Así es que se volvieron a reunir ese mismo día, en la noche; para entonces ya no llegó Almeyda, y en cambio lo hizo el comunista José Cademártori, señal clara de que el PS no deseaba continuar y el PC sí.

Al día siguiente, Aylwin envió a Allende una carta haciéndole saber que a su juicio el gobierno no estaba aceptando ningún planteamiento y sólo ofrecía comisiones que eran generalmente inoperantes. En estas condiciones, creía necesario insistir en sus

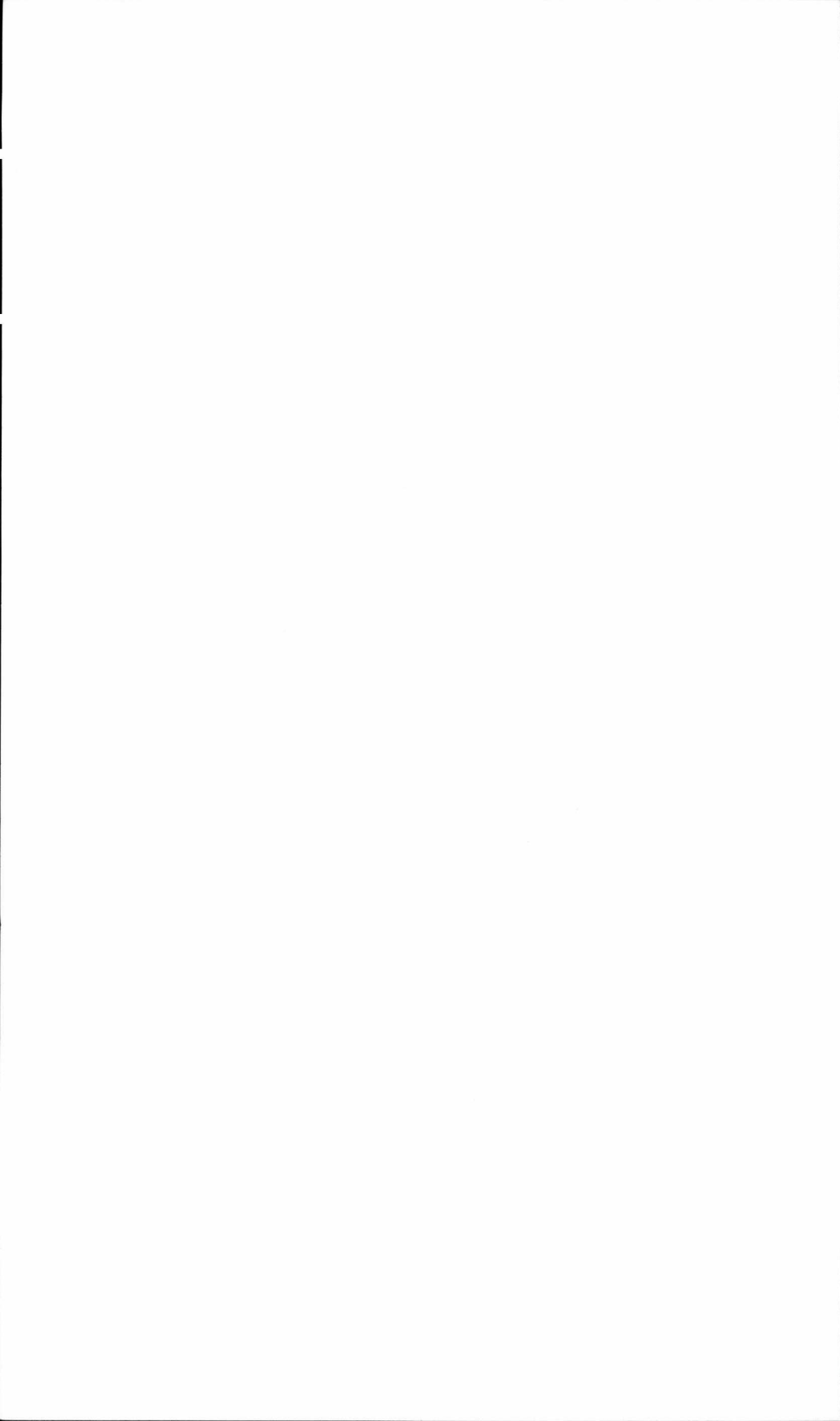
proposiciones originales. Allende respondió el 2 de agosto, ofreciendo transferir al Poder Constituyente el conflicto de la propiedad, resolver los problemas derivados de éste, dictar leyes paralelas sobre empresas y promulgar otros proyectos. Al final le decía que debía proseguir el diálogo.

Pero el PDC estimó que esto significaba el desahucio de las conversaciones, y así lo declaró públicamente.

En el ínterin, se desató una nueva huelga de camioneros, que derivó en violentos incidentes con la policía en las afueras de Santiago. El propio Allende debió alertar sobre el hecho de que se habían producido 180 atentados dinamiteros en menos de 40 días, afectando torres eléctricas, gasoductos y líneas férreas en todo el país. La FACH y la Armada dirigían allanamientos masivos en industrias de Santiago y Valparaíso, y el paro amenazaba con generalizarse otra vez, como en octubre del 72.

En su carta a Aylwin, Allende había dicho que cambiar el gabinete esta vez no aportaría nada. La verdad era, sin embargo, diferente: el general Prats seguía sin conseguir el apoyo de sus oficiales para reasumir en el gobierno; éstos le imponían la condición de que su mando fuese efectivo, por encima de la UP. La crisis huelguística dio nuevo empuje a Prats, que consiguió persuadir a los demás comandantes en jefe para lo que parecía un último esfuerzo por rescatar la institucionalidad.

Así, una semana después asumieron Prats, en Defensa; el almirante Raúl Montero, en Hacienda; el general de la FACH César Ruiz Danyau, en Obras Públicas y Transportes, y el general de Carabineros José María Sepúlveda, en Tierras. Significaba que, contra el deseo de sus subalternos, otra vez los comandantes en jefe se integraban sin mando sobre el gabinete.



Última cena en Simón Bolívar

El gabinete con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas juró el 9 de agosto de 1973, en medio de las huelgas que azotaban al país.

Siete días después se originó la primera crisis de ese mismo gabinete: así de dramáticas eran las circunstancias.

Ocurría que los camioneros en paro se habían concentrado en la localidad de Nos, en un verdadero campamento de emergencia. Algunos funcionarios de gobierno, y en particular las autoridades regionales de Santiago, estimaron que para que no se repitiera la temible experiencia de octubre de 1972, era mejor emplear toda la energía represiva desde el comienzo. Como segundo paso de esa estrategia, la autoridad anunció e inició la requisición de camiones, lo cual generó más violencia. La situación llegó a tal grado de tensión, que las mujeres de los camioneros me pidieron intervenir para que el gobierno accediese a sus demandas. Contesté que poco y nada podía hacer ante un conflicto de esa magnitud.

En el gabinete, a cargo de Obras Públicas y Transportes, se había incorporado el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general César Ruiz Danyau, consciente de que debía hacer frente al paro. Naturalmente, su primera decisión fue cesar las requisiciones y abrir una negociación. Pero la autoridad regional, que mandaba a la fuerza pública, siguió con su propia política.

Cuando se anunció la segunda incautación de camiones, el general Ruiz Danyau decidió renunciar al gabinete. Era el 16 de agosto. El Presidente Salvador Allende decidió aceptar la renuncia, pero le exigió también que dejara la Comandancia en Jefe de la FACH. Era un hecho sabido que Allende quería remover desde mucho antes a Ruiz Danyau, porque creía que pertenecía a los grupos proclives a un golpe militar. Después del "Tancazo" habían circulado versiones de que el gobierno se aprestaba a sacar al general. Ade-

más, en la huelga de los transportistas era notorio que Ruiz Danyau sufría la presión de sus propios generales, que se oponían totalmente al gobierno.

De modo que era inevitable que se pensara que Allende estaba usando como excusa el conflicto de los camioneros. Pero el Presidente, confiando en su habilidad táctica, ofreció de inmediato el mando de la FACH a los generales más antiguos, que eran Gustavo Leigh y Gabriel van Schouwen, a condición de que también sustituyeran a Ruiz Danyau en el Ministerio. Como no aceptaron, Allende



Los comandantes en jefe entran al gabinete, el 9 de agosto de 1973: general Carlos Prats, almirante Raúl Montero, general César Ruiz Danyau y general José María Sepúlveda.

debió acceder a separar los cargos: el general Leigh asumiría el mando de su institución, mientras otro general (Humberto Magliochetti) se encargaba de Obras Públicas y Transportes. Con ello comenzaba a quebrarse el propósito del Presidente de tener en el gobierno a las instituciones como tales.

El 17 de agosto, Ruiz Danyau llamó a Allende por teléfono y le dijo que no aceptaba renunciar, sobre todo después de conocer los ofrecimientos que estaba haciendo a sus sucesores. Allende se puso firme y exigió la doble renuncia con plazo fijo: las 17 horas de ese día. En la tarde hubo un acuartelamiento en la base aérea El Bosque.

Unos pocos días antes —quizás cuando la renuncia de Ruiz Danyau al Ministerio se estaba recién incubando—, el Presidente Allende me llamó para decirme que se necesitaba restablecer el diálogo urgentemente; estaba convencido de que a lo sumo quedaban unas pocas semanas antes de que sobreviniera una revolución violenta. Me explicó por qué había fracasado el diálogo con el PDC; según él, la publicidad había sido mala para el proceso, porque había estimulado la presión de los sectores extremos.

Agregó que no podía seguir contando con la dirección de la UP, y que estaba decidido a tomar iniciativas personales para resolver la crisis. No veía otro camino. Me pedía, pues, que “una vez más” lo ayudara; creía que una conversación privada con Patricio Aylwin sería un paso crucial.

Accedí. Llamé a Aylwin y le planteé directamente el punto. Podríamos cenar a solas, los tres, en mi casa, con total reserva. Aylwin estaba reticente. Sentía que la experiencia del diálogo anterior había sido muy mala. El se había comprometido ante la Junta del PDC a no entrar en conversaciones secretas, porque las propias bases lo pedían: decían que eran señales de debilidad, o que por lo menos así las interpretaba el gobierno. También desconfiaba del Presidente; temía que se tratara de unos de sus clásicos movimientos para ganar más tiempo y deteriorar a la oposición. Ante estos argumentos, insistí en que había que buscar un camino, porque el tiempo se agotaba. Le subrayé que no quería intervenir en política, pero sí ofrecer una oportunidad sin compromisos, en la que se pudiera incluso, y ojalá, llegar a soluciones. Debo admitir que yo sabía que Aylwin aceptaría mis argumentos. Siempre ha sido un católico leal, jamás ha desconfiado de los pastores y me ha brindado una amistad sincera desde que nos conocemos.

Después llamé a Eduardo Frei, consciente de que un paso de este tipo debía ser conocido por él, que era la primera figura de la oposición y que tenía además una estrecha relación personal con Aylwin. Frei me dijo que conversaría con él.

Aylwin llegó puntualmente a las 9 de la noche a mi casa. Pocos minutos después me llamó el Presidente Allende, para anunciar que estaba retrasado. Demoró más de una hora.

En cuanto entró se excusó y explicó, con esos gestos mundanos y seguros que lo caracterizaban, la razón de su atraso.

—¡Las cosas que pasan! El general Ruiz acaba de renunciar al Ministerio, pero pretendía conservar su cargo de comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Naturalmente, yo le he exigido que también lo deje.

—Presidente —dijo Aylwin, de inmediato—, ¿qué cosa quería que hiciera el general? No tenía otro camino... Un comandante en jefe designado ministro de Transportes en medio de un conflicto del ramo, al que el gobierno no le da los instrumentos para solucionar ese conflicto, no puede decorosamente hacer otra cosa que irse. Lo que me asombra es que no lo haya hecho antes.

—¿No ve que usted no sabe? —dijo Allende, muy tranquilo—. Yo le voy a contar: cuando íbamos a constituir el gabinete, yo le ofrecí a Ruiz el Ministerio de Minería; pero Ruiz no aceptó cuando supo que en el orden de prelación de los ministros quedaría por debajo del general director de Carabineros, que ocuparía Tierras. Por eso insistió en asumir Obras Públicas y Transportes. Yo le advertí los problemas que tendría. Así que usted, Patricio, está equivocado y habla de lo que no sabe.

“Pero ustedes comprenderán que, si he querido formar un gabinete en el que estén presentes los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, yo no podía aceptar que uno de ellos, por una discrepancia política con el gobierno, quisiera dejar ese gabinete y continuar en el mando. Eso habría significado permitir que la institución como tal quedara en una situación de discrepancia oficial. No podía ser. El general Ruiz intentó resistir; incluso hoy me llamó por teléfono para decirme que no se iría, y parece que habló con algunos oficiales. Se ha empeñado mucho en este asunto”.

Allende hizo una pausa.

—Pero —continuó, sacando un papel del bolsillo derecho—, aquí tengo la renuncia del general a ambos cargos.

Y luego lo volvió a guardar, dando un pequeño golpe seco en el bolsillo.

Tras los aperitivos, los invité a pasar a la mesa. Nos acompañaría en la cena únicamente mi secretario, el padre Luis Antonio Díaz.

Allende era un invitado perfecto para las ocasiones sociales. Actuaba con naturalidad, hacía gala de buen humor y pasaba con facilidad y elegancia de los temas triviales a los trascendentales. Parecía que cualquier escenario le era cómodo.

Cuando nos sentamos, él comenzó a hablar precisamente de cosas accesorias y, casi sin que lo notáramos, pasó a describir su tarea de gobernante.



El Presidente Salvador Allende saluda a Patricio Aylwin, presidente del PDC, durante el diálogo de julio en La Moneda. Atrás, Osvaldo Olgún, vicepresidente del PDC.

—Cuesta mucho gobernar, señor cardenal —dijo—. Ustedes no se imaginan los esfuerzos que he tenido que hacer para cumplir el programa de gobierno de la Unidad Popular, a pesar de las muchas condiciones adversas con que día a día nos topamos. Sin exagerar, creo que este ha sido uno de los gobiernos que más dificultades ha encontrado para ejercer su tarea. Pero creo que vamos a salir adelante. Yo soy optimista...

Aylwin estaba tremendamente preocupado por el sentido del encuentro. No se sentía seguro de qué buscaba Allende, y no quería que se convirtiera en una mera reunión de charla. Estaba ansioso por ver resultados concretos. Así que después de oír al Presidente, habló con mucha seriedad, como si estuviera ante un instante crucial.

—Yo creo que el momento es muy grave, Presidente —dijo—. Usted puede pasar a la historia con dos imágenes: una, la del hombre que ofreció construir en Chile el socialismo en democracia y que, al cabo de tres años, no ha construido el socialismo, ha destruido la democracia, ha arruinado la economía y ha puesto en riesgo la seguridad del país. La otra, la de un hombre cuyo gobierno marque un hito en la historia de Chile, de tal manera que se diga: antes de Allende y después de Allende.

“Pero para que ocurra esto último, usted tiene que definirse, tiene que tomar una decisión política. Hasta ahora, ha hecho la parte sucia de su gobierno: ha destruido las estructuras capitalistas de la sociedad chilena, pero no ha construido nuevas estructuras. Esto exige consolidar el proceso, institucionalizarlo en las formas jurídicas y económicas. Hay que poner orden en este caos.

“Hoy en Chile nadie trabaja, Presidente; los partidarios del gobierno tiran cada uno para su lado y mantienen un clima de constante agitación. ¡Usted tiene que escoger, tiene que elegir! El drama de todo hombre, y más de un gobernante, es tener constantemente que elegir. No se puede estar al mismo tiempo bien con Dios y con el diablo. Usted no puede estar bien con Altamirano y con la Marina. No puede estar bien con el MIR y pretender estarlo con nosotros. Hasta ahora, usted parece querer conciliar lo inconciliable y, con su capacidad de persuasión, cree ir superando los obstáculos; pero eso es sólo transitorio. Para lograr soluciones reales, tiene que definirse”.

Allende escuchó en absoluto silencio. Me pareció que percibía bien el dramático significado que Aylwin buscaba conferir a su palabras, y que quería acoger tanto su solemnidad formal como su ansiedad de fondo con la mejor disposición.

—Sí, Patricio —respondió—. Yo estoy de acuerdo en que es imperioso institucionalizar el proceso de cambios. He insistido en que la gente debe trabajar para sacar adelante al país, y no esperar todo del gobierno o del Presidente. He tratado de infundir una disciplina de trabajo, en el gobierno y en el país. Creo que he sido claro en este punto. Pero qué pasa: que uno se encuentra con un aparato estatal lento, muchas veces ineficiente, que entorpece en vez de ayudar. Pelear con la burocracia chilena es algo muy, muy difícil. No les voy a negar que entre mi propia gente se tiende a caer en estos errores; es algo que se los he dicho personalmente, muchas veces. Ahora mismo hemos estado discutiendo sobre la política económica, que a mi modo de ver tiene muchas fallas. Les he dicho que hay que parar la inflación, que hay que mejorar la distribución, mejorando también la producción.

Allende se extendió en detalles sobre los defectos que había detectado en su equipo. Según me dijo después, Aylwin tuvo la impresión de que el Presidente eludía sus planteamientos de fondo —los que se referían a optar— y que quería demostrar que estaba mejor informado que nadie sobre su propia gestión.

—Perdone que sea insistente —dijo Aylwin—, pero a mí, a nosotros, a mi partido, y yo creo que también a la mayoría del país, le parece que sus buenos propósitos y palabras no se concilian con los hechos.

—Señor cardenal, señor senador, señor secretario —replicó Allende, con tono solemne y dirigiéndose a mí—: yo he prometido que no tocaría a la Iglesia ni con el pétalo de una rosa. Digan si no es verdad que he cumplido.

—Sí —le contesté—, y yo le agradezco la actitud que usted ha tenido para con la Iglesia, siempre respetuosa y comprensiva. Pero debo manifestarle que sus mandos medios no siempre han cumplido.

—¿Y sus mandos medios? —replicó Allende, al instante—. ¿Qué me dice, señor cardenal?.

La alusión (a los Cristianos por el Socialismo, evidentemente) nos hizo reír a todos de buena gana.

Habíamos terminado la cena. Ofrecí entonces nuestra tradicional “aguüta de cebada” e invité al Presidente y al senador a pasar al escritorio. Mientras se sentaba, Allende declaró su satisfacción:

—Esto es Chile: el Presidente de la República, masón y mar-

xista, se reúne con el jefe de la oposición en la casa del cardenal. ¡Esto no ocurre en ningún otro país!

Poco después, Aylwin volvió tomar la palabra, cada vez más serio. Le incomodaba el tono ligero de la conversación.

—Nosotros tenemos la convicción, Presidente —dijo—, de que el régimen actual, su régimen, marcha directamente hacia la dictadura del proletariado, por la acción de los grupos armados y del llamado “poder popular” que sobrepasa al poder institucional. Nosotros no podemos aceptar esto.

Allende lo miró fijamente y se golpeó la pierna con el puño:

—¡Mientras yo sea Presidente de Chile, no habrá dictadura del proletariado!

Aylwin sonrió con cierta expresión de ironía. Me contó después que estuvo a punto de decir “Mejore la garantía, Presidente”, pero le pareció que sería una impertinencia. Sin embargo, Allende notó el gesto.

—Usted no me cree, Patricio —agregó—. Yo le creo a usted y usted no me cree a mí...

—¡Cómo quiere que le crea, Presidente, si usted ha dicho tantas veces una cosa y su gobierno, o sus mandos medios, han hecho la contraria!

—No, Patricio, usted está equivocado. Usted se cree lo que dice la prensa fascista. El Presidente tiene la capacidad para manejar la situación y para controlar a los extremistas.

En seguida, Allende contó algunos episodios de los últimos días, hasta que de nuevo Aylwin lo interrumpió.

—Bueno, Presidente —dijo—, por lo que veo, parece que usted no tiene nada concreto que pedirle al PDC. Pero el PDC sí tiene, porque nos parece que es obligación del gobierno dar algunos pasos para aliviar la tensión existente, y mostrar claramente su decisión de mantenerse dentro de los cauces democráticos y no dejarse sobrepasar por poderes de hecho. Creo que hay problemas que se pueden resolver de inmediato, y que podrían aliviar la situación. Le planteo algunos, que son los más urgentes: la promulgación de la reforma constitucional, el término de los grupos armados, la solución del conflicto del transporte, la reincorporación de los obreros despedidos de El Teniente, la situación de la Papelera... Yo estoy seguro, Presidente, que si me reúno con Carlos Briones, a quien le tengo plena confianza, si nos reunimos un día completo, vamos a lograr una fórmula para la reforma constitucional. Una fórmula en que usted quede a salvo, porque yo comprendo sus puntos de vista, y que también

la oposición y el Congreso queden a salvo. Hay una fórmula.

—Vamos por partes, Patricio —dijo Allende—. Si usted me dice eso, yo le contesto que a mí me interesa que la reforma constitucional salga. Y le voy a dar instrucciones a Briones, que por lo demás va a volver a Interior, para que hable con usted. En cuanto a los grupos armados, los peores son los de la extrema derecha y de Patria y Libertad; pero el gobierno está haciendo cumplir la ley por parejo. Y usted sabe que las Fuerzas Armadas están ejerciendo sus atribuciones.

—¿Y los mineros, Presidente? Es algo que exagera...

—¡Yo no voy a reincorporar a la gente de Patria y Libertad, porque esos son unos fascistas! Yo no voy a amparar a estos sujetos que lo único que buscan es derribar al gobierno.

—No me parece. No creo que sean de Patria y Libertad, sino simplemente obreros. Hay muchos democratacristianos.

—Señale usted cuáles son, y yo se los reincorporo, Patricio.

—No —dijo Aylwin, sonriendo—, no se trata de eso. Aquí lo que pasa es que el mismo Carlos Briones fue nombrado árbitro por usted, y él, actuando en esa calidad, falló que los obreros debían ser reincorporados. Pero en el mineral no los reciben por instrucciones de la UP. Así que su gobierno dice una cosa, y la UP, otra, y a su árbitro no le hacen caso...

—Mire, Patricio, no le demos más vueltas a esto. Mañana mismo voy a ordenar el reintegro de todos los que no sean de Patria y Libertad. Pero no voy a hacer eso con los fascistas, con los que están asociados al señor Vilarín, y toda esa pandilla.

—Sólo deben cumplirse las decisiones de Briones...

—Yo me voy a encargar.

—En cuanto a lo de la Papelera, usted sabe, Presidente, que el gobierno le tiene fijados unos precios tan bajos, que la está llevando a la quiebra. Yo no tengo ninguna vinculación con la Papelera, ni interés particular, pero creo que al defender su existencia se garantiza la libertad de información escrita.

—Yo he propuesto una Comisión Nacional de Distribución de Papel...

—Es que esa fórmula, en este momento, no satisface a la opinión pública, que ve en la subsistencia de la Papelera la única garantía efectiva para la libertad de prensa.

—Bueno, Patricio, le propongo lo siguiente: nombre usted una persona de su confianza, y yo designo a otra, para que estudien este problema y nos den una solución. El gobierno va a resolver lo que ellos decidan. ¿Se le ocurre un nombre?

—Sergio Molina.

—Ah, me parece estupendo. Tengo gran aprecio por Sergio, lo considero muy capaz. Yo le voy a comunicar mañana quién me va a representar a mí.

Luego Aylwin planteó el tema de los transportistas. Allende se incorporó, como dando por concluida la reunión. Eran más de las 2 de la mañana.

—Esto lo solucionamos nosotros dos—, dijo.

—No, pues, Presidente —contestó Aylwin—. Cómo nos vamos a estar reuniendo usted y yo para solucionar problemas. Usted sabe que eso no es posible. Usted tiene un ministro, el general Ruiz o quien lo vaya a reemplazar. Por los transportistas actúa el presidente de la Confederación respectiva, Juan Jara, que es demócratacristiano. Estoy seguro que entre ellos pueden llegar a un acuerdo.

—Bueno, pero si no llegan a acuerdo, podemos intervenir nosotros.

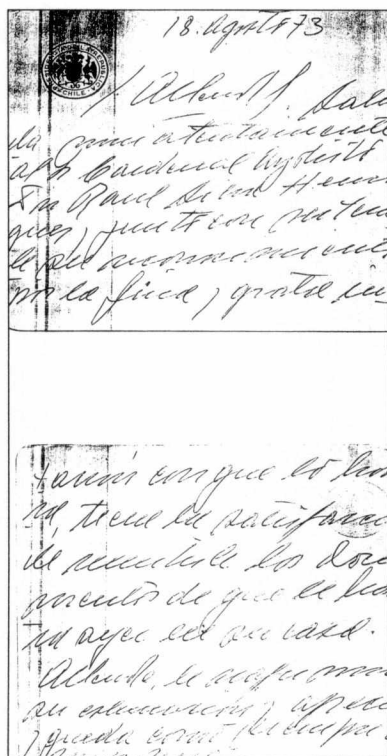
—Conforme—, dijo Aylwin.

Se despidieron cordialmente y me pareció, en algún instante, que había sido una buena conversación, que tal vez se había conseguido mejorar el clima. Pronto me di cuenta de que era sólo una impresión fugaz.

A la mañana siguiente, Aylwin me fue a ver para comentar el encuentro. Le extrañaba que el Presidente no hubiese formulado ninguna proposición concreta, y temía que sus propias intervenciones pudiesen haber sido algo imprudentes. Le dije que no, que había sido una buena reunión, en el género de las conversaciones de sobremesa, y que de ese modo había que tomarla. Aylwin temía que Allende pudiera usar este diálogo, en especial con las Fuerzas Armadas, con lo cual se debilitaría la posición del PDC y la oposición quedaría entregada a la extrema derecha. Después se convenció de que así era, porque Allende contó del encuentro a algunos altos oficiales.

Allende, por supuesto, creía lo contrario: que el PDC estaba demasiado intransigente, que ya se había puesto en manos de la ultraderecha. Al día siguiente de la cena me envió un documento con los puntos principales que se discutían, como si quisiera mantenerme de testigo.

El hecho es que hubo un nuevo diálogo. Allende nombró a Víctor Pey para resolver con Sergio Molina el problema de la Papelera, y los transportistas iniciaron negociaciones. El lunes 20 de agosto, Briones y Aylwin consiguieron acuerdo para promulgar la reforma

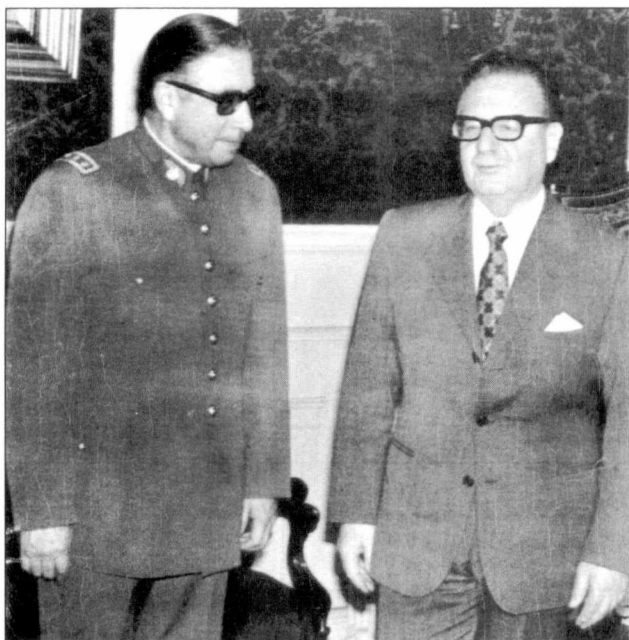


Anverso y reverso de la nota manuscrita enviada por el Presidente Allende al cardenal al día siguiente de la cena en casa de este último.

sobre las tres áreas (ante lo cual el PDC se comprometía a otra reforma, para impedir una acusación contra el Presidente por simple mayoría) y un texto final fue enviado a Allende.

Pero para darle el peso necesario, éste necesitaba que Briones asumiera de nuevo como ministro del Interior. Entonces se encontró

con la tajante prohibición del PS. Esta circunstancia hizo que pasaran más de diez días sin nuevas conversaciones entre Briones y Aylwin, pese a la urgencia que ellas tenían. En esas desesperadas horas, nuestro buen amigo el senador Alberto Jerez jugó un papel decisivo, anunciando que él y otros tres senadores se retirarían de la UP si no permitían el nombramiento de Briones. Entonces el secretario general del PS, Carlos Altamirano, declaró llanamente que Briones “no es socialista”.



23 de agosto de 1973: Allende nombra como nuevo comandante en jefe del Ejército al general Augusto Pinochet.

En el intertanto, la crisis se había extendido también hacia el terreno militar. Tres días después de nuestra cena, el general Ruiz Danyau continuaba resistiendo la orden de Allende de dejar el mando. El 20 de agosto, el Presidente debió viajar en avión a Chillán y en el aire estuvo a punto de producirse un golpe de Estado: los pilotos pensaron secuestrarlo, en un episodio que muy pocos conocieron.

Los rumores sobre el inminente derrocamiento del gobierno se multiplicaban cada hora. Vivíamos nerviosos, nos sobresaltaba hasta

la más mínima señal. En cierta ocasión, un amigo católico que participaba en la UP me fue a decir que el golpe ya estaba en marcha, y que yo debía intervenir para detenerlo. Discutimos acerca de qué se podía hacer —la información de este hombre parecía seria— y al final decidí llamar personalmente, por teléfono, a los comandantes en jefe, para decirles que había recibido esta versión y que les pedía serenidad en tan dramática hora. Fue una sonora “metida de pata”: como mencioné el nombre de mi amigo, los comandantes en jefe protestaron ante el Presidente por la gravedad de la imputación.

El 21, un grupo de señoras de generales del Ejército fue a la casa del general Prats a entregarle una carta en la que le pedían que dejara su cargo. Prats quedó demolido por esta gestión. Algunos generales lo visitaron esa noche para darle su respaldo; entre ellos estuvo el jefe del Estado Mayor, Augusto Pinochet.

Al día siguiente, Prats sometió su puesto a una votación en el consejo de generales, y perdió por amplísimo margen. Entonces renunció.

Allende, siguiendo la recomendación de Prats y con cuidado de respetar la prelación, nombró comandante en jefe a Pinochet, convencido de que haría una depuración en el alto mando, para sacar a los “golpistas”. Pero los días pasaron y la depuración no llegó.

Sólo días después, los almirantes pedían, a su turno, la salida de su comandante en jefe, Raúl Montero, y su sustitución por el jefe del Estado Mayor, almirante José Toribio Merino, de clara línea antimarxista. La Armada había descubierto un complot contra los mandos entre algunos marinos, y sus investigaciones demostraban que en ello habían participado dirigentes de alto rango de la UP, incluido Altamirano.

El 22, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo acusando al Presidente de violar la Constitución, fórmula de transacción que halló Luis Bossay entre el PN, que quería declararlo destituido, y el PDC, que se oponía a ello. En reacción, la UP se declaró en emergencia.

El nombramiento de Briones (que finalmente asumió el 28 de agosto) marcó cierta voluntad de Allende de enfrentarse, si no romper, con la dirección de su propio partido. Pero bien sabía que no podía hacer esto de golpe. Mientras trataba de contener la crisis de las FF.AA., planteó por última vez, a comienzos de septiembre, las



El almirante José Toribio Merino, jefe de la Primera Zona Naval, junto al comandante en jefe, almirante Raúl Montero.

alternativas para que la UP se pronunciara: conseguir un acuerdo con la DC, formar un gabinete de "seguridad nacional" con militares, o entregarle plenos poderes para tomar decisiones urgentes. Increíblemente, la UP analizó durante tres días las propuestas y el 8 de septiembre entregó su respuesta: no a todo.

Creo que, a pesar de cuanto le haya molestado esta reacción, Allende tenía una decisión tomada. Al nombrar a Briones se había propuesto conseguir el acuerdo con el PDC. De hecho, el ministro

ordenó la reincorporación de los mineros de El Teniente, consiguió que concluyera la toma del canal de televisión de la Universidad de Chile, negoció el desalojo de la Escuela de Derecho de la misma universidad (también tomada, esta vez por la oposición), y dio pasos claros para concluir el problema con los camioneros.

Lo que no consiguió fue mantener el diálogo de Briones con Aylwin, que se cortó en septiembre con mutuas recriminaciones: uno y otro se acusaban de ignorar las violaciones de la ley que cometían sus partidarios. Además, en el PDC se había sabido que Briones almorzaba con dirigentes del ala izquierda del partido, lo cual fue interpretado como un doble juego.

El PDC se había endurecido. Muchas de sus bases pedían derechamente que se exigiera la dimisión del Presidente. Esta posición había ganado fuerza también entre los parlamentarios. El 8 de septiembre, decidieron presentar renunciaciones masivas al Congreso, para forzar nuevas elecciones y lograr también la renuncia de Allende.

Confluyendo en la misma dirección de la ruptura, tres partidos de la UP —los socialistas, el MAPU y la IC— decidieron separarse de la política oficial y concentrarse en la organización de los “cordones industriales”, pieza clave del llamado “poder popular”. Era, evidentemente, una preparación para la guerra. El 9, Altamirano agravó la situación a través de un violento discurso en el que admitió sus encuentros con los marineros arrestados.

Ya no había espacio para la paz. Respondiendo a un cuestionario para la revista *Chile Hoy*, que nunca llegó a ser publicado, el 10 de septiembre anoté: “Yo creo que en las circunstancias actuales que está viviendo el país, no podemos continuar un ‘diálogo indefinido’. Ha llegado la hora de transformar el diálogo en hechos concretos. Son esas actitudes y esas verificaciones objetivas las que expresarán si la búsqueda de un consenso mínimo fue eficaz”.

Cuando llegó el lunes 10, muchas decisiones cruciales estaban ya tomadas. En lo que sería el último eco de nuestra cena, Allende envió ese día un mensaje a Aylwin diciéndole que estaba dispuesto a promulgar la reforma de inmediato, dándose un plazo de tres meses para resolver qué se haría con las industrias y empresas ocupadas de facto.

La DC no aceptó esto.

Paralelamente, el PC envió a Allende una carta en la que, según me han dicho, le entregaba plenos poderes para actuar como mejor lo estimara: era el único partido en esa posición. Esa noche el Presidente redactó una minuta para un discurso en el que, según asegura Briones, testigo del momento, anunciaría un plebiscito. Después de lo expresado contra el plebiscito por los socialistas y otros partidos de la alianza, el discurso tenía un significado de primera magnitud: iba a marcar la imposición de la autoridad del Presidente por sobre los partidos que decían apoyarlo, aun a costa de la ruptura, la disolución o la fragmentación de la Unidad Popular.

Al parecer, Salvador Allende iba a elegir.

Pedimos respeto por los caídos

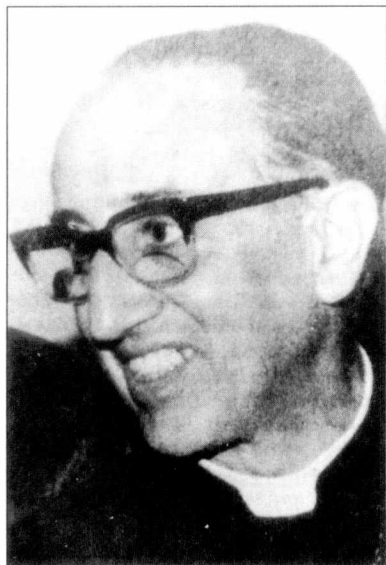
Nunca he podido explicarme por qué misterioso impulso decidí regresar de Punta de Tralca a Santiago el lunes 10 de septiembre de 1973. Había planeado pasar un fin de semana más largo que lo usual, retornando el martes. Incluso me había dado tiempo para visitar a mi vecino de Isla Negra, el poeta Pablo Neruda, que estaba ya gravemente enfermo. Fui a pie, solo, y me quedé varias horas con él, en un ambiente inesperado de recogimiento y espiritualidad. Me habló largamente de sus "relaciones con Dios", que habían sido tan "conflictivas", pero que quería mejorar en esos días, que presentía como los últimos. Fue una mañana hermosa. Cuando me iba, como si quisiera rubricar esta inusual conversación que a la vez había sido un examen de conciencia, me regaló un bellissimo poema sobre una iglesia en una pradera de Francia, que reflejaba exactamente sus sentimientos.

Me emocionó este poema como pocas cosas antes en mi vida. Tal vez porque vi en Neruda la cercanía de la muerte, tal vez porque yo mismo estaba especialmente sensible a este tema.

Pocos días antes, el 30 de agosto, nos había dejado, para ir al encuentro del Señor, mi obispo auxiliar Ismael Errázuriz. Salió una mañana del consejo de vicarios para hacerse una pequeña operación; en ella le descubrieron un cáncer generalizado y murió después de unas horas. "Don Isma", como le decíamos, había llegado a ser uno de mis mejores amigos, un verdadero brazo derecho en el Arzobispado y un compañero generoso en la vida de pastor. Durante los últimos meses, solía llegar a mi casa los domingos, sin otro propósito que el de acompañarme, invitarme a pasear o conversar, comer juntos: sabiendo, sin decirlo, que para los obispos hay muchos momentos de soledad que sobrelevar. La muerte de Ismael fue uno de los dolores más grandes que he sufrido.

Quizás muchas de estas cosas hayan influido en aquella intempestiva decisión de volver a la capital el lunes 10 de septiembre. El miércoles 12 teníamos la reunión mensual del Comité Permanente.

En la mañana del 11 me levanté temprano y me dirigí a la capilla para la oración de la mañana. Como siempre, poco después llegó Luis Antonio Díaz, mi secretario. Estábamos en eso cuando entró la madre Socorro, que atendía la casa arzobispal, haciendo un ruido inusitado.



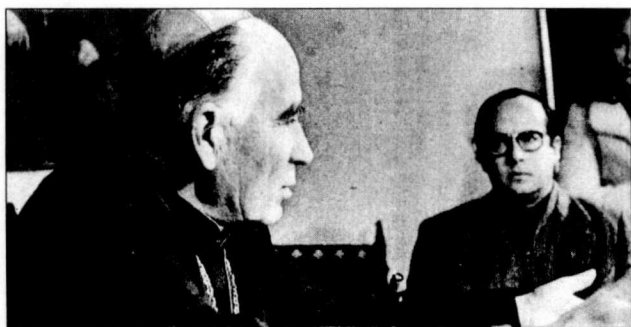
Obispo Ismael Errázuriz.

Luis Antonio la detuvo. Oí apenas lo que decían, aunque la madre estaba agitada. Quería avisar que llamaba el obispo José Manuel Santos, que pedía hablar conmigo. Santos había escuchado en la radio que había una sublevación militar y que derrocaban al gobierno. El padre Díaz se acercó a avisarme. Recuerdo que me hincé y pedí al Señor que nos ayudara a discernir en estos instantes terribles. Debo haber demorado unos minutos.

Cuando por fin fui al teléfono, Santos me contó lo que ocurría. Estaba con el obispo Sergio Contreras en la sede de la Conferencia Episcopal, en el centro, y quería que nos reuniéramos, aunque ellos carecían de vehículo. Le dije entonces que los mandaría a buscar en mi auto; poco después comprendí que nada de eso era posible. Luis Antonio acercó una radio y nos pusimos a escuchar las noticias en

el comedor. La gran magnitud del movimiento militar se percibía claramente; no había semejanza alguna con los sucesos de junio anterior. Y eso quería decir que se trataba de un camino sin retorno: entendíamos que si, una vez lanzado, el golpe fracasaba, la guerra civil sería imparable.

Poco después, Luis Antonio me dijo que saldría a dejar al chofer a su casa, pues más tarde no podría salir. No era una decisión muy razonable, pero en ese momento uno no sabía qué podía pasar. Se



El cardenal Silva Henríquez y su secretario, el padre Luis Antonio Díaz, en una foto de 1973.

demoró más de una hora, y trajo un vívido relato de cómo las calles estaban siendo ocupadas por los militares en toda la ciudad; vio que algunas industrias estaban tomadas por grupos de trabajadores armados, y en algún lugar lo detuvieron para que se identificara; el soldado que le cedió el paso le dijo que no podía responder si algo le pasaba más allá.

Toda aquella mañana sonó el teléfono de mi casa. Recuerdo que el primer llamado fue del padre belga Luis Borremans, párroco de San Cayetano, en la población La Legua; Borremans, también asesor de la JOC, había logrado constituir un grupo de muchachos católicos, y ese día había salido a ayudar a los numerosos heridos que cayeron en la población como consecuencia del enfrentamiento entre uniformados y grupos armados que huyeron de las industrias cercanas. Los militares arrestaron a los muchachos pensando que

tenían un policlínico clandestino. (Días después, el padre Borremans también fue detenido, aunque lo liberaron a las 24 horas). Otros muchos llamados eran de parroquias que querían saber cómo estaba yo, o informar lo que estaba ocurriendo en sus sectores.

Todo ese día tratamos de ubicar por teléfono al obispo y vicario castrense Francisco Javier Gillmore, en la esperanza de que pudiera darnos más información y sugerirnos cómo actuar. Pero nuestros esfuerzos fueron infructuosos: en ningún lugar podían informarnos dónde estaba.

En vista de que él no podría ayudarnos a concretar la reunión del Comité Permanente que habíamos acordado con el obispo Santos, Luis Antonio decidió acudir a su padre, el general de Sanidad



11 de septiembre de 1973: soldados y bomberos sacan por la puerta de Morandé 80 de La Moneda el cadáver del Presidente Salvador Allende.

Eduardo Díaz Carrasco, director del Hospital Militar. El general quedó de respondernos en la tarde. A eso de las 15 horas volvió a llamar; nos contó que el Presidente Salvador Allende había muerto en La Moneda, aparentemente suicidado. Esta noticia me produjo una congoja profunda; pensé, además, que esa muerte iba a hacer muy difícil la normalización del país, y que inevitablemente marcaría el rumbo de la intervención militar.

En la tarde estuvimos con Luis Antonio viendo la televisión. En cierto momento las imágenes de destrucción terminaron por deprimirme. Me retiré al escritorio y oré durante horas, con la mente

puesta en los millares de compatriotas que estarían sufriendo en esos instantes los estragos de la violencia. Sentía en esos momentos, como quizás nunca antes en mi vida, el peso inmenso que haría recaer sobre la Iglesia una situación de la que no era responsable. Pensé en la dureza de las circunstancias: después de tantos ajetreos, al borde de mis 66 años, cuando me creía ya cansado y viejo, el Señor nos enviaba la más dura prueba: ¿no era agobiante?

El día 12 no se pudo salir. El toque de queda fue absoluto. Otra vez el teléfono se mantuvo sonando todo el día.

Mientras tanto, en el centro, Santos y Contreras lograron hallar a Gillmore, quien les consiguió una escolta militar para que ambos pudieran llegar a mi casa. Pasaron a buscar a los obispos Orozimbo Fuenzalida y Bernardino Piñera, y una vez en mi casa comenzamos el debate sobre la declaración. Hubo dos textos en discusión, pero finalmente optamos por el más breve, que a nuestro juicio resumía mejor los puntos especiales que la Iglesia debía plantearle al país. Se afinó cada línea, cada palabra, hasta que estuvimos conformes.

Creo conveniente reproducir ahora, tantos años después, el texto íntegro de ese mensaje:

"1) Consta al país que los obispos hicimos cuanto estuvo de nuestra parte porque se mantuviera Chile dentro de la Constitución y la ley, y se evitara cualquier desenlace violento, como el que ha tenido nuestra crisis institucional. Desenlace que los miembros de la Junta de Gobierno han sido los primeros en lamentar.

"2) Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas, sangre de civiles y sangre de soldados, y las lágrimas de tantas mujeres y niños.

"3) Pedimos respeto por los caídos en la lucha y, en primer lugar, por el que hasta el martes 11 de septiembre fue el Presidente de la República.

"4) Pedimos moderación frente a los vencidos. Que no haya innecesarias represalias, y que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que han sido derrotados. Que se acabe el odio, que venga la hora de la reconciliación.

"5) Confiamos que los adelantos logrados en gobiernos anteriores por la clase obrera y campesina no serán desconocidos y, por

el contrario, se mantendrán y se acrecentarán hasta llegar a la plena igualdad y participación de todos en la vida nacional.

“6) Confiando en el patriotismo y en el desinterés que han expresado los que han asumido la difícil tarea de restaurar el orden institucional y la vida económica del país, tan gravemente alterados, pedimos a los chilenos que, dadas las actuales circunstancias, cooperen a llevar a cabo esta tarea, y sobre todo, con humildad y con fervor, pedimos a Dios que los ayude.

“7) La cordura y el patriotismo de los chilenos, unidos a la tradición de democracia y de humanismo de nuestras Fuerzas Armadas, permitirán que Chile pueda volver muy luego a la normalidad institucional, como lo han prometido los mismos integrantes de la Junta de Gobierno, y reiniciar su camino de progreso en la paz”.

Quedamos de acuerdo en que la declaración fuera emitida al día siguiente, y distribuida inmediatamente a la prensa. Anochece ya cuando los obispos se prepararon para partir; pero la famosa escolta no regresó. En vista de que la hora pasaba, Luis Antonio decidió llamar a su padre, que inmediatamente, y asumiendo la responsabilidad a solas, envió un *jeep* para que acompañara a los obispos.

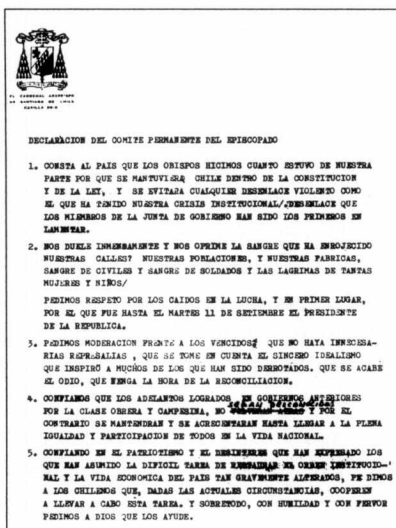
Aquella misma tarde, paralelamente, Luis Antonio consiguió que el general Oscar Bonilla, que acababa de asumir como ministro del Interior, le diera un salvoconducto para circular en horas de toque de queda. Aunque de todas maneras era muy peligroso hacerlo, la tarjeta nos serviría para cumplir un urgente deber pastoral: estar con los sacerdotes, visitarlos, conocer lo que les estaba pasando. Toda la noche del 12 y la del 13 Luis Antonio se entregó a esta tarea; yo, sin salvoconducto, comenzaba a sentirme prisionero en mi propia casa.

El 13 recibí la visita del contralmirante Rodolfo Vio Valdivieso, hermano de René, que era vicario de la zona rural-costa de Santiago; traía un mensaje de la Junta de Gobierno, que quería garantizarle a la Iglesia el respeto que tendría hacia ella y la voluntad de mantener las relaciones más fluidas posibles. Agregó que los miembros de la Junta eran católicos, por lo cual había una doble razón para tal propósito.

Le dije que le agradecía este gesto. A nombre de la Iglesia, yo

debía pedirle, sin embargo, que hubiese sobre todo respeto por las personas, y especialmente por los más pobres, porque con ellos estaba nuestro corazón.

La declaración del Comité Permanente partió ese día a todos los medios de prensa. Y se me ocurrió entonces que, como gesto de deferencia, al día siguiente Luis Antonio la fuera a entregar a la Junta de Gobierno.



Copia original de la declaración emitida por los obispos el 13 de septiembre de 1973. Del archivo del cardenal.

Luis Antonio concurrió al Ministerio de Defensa el jueves 14. Lo atendió Alvaro Puga, que oficiaba como asesor de la Junta. Pero Puga entendió las cosas de otra manera y propuso modificar la redacción de algunos puntos; le molestó, al parecer, la referencia a la sangre, lo relativo a Allende y la petición de término del odio, formulada de manera tan genérica. Luis Antonio le hizo ver que no tenía facultad para modificar nada del texto, y me llamó para explicarme lo que ocurría. Pero ni él ni Puga habían visto con cuidado los diarios.

—Vente a casa —le dije—. La declaración ya está publicada en la prensa de hoy.

Me han dicho que esta publicación fue considerada por la Junta como un acto hostil, quizás el primero de este cardenal del que tanto desconfiaban algunos dirigentes recién instalados en el poder.

No tenía la intención, por cierto. Los obispos habíamos concordado en que el golpe había sido previsible y casi inevitable; estábamos conscientes, como muchos en el país, de que la última etapa del gobierno de la UP nos había acercado como nunca antes a un clima de guerra civil, cuya resolución era imprevisible, pero de todas maneras sangrienta; creíamos sinceramente que las Fuerzas Armadas pondrían fin al clima de violencia, y que luego, a la brevedad posible, como en sus propias declaraciones lo decían, retornarían a sus funciones profesionales. De modo que no había en nuestras palabras ánimo de reproche ni nada parecido.

Así se lo dijimos también al nuncio, con quien nos reunimos poco después para conversar sobre la situación. El nuncio, Sótero Sáenz Villalba, había llegado en 1970, poco después de la elección de Salvador Allende, tras una carrera prolongada como oficial y asesor en la Santa Sede. En su España natal había vivido los rigores de la Guerra Civil y visto de cerca la persecución izquierdista contra la Iglesia, por lo que no sentía simpatía alguna por esas tendencias; pero, como el buen diplomático que era, se cuidaba mucho de no opinar sobre estos asuntos.

En la tarde de aquel 14 apareció por fin en mi casa el vicario castrense, Gillmore. Debo decir que estaba sumamente molesto con él, y que tal vez extremé la dureza de mis reproches. Le dije que había olvidado a su Iglesia en un momento tan difícil, y que estábamos todos como prisioneros, sin poder salir, mientras él resultaba inubicable.

El obispo Gillmore escuchó en silencio este vendaval, tal vez percibiendo mi estado de ánimo. Después planteó el tema que motivaba su visita: la Junta le había encargado que me pidiera realizar un Te Deum de Acción de Gracias; querían que tuviese lugar en el recinto de la Escuela Militar. Le respondí que el día 18 yo haría la ceremonia tradicional en la Catedral de Santiago, que respondía a la solemnidad de las circunstancias, y no sería un Te Deum, sino una Oración por la Patria.

La proposición de ir a la Escuela Militar me parecía totalmente inconveniente, e incluso perjudicial para los propios militares. La Iglesia debía orar por todos, y no tomar partido por un bando. Cualquier cosa que saliera de esa línea podría ser presentada como una imposición del nuevo régimen. Le expresé que si él quería hacerlo, me parecía correcto, pero tal cosa no le correspondía al arzobispo de Santiago.

Gillmore quedó de transmitir estas consideraciones a la Junta, pero también me expresó que la proposición había sido ya estudiada por los militares. Como al día siguiente no recibí ningún indicio de qué pasaría con la ceremonia, decidí pedir una audiencia personal con la Junta. Tal vez sin intermediarios nos entenderíamos mejor.

Los cuatro miembros —los generales Augusto Pinochet, Gustavo Leigh y César Mendoza, y el almirante José Toribio Merino— me recibieron el domingo 16 en el Ministerio de Defensa. Allí les reiteré lo que había dicho a Gillmore e insistí en invitarlos a la Catedral.

Ellos explicaron que había razones de seguridad para evitar el principal templo metropolitano. En el centro habían aparecido muchos francotiradores en las horas y días posteriores al 11, y no había aún certeza de que la zona hubiese dejado de ser peligrosa. Para corroborar esta opinión, llamaron al general Sergio Arellano, quien dijo que se requeriría un contingente muy grande para asegurar el sector.

Planteé entonces una alternativa: el Templo Votivo de Maipú, justamente consagrado a la Virgen, patrona de las Fuerzas Armadas. Arellano intervino otra vez: el problema de seguridad sería aún más agudo en tal caso.

Estábamos quedando sin alternativas. Entonces recordé que el templo de La Gratitud Nacional está dedicado también a las armas chilenas, y tiene el tamaño suficiente para una ceremonia grande. Lo propuse, y argumenté con detalles. Los miembros de la Junta estuvieron de acuerdo, y el general Arellano no puso esta vez ninguna objeción.

Ese mismo domingo celebramos una Misa ecuménica en compañía de los pastores protestantes, pidiendo al Señor que iluminara a los nuevos gobernantes, para que pudiesen restablecer cuanto antes la normalidad institucional.

Creo que fue el día siguiente cuando me llamó el ex Presidente Eduardo Frei. Había recibido mi invitación para la Oración por la Patria del 18, y quería estar seguro de que fuese prudente ir. Le dije que a mí me gustaría verlo en el templo, como buen católico que era, pero que no podía decidir yo en esta ocasión, porque se trataba de una cuestión de conciencia. Me dijo que estaba conmovido por lo que venía ocurriendo; se sentía atropellado por el cierre violento del Congreso (era el presidente del Senado) y sabía que había mucha violencia en el país. Concluyó:

—Pero voy a ir, don Raúl. Sólo porque está usted. Voy a ir para no dejarlo solo.

Era su lealtad de siempre. Después se especuló mucho por el hecho de que no saludó a los miembros de la Junta a la salida de la Misa, tal como lo hicieron los otros dos ex presidentes, Jorge Alessandri y Gabriel González Videla. Pero a él tampoco lo habían saludado, y ni siquiera le habían informado que clausurarían la institución de la República que presidía.

Frei no estaba contra el golpe militar, pero tampoco estaba a favor de él, como majaderamente se ha pretendido. Lo miraba, más bien, como un hecho inevitable, y le dolía y le enojaba que el gobierno de la Unidad Popular hubiese creado las condiciones para esta situación. Estaba firmemente convencido de que la responsabilidad era de la UP. Y creía, como muchos, que los militares, que se habían visto forzados a intervenir, dejarían el poder cuanto antes. Defendió esta posición en su partido, e influyó para que la primera declaración de la directiva del PDC subrayara esas circunstancias. Claro que otro grupo de dirigentes, que no estaba de acuerdo con esto, emitió de inmediato una declaración de óptica totalmente diferente, que advertía sobre el quiebre de la democracia y condenaba el movimiento militar.

Durante las horas previas al 18, muchos sacerdotes llegaron hasta el Arzobispado para pedirme que no realizara Te Deum. Creían que una ceremonia de este tipo daría legitimidad a un acto violento,

y que la Iglesia se vería asociada a él. Casi todos se tranquilizaron cuando supieron que se trataba de una Oración por la Patria, que se pediría por los caídos, y que tendría el carácter ecuménico más amplio posible.

Para reforzar este contenido central, el 18 decidí no usar los ropajes cardenalicios habituales, sino la túnica púrpura, en señal de duelo. Creo que al menos los sacerdotes estuvieron en condiciones de apreciar esta diferencia.



18 de septiembre de 1973: Oración por la Patria en La Gratitud Nacional; los miembros de la Junta están sentados a la derecha.

La homilía la leí yo mismo. Quise que se incorporara en ella exactamente el mismo párrafo que habíamos pronunciado ante Allende, en noviembre de 1970, cuando éste asumió el poder, en el que advertíamos sobre la continuidad de la patria como un valor superior:

“Nosotros todos, somos constructores de la obra más bella: la Patria. La Patria terrena que prefigura y prepara la Patria sin fronteras. Esta Patria no comienza hoy, con nosotros; pero no puede crecer y fructificar sin nosotros. Por eso es que la recibimos con respeto, con gratitud, como una tarea hace muchos años comenzada, como un legado que nos enorgullece y compromete a la vez. Nuestra mirada hacia el pasado, próximo o remoto, quisiera ser más inquisitiva que condenatoria, más detectora de experiencias que

enjuiciadora de omisiones; más de discípulo que aprende, que de maestro que enseña. Recibimos la Patria como un depósito sagrado y una tarea inacabada.

“Esta tarea hace renacer en nosotros una inmensa esperanza, que sentimos en este momento religioso, todos los que de una u otra manera, por uno u otro título, revalidamos nuestro compromiso con las multitudes hambrientas y sedientas de justicia, y queremos ser, para ellas, constructores de un mundo más solidario, más justo, más humano; artífices de la paz verdadera, la que el corazón del hombre anhela, la única portadora de la tan deseada liberación”.

Dijimos expresamente que “hoy, dadas las dolorosas circunstancias que hemos vivido, esta celebración cobra un doble significado: venimos aquí a orar por los caídos, y venimos también y sobre todo, a orar por el porvenir de Chile”. Y pedimos “que no haya entre nosotros ni vencedores ni vencidos, y para esto, para reconstruir a Chile, quisiéramos ofrecer a los que en horas tan difíciles han echado sobre sus hombros la pesadísima responsabilidad de guiar nuestros destinos, toda nuestra desinteresada colaboración”.

Pero otra vez implorábamos ante oídos sordos. La violencia no había aflojado sino en una muy pequeña cuota, y cada hora recibíamos noticias sobre nuevos hechos de sangre, desde enfrentamientos hasta ejecuciones sumarias. La resistencia efectiva era ya muy esporádica, pero los militares decían temer que, si no extirpaban de raíz los focos violentistas sumidos ahora en la clandestinidad, la posibilidad de una verdadera guerra se haría más cierta.

Nosotros supimos desde el primer momento que debíamos estar al lado de las víctimas, sin que nos importara su color ni su ideología. Nuestra obligación era salvaguardar la vida humana, y para ello debíamos proteger intransigentemente los derechos de las personas. Yo diría que en esto no hubo nunca desacuerdos entre los obispos de Chile; cosa muy diversa es que algunos prefiriesen una intervención militar prolongada, o incluso que expresaran con dureza su rechazo al régimen depuesto.

El mismo 18 de septiembre, mi obispo auxiliar Fernando Ariztía dirigió la primera carta con denuncias concretas al general Pinochet, presidente de la Junta. Ariztía vivía en una modesta mediagua en la población Herminda de la Victoria, en Pudahuel, y

durante los días siguientes al 11 presencié personalmente cómo se arrastraban por el río Mapocho los cadáveres de numerosas personas. Con ayuda de una religiosa, pudo incluso rescatar a un ciudadano brasileño que, malherido, era llevado por la corriente. No puso esto en su carta al general, pero sí le explicó que se sabía positivamente que algunos de los muertos habían estado en el Estadio Nacional. La prensa, controlada, decía que seguramente las muertes se debían a *vendettas* entre ex militantes de la UP, o a que abandonaban a sus heridos para huir; pero ambas cosas eran inverosímiles. Ariztía nunca tuvo respuesta.

No lo supimos entonces, pero entre los cadáveres del río Mapocho aparecería más tarde un sacerdote, Joan Alsina, que fue ejecutado en un puente y arrojado a las aguas. Alsina, español, no había disimulado sus simpatías con el socialismo; vivió unos años en San Antonio, donde, siguiendo la línea de los sacerdotes obreros, entró a trabajar en un hospital. Cuando se convirtió en dirigente sindical, entró en conflicto con el vicario de su zona y conmigo, pues a ambos nos parecía que no era propio de un sacerdote asumir un papel de laico, con el agravante de que, polarizado como estaba, el mundo sindical era una forma de politización. Me reuní algunas veces con Alsina y le hice ver mi disgusto con su actitud. Pero no me escuchó. Regresó a Santiago y consiguió entrar al Hospital San Juan de Dios, como jefe de Personal. Allí, como era previsible, le tocó enfrentar la fuerte oposición de los profesionales a la UP (que se expresaba a través de los paros), y se ganó el rencor de muchos de ellos. El 19 de septiembre fue arrestado en el Hospital, conducido a un regimiento, e interrogado ferozmente. Días después lo mataron.

Entretanto, el Estadio Nacional se había convertido en un gigantesco campo de prisioneros, del que nos llegaban las noticias más estremecedoras. Era una paradoja dolorosa: el mismo recinto que años antes había servido para acoger a los extranjeros que emigraban en busca de libertad, se constituía ahora en la más grande prisión de compatriotas. Centenares de personas estaban detenidas allí sin proceso, y se hablaba de maltratos, interrogatorios violentos y hasta fusilamientos. En vista de esto, decidí visitar el recinto, acompañado de Luis Antonio.

Llegamos en la mañana del lunes 24. Nos recibió un militar,

que nos condujo a los camarines, donde se hacinaban los presos. Fue un impacto tremendo. Vi de inmediato que muchos de ellos me recibían como si fuese su única esperanza sobre la tierra, con ansiedad, hasta con desesperación. Yo le había pedido a Luis Antonio que en un cuaderno fuera anotando todas las peticiones que nos hicieran, pero al salir del primer camarín ya nos sentíamos agobiados. Teníamos intenciones de pasar a todas las salas, pero la situación era demasiado terrible. No sé cuántas visitamos.



Prisioneros en el Estadio Nacional, a fines de septiembre de 1973.

En un momento me sentí mal y no logré contener las lágrimas. El militar se dio cuenta y, en un gesto verdaderamente generoso, me propuso que me dirigiera a los presos desde la tribuna; él pondría el micrófono para que todos pudieran oírme.

—Le va a hacer un gran bien a esta gente si les habla—, dijo. Apenas podía articular las ideas. Fui demasiado breve.

—Quizás muchos de ustedes no me conocen —dije—. Me llamo Raúl Silva Henríquez; soy el cardenal de la Iglesia Católica. Soy el representante de una Iglesia que es servidora de todos, y especialmente de los que están sufriendo. Quiero servirlos y, como el Señor, no pregunto quiénes son ni cuáles son sus creencias o posiciones políticas. Me pongo a disposición de los detenidos. Cualquier cosa hángamela saber a través de las autoridades...

Salí deshecho del recinto del Estadio Nacional. Nada de lo que hubiera oído era comparable con esta visión tan concreta y directa del dolor, la humillación, el miedo.

Y no era lo único. En los días siguientes al 11, el Arzobispado comenzó a llenarse de gente que quería nuestra intercesión para indagar por sus familiares, o nuestra ayuda para no perder su empleo. Algunos venían directamente a pedir que los auxiliáramos para salir del país.

Yo sabía que algunos padres estaban trabajando duramente en la tarea de esconder y asilar perseguidos. Era un grupo pequeño, pero corría riesgos altísimos: en la mayoría de los casos podía significar la vida. Era muy difícil que la Iglesia pudiese dar entidad oficial a esta acción individual, pero sí podía crear una estructura que atendiera todas las demandas.

Primero le pedí a Luis Antonio que, con un equipo muy reducido, tomara el registro de todos los casos que llegaran a nuestras manos, y viera qué se podía hacer. Luis Antonio consiguió a una asistente social y a un secretario (Jorge Murillo, que hoy es sacerdote), y durante días trató de hallar a un abogado que no se negara a esta tarea ingrata pero indispensable; finalmente, Jaime Irrázaval, profesor de la UC, aceptó el desafío. Este diminuto núcleo sería el primer germen formal de lo que se iba a convertir en la tarea caracterizadora de la Iglesia durante las décadas siguientes: la defensa de los derechos humanos.

Su primera tarea fue ubicar detenidos; la siguiente, defender a los centenares de obreros que estaban siendo despedidos de las industrias, en numerosos casos por mera venganza política; otros tantos empleados y profesionales estaban siendo expulsados de la administración pública por motivos semejantes, después de que la Junta dictara decretos leyes declarando en reorganización todo el aparato del Estado. Debido a que pusimos un aviso invitando a acercarse al Arzobispado por estas razones, el Colegio de Abogados nos amenazó con una acción judicial, indicando que no teníamos derecho a ofrecer asistencia gratuita.

En cuanto a los detenidos, las averiguaciones eran tan difíciles, que decidí escribirle al jefe del servicio de detenidos, el general de la FACh Francisco Herrera Latoja, ofreciéndole nuestra colaboración

para ayudar en la información. Me respondió una gentil carta declinando mi propuesta.

Era una situación caótica, donde parecía que cualquier persona estaba expuesta a cualquier cosa. A fines de ese mes tremendo, incluso mi casa fue allanada. Un grupo de militares de la Fuerza Aérea la registró por todos lados, argumentando que un objeto plástico había caído desde un avión en esa zona, y necesitaban recuperarlo. Por supuesto, el bendito objeto no estaba.

Agradecimientos

Deseo expresar mi gratitud a las muchas personas que desinteresadamente trabajaron para que la realización de estas Memorias fuese posible.

A los numerosos amigos que me han acompañado a lo largo de todos estos años, quiero pedirles perdón si alguna frase de estos textos les pueda causar incomodidad e incluso alguna discrepancia sustantiva. Nada deseo menos que herir o causar daño con mis recuerdos. Le pido fervientemente al Señor que ellos sirvan para el bien de mi pueblo y para favorecer la paz y la unidad entre mis hermanos.

Mi corazón está comprometido con todos los que, en silencio, con prudencia y a menudo sin que yo mismo lo supiera, permitieron la redacción de este trabajo, su publicación en el diario *La Epoca* y, finalmente, su edición como libro.

En particular quiero manifestar mi reconocimiento por sus bondadosos aportes en este segundo tomo a: mis hermanas, las señoras Clementina Silva Henríquez de Hudson y Anita Silva Henríquez de Valenzuela; los arzobispos José Manuel Santos Ascarza y Francisco de Borja Valenzuela Ríos; los obispos Fernando Ariztía Ruiz, Carlos Camus Larenas, Carlos González Cruchaga, Tomás González Morales, Jorge Hourton Poisson y Sergio Valech Aldunate; el rector mayor de los Salesianos, Egidio Viganó; don Gabriel Larraín Valdivieso; don Ernesto Corona Bozzo, director de la Editorial Salesiana; el historiador Nicolás Cruz Barros; el profesor Eduardo König Carrillo; los abogados Carlos Briones Olivos, Gastón Cruzat Paul, Alberto Jerez Horta, Fernando Molina Vallejo, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Eduardo Vio Grossi; el arquitecto Fernando Castillo Velasco; el ingeniero Eduardo Frei Ruiz-Tagle; el economista Nicolás Flaño Calderón; don Sergio Muñoz Leiva; don José Aguilera Belmar; los periodistas Emilio Filippi Muratto y Abraham Santibáñez Martínez;

el académico Ricardo Jordán Esquella (Q.E.P.D.); el químico Jorge Frei Ruiz-Tagle; el padre Bernardo Herrera Salas, secretario del Arzobispado de Santiago; los provinciales de los Salesianos de Chile, padres Ricardo Ezzati Andrello y Alfredo Videla Torres; el provincial de los Sagrados Corazones, padre Enrique Moreno Laval; los sacerdotes Alfonso Baeza Donoso, Juan Bagá Ballús, Luis Antonio Díaz Herrera, Ignacio Ortúzar Rojas, Cristián Precht Bañados, Jorge Sapunar Dubravcic y Luis Eugenio Silva Cuevas; los sacerdotes salesianos Carlos Alonso Duro, Fernando Cifuentes Stockebrand y Gustavo Ferraris del Conte; el sacerdote de la Orden de la Madre de Dios Baldo Santi Lucherini; los sacerdotes jesuitas Patricio Cariola Barroilhet, Renato Poblete Barth, Fernando Salas Cruchaga y Roger Vekemans; el sacerdote de los Sagrados Corazones Manuel Donoso Donoso; la señorita Nora Alvarado Rojas, secretaria del diario *La Epoca*; la señora Carmen Segura Cavia, secretaria del Arzobispado de Santiago; y la señora Carmen Muñoz Rojas, mi secretaria privada.

Naturalmente, las opiniones y juicios aquí vertidos no comprometen a ninguno de ellos.

Indice

21. Año de prueba	7
22. Crisis en el Concilio	23
23. Los días del optimismo	41
24. El gozo y la esperanza	57
25. Preparando el cambio	73
26. El estallido universitario	89
27. La Iglesia en ebullición	105
28. La barca en la borrasca	121
29. Asalto a la Catedral	137
30. La tentación de la fuerza	153
31. Tantas voces airadas...	171
32. Encrucijada de 50 días	185
33. El Evangelio y los socialismos	201
34. 1972, congoja y esperanza	217
35. El incidente de la ENU	237
36. Los esfuerzos por el diálogo	249
37. Ultima cena en Simón Bolívar	265
38. Pedimos respeto por los caídos	281
 Agradecimientos	 297

